

Más allá del colonialismo verde

Justicia global y geopolítica
de las transiciones ecosociales

MIRIAM LANG
BRENO BRINGEL
MARY ANN MANAHAN
(EDS.)

MARISTELLA SVAMPA
EDGARDO LANDER
HAMZA HAMOUCHÈNE
JOHN FEFFER
KRISTINA DIETZ
BRENO BRINGEL
ARTURO ESCOBAR
IVONNE YANEZ
GAMILA MORENO
MARY ANN MANAHAN
CHRISTIAN DORNINGER
ALBERTO ACOSTA

ESPERANZA MARTÍNEZ
ULRICH BRAND
NNIMMO BASSEY
RAGHMI HERTANTI
TATIANA ROA
PABLO BERTINAT
MIRIAM LANG
ZO RANDRIAMARO
BENGI AKBULUT
LUIS GONZÁLEZ REYES
FARIDA AKTHER
MARÍA CAMPO
SABRINA FERNANDES



UNIVERSIDAD ANDINA
SIMÓN BOLÍVAR
Ecuador

 CLACSO

Más allá del colonialismo verde

Más allá del colonialismo verde

Justicia global y geopolítica
de las transiciones ecosociales

Miriam Lang, Breno Bringel y Mary Ann Manahan
(eds.)



PLATAFORMAS PARA
EL DIÁLOGO SOCIAL



UNIVERSIDAD ANDINA
SIMÓN BOLÍVAR
Ecuador



CLACSO

Más allá del colonialismo verde : justicia global y geopolítica de las transiciones ecosociales / Miriam Lang ... [et al.] ; editado por Miriam Lang ; Breno Bringel ; Mary Ann Manahan. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2024.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-813-605-9

1. Geopolítica. 2. Medio Ambiente. 3. Ecología. I. Lang, Miriam, ed. II. Bringel, Breno, ed. III. Manahan, Mary Ann, ed.

CDD 327.101

Traducción al español: Adriana Santos

Corrección: Rosario Sofia

Diseño de tapa: Ezequiel Cafaro

Diseño del interior y maquetado: Eleonora Silva



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital desde cualquier lugar del mundo ingresando a libreria.clacso.org

Más allá del colonialismo verde. Justicia global y geopolítica de las transiciones ecosociales

(Buenos Aires: CLACSO, enero de 2024)

ISBN 978-987-813-605-9

ISBN UASB-E: 978-9942-641-46-5



CC BY-NC-ND 4.0

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

Esta publicación fue auspiciada por la Fundación Rosa Luxemburg, con fondos del Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel. [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> |

<www.clacso.org>

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Toledo N22-80

Quito, Ecuador

Telfs. [593 2] 322 8085, 299 3600 | Fax: [593 2] 322 8426

www.uasb.edu.ec | uasb@uasb.edu.ec



Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

Índice

Agradecimientos	11
Nota de lxs editorxs y de la traductora	13
Introducción. Transiciones lucrativas, colonialismo verde y caminos hacia una justicia ecosocial transformadora.....	15
<i>Miriam Lang, Breno Bringel y Mary Ann Manahan</i>	
Parte I. Transiciones hegemónicas y la geopolítica del poder	
Transiciones energéticas globales y extractivismo verde.....	51
<i>Kristina Dietz</i>	
Transición energética corporativa. El triángulo sudamericano del litio como caso testigo	69
<i>Maristella Svampa</i>	
Descolonizar la transición energética en África del Norte	85
<i>Hamza Hamouchène</i>	
¿Pueden los grandes contaminadores salvar el planeta? Perspectivas sobre Estados Unidos, la Unión Europea y China	103
<i>John Feffer y Edgardo Lander</i>	
Acumulación y desposesión por descarbonización	121
<i>Ivonne Yáñez y Camila Moreno</i>	

Parte II. Analizando el colonialismo verde: interdependencias y entrelazamientos globales

Continuidades e intensificación de la apropiación imperial en la economía global	141
<i>Christian Dorninger</i>	
Enfrentando las deudas eternas desde el Sur	163
<i>Miriam Lang, Alberto Acosta y Esperanza Martínez</i>	
¿Qué esperar del estado en las transformaciones socioecológicas?	181
<i>Ulrich Brand y Miriam Lang</i>	
El colonialismo verde en las estructuras coloniales. Una perspectiva panafricana	199
<i>Nnimmo Bassey</i>	
Bajo el yugo del comercio “verde” neoliberal	217
<i>Rachmi Hertanti</i>	
“Soluciones basadas en la naturaleza”. La mercantilización de la gobernanza ambiental mundial	239
<i>Mary Ann Manahan</i>	

Parte III. Horizontes hacia un futuro digno y habitable

Resistir al extractivismo y construir una transición energética justa y popular en América Latina	265
<i>Tatiana Roa Avendaño y Pablo Bertinat</i>	
Perspectivas ecofeministas desde África	281
<i>Zo Randriamaro</i>	
Decrecimiento feminista para una transición desestabilizadora	299
<i>Bengi Akbulut</i>	
Decrecimiento, emergencia climática y transformación del trabajo	317
<i>Luis González Reyes</i>	
Nayakrishi Andolon: alternativas al sistema agroalimentario moderno y corporativo de Bangladesh	335
<i>Farida Akhter</i>	

Diseñando transiciones regionales sistémicas. Una experiencia de investigación-acción en Colombia.....	351
<i>María Campo y Arturo Escobar</i>	
Hacia un nuevo internacionalismo ecoterritorial.....	367
<i>Breno Bringel y Sabrina Fernandes</i>	
Sobre los autores y autoras.....	387

Agradecimientos

En primer lugar, queremos dar las gracias a todas las personas que luchan, en diferentes latitudes, por sostener la vida en este planeta y hacer realidad un mundo habitable y digno. Hoy, más que nunca, es necesario tejer iniciativas, experiencias, movimientos y organizaciones ecosociales que reabran el horizonte de transformaciones profundas. Nuestro reconocimiento a quienes están transitando en este camino, a pesar de las múltiples dificultades y violencias de este momento crítico.

Este libro es resultado de muchos diálogos colectivos y globales. Hay una serie de organizaciones, instituciones y procesos sin los cuales no existiría: el Grupo de Trabajo Global Más Allá del Desarrollo, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, el Institute for Policy Studies [IPS] y todas las personas y colectivos que participaron en el proceso Global Just Transition y en los diálogos Sur-Sur promovidos por el IPS y el Pacto Ecosocial del Sur desde 2022.

Extendemos también nuestra gratitud a la Fundación Rosa Luxemburg, que ha acogido y financiado el Grupo de Trabajo Global Más Allá del Desarrollo entre su creación en 2016 y 2022, bien como a su Oficina Regional para África Occidental ubicada en Dakar, que acogió el encuentro de 2022 sobre Transiciones Justas y apoyó la redacción de muchos capítulos de este libro.

También queremos agradecer a nuestras familias, hijas e hijos y compañerxs, que nos han apoyado durante el arduo trabajo de compilación, organización, redacción y revisión con su paciencia, su crítica solidaria y su amor.

Algunas personas también necesitan ser explícitamente reconocidas. John Feffer ha sido un apoyo clave para el proceso de diálogos por detrás del libro y su publicación. Claus-Dieter König e Ibrahima Thiam han posibilitado que buena parte de los y las autoras se juntaran en Senegal para discutir ideas preliminares del libro. A su vez, Ken Barlow, y todo el equipo de Pluto Press, acogió con entusiasmo nuestra propuesta, cediendo los derechos de autor para que podamos traducir el libro a varios idiomas, incluyendo el español. Karina Batthyány, Pablo Vommaro y Fernanda Pampín, con la generosidad y compromiso habituales, nos abrieron las puertas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales [CLACSO] para que pueda ser publicado en español en su primera edición latinoamericana. Por fin, y no menos importante, queremos hacerle un agradecimiento muy especial a Adriana Santos Muñoz, quien tradujo con sensibilidad, seriedad y mucho profesionalismo el libro del inglés al español.

Los diálogos globales, como los que proponemos aquí, siempre son mediados por traducciones. Adriana Santos Muñoz hizo un bello trabajo para que el libro pueda ver la luz en español. Esperamos que otros procesos de traducción, tanto lingüísticos como culturales, en el plano de las luchas y reflexiones, puedan ser realizados por las lectoras y los lectores, convirtiendo los diagnósticos y propuestas aquí presentes en una brújula dinámica para la interpretación y la transformación de nuestras realidades.

Nota de lxs editorxs y de la traductora

El lenguaje está lejos de ser neutro. Conscientes de la importancia de que sigamos avanzando hacia un lenguaje inclusivo y no discriminatorio, hemos acordado en este libro una serie de criterios que hemos tratado de seguir en todo el manuscrito. El primero de ellos ha sido establecido por CLACSO: mantener la mención al nombre de pila completo del autor/a, no solo sus iniciales, con el fin de conservar la marca de género. En esta misma línea, hemos visibilizado siempre el género cuando la comunicación lo requería, mientras que, en otros casos, lo hemos omitido para hacer el lenguaje más inclusivo (por ejemplo, usando sustantivos colectivos para referirnos a conjuntos de personas, usando la palabra “persona” en vez de otras menos inclusivas, o bien usando adjetivos sin marca de género en lugar de sustantivos).

Nuestra apuesta ha sido siempre tratar de hacer un uso no excluyente del lenguaje sin romper con la estructura gramatical. Sin embargo, en algunas ocasiones hemos seguido la estrategia tipográfica de desdoblamiento, usando pares de femenino y masculino (por ejemplo, los autores y las autoras) o hemos utilizado la “x” como forma de sustituir las vocales que determinan el género. Somos conscientes de que ninguna de estas soluciones es ideal, pero suponen un compromiso con la comunicación no sexista en un momento en el que todavía hay muchas normas y reglas en debate.

Por fin, hemos tratado, en algunos casos, de invertir el uso de mayúsculas y minúsculas para enfatizar o quitar el peso a determinadas nociones. De esta manera, la forma política “estado” aparece deliberadamente en minúscula para evitar su habitual uso con mayúscula, que refuerza la acepción masculinizada y prominente frente a otras formas políticas. De forma inversa, “Naturaleza”, nuestra Madre Tierra, aparece con mayúscula para tratar de revertir su exterioridad de la sociedad y su disminución política.

Introducción

Transiciones lucrativas, colonialismo verde y caminos hacia una justicia ecosocial transformadora

Miriam Lang, Breno Bringel y Mary Ann Manahan

Los retos a los que se enfrentan las sociedades humanas se hacen más complejos a un ritmo vertiginoso. En los últimos años, las numerosas catástrofes relacionadas con el calentamiento global, la pandemia y la guerra de Ucrania han complicado aún más un panorama ya de por sí tensionado por potencias geopolíticas enfrentadas. La ciencia ha desarrollado enormes habilidades para detectar y medir estos retos, para modelizar y predecir el futuro, por ejemplo, con escenarios de calentamiento global y extinción de especies. Nunca se nos había proporcionado una información tan detallada. Sin embargo, a pesar de saber más que nunca, nos cuesta encontrar respuestas que estén a la altura de la situación. Según la ciencia, los plazos para hacer frente al colapso ecológico se acortan, pero las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando a pesar de décadas de esfuerzos multilaterales. Al igual que la contaminación y acidificación de los océanos, la pérdida de especies, de agua dulce y de fertilidad del suelo, todos los indicadores de destrucción medioambiental están empeorando, y parecemos condenados a expandir aún más nuestro metabolismo social en un planeta limitado.

Los instrumentos que las sociedades humanas han desarrollado para hacer frente a estos retos se han convertido, a su vez, en parte de lo que ha sido caracterizado como una policrisis, es decir, una serie de crisis interconectadas que se refuerzan entre sí. Las instituciones de la democracia liberal se enfrentan a una creciente pérdida de credibilidad, a la vez que son desmanteladas desde dentro por fuerzas autoritarias en muchas partes del mundo. En términos de distribución de la riqueza, nuestro mundo nunca ha sido tan desigual como hoy y, a pesar de algunas iniciativas relevantes para tasar a los super ricos, no encontramos medios para poner límites a las fortunas astronómicas y a la influencia de un puñado de personas y de empresas transnacionales.

Todo ello tiene graves efectos sobre las decisiones que tomamos respecto a nuestras relaciones con la Naturaleza y sus resultados. Las políticas medioambientales actuales se caracterizan por dos lógicas fundamentales. En primer lugar, no se centran principalmente en preservar ecosistemas complejos, sino en acumular capital. En segundo lugar, tienen un alcance colonial, es decir, asumen que ciertas regiones del mundo, ciertos cuerpos y poblaciones deben estar al servicio de otros en cuanto a condiciones ambientales que permitan una vida digna. A continuación, profundizaremos en estos dos argumentos que constituyen el núcleo de este libro.

Consenso de la descarbonización y rentabilidad en el centro de la política medioambiental

La gobernanza medioambiental y climática no ha sido una excepción a la imposición de la razón neoliberal en todas las dimensiones de la vida después de los años ochenta. Como han señalado Christian Laval y Pierre Dardot, la razón neoliberal no se contenta con eliminar cualquier límite a las empresas en nombre de la libertad, sino que pretende extender la propia lógica empresarial mucho más allá de la esfera del mercado, a todos los ámbitos de la sociedad e incluso

a las subjetividades, poniendo al estado a trabajar para convertirse en la principal palanca de esta extensión (Laval y Dardot, 2017). La razón neoliberal pretendía remodelar los límites de qué tipo de propuestas políticas eran aceptables, o incluso pensables, y lo hizo con bastante éxito al convertirse en hegemónica.

Así es como la rentabilidad llegó a estar en el centro de la política medioambiental. Hace ya más de cinco décadas, movimientos ecologistas y diversos esfuerzos académicos, tales como *Los límites del crecimiento* (Meadows et al., 1972), nacieron de la preocupación por las evidentes consecuencias del fordismo para el medioambiente y la salud humana. Propusieron un sistema relativamente eficaz de normas y umbrales, demandas y sanciones contra los contaminadores, al menos en el Norte global. No obstante, este fue sustituido por un sistema de mecanismos de mercado que los actores adoptarían “voluntariamente”, simplemente porque eran rentables (Klein, 2014). Desde el Protocolo de Kioto en 1997, han prevalecido las compensaciones de carbono, los mecanismos de desarrollo limpio, entre otros incentivos de mercado que a menudo han cambiado de nombre, pero no de lógica.

La protección de nuestro hábitat se ha convertido en objeto de pactos especulativos que acaban financiarizando la Naturaleza. A menudo solo simulan una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero haciendo suposiciones sobre quién habría talado un bosque, por ejemplo, si no se hubiera incluido en un pacto de compensación de carbono. Al mismo tiempo, el lenguaje del cambio climático se ha complejizado tanto que ha excluido eficazmente a muchos actores de base y ha convertido la contaminación en una cuestión de expertos. El discurso climático hegemónico actual escenifica una gigantesca simulación en la que los “sumideros” de un lado del planeta absorben supuestamente determinadas toneladas de CO₂ emitidas en el otro lado, como si esos “sumideros” no hubieran absorbido siempre carbono de todos modos, y como si esas toneladas de CO₂ emitidas no se sumaran a la contaminación en términos absolutos.

En medio a estas tendencias, ha surgido en los últimos años un nuevo acuerdo mundial comprometido con la transformación del sistema energético, pasando de uno basado en combustibles fósiles a otro con emisiones de carbono reducidas, asentado en energías “renovables”. Su *leitmotiv* es luchar contra el calentamiento global y la crisis climática promoviendo una transición energética impulsada por la electrificación del consumo y la digitalización. Sin embargo, en lugar de proteger el planeta, contribuye a su destrucción, profundiza las desigualdades existentes, exacerba la explotación de los recursos naturales y perpetúa el modelo de mercantilización de la Naturaleza. Ese proceso es definido por Breno Bringel y Maristella Svampa como el “Consenso de la Descarbonización” (Bringel y Svampa, 2023).

Por un lado, se sugiere que todo podría seguir como antes si tan solo sustituyéramos los combustibles fósiles por otros que se dicen renovables, pero que no necesariamente lo son. Por otro, se insiste, una vez más, en la centralidad del crecimiento económico (revestido ahora con otra camada de “verde”) para la organización de nuestras economías y sociedades. Además, el Consenso de la Descarbonización limita el horizonte de la lucha contra el cambio climático a lo que la investigadora brasileña Camila Moreno define como la “métrica del carbono”: una forma limitada de cuantificar el carbono, basada únicamente en las moléculas de CO₂, que proporciona una especie de moneda de cambio internacional y crea la ilusión de que se está haciendo algo respecto a la degradación medioambiental (Moreno et al., 2016). Estas métricas reducen el deterioro y el creciente colapso de la sumamente compleja red de la vida en la Tierra a una sola cifra, fácilmente compatible con la ratio capitalista de contabilidad: toneladas de CO₂, como si esta cifra pudiera proporcionar información fiable sobre los múltiples daños causados a nuestro hábitat por el modo de vida hegemónico y sus líneas de interconexión. Esto oculta los problemas subyacentes y aboga explícitamente por los “negocios verdes”, las “soluciones basadas en la naturaleza”, la “minería climáticamente inteligente”, los “mercados de carbono” y diversas formas

de inversión especulativa. Aunque en principio se reconoce la gravedad de la emergencia climática, se están construyendo políticas que no solo son inadecuadas, sino que además tienen consecuencias muy graves.

En los últimos años, todas las grandes potencias mundiales (Unión Europea, Estados Unidos y China) se han comprometido a reducir las emisiones de carbono y a reorientar sus economías hacia modos de producción bajos en carbono y descarbonizados, apuntando simultáneamente a nuevas oportunidades de crecimiento económico “verde”. Más recientemente, en general bajo esta misma lógica, otros países también empiezan a anunciar sus propios planes de “transición ecológica”. Pero este Consenso de la Descarbonización está marcado por el colonialismo verde. Moviliza prácticas e imaginarios ecológicos neocoloniales. Bajo un nuevo giro en la retórica de la “sustentabilidad”, se está abriendo una nueva fase de desposesión medioambiental del Sur global, que afecta a las vidas de millones de seres humanos y no humanos, comprometiendo aún más la biodiversidad y destruyendo ecosistemas estratégicos.

Mientras tanto, la guerra en Ucrania ha reavivado las tensiones geopolíticas y ha reforzado la dependencia internacional de los combustibles fósiles, al dar prioridad a las preocupaciones a corto plazo por la seguridad energética. Las empresas transnacionales del petróleo y el gas planean simultáneamente ampliar sus operaciones con combustibles fósiles al tiempo que exploran nuevas tecnologías lucrativas, por ejemplo, en torno al hidrógeno. “Capitalismo verde” o “extractivismo verde” es el nombre que los activistas y gran parte de la literatura académica dan ahora a la dinámica de “acumulación por desfosilización” (Slipak y Argento, 2022).

La investigación y la innovación tecnológicas prosperan, pero también están profundamente inscritas en los paradigmas de rentabilidad, progreso infinito y crecimiento económico, en lugar de orientarse por la necesidad fundamental de sostener y reproducir la vida. Así pues, se dirigen principalmente a una destrucción aún más profunda de nuestro hábitat y tejido social, abriendo caminos a

la explotación de hidrocarburos en escenarios cada vez más arriesgados, a la geoingeniería a escala planetaria para volver a “poner bajo control” las temperaturas o a la inteligencia artificial para sustituir el aprendizaje y la comprensión humanos de las complejas interrelaciones que están en el origen de la vida misma. Por eso, muchos actores del Sur global denuncian hoy las transiciones ecológicas hegemónicas y sus lógicas, aunque sus voces no siempre son escuchadas.

Un Sur global invisibilizado para ser apropiado

Como personas cuyas vidas y luchas gravitan en el Sur global, pero que tienen múltiples vínculos y, para algunos de nosotros, también raíces en el Norte global, hemos sido testigos de muchos debates y prácticas que pretenden abordar el colapso ecológico en diferentes regiones del mundo. Especialmente en Estados Unidos y en Europa, nos sorprendió la constante invisibilidad del Sur global en estos debates y la naturalidad con la que se asume que todos los “minerales críticos” y las extensiones de tierra necesarias para todos los coches eléctricos, las gigantescas instalaciones solares o eólicas y la digitalización de la producción que prometen para lograr un crecimiento verde vendrán de alguna parte. Los documentos se centran retóricamente en “alianzas verdes” y “materias primas sostenibles” (Comisión Europea, 2019) para superar a las demás potencias mundiales en la carrera por la primacía geoeconómica, sin detallar cómo el extractivismo se volverá “sostenible” y las relaciones Norte-Sur menos asimétricas. Sus preocupaciones se centran más bien en obtener las cantidades necesarias.

Mientras tanto, en la selva tropical ecuatoriana, la deforestación se ve impulsada por el apetito chino hacia el árbol de madera de balsa que se utiliza en la construcción de turbinas eólicas. En Sudáfrica, las enormes infraestructuras de las centrales de hidrógeno para la exportación de energía “limpia” se convierten en un predicamento

para las comunidades que basan su sustento en la pesca a pequeña escala o en la agricultura. En el Magreb, los pastores pierden sus tierras y su agua a causa de los enormes parques solares que se construyen para suministrar “energía verde” a Europa. En el triángulo del litio en Sudamérica, las comunidades luchan por las escasas fuentes de agua que son cada vez más acaparadas por la minería del litio con el fin de equipar los coches eléctricos con baterías de litio. Ante la búsqueda de una nueva legitimidad frente a las luchas actuales por los medios de vida o los territorios, estas prácticas recientes de apropiación y desposesión han pasado a etiquetarse como “verdes”.

El colonialismo verde se despliega en al menos cuatro dimensiones diferentes de las relaciones entre los Nortes y los Sures geopolíticos a medida que se remodelan y actualizan en el contexto del Consenso de la Descarbonización. En primer lugar, en la reivindicación de materias primas ilimitadas en la nueva carrera mundial por la seguridad energética, que añade una capa “verde” adicional a las presiones extractivistas ya existentes. En segundo lugar, en la imposición de ciertos formatos de conservación en los territorios del Sur en el contexto de esquemas de compensación de carbono, que al mismo tiempo permiten posponer aún más los cambios estructurales urgentes en los procesos de producción contaminantes ubicados en las economías del Norte. La tercera dimensión es la utilización de lugares del Sur global como vertederos de los residuos tóxicos y electrónicos generados mediante fuentes de energía renovables (Sovacool et al., 2020); y, por fin, la cuarta es la proyección de los Sures como nuevos mercados para vender tecnologías renovables a precios elevados dentro de la arquitectura asimétrica del comercio global, perpetuando así el intercambio desigual (Hickel et al., 2022).

En muchos debates del Norte global se imaginan o se representan las geografías en las que se producirá esa apropiación como si no hubiera personas ni conflicto, como si estuvieran en otro planeta en el que nada debería preocuparnos. Nos indigna ver cómo ciertos paisajes, cuerpos y poblaciones enteras del Sur global son declarados desechables. Así es como se reproducen hoy los elementos

mutuamente constitutivos del colonialismo, patriarcado y capitalismo que han existido desde el siglo XVI: las geografías destinadas a la acumulación se aprovechan de otras geografías, destinadas a ser saqueadas (Machado Aráoz, 2015). El colonialismo verde actual sigue expropiando materias y reproduciendo relaciones coloniales, a la vez que enmaraña las resistencias al autoproclamarse respetuoso con el medioambiente e indispensable para conceder un futuro a la humanidad, un viaje en el que, aparentemente, las poblaciones racializadas del Sur global aún no tienen asiento.

Estas prácticas se alimentan continuamente de imaginarios neocoloniales. Por ejemplo, la idea de “espacio vacío”, típica de la geopolítica imperial, es a menudo utilizada por gobiernos y empresas. En el pasado, esta idea, que complementa la noción ratzelliana de “espacio vital” (*Lebensraum*), generó el ecocidio y el etnocidio indígena, y más tarde sirvió para promover políticas de “desarrollo” y “colonización” de territorios. Actualmente, se utiliza para justificar el expansionismo territorial para inversiones en energía “verde”. De este modo, grandes extensiones de tierra en zonas rurales escasamente pobladas se consideran “espacios vacíos” aptos para la construcción de mega instalaciones de molinos de viento o centrales de hidrógeno.

Nos sorprende cómo incluso las fuerzas políticas que se consideran alternativas, disidentes o de izquierdas, es decir, en oposición a la hegemonía de la civilización capitalista global, tampoco suelen pensar en la transformación ecosocial en términos verdaderamente globales, en una perspectiva de justicia social y medioambiental global. Nos desconcierta hasta qué punto se ha naturalizado el hábito de externalizar los costes sociales y medioambientales de un modo de vida imperial (Brand y Wissen, 2021), sostenido tanto por una rutina cotidiana normalizada como por unas estructuras y reglas globales históricamente asimétricas; y la forma por la cual esto enmarca lo políticamente decible, o incluso, lo supuestamente viable o factible. En los debates sobre transición energética, eficiencia y seguridad, el privilegio es tan asombrosamente evidente en las sociedades del Norte como lo fue durante los primeros años de la pandemia de

COVID-19. Esta autoevidencia se fundamenta en la naturalidad de haber crecido en un contexto en el que tu vida y tus derechos son dignos de ser protegidos, y de ser consciente implícitamente de que este no es el caso de la mayoría de la población mundial. La colonialidad del ser, del poder y del saber, como tan brillantemente la puso de manifiesto el sociólogo peruano Aníbal Quijano, asoma por todas partes en los debates sobre transición energética, eficiencia y seguridad en las diferentes partes del Norte.

Este libro busca visibilizar todo esto y reverberar las voces que normalmente no se escuchan en estos debates. Pretende amplificar y discutir las perspectivas de las redes, movimientos y alianzas del Sur global para ayudar a generar un contrapeso más fuerte a la nueva fase hegemónica del capitalismo colonial verde basado en la tecnología y dirigido por las empresas. Al intervenir en este debate desde una perspectiva interseccional e internacionalista, articula líneas de debate que, de otro modo, estarían divididas por limitaciones disciplinarias y nacionales.

Una de las premisas de este libro es que no puede haber transformación ecosocial sin justicia global. Nuestro planeta es un ecosistema ultracomplejo del que el ser humano forma parte. La pandemia de COVID-19 nos ha mostrado claramente dónde acabamos cuando no consideramos desde el principio soluciones sistémicas para todos, sino que priorizamos los intereses nacionales o corporativos. Al mismo tiempo, abrazamos la justicia en todas sus dimensiones: social, racial, de género, ecológica, interétnica e interespecies, como se refleja en la diversidad de enfoques aquí incluidos, que van desde la economía ecofeminista a la ecológica, y desde la economía ecosocialista a la pluriversal. Los autores y las autoras de este libro tienen trayectorias que combinan el activismo con la producción de conocimientos en diversos entornos. No solo escriben sobre las luchas por la transformación ecosocial, sino que también son parte de ellas.

Una segunda premisa central es que la transformación ecosocial necesita reducir urgentemente el consumo humano de energía y materia en términos absolutos, lo que implica cambios planificados y

profundos en nuestros modos de producción y aprovisionamiento. Un decrecimiento planificado, especialmente en el Norte global —acompañado de reformas estructurales hacia una distribución justa de los medios materiales necesarios para reproducir la vida, tanto dentro de los países o regiones como entre ellos— es una dimensión ineludible de esta transformación. Por eso hemos invitado a voces del movimiento del decrecimiento a contribuir a la tercera sección. La justicia global solo se alcanzará si las voces críticas del Norte y del Sur global reman juntas, a pesar de sus especificidades, en una vía común.

Los autores y las autoras de este libro hablan lenguajes muy diferentes, no solo por sus diversos orígenes sociogeográficos, sino por sus diversas trayectorias epistémicas y activistas. Esta diversidad se refleja en el estilo de los capítulos, que en su conjunto conforman un diálogo entre diferentes formas de pensar, conocer y entender la transformación ecosocial. Creemos que esta diversidad de enfoques es precisamente lo que se necesita para superar la fe ciega en las soluciones basadas en la tecnología.

La colonialidad climática como última etapa del colonialismo verde

Aunque la idea del colonialismo verde ha cobrado fuerza en la última década para definir el extractivismo verde contemporáneo, antes la utilizaba sobre todo la historia ambiental para definir un proceso a largo plazo. Como afirma Richard Grove, uno de los principales exponentes de este campo de estudio,

[...] el tipo de transformación homogeneizadora intensiva en capital de las personas, el comercio, la economía y el medioambiente con el que estamos familiarizados hoy en día puede remontarse al menos a los inicios de la expansión colonial europea, cuando los agentes del

nuevo capital europeo y los mercados urbanos trataron de ampliar sus áreas de operación y sus fuentes de materias primas. (Grove, 1995)

Entendido así, el colonialismo verde no es un fenómeno reciente, sino que está asociado a un patrón histórico de poder colonial y expansión capitalista. El extractivismo está en el ADN del colonialismo desde 1492. En un brillante libro, Horacio Machado Araóz muestra con detalle cómo Potosí se convirtió en el punto de partida de una nueva era, geológica y civilizatoria, en la que la minería moderno-colonial sirve de detonante del Capitaloceno (Machado Araóz, 2018). Este patrón ha cambiado a lo largo de los siglos. Si bien la lógica extractivista y la violencia colonial contra los cuerpos, territorios y ecosistemas se ha mantenido siempre, se ha complejizado con el surgimiento de nuevas condiciones materiales y mecanismos de justificación. Con la expansión del colonialismo, se formó un nuevo imaginario geopolítico moderno sobre la Naturaleza y el “otro” no occidental para justificar el acaparamiento de tierras y el sometimiento de poblaciones enteras. Paradójicamente, fue la destrucción ecológica causada por el colonialismo la que permitió, a partir de mediados del siglo XVII, la emergencia de una preocupación por la conservación del medioambiente.

Desde entonces, las potencias coloniales han complejizado su estrategia imperial: siguen destruyendo la Naturaleza y extrayendo todas las riquezas que pueden, pero al mismo tiempo construyen políticas y discursos conservacionistas. Vimbai Kwashirai, por ejemplo, ha analizado el colonialismo verde en Zimbabue desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX y muestra con detalle tanto las repercusiones socioambientales del colonialismo británico como los distintos tipos de conflictos, relaciones y mediaciones entre funcionarixs coloniales, empresas, científicxs y agentes locales en torno a la explotación maderera y la conservación de los bosques (Kwashirai, 2009). Como sostiene Ravi Kumar, la tensión entre la defensa de la conservación y la destrucción de los bosques en África y Asia es un legado del colonialismo británico. En el caso concreto del sur de

India, examina cómo el “colonialismo verde” británico primero destruyó los bosques —a la vez que culpaba a los nativos de hacerlo— y luego creó una política de control de los paisajes forestales, argumentando que era importante mantener y ampliar el control estatal sobre la Naturaleza con el fin de controlar el clima y los sistemas de regadío y, así, mejorar el bienestar del país (Kumar, 2010).

El control tecnológico y la dominación de los paisajes han sido fundamentales para la reproducción continuada del colonialismo verde. Daniel Headrick sugiere que la ingeniería hidráulica fue uno de los principales motores del imperialismo europeo (Headrick, 1981). La construcción de canales, obras de ensanche y presas habría servido para mantener el poder imperial incluso después del colonialismo formal a través de la necesidad inducida de transferencia de tecnología. Pero no se trata simplemente de establecer una relación de dependencia material. Donald Worster ofrece un ejemplo interesante, argumentando que tras la instalación de proyectos de regadío en India y el establecimiento de diversas formas de control del agua, la relación del pueblo indio con el agua nunca volvió a ser la misma (Worster, 2008). Los sistemas hídricos comunitarios en distintas partes del Sur global quedaron así desmantelados y empezaron a ser controlados por el capitalismo colonial y las autoridades estatales para conseguir sus propios objetivos. En consecuencia, el antropocentrismo implica no solo la obsesión moderna por el control humano sobre la Naturaleza, sino también una forma de indiferencia, desprecio e inferioridad hacia el valor de otras formas de organización de la reproducción social.

El colonialismo verde, por lo tanto, se forjó históricamente con el capitalismo y la mercantilización de la Naturaleza, combinando expansión material y control subjetivo, lo que se expresa en la “colonialidad de la Naturaleza” (Coronil, 2000). Según Héctor Alimonda, uno de los impulsores de la ecología política latinoamericana, para el pensamiento hegemónico global y las elites dominantes, esta colonialidad de la Naturaleza presenta a América Latina (y a otras regiones del Sur global) como un espacio subalterno que puede ser

explotado, destruido y reconfigurado según las necesidades de los regímenes de acumulación dominantes. Esto afecta a la realidad biofísica (la flora, la fauna, los habitantes humanos, la biodiversidad de sus ecosistemas), a la configuración territorial (las dinámicas socio-culturales que articulan estos ecosistemas y paisajes) y a las mentalidades (colonialidad de la mente y del conocimiento) (Alimonda, 2011).

Como el colonialismo verde no terminó con el fin de la colonización formal, la diferenciación conceptual propuesta por Quijano entre colonialismo y colonialidad (Quijano, 2000) es relevante para diferenciar entre momentos y lugares específicos donde tuvo lugar la dominación imperial y la matriz colonial de poder que persistió tras la independencia política de las antiguas colonias. Además, el marco de la colonialidad es importante para entender cómo el imperialismo de algunos países como Estados Unidos no necesitó de colonias para ejercer su patrón de poder y potenciar el colonialismo verde mediante amenazas militares, la imposición de mercados globales y otros mecanismos de dominio indirecto cultural, legal y político.

En el colonialismo verde habita una “razón imperial”. Por lo tanto, es importante que futuros trabajos exploren con más detalle la relación entre colonialismo verde e imperialismo ecológico. ¿Son sinónimos? ¿Son más bien fenómenos interdependientes pero distintos? Una creciente literatura actual, principalmente marxista, ha rescatado el debate sobre el imperialismo ecológico, vivo en el debate académico desde la década de los ochenta, haciendo hincapié en las contradicciones ecológicas del capitalismo y la fractura metabólica (Foster y Clark, 2004). De forma complementaria, otrxs académicxs se preguntan más bien cómo el imperialismo ecológico está arraigado en las prácticas cotidianas y respaldado por las instituciones. ¿Cómo se normaliza esto de una forma que oculte el imperialismo que conlleva? Esto es lo que Ulrich Brand y Markus Wissen llaman “el modo de vida imperial” (Brand y Wissen, 2021), que se acerca mucho a lo que David Slater había definido como “imperialidad”, es

decir, “el derecho, el privilegio y el sentimiento percibidos de ser imperial o de defender un modo de vida imperial en el que se legitima la invasión geopolítica” (Slater, 2010).

Estos desarrollos recientes son muy bienvenidos, al igual que los que pretenden pensar el decrecimiento desde una forma política anticolonial (Hickel, 2021). Son relevantes en términos de relaciones Norte-Sur porque reconocen la deuda ecológica como una agenda central de las luchas contemporáneas, al mismo tiempo que reivindican la lucha por la descolonización también en el Norte. Sin embargo, debemos tener cuidado con una cuestión delicada: a menudo el discurso antimperialista sigue siendo ampliamente movilizado contra la Naturaleza por sectores que se autodenominan “progresistas”. El desarrollismo fósil sigue muy presente, por ejemplo, en ciertos sectores del Sur que dicen defender una transición energética justa y, al mismo tiempo, están totalmente a favor de seguir explotando el petróleo por interés nacional, porque, de lo contrario, lo haría un país extranjero. Igualmente, la idea del “derecho al desarrollo” sigue resonando con fuerza entre muchos actores del Sur global que se definen como antimperialistas, a pesar de que abundan las evidencias de ecocidio, genocidio y destrucción epistémica causados también en nombre del “desarrollo”.

Si en la lucha por la descolonización de África, el revolucionario ghanés Kwame Nkrumah sostenía que el neocolonialismo sería la última etapa del imperialismo (Nkrumah, 1965), hoy podemos sugerir que la colonialidad climática (Sultana, 2022), marcada por el Consenso de la Descarbonización, es la etapa más reciente del colonialismo verde. Salvar el clima y descarbonizar la economía se han convertido en mantras. La tensión histórica entre conservación y destrucción sigue estando muy presente, aunque con mecanismos cada vez más sofisticados de control digital y territorial. En el proceso, esta nueva forma de colonialismo verde reproduce las relaciones coloniales históricas y la colonialidad del poder, pero busca una nueva legitimación social en torno a la idea de la descarbonización. Para algunxs autorxs, se trata de un nuevo “colonialismo del carbono” (Lyons y

Westoby, 2014); para otrxs, estamos ante un “colonialismo climático” (Bhambra y Newell, 2022). Sea cual sea la nomenclatura, existe cierto consenso en el pensamiento crítico de que estamos entrando en un punto de inflexión histórico, tanto en lo que se refiere a la naturaleza de las relaciones coloniales como a la emergencia climática.

¿Cómo superar el colonialismo verde? Transiciones justas y transformaciones ecosociales

Si reconocemos el colonialismo verde y su faceta actual de extractivismo verde como un enemigo que se debe combatir, también es esencial debatir cómo superarlo. Además de desenmascarar sus falsas soluciones al cambio climático y analizar críticamente sus impactos, es igualmente importante trazar y examinar qué alternativas existen. En los últimos años, se han dedicado varios análisis interesantes a examinar y proponer alternativas socioecológicas desde abajo. El repertorio de intervenciones es diverso, y va desde la justicia medioambiental y climática (Bond, 2023) hasta las experiencias ecológicas de base (Gelderloos, 2022), el decrecimiento (Schmeltzer et al., 2022), la resiliencia (Rifkin, 2022) y una amplia gama de políticas de transición.

A menudo, estos análisis se centran en la dimensión local y en la adaptación al cambio climático, pero rara vez en una perspectiva de justicia global que tenga en cuenta no solo las acciones y los marcos globales, sino también las diferentes cosmovisiones y perspectivas que subyacen a las luchas contemporáneas. En nuestro caso, preferimos destacar las luchas localizadas que no son localistas. Esto implica pensar en la resonancia entre luchas similares en distintas partes del mundo, su escalabilidad y la posibilidad de generar articulaciones y convergencias.

Destacar la importancia del Sur global no implica homogeneizar el Norte global. Al contrario, debemos complejizar nuestros análisis de diferentes maneras. Por un lado, como mostramos en este libro,

el colonialismo verde no es simplemente algo que se impone desde arriba o del Norte al Sur. En muchos casos, lo que está en juego es también una especie de “colonialismo verde interno”, que forja las condiciones de posibilidad para el avance del extractivismo verde basado en alianzas y relaciones coloniales entre las élites nacionales del Sur y mundiales. Por otro lado, también necesitamos valorar las voces críticas dentro del Norte global y reforzar los vínculos entre ellas, así como las alternativas del Sur global.

Coincidimos plenamente con Arturo Escobar cuando sugiere que, a la hora de tender estos puentes entre las luchas del Norte y del Sur en la actualidad, es necesario tener en cuenta varios factores (Escobar, 2015), como la importancia de no caer en la trampa de pensar que, mientras el Norte necesita decrecer, el Sur necesita “desarrollo” (aunque esté teñido de verde). Las políticas orientadas al crecimiento y el extractivismo son altamente perjudiciales para los ecosistemas y las comunidades, y por eso en la última década, activistas e intelectuales de América Latina empezaron a sugerir que lo importante no son las alternativas *de* desarrollo, sino las alternativas *al* desarrollo (Lang y Mokrani, 2013).

Estas alternativas pasan necesariamente por la construcción de transiciones radicales y posextractivistas. Si la idea de transición —e incluso la de transiciones justas— ha sido cooptada por el capitalismo y diversos actores institucionales que la utilizan de forma limitada y problemática como sinónimo de una transición energética orientada al mercado, es importante clarificar sus significados y horizontes. Creemos que la transición ecosocial debe entenderse como parte de un proceso más amplio de transformación de la cultura, de la economía, de la política y de la sociedad y de su relación con la Naturaleza. Además, una transición ecosocial no puede reducirse a una promesa de futuro, como en el caso de la mayoría de las propuestas hegemónicas.

Las transiciones ya están ocurriendo en multitud de experiencias en comunidades y territorios, en zonas rurales y urbanas, así como en resistencias territoriales en todo el mundo contra el capitalismo

verde y sus falsas soluciones. Necesitamos urgentemente mapear y fortalecer estos múltiples procesos de reexistencia vinculados a la energía comunitaria, a los proyectos agroecológicos, a los huertos urbanos y a las economías alternativas, por nombrar solo algunos. Es en estas experiencias concretas, que consisten en (eco)utopías territorializadas, donde residen las alternativas más sólidas al colonialismo verde.

Debemos preguntarnos, igualmente, si las propuestas institucionales son parte de la solución o del problema. En los últimos años han proliferado una serie de propuestas de Nuevos Pactos Verdes (*Green New Deals*), que son hoy objeto de acalorados debates. Una amplia literatura se ha dedicado a analizar diferentes casos nacionales (Aronoff et al., 2019), aunque también está presente una perspectiva más sistémica (Chomsky y Pollin, 2020), internacionalista (Riexinger et al., 2021) y global (Ajl, 2021). A pesar de la diversidad de propuestas de Nuevos Pactos Verdes, todas ellas tienen algo en común: la necesidad de que sean los gobiernos (y no los mercados) quienes lideren la transición energética (Tienhaara y Robinson, 2023). Sin embargo, en varios casos, estas transiciones institucionales, llevadas a cabo a nivel local / municipal o estatal, facilitan o prácticamente se funden con las transiciones corporativas en una dinámica de sumisión del sector público a los intereses privados. En un buen número de países se tiende a la formación de grandes alianzas público-privadas entre estados y empresas transnacionales, difuminando los límites entre “transiciones corporativas” y “transiciones orientadas al estado”, aunque en términos retóricos puedan seguir existiendo discursos y espacios diferenciados. En otros casos —una minoría, hay que reconocerlo—, el estado reivindica su autonomía y es más claramente cuestionado, con tensiones y fuerzas que rechazan su relación umbilical con el mundo corporativo, proponiendo transiciones energéticas viables que promuevan la diversificación económica y la descentralización, y acercándose a las agendas de organizaciones ecologistas y movimientos sociales, como ilustra el gobierno colombiano liderado por Gustavo Petro y

Francia Márquez al momento de escribir este texto. Analizar estas mediaciones y tensiones es un reto importante, solo parcialmente incorporado en este libro, que requiere mayor atención en el futuro.

En definitiva, las alternativas al colonialismo verde existen no solo en términos intelectuales, sino también políticos y prácticos, aunque se enfrentan a escenarios extremadamente complejos. Gran parte del pensamiento de izquierdas del pasado, empezando por Marx, entendía los periodos de transición como aquellos en los que surgen nuevas relaciones sociales dentro de otras previamente existentes, caracterizados por la coexistencia y la lucha entre viejas y nuevas relaciones sociales, una lucha en la que las nuevas formas de relación juegan un papel decisivo. Aunque hoy en día las transiciones radicales rompen con varios supuestos de la modernidad y, por tanto, entienden la transformación ecosocial sobre bases diferentes, sigue siendo esencial analizar esta tensión entre lo viejo y lo nuevo, y entre fuerzas antagónicas. Como pretendemos demostrar en la siguiente presentación de las secciones y capítulos del libro, es nuestro deber examinar las nuevas facetas del capitalismo colonial, pero también hacer visibles las alternativas existentes, considerando sus contradicciones y potencialidades.

Sobre este libro

El objetivo de este volumen es analizar el avance del colonialismo verde en el mundo, subrayando sus características y la destrucción e hipocresía subyacentes (sección 1); examinar los entrelazamientos estructurales y geopolíticos entre el Sur global y el Norte global que los sustentan y que, por tanto, deben abordarse para construir una perspectiva de justicia global (sección 2); y, por fin, compartir una serie de desafíos, perspectivas y propuestas que constituyen hitos en el camino hacia un futuro digno (sección 3). Buscamos, por todo ello, realizar un breve inventario de prácticas y conocimientos que sustentan otros modos de existencia verdaderamente sostenibles que ya

son una realidad en la actualidad, aunque a menudo son invisibilizados y no reconocidos. Asimismo, proponemos ideas para las estrategias y políticas que deben adoptarse en ese camino. A continuación, ofrecemos una visión general de las diferentes secciones del libro.

Transiciones hegemónicas y la geopolítica del poder

La primera parte del libro examina críticamente el proyecto hegemónico de “transición” energética en sus diferentes dimensiones y escalas. La sección contiene contribuciones que analizan temas convergentes en torno a la “solución verde”, el “Consenso de la Descarbonización”, los procesos mutuos de acumulación y desposesión, la (nueva) división internacional del trabajo y de la Naturaleza, y otras relaciones entre el Norte global y el Sur global. Los autores y las autoras rastrean cuidadosamente las epistemes, los objetivos, los actores y los intereses que subyacen a los proyectos de transición en la Unión Europea, Estados Unidos y China, y sus traducciones en políticas y prácticas concretas en América Latina y África. Los autores y las autoras comparten el análisis de que la “narrativa capitalista-tecnocrática”, término acuñado por Svampa (2018), no es más que “vino viejo en botellas nuevas”. No abandona la obsesión por el crecimiento económico y su insostenible modelo de producción, distribución y consumo, a pesar de la retórica de los límites planetarios.

Al diseccionar la “solución verde” como alternativa a la policrisis, Kristina Dietz, académica alemana de relaciones internacionales, pone el foco en cómo el plan de transición energética hacia la neutralidad climática en Europa anuncia una nueva fase de extractivismo verde en el Sur global. En el núcleo de este plan se encuentra una firme creencia en la modernización ecológica que avanza en la reestructuración del comercio, la energía y el transporte para que encajen en el marco de una “economía verde”. Sostiene que las llamadas transiciones energéticas verdes promueven un nuevo superciclo de materias primas y posicionan a los países ricos en recursos como proveedores de recursos fundamentales y “espacios vacíos” para el Norte.

Sin embargo, los estados del Sur global también han desempeñado un papel activo en el afianzamiento de su posición subordinada en la cadena de suministro mundial. La socióloga y filósofa argentina Maristella Svampa narra cómo Argentina, Bolivia y Chile, que albergan el famoso “Triángulo del Litio”, han desarrollado agresivamente estrategias nacionales en medio de una carrera geopolítica para superarse mutuamente en el mercado del litio y, de paso, generar una nueva configuración del poder mundial. El litio, como escribe Svampa, se ha convertido en una representación simbólica y material, así como en la “llave maestra” de una transición energética corporativa hacia una sociedad posfósil. Al igual que Dietz, Svampa desnuda la episteme que subyace a este modelo de transición, que según ella radica en la postura ideológica de que “se percibe el potencial de cambio solo en la eficiencia tecnológica y, por lo tanto, de consumo, sin plantear que se alteren las lógicas mismas de ese consumo”.

Lo que subyace a este análisis son cuestiones fundamentales de economía política: ¿quién es dueño de qué? ¿Quién hace qué? ¿Por qué? Y, ¿quién gana y quién pierde? En el capítulo de Hamza Hamouchène, el activista e investigador argelino relata meticulosamente cómo las transiciones hacia las energías renovables en África del Norte constituyen un “colonialismo energético”, extractivo por naturaleza y reproducido en forma de “acaparamiento verde”. Con amplios datos de la región, Hamouchène pone en primer plano cómo los tropos coloniales sobre el Sahara se propagan y despliegan para aplicar la estrategia de hidrógeno verde de la Unión Europea en el marco del Pacto Verde Europeo. Su ensayo también describe una feroz política de resistencia liderada por cuerpos sacrificados, inducida por el “Consenso de la Descarbonización”.

Todas las contribuciones a esta sección apuntan a las causas estructurales subyacentes de la policrisis. Mientras Hamouchène afirma que “el capitalismo es el culpable”, otros como John Feffer y Edgardo Lander apuntan a los aspectos más específicos del capitalismo, por ejemplo, el modelo de producción y el consumo excesivo. De hecho, varios autores y autoras señalan las continuas relaciones

coloniales de poder entrelazadas con el modo de vida imperial también en la siguiente sección del libro (casos principalmente de Christian Dorninger, Ulrich Brand y Miriam Lang). Igualmente, todos los autores y las autoras ilustran las relaciones constitutivas entre desposesión y acumulación a diversas escalas.

En su capítulo conjunto, John Feffer, analista político estadounidense, y Edgardo Lander, sociólogo y pensador venezolano, se preguntan si los mayores contaminadores del mundo pueden salvar el planeta. Sostienen que

[...] las “transiciones energéticas limpias” de Estados Unidos, Europa y China deben evaluarse no solo en función de la brecha entre las promesas y los objetivos globales y la brecha entre las políticas declaradas y la implementación real, sino también en términos del daño neto global para el medioambiente y los pueblos del Sur.

Feffer y Lander se refieren enfáticamente a la externalización de los costes socioambientales al Sur global y a la negativa a abordar el consumo excesivo en los países más ricos como motor subyacente del cambio climático.

De forma complementaria, Ivonne Yáñez y Camila Moreno muestran cómo el “Consenso de la Descarbonización”, tal como formulado por Bringel y Svampa, se basa en la premisa de la falsa equivalencia y la obsesión por el carbono y la “neutralidad climática”. Yáñez, activista ecuatoriana, y Moreno, activista-investigadora medioambiental brasileña, desmitifican la idea de que una molécula de carbono emitida en algún lugar equivale a una molécula de carbono secuestrada en otro lugar. En un tono enfático y con pruebas de Ecuador, sostienen que las emisiones “cero neto” solo dan licencia a los contaminadores del mundo para seguir contaminando.

En los capítulos de esta sección, los autores y las autoras cuestionan el Norte global y el Sur global no como categorías geográficas, sino como construcciones geopolíticas y epistémicas dinámicas situadas en configuraciones de poder tanto históricas como contemporáneas. Otra cuestión abordada en varios capítulos es la relación

de los modelos de transición hegemónica con el tiempo / temporalidades diferentes y el espacio / lugar. Con respecto a este último, el concepto de zonas de sacrificio, acuñado inicialmente para describir territorios aniquilados debido a la producción y ensayos nucleares durante la Guerra Fría, se ha ampliado para referirse a lugares y espacios con niveles peligrosos de contaminación y degradación ecológica, y donde las comunidades han sido sacrificadas con el pretexto del crecimiento y el desarrollo económicos (Valenzuela-Fuentes et al., 2020) y, más recientemente, de las transiciones energéticas. Las contribuciones subrayan cómo los modelos hegemónicos de transición convierten en desechables determinadas vidas, cuerpos, poblaciones y paisajes. Los ensayos de Hamouchène y Dietz ofrecen descripciones gráficas de cómo las comunidades indígenas, pastoriles y agrícolas se convierten en desechables, y de las respuestas, protestas y luchas de resistencia que generan tales procesos. El descontento es un hilo rojo que une las contribuciones de esta sección.

Con respecto a las temporalidades, el capítulo de Feffer y Lander se refiere explícitamente a los plazos y fechas límite lineales que se incluyen en los objetivos y metas declarados de los numerosos (Nuevos) Pactos Verdes. Yáñez y Moreno, por su parte, articulan una concepción diferente del tiempo en relación con la transición y las vías para salir de la policrisis. Se basan en el conocimiento indígena según el cual “transición” significa “transformarse y convertirse”, lo que implica “andar con el pasado delante”. Esta forma no lineal de pensar el tiempo apunta a una narrativa similar planteada por otras contribuciones en la tercera sección del libro: valorar otras vías y formas de hacer y de ser como alternativas civilizatorias.

Analizando el colonialismo verde: interdependencias y entrelazamientos globales

La imaginación y la construcción de transformaciones ecosociales se ve obstaculizada por procesos, relaciones e instituciones estructurales y geopolíticas que entrelazan al Norte global y al Sur global

en una división internacional desigual del trabajo y en patrones coloniales de poder. En la segunda parte, los autores y las autoras analizan las interdependencias y los factores estructurales, a menudo perversos, que complican, ralentizan o impiden la perspectiva de transiciones justas y soberanas en lugares y regiones del Sur global.

La segunda parte del libro empieza con un artículo de Christian Dorninger, investigador interdisciplinar residente en Austria. El autor profundiza en el intercambio comercial y ecológico desigual en el comercio y en la producción y el consumo económicos, que según él es clave para entender las prolongadas desigualdades e interdependencias entre las regiones más ricas y pobres del mundo. Utilizando indicadores de la huella ecológica, Dorninger muestra cómo los patrones globales de intercambio ecológicamente desigual y drenaje del Sur global a través de la apropiación imperial no se detuvieron con el fin del dominio colonial. Su capítulo procede a revelar la escala de extracción y apropiación que el Norte global ha extraído y se ha apropiado del Sur global desde la década de los noventa.

En seguida, tres académicxs-activistas de Ecuador, Miriam Lang, Alberto Acosta y Esperanza Martínez, llaman nuestra atención sobre la centralidad de la deuda, en sus diversas formas, como “un poderoso medio de explotación, sometimiento y esclavización” que dio forma a la división internacional de la mano de obra y de la Naturaleza, y que aún estructura las relaciones entre los Nortes y los Sures globales, en las que la prosperidad de unos se construye sobre el saqueo y la subordinación de otros. En su exhaustivo análisis, Lang, Acosta y Martínez abordan las diferentes dimensiones de la deuda y sus intersecciones, desde la deuda soberana y popular hasta la deuda colonial y ecológica, subrayando los efectos multidimensionales y devastadores sobre los hogares, el medioambiente y sociedades enteras. Utilizando el feminismo interseccional y decolonial, dibujan un cuadro doloroso de cómo la deuda ha inducido la privatización de la esfera reproductiva y cómo el endeudamiento afecta desproporcionadamente a las mujeres y a los cuerpos feminizados; pero, al

mismo tiempo, esbozan medidas políticas para afrontar las “deudas eternas del Sur”.

Aunque el tema de la deuda debe afrontarse de manera amplia, el papel del estado sigue siendo crucial. Ulrich Brand, académico austriaco, y Miriam Lang, académica feminista decolonial, exploran la lógica del estado como un actor que reproduce las relaciones capitalistas, patriarcales, racistas e internacionales, pero que a la vez es un interlocutor relevante cuando se trata de preocupaciones socioecológicas. En su minucioso análisis, Brand y Lang desentrañan los múltiples papeles, las contradicciones y ambigüedades internas, y las dimensiones relacionales y multiescalares del estado, que resultan clave para comprender las complejidades que subyacen a las estrategias políticas en torno a tratar con el estado en las transformaciones ecosociales. En un tono provocador, invitan a lxs lectorxs a reflexionar sobre el reto colectivo de lograr un cambio transformador centrándose no solo en cambiar las políticas, sino también en alterar el propio aparato estatal, junto con sus estructuras, procesos y burocracias.

En su capítulo, el poeta y activista medioambiental nigeriano Nnimmo Bassey se basa en el análisis de Brand y Lang sobre el estado como una “condensación de una relación de fuerzas sociales” y en cómo el colonialismo y el capitalismo han configurado las estructuras y epistemes estatales. Desde una perspectiva panafricana, Bassey dibuja un sombrío panorama del colonialismo verde en el continente: la “imaginación colectiva de los países africanos y sus dirigentes” para depender de los ingresos procedentes de los combustibles fósiles que les permitan adaptarse a los desastres inducidos por el clima. La firme creencia ideológica e inquebrantable en las inversiones extranjeras directas a cambio de recursos naturales y mano de obra barata por parte de los estados africanos, sigue atrincherándolos en este “intercambio comercial y ecológico desigual”, si rescatamos las palabras de Dorninger.

Esta cadena mundial de suministro de minerales críticos para la transición energética y la pugna geopolítica son temas clave que la

abogada indonesia Rachmi Hertanti examina en su ensayo. Al mismo tiempo que explora el papel del “estado” en los entrelazamientos Norte-Sur, centra su análisis en las posiciones que ocupan en la cadena de suministro tanto de los países industrializados centrales como de los periféricos. Sostiene con rotundidad que los acuerdos de libre comercio e inversión son mecanismos concretos que encierran a los países ricos en recursos de América Latina, Asia y África para convertirlos en proveedores constantes de materias primas para las voraces necesidades de transición verde de las principales potencias.

A diferencia de Bassey, que se centra en la dependencia de los combustibles fósiles de los estados africanos, Hertanti explora las medidas neoproteccionistas instituidas por el estado indonesio en un intento de garantizar su propio suministro interno y fomentar la industrialización nacional del sector mineral. Sin embargo, esto se ve obstaculizado por mecanismos de los acuerdos de libre comercio que permiten a los inversores demandar a los estados cuando sus beneficios se ven amenazados. El ensayo de Hertanti da vida a las afirmaciones de Brand y Lang sobre las contradicciones del estado: la continua adhesión del Sur a este tipo de acuerdos que promueven los intereses creados por los países poderosos, al tiempo que obstaculizan sus propias habilidades y capacidades para tejer vías de transformación autodeterminadas.

La multiescalaridad de los entrelazamientos entre los Nortes y los Sures globales se ve reforzada por el principio de múltiples partes interesadas o “multistakeholderismo” medioambiental mundial, analizado críticamente por Mary Ann Manahan, una investigadora activista feminista filipina. Manahan critica el “multistakeholderismo como una forma de gobernanza mundial privatizada marcada por la captura corporativa, el déficit democrático y de rendición de cuentas, y una ONU cómplice”. Manahan sitúa el auge del multistakeholderismo en los espacios de gobernanza mundial dentro de la dinámica político-histórica de la contrarrevolución neoliberal del capital que trajo cambios significativos dentro del sistema de la ONU, lo que condujo a una crisis del multilateralismo. Su capítulo

coincide con el análisis de Yáñez y Moreno sobre las epistemes detrás de la nueva “solución verde” de las “soluciones basadas en la naturaleza”, que restringen las soluciones a los problemas ecosociales del mundo actual.

Las contribuciones a esta sección también ofrecen diversas perspectivas sobre cómo transformar las interdependencias desiguales y las relaciones Norte-Sur. Lang, Acosta y Martínez esbozan posibles estrategias de reparación para hacer frente a los problemas multidimensionales de la deuda. Bassey, a su vez, subraya que la transición descolonizadora exige transformar sistemas energéticos, económicos y políticos enteros mediante un panafricanismo desde abajo. Del mismo modo, Hertanti llama a embarcarse en un proceso que desarrolle la praxis de la transición energética de los pueblos dirigida por la clase trabajadora. Brand y Lang subrayan, sin embargo, que las estructuras y los procesos democráticos a escala local son decisivos, pero insuficientes, y piden, en lugar de ello, un enfoque multiescalar para transformar el estado interna y relacionalmente. Para ello también es necesario frenar no solo el poder de los países industrializados, sino también el de las empresas privadas que se han convertido en actores clave en los espacios de gobernanza mundial. En palabras de Manahan, para reconstituir un multilateralismo democrático radical hay que replantear las demandas de redistribución de la riqueza y de los recursos, los poderes de decisión, y poner en primer plano las necesidades y aspiraciones de las comunidades marginadas de todo el mundo.

Horizontes hacia un futuro digno y habitable

La tercera y última parte del libro reúne un amplio abanico de enfoques y propuestas contrahegemónicas dentro de los Nortes y de los Sures globales que aspiran a transiciones ecosociales justas. Las contribuciones a esta sección ponen de relieve procesos e imaginarios pluriversales que no solo desenmascaran el colonialismo verde y desafían los proyectos oficiales de transición, sino que también

ponen en práctica las múltiples visiones, conocimientos, ontologías relacionales y prácticas que son posibles, que están en marcha y que son necesarias. Al mostrar horizontes multidimensionales enraizados en las luchas anticoloniales, antipatriarcales, anticapitalistas y antirracistas, en las historias y territorios de los pueblos colonizados y en las diferentes relaciones de naturaleza societal, los capítulos son testimonios vivos de que hay muchas salidas posibles a las injusticias “universales” y globales provocadas por las relaciones desiguales y extractivas, hacia un mundo donde quepan muchos mundos, como sugieren los zapatistas.

En el capítulo inicial, Tatiana Roa Avendaño, activista medioambiental colombiana, y Pablo Bertinat, ingeniero eléctrico y académico argentino, abordan alternativas a las transiciones energéticas verdes. Utilizando discursos anticapitalistas y socioecológicos, sostienen que las “transiciones energéticas justas y populares” reformulan la energía no como un “sector”, sino como un derecho colectivo y común fundamental para el tejido de la vida y las relaciones que la sustentan. Inspirándose en las cosmovisiones indígenas de América Latina según las cuales “el petróleo es la sangre de la tierra”, este replanteamiento abre distintos caminos hacia la desmercantilización, la desprivatización, la democratización y la verdadera descarbonización del sistema energético, además de la transformación del modelo de producción y consumo que lo sustenta.

Al otro lado del Atlántico, Zo Randriamaro, investigadora-activista feminista de los derechos humanos originaria de Madagascar, también se centra en las transformaciones ecosociales desde abajo. Defendiendo una perspectiva decolonial panafricana, esboza el poder de los ecofeminismos africanos para dar forma a transformaciones ecosociales radicales en el continente. Su capítulo explora las raíces, las prácticas pasadas y presentes y las visiones del mundo de los movimientos africanos que han adoptado políticas ecofeministas. El ensayo se abre a una política de la esperanza: a pesar de la masiva explotación colonial y la expansión capitalista, se están produciendo luchas y horizontes ecofeministas en el contexto de la

historia africana, con mujeres y otras comunidades marginadas en primera línea.

Con el objetivo de tejer diálogos entre las alternativas sistémicas mundiales, los siguientes capítulos se dedican al tema del decrecimiento. Bengi Akbulut, economista política feminista turca residente en Canadá, destaca elocuentemente el decrecimiento como una propuesta que recentra y reorienta la economía más allá de la noción de reducción biofísica y material. Utilizando la reproducción social como concepto central organizador y movilizador de esta transformación, identifica tres ejes necesarios para ello: poner en primer plano una concepción más amplia de lo que constituye el trabajo, el decrecimiento como / mediante justicia, especialmente con respecto a las relaciones Norte-Sur históricas y actuales, y la autonomía y la democracia como principios organizadores de una economía del decrecimiento. Akbulut invita a los lectores y lectoras a atreverse a hacer preguntas sobre “qué, cuánto y para quién producir bajo qué condiciones”, con la esperanza de “abrir un espacio para objetivos alternativos y repolitizar la economía sometiéndola a la deliberación y control de la sociedad”.

En su ensayo, Luis González Reyes acepta el reto de Akbulut. Este activista español especializado en medioambiente y energía esboza los profundos cambios necesarios en términos de amplitud, profundidad y velocidad para engendrar transformaciones ecosociales. Desde un enfoque de decrecimiento, aboga por una transformación radical de la economía y del mundo del trabajo que reduzca el consumo material y energético, localice y diversifique la economía, integre la producción y la reproducción en una sola unidad, y por una redistribución de la riqueza entre y dentro de los territorios anclada en la justicia global. Con datos de España, demuestra la urgencia de repensar el concepto de trabajo, separándolo del “empleo”, que ha sido la base del sistema capitalista, y ampliándolo a los cuidados y al trabajo productivo comunitario.

Una economía decreciente también exige cambiar la forma de producir alimentos. Farida Akhter, líder de una ONG de Bangladesh,

comparte la experiencia del movimiento campesino *Nayakrishi Andolon* (Movimiento por una Nueva Agricultura), que no solo se opone a la agricultura industrial impulsada por las empresas y con un uso intensivo de productos químicos, sino que promueve una práctica de sistemas agrícolas basados en la biodiversidad en la que participan más de trescientas mil familias campesinas del país. Su capítulo destaca las diversas estrategias desplegadas por este movimiento, una de las cuales es la reconstitución de redes comunitarias de semillas y prácticas de conocimiento dirigidas por mujeres agricultoras.

Esta dinámica interrelacionada de resistencia y reexistencia gana destaque en el capítulo colectivo de María Campo, feminista negra colombiana, y Arturo Escobar, investigador-activista colombiano y destacado académico, sobre una coconstrucción en marcha de transformación ecosocial pluriversal radical arraigada en una biorregión del suroeste de Colombia: el Valle geográfico del río Cauca y sus territorios. Su trayectoria e itinerario de investigación-acción se hace eco de las demás contribuciones de esta sección al hacer hincapié en ontologías ecológicas y relacionales que colocan el cuidado y la reconstitución del tejido de la vida en el centro. Lo que Campo y Escobar esbozan, también, son objetivos, estrategias y acciones concretas que surgen de las experiencias vividas y de las prácticas de colectivos en el valle, particularmente de pueblos y cuerpos racializados que lo han cuidado y reconstruido, y que han sanado las tierras azotadas por el conflicto en Colombia.

Hasta ahora, las contribuciones se han centrado en los niveles micro (comunitario), macro (nacional) o meso (regional / territorial / biorregiones). Lo que obviamente falta es un enfoque a escala mundial. Eso es lo que hacen Breno Bringel y Sabrina Fernandes en el último capítulo. Lxs activistas y sociológxs de Brasil cierran el libro arrojando luz sobre lo que llaman de “internacionalismo ecoterritorial”, un posible horizonte para una justicia ecosocial global transformadora. Bringel y Fernandes sitúan su propuesta en la historia de la organización internacionalista y la evolución de los internacionalismos en las últimas décadas, subrayando la aparición de redes

y coaliciones transnacionales, espacios globales de convergencia y el movimiento por la justicia global. El capítulo invita a lxs lectorxs a replantearse la promoción de la solidaridad entre los diversos grupos afectados por la deuda ecológica y las asimetrías Norte-Sur, reconociendo al mismo tiempo que hay lugar y espacio para alianzas entre los Nortes y los Sures globales.

Todos los capítulos se apoyan en sólidas perspectivas anticapitalistas, anticoloniales, antirracistas y antipatriarcales, que son clave para (re)imaginar y construir propuestas de transición contrahegemónicas. Las contribuciones a esta sección destacan varios epistemes: la importancia de cambiar radicalmente la forma en que producimos, distribuimos y consumimos —la forma en que están organizadas nuestras economías y sociedades—; de reforzar y recuperar las relaciones entre la sociedad y la Naturaleza; y de dismantelar las estructuras y procesos internos e internacionales de relaciones extractivas y asimétricas Norte-Sur.

Sin embargo, también existen entre ellos diferencias marcadas, y tal vez inexploradas, en relación con la escala (¿en qué nivel de la sociedad centrarse?); las nociones de lo *público* frente a lo *común*; de *soberanía* y *autonomía* (¿cómo relacionarse con el estado? ¿Hay que separarse de él o reestructurarlo internamente?); las relaciones entre las *ciudades* y el *campo*, y el papel de la *tradición* en la configuración de vías y horizontes para las transformaciones ecosociales. Es importante que en futuros trabajos se exploren estas líneas de reflexión política con mayor detalle.

Por último, los autores y las autoras de esta colección no presentan alternativas como modelos o visiones que deban imponerse en otras partes del mundo, sino, como escribe Akbulut, más bien como “una entre muchas otras visiones de vivir bien y equitativamente más allá del crecimiento capitalista”. Este es, al fin y al cabo, el mensaje clave que queremos destacar: que se está forjando un tejido de alternativas, en el que la resistencia y la reexistencia constituyen la (re)imaginación y la construcción de otros mundos.

Bibliografía

Ajl, Max. (2021). *A People's Green New Deal*. London: Pluto Press.

Alimonda, Héctor. (2011). La colonialidad de la Naturaleza: una aproximación a la ecología política latinoamericana. En Héctor Alimonda (ed.), *La naturaleza colonizada*. Buenos Aires: CLACSO, 21-60.

Aronoff, Kate; Battistoni, Alyssa y Aldana Cohen, Daniel. (2019). *A Planet to Win: Why we need a Green New Deal*. London: Verso.

Bhambra, Gurminder y Newell, Peter. (2022). More than a metaphor: climate colonialism in perspective. *Global Social Challenges Journal*, 1-9.

Bond, Thomas. (2023). *Stopping Oil: Climate Justice and Hope*. London: Pluto Press.

Brand, Ulrich y Wissen, Markus. (2021). *Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo* Buenos Aires: Tinta Limón.

Bringel, Breno y Svampa, Maristella. (2023). Del Consenso de los Commodities al Consenso de la Descarbonización. *Nueva Sociedad*, (306), 51-70.

Chomsky, Noam y Pollin, Robert. (2020). *Climate Crisis and the Global Green New Deal: The Political Economy of Saving the Planet*. London: Verso.

Comisión Europea. (2019). *The European Green Deal*. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF

Coronil, Fernando. (2000). Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo. En Lander, Edgardo, *La*

colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Buenos Aires: CLACSO.

Escobar, Arturo. (2015). Degrowth, postdevelopment, and transitions: a preliminary conversation. *Sustainability Science*, 10 (3), 451-462.

Foster, John Bellamy y Clark, Brett. (2004). Ecological imperialism: the curse of capitalism. *Socialist Register*, 186-201.

Gelderloos, Peter. (2022). *The Solutions are Already Here: Strategies for Ecological Revolution from Below*. London: Pluto Press.

Grove, Richard. (1995). *Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism: 1600-1860*. Cambridge: Cambridge University Press.

Headrick, Daniel. (1981). *The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century*. Oxford: Oxford University Press.

Hickel, Jason. (2021). The anti-colonial politics of degrowth. *Political Geography*, 88, 102404.

Hickel, Jason; Dorninger, Christia; Wieland, Hanspeter y Suwandi, Intan. (2022). Imperialist appropriation in the world economy: Drain from the global South through unequal exchange, 1990-2015. *Global Environmental Change*, 73, Artículo 102467.

Klein, Naomi. (2014). *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate*. New York: Simon & Schuster.

Kumar, V. M. Ravi. (2010). Green colonialism and Forest Policies in South India, 1800-1900. *Global Environment*, 3 (5), 101-125.

Kwashirai, Vimbai. (2009). *Green Colonialism in Zimbabwe: 1890-1980*. New York: Cambria Press.

- Lang, Miriam y Mokrani, Dunia (eds.). (2013). *Beyond Development: Alternative Visions from Latin America*. Berlin: TNI/Rosa Luxemburg Foundation. (Versión en español, *Más allá del Desarrollo*, publicada por Abya Yala en Quito en 2011).
- Laval, Christian y Dardot, Pierre. (2017). *The New Way of the World: On Neoliberal Society*. New York: Penguin Random House.
- Lyons, Kristen y Westoby, Peter. (2014). Carbon colonialism and the new land grab: plantation forestry in Uganda and its livelihood impacts. *Journal of Rural Studies*, 36, 13-21.
- Machado Aráoz, Horacio. (2015). Ecología política de los regímenes extractivistas. De reconfiguraciones imperiales y re-existencias decoloniales en nuestra América. *Bajo el Volcán*, 15 (23), 11-51.
- Machado Aráoz, Horacio. (2018). *Potosí, el origen: Genealogía de la minería contemporánea*. Quito: Abya Yala.
- Meadows, Donella H.; Meadows, Dennis y Randers, Jørgen. (1972) *The Limits to Growth; a Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. New York: Universe Books.
- Moreno, Camila; Speich Chassé, Daniel y Fuhr, Lili. (2016). A métrica do carbono: abstrações globais e epistemicídio ecológico. *Heinrich Böll Stiftung*, Rio de Janeiro.
- Nkrumah, Kwame. (1965). *Neo-colonialism, the last stage of Imperialism*. London: Thomas Nelson & Sons.
- Quijano, Aníbal. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Lander, Edgardo, *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. Buenos Aires: CLACSO.
- Riexinger, Bernd; Becker, Lia; Dahme, Katharina y Kaindl, Christina. (2021). *A Left Green New Deal: An Internationalist Blueprint*. New York: Monthly Review.

Rifkin, Jeremy. (2022). *The Age of Resilience: Reimagining Existence on a Rewilding Earth*. London: St. Martin's Press.

Schmeltzer, Mathias; Vansintjan, Aaron, y Vetter, Andrea. (2022). *The Future is Degrowth*. London: Verso.

Slater, David. (2010). The imperial present and the geopolitics of power. *Geopolítica(s)*, 1 (2), 191-205.

Slipak, Ariel y Argento, Melisa. (2022). Ni oro blanco ni capitalismo verde. Acumulación por desfosilización en el caso del litio ¿argentino? *CEC*, 8 (15), 15-36.

Sovacool, Benjamin; Hook, Andrew; Martiskainen, Mari; Brock, Andrea y Turnheim, Bruno. (2020). The decarbonisation divide: Contextualizing landscapes of low-carbon exploitation and toxicity in Africa". *Global Environmental Change*, 60.

Sultana, Farhana. (2022). The unbearable heaviness of climate coloniality. *Political Geography*, 99, 102638.

Svampa, Maristella. (2018). Imágenes del fin. Narrativas de la crisis socioecológica en el Antropoceno. *Nueva Sociedad*, 278, noviembre-diciembre.

Tienhaara, Kyla y Robinson, Joanna. (2023). *Routledge Handbook on the Green New Deal*. London: Taylor & Francis.

Valenzuela-Fuentes, Katia; Alarcón-Barrueto, Esteban y Torres-Salinas, Robinson. (2020). From Resistance to Creation: Socio-Environmental Activism in Chile's "Sacrifice Zones". *Sustainability*, 13 (6), 3481.

Worster, Donald. (2008). *Transformaciones de la Tierra*. Montevideo: CLAES.

Parte I

**Transiciones hegemónicas
y la geopolítica del poder**

Transiciones energéticas globales y extractivismo verde¹

Kristina Dietz

Introducción

La incipiente transición energética mundial como vía hacia la descarbonización, la mitigación del cambio climático y la seguridad energética apunta a un nuevo auge mundial de las materias primas. La creciente demanda de los denominados minerales críticos —como el cobre, el litio, el níquel y el cobalto, metales esenciales para una transformación neutra en carbono de la economía mundial y de los sistemas energéticos nacionales— está provocando una subida de los precios (Comisión Europea, 2020). Hasta qué punto esta evolución está conduciendo a un nuevo extractivismo denominado “verde” en las regiones del mundo con abundancia de estas materias primas no es solo una cuestión de demanda y precios. También depende de la ubicación de los países ricos en estos recursos dentro de una nueva y emergente división verde del trabajo a nivel mundial (Lachapelle et

¹ Este texto es una versión ampliada y actualizada especialmente para este libro de un artículo de la autora publicado por primera vez en alemán con el título *Energiewende und grüne Ausbeutung. Die Energiewende in Europa kündigt einen grünen Extraktivismus in Lateinamerika an* (Ver Dietz, 2022).

al., 2017), así como de las decisiones políticas, regulaciones institucionales, patrones de interacción entre estado y economía, y luchas sociales en torno a la disponibilidad y explotación de estos recursos fundamentales. En aquellos casos en los que el estado depende en gran medida de los ingresos procedentes de la extracción de recursos y en los que la regulación ecológica y social no protege los ecosistemas ni los derechos políticos, los movimientos sociales se enfrentan al reto de movilizarse no solo contra el extractivismo, sino también contra un discurso hegemónico verde que dificulta cada vez más la creación de alianzas internacionales.

Este capítulo tiene la siguiente estructura: en la primera sección se analizan las políticas de transición verde en Europa. Se hace hincapié en las estrategias para fomentar la producción de hidrógeno verde como la nueva panacea para resolver la crisis climática y energética. A continuación, se analizan las repercusiones transregionales de estas políticas, con especial atención en la región de América Latina. En esta sección se argumenta que las políticas de transición energética verde en Europa y otros lugares y la emergencia del extractivismo verde en América Latina están entrelazadas de forma compleja. En la conclusión resumo los principales resultados y discuto lo que estas interacciones significan para los enfoques más radicales y emancipadores de una transformación desde abajo.

Transición energética verde

Desde finales de 2020, todas las materias primas incluidas en los índices de precios se han encarecido, especialmente y con mayor rapidez los minerales críticos. Las razones de este cambio son complejas: además de expectativas de crecimiento económico tras la pandemia del COVID-19 y el impacto de la guerra de Ucrania en el suministro mundial de materias primas, los programas gubernamentales y supraestatales anunciados en todo el mundo para la transición energética hacia una “neutralidad climática” también están impulsando

expectativas de beneficios y precios. Uno de estos programas es el Pacto Verde Europeo de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2019). Este proyecto de modernización ecológica pretende descarbonizar la economía europea para 2050, es decir, hacerla neutra en carbono. Una de las principales vías para lograrlo es la electrificación masiva de la economía y el transporte, una tarea para la que metales como el cobre o el litio son indispensables. El cobre es necesario para conducir la electricidad y el litio para almacenarla en baterías. La Agencia Internacional de la Energía [IEA por sus siglas en inglés] prevé que la demanda de litio se multiplique por cuarenta y tres de aquí a 2040 respecto a 2020 y esta cifra se multiplicará por veintiocho en el caso del cobre (IEA, 2021). La consultora financiera Bloomberg estima que la demanda de cobre aumentará incluso más de un 50 % de 2022 a 2040 y que la economía mundial se enfrentará a una escasez de cobre a partir de 2035 (Attwood, 2022).

El gobierno alemán, por ejemplo, persigue objetivos similares con su transición energética. Según los deseos de la actual coalición gobernante, compuesta por el partido socialdemócrata SPD, el liberal FDP y la Alianza 90 / Los Verdes, para 2030, se habrán matriculado quince millones de coches eléctricos. Con la guerra de Ucrania, el gobierno ha revisado sus objetivos de expansión de las energías renovables en el sector eléctrico. Al mismo tiempo, ha cambiado de discurso: dado que la importación de gas, carbón y petróleo de Rusia se ha convertido en un problema, las energías renovables ya no son solo un medio de protección del clima, sino que han pasado a ser una “cuestión de seguridad nacional” (Der Spiegel, 2022) y “energías de la libertad” (RedaktionsNetzwerk Deutschland, 2022). La Unión Europea [UE] y el gobierno de coalición alemán confían sobre todo en la tecnología y en la innovación para hacer frente a las crisis energética y climática. Ambos pretenden obtener parte de las materias primas necesarias para esta transición energética verde impulsada por la tecnología a partir de iniciativas de reciclaje y relocalización, es decir, fomentando la extracción de litio en la propia Europa. Sin embargo, la mayor parte será importada. Los países con los mayores

yacimientos de estos recursos son aquellos cuyo papel histórico en la división internacional del trabajo ha sido el de ser grandes proveedores de materias primas, es decir, principalmente países de África y América Latina.

Las transiciones energéticas verdes no se producirán dentro de las fronteras estatales, sino que “son las interacciones mundiales entre las economías de distintos estados las que permiten que se produzcan dichas transiciones” (Lachapelle et al., 2017, p. 312). Mientras que las inversiones, la innovación en patentes y las capacidades de fabricación e instalación en el sector de la energía verde se concentran principalmente en un puñado de países como Estados Unidos, China, Japón, algunos países de Europa occidental como Alemania, Dinamarca y Finlandia y un par de países asiáticos más, como Corea, los recursos fundamentales se encuentran principalmente en países africanos y latinoamericanos (Lachapelle et al., 2017, p. 312). La economía geopolítica de la transición energética (Bridge y Faigen, 2022) está configurada por interconexiones estructuradas a nivel mundial que sitúan a los países ricos en recursos del Sur global, cuya estrategia de acumulación se ha caracterizado —históricamente y en el pasado reciente— por la extracción y exportación de recursos con escaso procesamiento, en la posición de proveedores de recursos fundamentales y de desplegados de los denominados “espacios vacíos” para la instalación de parques eólicos y solares y de centrales de hidrógeno verde. Uno de los temores es que una modernización ecológica orientada a la descarbonización pueda reproducir esta división internacional del trabajo, ahora teñida de verde, e incitar un nuevo superciclo global de materias primas,² que podría dar lugar a una nueva fase de intercambio desigual mediante la expropiación de estas materias y recursos naturales en el Sur global. A diferencia del último superciclo de principios de la década del 2000, esta vez la atención no solo se centra en los combustibles fósiles y en los

² El término “superciclo” se refiere a un periodo prolongado en el que la demanda de materias primas impulsa los precios muy por encima de su tendencia a largo plazo.

metales preciosos e industriales, sino también en los lubricantes que supuestamente impulsarán una economía mundial verde, electrificada y de alta tecnología. Además de los minerales críticos ya mencionados, ahora también está incluido el hidrógeno verde.

Hidrógeno verde

El hidrógeno verde desempeñará un papel esencial en la transición energética verde. El adjetivo “verde” se refiere al método de producción: el hidrógeno verde se produce utilizando energías renovables, mientras que el hidrógeno gris se produce utilizando combustibles fósiles. Cuando las emisiones de dióxido de carbono resultantes se almacenan bajo tierra, se denomina hidrógeno azul. En todo el mundo, muchos países han adoptado estrategias de hidrógeno verde. Ya en junio de 2020, el gobierno alemán adoptó una estrategia nacional sobre el hidrógeno. En aquel momento se fijó el objetivo de producir catorce teravatios-hora de hidrógeno verde en Alemania para 2030 (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie [BMWi], 2020). Sin embargo, esto está lejos de cubrir la demanda estimada. El déficit se compensará con importaciones de “países en desarrollo ricos en sol y viento” que “tienen un alto potencial para producir energías renovables” (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz [BMWK], 2022). Además de esta estrategia, el gobierno de coalición está entablando negociaciones bilaterales para garantizar el futuro suministro de hidrógeno para Alemania. Los llamados acuerdos sobre hidrógeno ya existen con Marruecos, Sudáfrica, Namibia y Chile. Pronto podrían establecerse acuerdos similares con otros países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Argentina y México.

Para garantizar su acceso al suministro de hidrógeno verde, el gobierno y las empresas alemanas están apoyando la construcción de plantas de hidrógeno verde en el Sur global, tanto con inversiones de capital como con dinero público. Junto con otros países, Alemania participa en la Clean Hydrogen Mission, fundada en 2021, cuyo

objetivo es impulsar el desarrollo del llamado hidrógeno limpio en todo el mundo y reducir los costes de su producción y transporte. Ampliar las capacidades productivas y desarrollar infraestructuras para el transporte de hidrógeno verde son también el objetivo de la Plataforma para el desarrollo del hidrógeno verde en América Latina y el Caribe (H2LAC), lanzada en noviembre de 2021 por la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Agencia Alemana de Cooperación Internacional [GIZ por sus siglas en alemán]) en cooperación con el Banco Mundial, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe [CEPAL], y la Unión Europea [UE].³ Ya están en marcha varios proyectos de producción de hidrógeno verde para exportar a Europa. Un ejemplo es un acuerdo entre el gobierno del estado de Ceará, en el nordeste de Brasil, con la multinacional alemana Linde, representada en Latinoamérica por White Martins, para implantar una planta de hidrógeno verde en Ceará. La iniciativa es fruto de la Alianza Brasil-Alemania para la expansión del Hidrógeno Verde, creada en agosto de 2020 por las Cámaras Brasil-Alemania de Río de Janeiro y São Paulo para promover asociaciones y oportunidades de negocio entre empresas e instituciones brasileñas y alemanas.⁴ Otro ejemplo es un acuerdo entre Siemens Energy y otras empresas transnacionales con la petrolera colombiana Ecopetrol para construir una planta de hidrógeno verde en Cartagena. La iniciativa cuenta con el apoyo tanto del gobierno alemán como del colombiano.⁵ Estos ejemplos demuestran que, para lograr una transición energética verde, los países —especialmente los densamente poblados de Europa occidental— dependen no solo de la Investigación y el Desarrollo [I+D], del acceso a patentes y capacidades de fabricación, sino también del acceso a recursos y

³ <https://h2lac.org>

⁴ <https://www.h2verdebrasil.com.br/sobre-nos/>

⁵ Para más información, ver: <https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/noticias/detalle/alianza-internacional-hidrogeno> y <https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/dialogo-binacional-politica-reindustrializacion-colombia-basada-energias-renovables>

espacios, es decir, a zonas para la construcción de instalaciones eólicas y solares a gran escala, plantas de hidrógeno verde, etcétera.

El discurso en torno a las iniciativas multilaterales para la promoción del hidrógeno verde las formula como una situación en la que todos ganan. Lo que no se dice es que la producción de hidrógeno verde requiere la construcción de gigantescos parques eólicos y solares, al igual que la electromovilidad requiere la extracción de enormes cantidades de litio, cobre y otros metales. En otras palabras, mucha tierra y materias incorporadas (ver el artículo de Dorninger en este libro). Los países con abundantes recursos naturales y supuestos “espacios vacíos” ya han vivido años de conflictos en torno a cuestiones de uso, control, acceso, conservación y presión sobre los ecosistemas, los medios de subsistencia y los modos de vida. Todo ello aumentará como consecuencia del lado más oscuro de la transición energética verde: el extractivismo verde.

Extractivismo verde

El término “extractivismo verde” ha sido utilizado por activistas y científicos para criticar la extracción y apropiación capitalista de materias primas, recursos naturales (como la radiación solar o el viento) y mano de obra, especialmente en el Sur global, con el fin de llevar a cabo una transición energética verde-tecnológica. En estos casos, “verde” no significa un uso de la Naturaleza respetuoso con el medioambiente y socialmente justo, sino la reestructuración del comercio, la energía y el transporte para que encajen en el marco de una economía verde. En el extractivismo verde, la extracción de materias primas se convierte en un medio para alcanzar un fin, por lo que parece compatible con los objetivos de desarrollo sostenible e inevitable para garantizar un futuro con bajas emisiones de carbono (Voskoboynik y Andreucci, 2022). El término pretende ser una crítica de cómo los requisitos estructurales y los impactos de la transición energética verde-tecnológica afianzan aún más las divisiones verdes

del trabajo y la Naturaleza a nivel mundial, así como las relaciones globales de desigualdad y explotación. Este concepto subraya el hecho de que, en aquellas regiones que son (inevitablemente) “sacrificadas” en beneficio de la modernización ecológica, la extracción y apropiación de materias primas para la modernización ecológica está asociada al aumento del control y la influencia que ejercen las empresas transnacionales, las organizaciones internacionales, los gobiernos occidentales y las fracciones del capital sobre la política, los territorios y el trabajo (Kingsbury, 2021).

El extractivismo verde no se opone al llamado neoextractivismo, que surgió como modelo hegemónico de comercio y desarrollo en América Latina a principios del siglo XXI. Lo que caracteriza al neoextractivismo de las décadas del 2000 y 2010 —y lo que lo asemeja al extractivismo verde— es la extracción y exportación de materias primas (en este caso principalmente) fósiles, metálicas, minerales y bienes agrícolas con consecuencias fatales, como la destrucción ecológica y la intensificación de los conflictos sociales. Los países extractores se vuelven muy dependientes de los ingresos procedentes del sector de las materias primas debido al bajo valor añadido, que garantiza grandes beneficios a las empresas transnacionales. Este proceso se ve apuntalado por la destrucción de recursos alternativos en las zonas rurales y una ejecución cada vez más violenta de los proyectos extractivistas (Svampa, 2019).

Sin embargo, lo que diferencia el extractivismo verde del neoextractivismo es el discurso utilizado para legitimarlo. Dado que sirve a objetivos verdes, este método de explotación de la Naturaleza es descrito como respetuoso con el clima, sostenible, progresista y ecológicamente moderno por los actores estatales, internacionales y del sector privado, así como por los organismos no gubernamentales de protección del medioambiente, como los que promueven el desarrollo. Por ejemplo, la UE promociona la alianza H2LAC como una oportunidad para combinar la protección del clima en Europa con la promoción de una transición energética y un crecimiento económico sostenible en América Latina (*pv magazine*, 2021). Así, la

transición energética verde mundial va acompañada de la aparición de un nuevo paradigma de desarrollo verde que vincula las soluciones tecnológicas a la crisis climática con la modernización ecológica y el desarrollo económico. Además, los gobiernos de los países extractores están desempeñando un papel mucho más activo en el extractivismo verde, ya que también están impulsando la explotación de minerales críticos y la expansión de las energías renovables para abrir nuevos yacimientos de acumulación y fomentar transiciones energéticas verdes en sus propios países.

Extractivismo verde en América Latina

América Latina tiene grandes cantidades de cobre y litio y abundante viento y luz solar (ver el capítulo de Svampa en este libro). Estos factores hacen que los países latinoamericanos sean atractivos para la producción y exportación de hidrógeno verde. Junto con las decisiones políticas tomadas en las últimas décadas, ya se dan las condiciones para el surgimiento del extractivismo verde en América Latina. En los años noventa, varios gobiernos, presionados por el Fondo Monetario Internacional [FMI] y el Banco Mundial, tomaron medidas para liberalizar y privatizar sus sectores agrícolas y de recursos naturales, lo que creó el marco político e institucional para la venta de tierras y recursos a gran escala. En la actualidad, se han aplicado nuevas reformas para promover la inversión privada en sectores ecológicos y fomentar la extracción y exportación de materias primas y fuentes de energía fundamentales. Estas reformas cuentan con el apoyo de organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, la UE y agencias nacionales de desarrollo, como la GIZ.

En los últimos años, varios países latinoamericanos han aprobado leyes y puesto en marcha programas para su propia transición energética, entre ellos México en 2015, Argentina en 2015 y 2021, y Colombia y Perú, ambos en 2021. Desde una perspectiva político-económica

mundial, estas diversas iniciativas deben entenderse no como estrategias nacionales únicas, sino como parte de un proceso que surge de interacciones multiescalares (locales, nacionales y mundiales) de actividades que se refuerzan mutuamente (Lachapelle et al., 2017). Estas actividades están siendo emprendidas por gobiernos locales, regionales y nacionales junto con empresas privadas del Norte y del Sur globales y organizaciones internacionales que persiguen la transición energética verde y la acumulación de capital verde, por lo que persisten relaciones de poder asimétricas entre el Norte y el Sur. Los países latinoamericanos han sido históricamente productores mundiales de minerales críticos. En la emergente división verde del trabajo a nivel mundial, muchos países de la región seguirán desempeñando este papel, especialmente en lo que se refiere a la extracción y exportación de recursos fundamentales para la transición verde, por ejemplo, el cobre y el litio. Los volúmenes de producción y exportación de estos dos metales han aumentado en los últimos años. Un ejemplo es el cobre en Perú. Perú es el segundo productor mundial de cobre después de Chile. Entre 2012 y 2019, la producción anual casi se duplicó, pasando de 1,3 a 2,5 millones de toneladas. Tras una disminución de la producción en 2020 y 2021 debido a la pandemia, el gobierno esperaba que la producción de cobre aumentara en más de un 25 % en 2022 (Guía Minera de Chile, 2022). El 60 % de los ingresos por exportaciones de Perú proceden del sector minero, lo que significa que la economía del país depende de los ingresos procedentes de las materias primas. Según las previsiones actuales de precios y demanda, se espera que estos ingresos sigan aumentando. China, Estados Unidos, Alemania y Japón, que cuentan con las mayores capacidades de procesamiento industrial del mundo, son los principales destinos de las exportaciones de cobre peruano.

También se espera que aumente la producción de litio orientada a la exportación en Bolivia, Chile y Argentina, dados los elevados precios del mercado mundial, y que siga generando ingresos para estos países, aunque de forma diferente en cada caso. El gobierno boliviano del presidente progresista Luis Arce está intentando —hasta

ahora sin éxito— facilitar la capacidad del país para crear valor desarrollando su propia industria procesadora. El caso de Argentina es diferente: el país posee enormes cantidades de litio hasta ahora no extraído, el doble de lo que podría producir su vecino, Chile. El gobierno argentino del presidente Alberto Fernández tenía a mediados de 2023 trece nuevos proyectos programados para su ejecución con empresas transnacionales, en un esfuerzo por contribuir de forma significativa a la futura seguridad del suministro mundial, atraer nuevas inversiones al país y ampliar la cartera de exportaciones de Argentina. Aunque la realización de estos proyectos es incierta y dependerá de hasta qué punto los movimientos sociales logren movilizarse contra ellos, solo con la expectativa de que puedan llevarse a cabo con éxito, los analistas financieros ya clasifican a Argentina como una nueva potencia mundial en el mercado del litio.

En Chile, el litio ha sido explotado principalmente en el desierto de Atacama, en el norte del país. Sin embargo, el desierto de Atacama no solo es rico en litio. También es una de las regiones del mundo con mayor cantidad de luz solar directa. En el sur del país, la Patagonia tiene un enorme potencial para la energía eólica. En ambas regiones se utilizarán grandes plantas solares y parques eólicos para generar electricidad. También está previsto ampliar la producción de hidrógeno verde. A partir de 2030, Chile aspira a convertirse en el mayor exportador mundial de los codiciados portadores de energía verde. El anterior gobierno colombiano del presidente conservador Iván Duque —al que sustituyó Gustavo Petro en agosto de 2022— formuló planes igual de ambiciosos. Por ejemplo, la construcción de parques eólicos marinos en el Caribe, y parques eólicos y solares en el norte del país, en la provincia de La Guajira. Al igual que Chile, Colombia también quiere ampliar su cartera energética orientada a la exportación y exportar energía verde en forma de hidrógeno, además de carbón, petróleo y gas. Durante un viaje a Europa en la primavera de 2022, el exministro de Energía colombiano Diego Mesa pidió apoyo para alcanzar estos ambiciosos objetivos, que requieren inversiones de entre tres y cinco mil millones de dólares estadounidenses. Se han

firmado acuerdos preliminares con los Países Bajos y se están preparando proyectos piloto de plantas eólicas marinas con capital danés (Portafolio, 2021).

Luchas contra el extractivismo verde

Las protestas contra la extracción de minerales críticos se llevan produciendo en América Latina desde hace años. Esta tendencia continuará, aunque la extracción sea justificada por motivos ecológicos. Se están sacrificando las necesidades básicas de la población y los recursos naturales para satisfacer la demanda mundial de cobre y litio. Esto es especialmente cierto para aquellos sectores de la población que no cuentan para crear valor en el marco del extractivismo verde: las comunidades campesinas e indígenas. Por ello, los movimientos ecologistas nacionales y locales, las organizaciones juveniles, los pequeños agricultores y los grupos indígenas y afrolatinoamericanos protestan junto con sus socios internacionales contra los desplazamientos, los reasentamientos forzosos y la destrucción de los medios de vida, así como contra la contaminación del aire y del agua y la modificación de los derechos existentes sobre el uso y el acceso a bienes esenciales para el bienestar de las personas. Además, exigen participación democrática, descentralización, un reparto justo de los beneficios, indemnizaciones adecuadas y acceso a puestos de trabajo (ver el artículo de Roa y Bertinat en este libro).

Por lo tanto, estas protestas no solo se refieren a los pros y los contras de la extracción de recursos, sino a cuestiones fundamentales de las relaciones de poder sociales y mundiales. En toda la región, los movimientos luchan contra las desigualdades sociales, la pobreza, el incumplimiento de los derechos, la explotación laboral, la imposición autoritaria de proyectos económicos y la externalización de los costes ecológicos y sociales a aquellas zonas del Sur global que, a menudo, son consideradas por las empresas y los gobiernos como “espacios vacíos” y “subdesarrollados”. El ejemplo de la minería del cobre

en Perú ilustra las dimensiones sociales y políticas de estas protestas. En Perú, el cobre es extraído principalmente por empresas transnacionales en minas industriales a gran escala. Este tipo de producción requiere mucho capital, pero poca mano de obra. La población rural de estas regiones mineras, mayoritariamente indígena, rara vez encuentra trabajo en las minas. En cambio, el desplazamiento, la falta de compensación y la destrucción del medioambiente causados por la minería del cobre les roban sus medios de subsistencia y atentan contra sus necesidades básicas. Por eso luchan. La mina de cobre de Las Bambas, en particular —explotada por la empresa china Minerals and Metals Group [MMG]— es un lugar de contestación y fue ocupada por más de cien miembros de una comunidad indígena a finales de abril de 2022. MMG tuvo que detener sus operaciones en la mina. Las personas que antes vivían allí perdieron sus tierras y aldeas debido a la construcción de esta mina. Ahora exigen una indemnización adecuada por el reasentamiento, inversiones en infraestructuras sociales y productivas que les garanticen nuevas fuentes de ingresos y medios de vida, y el fin de la destrucción medioambiental. Al mismo tiempo, los manifestantes subrayan que las empresas mineras engañan a las comunidades locales (Peña, 2021).

También crece la resistencia contra la extracción de litio en los salares andinos de Chile, Argentina y Bolivia. Los movimientos de protesta en estas regiones también exigen la protección de los derechos de los pueblos indígenas y de los ecosistemas sensibles. También existe una oposición a la expansión de la producción de energía a partir de fuentes eólicas y solares para fabricar hidrógeno verde. En el norte de Colombia, por ejemplo, grupos indígenas protestan contra la construcción de megaproyectos eólicos en sus territorios. Estas regiones ya están sufriendo las consecuencias medioambientales, fisiológicas y sociales de la minería del carbón orientada a la exportación (Mejía, 2022).

En el contexto de la transición energética verde mundial, estas zonas están sometidas a una doble tensión, ya que son las regiones en las que la extracción de combustibles fósiles suele solaparse con los

proyectos de minería verde y los planes a gran escala para producir energía renovable, energía que, a su vez, se necesita urgentemente para producir hidrógeno verde. Con sus medios de vida destruidos, los habitantes de estas regiones mineras se ven obligados a pagar el precio más alto para garantizar el suministro energético y resolver la crisis climática mundial, a la que han contribuido menos que cualquier otra persona.

Conclusión

Actualmente se está determinando la forma de la transición energética verde mundial y qué papel desempeñarán los países latinoamericanos y otros lugares del Sur global en la emergente división verde del trabajo y de la Naturaleza a nivel mundial. Las reglas y procedimientos de esta transición global son formulados principalmente por representantes del capital privado, instituciones financieras internacionales, agencias y bancos de desarrollo, la CEPAL, agencias nacionales e internacionales de energía y los gobiernos del Norte global, con la participación de sus homólogos latinoamericanos. Esto no es sorprendente, ya que los primeros poseen el capital necesario para construir la infraestructura de producción “verde” y explotar las materias primas.

Por el momento, no está claro hasta qué punto Chile, por ejemplo, conseguirá evitar la extrema devastación ecológica causada por la extracción de litio, reforzar los derechos de la población indígena del país y utilizar una estricta legislación medioambiental para aprovechar al máximo el potencial de las energías renovables, especialmente a escala nacional. Lo mismo puede decirse de Colombia, donde Gustavo Petro dejó claro durante su campaña electoral que, como presidente, pretende superar la lógica extractivista explotadora del anterior *boom* de las materias primas. En los países cuyos gobiernos no pueden o no quieren hacer cumplir las normativas ecológicas y sociales, los movimientos sociales no solo se enfrentan

a la expansión del extractivismo verde. También deben desafiar un discurso verde hegemónico que dificulta aún más el establecimiento de alianzas internacionales.

El discurso actual en torno a una transición verde difiere considerablemente del utilizado por los defensores del neoextractivismo para legitimar sus acciones. Ya no se trata solo de desarrollo, sino de modernización verde, progreso verde, sostenibilidad y solución de la crisis climática, ¿quién podría oponerse a ello? Sin embargo, existen varias formas de politizar las estructuras de explotación fomentadas mediante la transición energética verde. La reducción de las emisiones de dióxido de carbono mediante soluciones tecnológicas procedentes de Europa conducirá a una mayor devastación socioecológica en los países del Sur global. Por ello, el acceso a la tierra sigue siendo objeto de luchas políticas y movimientos de oposición. El movimiento de posrecimiento, los planteamientos ecosocialistas y las luchas feministas indígenas ofrecen marcos discursivos útiles y ejemplos prácticos de cómo podría llevarse a cabo una transición energética socioecológica diferente “desde abajo”. La tarea de una política de transición energética emancipadora, como sugieren Breno Bringel y Sabrina Fernandes en este libro, es conectar estas luchas transnacionalmente.

Al mismo tiempo, es crucial situar la transición energética verde en una senda reformista radical y —en la medida en que aún sea posible— revertir los impactos negativos que ya se han derivado de este proceso. El litio seguirá extrayéndose, al igual que el cobre, y la producción de hidrógeno verde seguirá aumentando. Sin embargo, la cuestión decisiva es en qué condiciones políticas tendrá lugar. Por lo tanto, paralelamente al desarrollo de enfoques alternativos a la transición energética, una intervención emancipadora también debería fortalecer aquellas fuerzas en América Latina y en el resto del mundo que intentan limitar el inminente extractivismo verde con una estricta legislación medioambiental, democrática y sociopolítica.

Bibliografía

Attwood, James (12 de diciembre de 2022). A Great Copper Squeeze Is Coming for the Global Economy. *Bloomberg*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-21/copper-prices-fall-despite-signs-of-looming-crucial-metal-shortage?leadSource=uverify%20wall>

Bridge, Gavin y Faigen, Erika. (2022). Toward a lithium-ion battery production network: Thinking beyond mineral supply chains. *Energy Research & Social Science*, 89, Artículo 102659. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629622001633?via%3Dihub>

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie [BMWI]. (2020). Die Nationale Wasserstoffstrategie. <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.html>.

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz [BMWK]. (2022). Wasserstoff. Schlüsselement für die Energiewende. <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/wasserstoff.html>

Comisión Europea. (2020). Critical Raw Materials Resilience. Charting a Path towards greater Security and Sustainability. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474>

Comisión Europea. (2019). The European Green Deal. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF

Der Spiegel (30 de julio de 2022). Habeck sieht Chance für Comeback der Solarindustrie. <https://www.spiegel.de/wirtschaft/robert-habeck-sieht-chancen-fuer-comeback-der-solarindustrie-a-21b76af1-d813-4241-84b0-ffc359f1b86a>

Dietz, Kristina (24 de agosto de 2022). *Energiewende und grüne Ausbeutung. Die Energiewende in Europa kündigt einen grünen Extraktivismus in Lateinamerika an*. Rosa-Luxemburg-Stiftung. <https://www.rosalux.de/news/id/46906/energiewende-und-gruene-ausbeutung>

Guía minera de Chile. (2022). Perú espera elevar producción de cobre en 27 % y de oro en 12 % en el 2022. <https://www.guiaminera.cl/peru-espera-elevar-produccion-de-cobre-en-27-y-de-oro-en-12-en-el-2022-ministro/>

IEA. (2021). The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transition, World Energy Outlook Special Report. <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>

Kingsbury, Donald V. (20 de julio de 2021). Green' Extractivism and the Limits of Energy Transitions. Lithium, Sacrifice, and Maldevelopment in the Americas. *Georgetown Journal of International Affairs*. <https://gjia.georgetown.edu/2021/07/20/green-extractivism-and-the-limits-of-energy-transitions-lithium-sacrifice-and-maldevelopment-in-the-americas/>

Lachapelle, Eric; MacNeil, Robert y Paterson, Matthew. (2017). The political economy of decarbonisation: from green energy “race” to green “division of labour”. *New Political Economy*, 22 (3), 311-327. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13563467.2017.1240669>

Mejía, Eliana (16 de enero de 2022). Wayús completan diez días de protestas en el parque eólico Guajira 1. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-guajira-protestas-por-parque-eolico-en-cabo-de-la-vela-645229>

Peña, Carlos (12 de febrero de 2021). Las Bambas. Comunidad campesina de Pumamarca protestó contra empresa minera. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/peru/las-bambas-comunidad-campesina->

de-pumamarca-protesta-contra-empresa-minera-apurimac-noticia/

Portafolio (13 de noviembre de 2021). Colombia busca hasta 5 000 millones de dólares para hidrógeno verde. <https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/colombia-busca-millonarias-inversiones-para-hidrogeno-verde-558504>

PV magazine International (2 de diciembre de 2021). New Platform Will Seek the Development of Green Hydrogen in Latin America and the Caribbean. <https://www.pv-magazine.com/press-releases/new-platform-will-seek-the-development-of-green-hydrogen-in-latin-america-and-the-caribbean/>

RedaktionsNetzwerk Deutschland (27 de febrero de 2022). Lindner. Erneuerbare Energien sind „Freiheitsenergien“ – Zustimmung von Lauterbach. <https://www.rnd.de/politik/lindner-zu-krieg-in-der-ukraine-erneuerbare-energien-sind-freiheitsenergien-lauterbach-stimmt-zu-ZQGHVBLMTJFJHBB3F3HLNE63NA.html>

Svampa, Maristella. (2019). *Neo-extractivism in Latin America. Socio-environmental Conflicts, the Territorial Turn, and New Political Narratives*. Cambridge: Cambridge University Press.

Voskoboynik, Daniel Macmillen y Andreucci, Diego. (2022). Greening extractivism. Environmental discourses and resource governance in the “Lithium Triangle”. *Environment and Planning E. Nature and Space*, 2 (5), 787-809. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/25148486211006345>

Transición energética corporativa

El triángulo sudamericano del litio como caso testigo¹

Maristella Svampa

Introducción

Llamamos *transición energética* al pasaje de una concepción de la energía como *commodity*, de matriz fósil, agotable y con graves impactos sobre el ambiente, privada y concentrada, a otra que la conciba como *bien común*, renovable y sustentable en sentido pleno, común y descentralizada. No se trata entonces solo de descarbonizar el modelo energético, sino también de transformar el modelo productivo y de modo más general, el sistema de relaciones sociales y el vínculo con la Naturaleza. Para ello es necesario abandonar las concepciones sectoriales y desarrollar una visión más holística, lo cual significa también que la transición energética debe ser pensada al interior de la transición socioecológica. Una transición energética que no se inscriba en una visión integral, que no se ocupe de la

¹ Este artículo expresa ideas desarrolladas en un libro de investigación colectiva, del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios de la problemática energética [GECIPE], coordinado por Pablo Bertinat y la autora. Refleja y reproduce básicamente partes de los trabajos de Argento y Bertinat; Argento, Puente y Slipak y, por último, Svampa y Bertinat (ver Svampa y Bertinat, 2022).

radical desigualdad de la distribución de los recursos energéticos, que no propicie la desmercantilización y fortalezca las capacidades de resiliencia de la sociedad civil, solo abonará a una reforma parcial, sin modificar las causas estructurales del colapso socioecológico que estamos atravesando.

Ahora bien, resulta difícil encontrar en el contexto global rasgos de este tipo de transición sistémica. Las experiencias vinculadas a la transición energética están básicamente asociadas a las propuestas de cambio de fuentes energéticas, al desarrollo de renovables para reemplazar fuentes fósiles y nucleares, a una transformación de la matriz, que no incluye el sistema energético. Los actores hegemónicos ven en la transición energética un potencial de acumulación de riqueza y posicionamiento hegemónico geopolítico —con mecanismos de sustentabilidad débil, con una mirada corporativa—, que se podría denominar “universo del ambientalismo corporativo” (Bertinat et al., 2021) o la “narrativa capitalista-tecnocrática” (Svampa, 2018).

Como sostienen Bertinat y Argento, la transición energética corporativa, más allá de la esfera empresarial, puede tener adeptos diversos tales como empresas multinacionales, estados (en sus múltiples escalas), instituciones y organizaciones, que sostienen esta perspectiva como forma más rápida de responder a la urgencia de la crisis a partir de la premisa eficiencia tecnológica. Lo que importa es sostener nichos de mercado y garantizar la relación oferta / demanda por el creciente consumo, sin plantear que se alteren las lógicas mismas de ese consumo.

El objetivo, que se presenta como fin en sí mismo, es emitir menos gases de efecto invernadero y generar cierto respaldo geopolítico ante la creciente preocupación pública por el cambio climático. Esto se acopla con un proceso creciente de acumulación de riqueza y poder a través de las nuevas áreas de extracción, que apunta a mantener las relaciones de desigualdad existentes. Se trata, cuanto más, de garantizar el crecimiento ilimitado, pero solo para unos pocos. Esta concepción es hegemónica, capitalista y colonial en la medida en

que impulsa falsas soluciones ligadas a alternativas controversiales como la energía nuclear, el gas como “combustible puente” o de transición, las energías “extremas”, los agrocombustibles, entre otros.

En la transición energética corporativa, la mayoría de los elementos (artefactos, proyectos, normativas, investigación y desarrollo, etcétera) son controlados por, o funcionan en favor de, corporaciones transnacionales o potencias mundiales, complejizando los sistemas y la cotidianeidad bajo la excusa de la eficiencia, y limitando así la posibilidad de democratizar el uso de la energía y la tecnología. En este marco, juega un rol central el tema de la propiedad y el control de acceso a las fuentes energéticas, los materiales y las tecnologías necesarias. La concentración del sistema energético es una característica inherente a este. Grandes empresas, no solo privadas, sino en muchos casos públicas, detentan el poder hegemónico.

Los principales actores de la transición energética corporativa impulsan el desarrollo de las fuentes de energías renovables desde una concepción utilitaria y desde un formato industrial, imaginando que ellas podrían ser una alternativa a los límites planetarios de recursos en el marco de un modelo intensivo neoextractivista, en definitiva, dominado por una lógica fósil (González Reyes, 2018). Entienden que las fuentes energéticas no fósiles podrían sostener el sendero actual de crecimiento ilimitado. En algunos casos, también adquiere protagonismo la cuestión asociada a la eficiencia energética desde una perspectiva tecnocrática. Se percibe el potencial de cambio solo en la eficiencia tecnológica y, por lo tanto, de consumo, sin plantear que se alteren las lógicas mismas de ese consumo.

En América Latina, según un estudio reciente, los medios de comunicación ven la transición energética solo desde una perspectiva económica y de negocios. El dato surge después de examinar mil doscientos artículos de los principales medios de comunicación y fue elaborado por Climate Tracker (Andrés, 2022). Se señala también la escasa presencia de periodistas especializados en la cobertura regional de la transición energética. Además, el enfoque centrado en los negocios se impuso (en algunos países de manera abrumadora).

La principal fuente de información son los gobiernos nacionales junto a representantes de las empresas. Entre otros hallazgos, se destaca la ausencia de explicaciones científicas, líderes comunitarios y enfoques centrados en la ecología y la pobreza.

Así, la transición energética corporativa se asienta en la cuestionada idea del “desarrollo sustentable” y la “economía verde”, esto es, en continuar el camino del crecimiento ilimitado, intercambiando recursos fósiles por renovables y de alta tecnología, sin los modelos de consumo capitalistas, ni cuestionar la distribución o el acceso a la energía de las poblaciones o la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión.

Transición corporativa y litio

El litio es considerado como la llave maestra para la transición energética, rumbo a una sociedad posfósil. El litio es un mineral que tiene diferentes usos, modalidades y destinos. Uno de sus principales usos es en baterías para computadoras personales, celulares, reproductores de MP3 y productos afines. En tanto producto final, las baterías de Ion-Litio son almacenadoras de energía, y sirven para la elaboración de automóviles eléctricos. El litio también es empleado para obtener grasas lubricantes, vidrios, aluminio, polímeros y la industria farmacéutica, entre otros usos.

En la actualidad, el 39 % de lo demandado se destina a la producción de baterías, 30 % para cerámicos y vidrios, el 8 % a grasas y lubricantes, el 5 % a la metalurgia, el 5 % en polímeros, un 3 % para los tratamientos de aire y el restante 10 % en otros usos heterogéneos. Las proyecciones indican que para el año 2026 el 70 % del consumo de litio será destinado a baterías, el 15 % a cerámicos y vidrios y el 15 % restante a otros usos.² Asimismo, a nivel global, se advierte la

² Datos del Ministerio de Energía y Minería de la Argentina (2017), citado por Zicari et al., p. 62 (Ver Zicari et al., 2019).

expansión acelerada del mercado de los acumuladores eléctricos en base a litio, que supera el mercado de pilas y baterías y hace prever que los acumuladores, que permiten un nivel de reserva energética mayor, cambiarán los hábitos de consumo individuales e incluso ciudades enteras requerirán de aquellos, para la administración y distribución energética.

A nivel geopolítico la importancia del mercado del litio ilustra la nueva configuración del poder mundial. La necesidad de salir del paradigma del combustible fósil y la gravedad de la crisis climática generó una marcada competencia con relación al litio y la cadena de valor. Son pocos los países que controlan dicha cadena, esto es, los que pueden realizar el camino desde la extracción del mineral hasta la elaboración de la batería.

A comienzos de este siglo, Japón lideraba el mercado de pilas y baterías, seguido por Estados Unidos y varios países europeos. Firmas como Toyota buscan desde hace tiempo estar presentes en la cadena de valor. En ese entonces, China ocupaba una posición muy marginal (solo representaba el 1,46 % del total). Sin embargo, en un escenario cada vez más problemático y complejo, mientras que algunos líderes mundiales (USA, Australia, Brasil, entre otros) apuestan al negacionismo, China, hasta hace poco renuente a firmar el protocolo de Kioto, modificó su política y aparece cada vez más embarcada en la transición energética. Muestra de ello es que lidera el mercado global de autos eléctricos, con la empresa BYD, asentada en Shenzhen, superando incluso a la empresa californiana Tesla. Asimismo, no es casual que, en 2017, China pasó a ocupar el primer lugar como exportador mundial de batería de litio, quedando a la par de Estados Unidos y Singapur, seguido por Hong Kong. Japón retrocedió de manera vertiginosa y los países europeos quedaron prácticamente en la mitad de los valores de antes (Zicari et al., 2019, p. 62).

Estos debates sobre el rol del litio en la transición, que muestran el reposicionamiento de las potencias a nivel global, comienzan a tener impacto en Sudamérica, donde se encuentra el llamado “Triángulo del litio”, situado entre los Salares de Atacama, en el norte de

Chile, el salar Uyuni, en Bolivia y las salares de las Salinas grandes, Olaroz Cauchari y Hombre Muerto en Argentina, zona que concentra más de la mitad de las reservas probadas de litio del planeta (Argento y Puente, 2019).

El litio es un metal alcalino de rápida oxidación con el agua o el aire que posee propiedades diferenciales en cuanto a la conducción del calor y la electricidad. Se encuentra presente en diferentes tipos de yacimientos de minerales, así como también en salmueras naturales. Sea de los yacimientos de litio en salmueras como de yacimientos de minerales (como el Espodumeno), se extrae el insumo que se encuentra en el primer escalón de la cadena de valor, el carbonato de litio. Aunque no es un mineral raro, ni escaso, ni está distribuido de modo desigual, el modo más rentable es extraerlo de los salares andinos. Esto hace que la presión global y nacional sobre la región Atacameña de los salares, sea cada vez mayor.

La minería del litio es diferente a la megaminería metálica, pues no implica remover toneladas de tierra, dinamitar montañas, pero su principal problema estriba en que es fundamentalmente una minería de agua. Su extracción en salmuera exige el consumo de cantidades insostenibles de agua en una región árida, lo cual pone en riesgo el frágil ecosistema del desierto, su vida silvestre y los medios de vida de las personas que viven allí, sobre todo las comunidades indígenas. Esto es lo que actualmente sucede en la región atacameña de Chile y Argentina. Debido al consumo de agua, la extracción del litio amenaza con la ruptura del frágil equilibrio hídrico, tiende a secar los acuíferos y las reservas de agua, en zonas ya de por sí caracterizadas por la aridez y el estrés hídrico.

Asimismo, compite por el agua con las actividades agrícolas y de pastoreo de las comunidades indígenas locales al tiempo que representa una amenaza para la biodiversidad. Una investigación realizada para Chile, por Ingrid Garcés, de la Universidad de Antofagasta, indica que por cada tonelada de litio que se produce, se utilizan dos millones de litros de agua dulce. Así, “diariamente se extraen más de doscientos veintiséis millones de litros de agua y salmuera del salar

de Atacama” (Chilesustentable.net, 2019). A esto hay que sumar los impactos de proyectos de minería metálica cercanos, que también extraen grandes cantidades de agua (Zaldívar y Minera la Escondida). El impacto de la minería de litio en la región atacameña chilena es tal, que este fue uno de los temas del Tribunal internacional de los derechos de la Naturaleza, reunido en Chile, en diciembre de 2019.³

La minería de litio, en sus formas de extracción, explotación y apropiación privada, reproduce las lógicas de la megaminería y, en general, del conjunto de actividades extractivas. Con ello, se vulneran derechos y se trasladan los costos hacia la Naturaleza, territorios y poblaciones, que son las verdaderas afectadas por su insustentabilidad. Estamos así frente a un modelo de “acumulación por desfossilización”, como sostienen Argento, Puente y Slipak (2022), asociada a las corporaciones transnacionales, que reproduce la dominación sobre la Naturaleza y las poblaciones.

En este contexto, resulta muy hipócrita apelar a la idea de “sociedad posfósil” o “transición energética”, para exigir la aceptación de las poblaciones o convertir sus territorios en zonas de sacrificio. En realidad, el modelo actual de minería transnacional que se ha consolidado solo sirve para justificar el saqueo, alimentando el cambio de paradigma energético en los países del Norte global, basado, una vez más, en la desposesión de las comunidades locales y la destrucción de la Naturaleza. Esto es lo que desde las comunidades y el activismo ambiental denominamos una “falsa solución”. Serviría para garantizar una transición energética corporativa, que beneficiaría además a los países centrales, los más ricos, a costa de los territorios y las poblaciones del sur.

³ Aclaramos que algunos autores de este libro participaron de dicho Tribunal. El veredicto completo se puede consultar en el siguiente link: <https://www.rightsofnature-tribunal.org/tribunals/chile-tribunal-2019/?lang=es>

Argentina, Bolivia y Chile: tres países, tres estrategias diferentes

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el 58 % de los recursos mundiales de litio y el 53 % de las reservas se concentran entre Argentina, Bolivia y Chile, en los salares altoandinos, el llamado Triángulo del Litio, allí donde viven numerosas comunidades indígenas. Para que se tenga una idea, “en la actualidad, cinco operaciones de roca mineral en Australia y cuatro operaciones de litio en salmueras en Argentina y Chile (dos en cada país), contabilizan la mayoría de la producción mundial de litio” (Poveda Bonilla, 2020; Sánchez et al., 2019).

El aumento de la demanda del litio, desencadenó una fiebre el-doradista, generando diferentes estrategias en los tres países involucrados. Chile busca consolidarse como el mayor exportador mundial de litio, sin salir del modelo primarizador, es decir, ha desarrollado solo la fase de producción de carbonato de litio, sin valor agregado. Para ello, Chile cuenta con un marco regulatorio altamente mercantilizado (que incluye la privatización del agua), lo que se traduce en un apoyo irrestricto del estado nacional a las empresas mineras (las dos más importantes son SQM y Albemarle), en su necesidad de consumir cada vez más agua, para producir más toneladas de litio para exportar. Durante el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) se creó una Comisión Nacional del Litio, que recomendó pensar la sustentabilidad, la participación de las comunidades y la creación de una empresa estatal. Nada de eso se concretó, aun si las empresas empezaron a abonar royalties, lo cual hizo que el estado nacional participara de la captura de la renta. Entre las cuestiones más novedosas, se encuentra la firma de un convenio con el Consejo de Pueblos Atacameños, a través del cual la empresa Albemarle se compromete a entregar el equivalente al 3,5 % de las ventas. Según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales [OLCA],

[...] el valor compartido representa una complejización de las pautas de Responsabilidad Social Empresaria, en el paso de las lógicas

asistenciales a la figura de “socio participante”, que busca involucrar a las comunidades no solo en su carácter de beneficiarios de las ganancias de la empresa, sino también como responsables por los impactos que las mismas puedan tener, enajenando a la vez los derechos de las comunidades sobre los territorios. (Albemarle, 2019)

Bolivia, otro país minero por excelencia, entendió que el litio no era un *commodity* más, sino un bien estratégico, por lo cual apostó a un proyecto de más largo aliento, a partir del control estatal y la industrialización del litio. Así, desde 2008, el estado ha explorado la asociación con diferentes empresas trasnacionales, para avanzar en las subsiguientes fases (II y III) y producir a futuro la batería del litio, asegurándose la transferencia tecnológica y el uso de patentes. Debido a ello, este país casi no avanzó en la fase I, de extracción de litio, pese a contar con la mayor reserva mundial del mineral, el salar de Uyuni. Asimismo, el gobierno de Evo Morales buscó acordar con las comunidades locales y muy especialmente con los poderosos sectores mineros de Potosí. En esta línea, en 2018, se creó Yacimientos de Litio Bolivianos [YLB], “una empresa estatal que incluye prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de los recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización” (*El Independiente*, 2018).

El derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019 truncó la posibilidad de concretar este ambicioso proyecto, que, por otro lado, ya había desencadenado un serio conflicto con las organizaciones mineras de Potosí y sus ascendentes líderes del comité Cívico, que obligaron a dar marcha atrás al convenio firmado por YLB, con una empresa alemana, porque dejaba exiguas regalías a la zona. Nada garantiza que estos proyectos que apuntan a la industrialización del litio, sobre la base de la transferencia de tecnología de parte de actores trasnacionales, sean retomados en el futuro.

En Argentina, la extracción de litio creció exponencialmente en los últimos años, pasando la exportación de carbonato de litio del 8 % en 2012 a 16 % en 2016, un crecimiento del 100 % en cinco años. En la

actualidad es el tercer exportador a nivel mundial, detrás de Chile y Australia. Esta tendencia a la aceleración indica que el consumo de agua será cada vez mayor. Una proyección realizada por el investigador Gustavo Romeo estima un incremento anual de cincuenta mil millones de litros de agua, lo cual equivale al total del consumo anual de una ciudad de trescientos cincuenta mil habitantes (Fornillo et al., 2019, p. 236).

Fue el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) quien instaló el tema de las energías renovables en la agenda política, pero este lo hizo en un marco de mercantilización extrema y de acentuación de la dependencia económica y tecnológica. Esto no significó que su gobierno haya desarrollado una política de estado respecto del litio. Más allá de contribuir a la fiebre eldoradista con relación al llamado “oro blanco”, el involucramiento del estado nacional consistió en dotar de condiciones más ventajosas para la llegada de las corporaciones mineras, respecto a sus vecinos que también cuentan con el mineral. Se acentuaron así las dinámicas económicas propias del mineral-estado a través de un esquema de otorgamiento de concesiones que agravó la disputa por el agua en zonas áridas y el desprecio hacia la población local. En la medida que el litio apareció también como una oportunidad de nuevos negocios para la élite económica y política (por ejemplo, a través de la creación de empresas de servicios mineros o empresas juniors, para obtener pedimentos, que luego son vendidos a grandes empresas del sector), profundizó las alianzas non sanctas entre lo privado y lo público.

Como corolario, en Argentina el litio no cuenta con un marco regulatorio propio, como sucede en Chile y Bolivia. Su explotación se inscribe todavía en la misma normativa neoliberal de la megamiinería metálica, que proviene de 1990, e incluye grandes exenciones, exiguas regalías (3 %), bajas retenciones, así como la autoexclusión de las provincias para extraer el mineral.

Tempranamente la exploración y explotación del litio generaría conflictos ecoterritoriales con las comunidades indígenas. Así, en noviembre de 2010 una Mesa de treinta y tres Comunidades Originarias para la Defensa y Gestión del Territorio (Salta y Jujuy) presentó

una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigiendo la consulta previa sobre la concesión en Salinas Grandes de acuerdo con la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), la Ley General del Ambiente de 2002, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas.

Finalmente, en enero de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el amparo, por una cuestión de competencias. Frente a esto, los miembros de las organizaciones decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y trabajaron conjuntamente con varias ONGs y reconocidas fundaciones de protección del ambiente (Farn, Fundación Boell), y de derechos humanos (Endepa), para elaborar el Primer Protocolo de consulta indígena de la Argentina (2015).

Sin embargo, la expansión indiscriminada de la frontera minera, la disputa por el agua y la ausencia de consulta previa, libre e informada a las comunidades condujo a un escenario complejo. Así, por ejemplo, en Jujuy contrasta el avance extractivo que es posible ver en los salares Olaroz y Cauchari, con la situación en las Salinas Grandes, donde predomina el rechazo a la minería del litio (en 2019 fueron expulsadas dos multinacionales que habían sido adjudicatarias). En todos los casos, el resultado ha sido la consolidación de un esquema extractivista similar al de la minería metálica, transnacionalizado, en el cual convergen disputa por el agua, la provincialización de los conflictos y despojo de las poblaciones, sobre todo, pueblos originarios.

Por un lado, en Argentina, así como en la región atacameña de Chile, debido al consumo de agua, la extracción del litio amenaza con la ruptura del frágil equilibrio hídrico, tiende a secar los acuíferos y las reservas de agua, en zonas ya de por sí caracterizadas por la aridez y el estrés hídrico. Asimismo, compite por el agua con las actividades agrícolas y de pastoreo de las comunidades indígenas locales al tiempo que representa una amenaza para la biodiversidad. Y en muchos casos avanza sin licencia social, esto es, sin el acuerdo de las comunidades. Por otro lado, en Bolivia, la estrategia de industrialización del litio se encontró con otros obstáculos y límites (en términos

de extracción y de consecución de la cadena de valor), lo cual hizo que se consolidaron solo plantas pilotos, a pequeña escala. El nuevo gobierno del MAS, del presidente Luis Arce (2021-) llamó a las empresas extranjeras a probar otras formas de extraer litio, pues tienen un problema para recuperar litio con la extracción en salmuera.

Recientemente México también se ha lanzado a la carrera del litio. Siguiendo los pasos de Bolivia, nacionalizó el litio en abril de 2022. México ocupa el décimo lugar de los veintitrés países con reservas minerales, con el depósito más grande del mundo en Sonora, un estado en el noroeste del país. Tras la nacionalización, México y Bolivia acordaron crear un equipo técnico y un comité científico encargado de explorar proyectos de cooperación internacional para la explotación, producción y procesamiento de litio.

El litio y los límites de las energías renovables

Frente al escenario de desposesión y saqueo que se va configurando en América Latina con relación al litio, bien vale la pena preguntarse en qué tipo de transición energética estamos pensando. La historia nos enseña que no hay transiciones puras, que el camino no será lineal. Tampoco existe un manual sobre el tema, con preguntas y respuestas, mucho menos a partir de la gran escala que plantea la crisis socioecológica y climática, en el marco de sistemas socioeconómicos y socioambientales complejos. Sin embargo, tampoco debemos subirmos, sin más, al carro de una transición insustentable, como la que se propone en los salares atacameños, asociada a las corporaciones transnacionales, que consolida un colonialismo verde que reproduce la dominación sobre la Naturaleza y las poblaciones.

No es cierto que toda sociedad posfósil conduce al postdesarrollo. La transición no puede reducirse únicamente a un cambio de matriz energética, garantizando la continuidad de un modelo de consumo insustentable. La descarbonización de la economía debe conducirnos a un cambio integral, tanto de la matriz productiva, de consumo

y de distribución; debe apuntar a cambiar el sistema de relaciones sociales y reforzar el vínculo ecodependiente con la Naturaleza.

La transición posfósil no puede ser la excusa tampoco para consolidar o seguir manteniendo modelos de consumo que son abiertamente insustentables. No hay planeta que aguante, ni litio que alcance, si no cambiamos los modelos de movilidad. No basta con sustituir los automóviles basados en combustibles fósiles por automóviles eléctricos. Es necesario reducir el consumo; avanzar hacia modelos de movilidad públicos y compartidos, para que estos devengan sustentables. El hecho mismo de que las baterías de litio, así como proyectos eólicos y solares, requieran también de minerales (como el cobre, el zinc, entre otros) nos advierte sobre la necesidad de realizar una reforma radical del sistema de transporte y, en general, del modelo de consumo.

Diferentes estudios han puesto el acento en el hecho de que la transición energética, tal como es planteada desde una visión corporativa, es insustentable desde el punto de vista metabólico e implica una exacerbación de la explotación de los recursos naturales. Por ejemplo, el informe “Minerals for Climate Action: the Mineral Intensity of the clean Energy Transition” (2020), indica que la extracción de minerales

[...] como el grafito, el litio y el cobalto, podrían experimentar un aumento del casi 500 % de aquí a 2050, para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia. Se estima que se requerirán más de tres mil millones de toneladas de minerales y metales para la implementación de la energía eólica, solar y geotérmica, así como el almacenamiento de energía, para lograr una reducción de la temperatura por debajo de los 2 °C en el futuro.

En ese sentido, la transición socioecológica es un horizonte mayor que debe servir para plantearnos preguntas más radicales acerca del tipo de sociedad en la que queremos vivir, sobre los modelos de desarrollo que estamos proponiendo para el futuro. Es necesario abandonar la matriz energética dependiente de los combustibles fósiles, pues además de ser grandes contaminadores, amenazan la vida del planeta. La transición energética no puede conducirnos a optar por falsas soluciones, que

continúen con el despojo de las poblaciones y fortalezcan tanto las desigualdades sociales y territoriales, así como la división internacional del trabajo hoy existente. Tampoco puede ser la excusa para consolidar o mantener modelos de consumo insustentables. La transición debe ser justa, tanto desde el punto de vista ambiental como social. Así, en tanto países dependientes y periféricos, necesitamos construir una sociedad justa desde diferentes dimensiones, lo cual ressignifica en clave política y civilizatoria los desafíos que enfrentamos.

En suma, el rol que ocupa el litio en el cambio de sistema no es algo determinado ni inequívoco. No escapa, por ende, a este tipo de temores e interrogantes que generan la necesidad de adoptar una perspectiva más integral y multidimensional, acerca de los costos ambientales, de las dimensiones territoriales y sociales, de los derechos de las poblaciones involucradas en los territorios, de los derechos de la Naturaleza, además del lugar de los estados, del conocimiento y de la investigación científica.

Bibliografía

Albemarle (16 de septiembre de 2019). Albemarle y Consejo de Pueblos Atacameños exponen en Sustainable Mining 2019. <http://www.albemarlelitio.cl/news/albemarle-y-consejo-de-pueblos-atacameos-exponen-en-sustainable-mining-2019>.

Andrés, Roberto (22 de abril de 2022). Los medios latinoamericanos ven la transición energética solo desde una perspectiva económica y de negocios, según un estudio. *El Diario Argentina*. https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-ambiente/medios-latinoamericanos-ven-transicion-energetica-perspectiva-negocios-economico-estudio_1_8926068.html

Argento, Melisa y Puente, Florencia. (2019). *Entre el boom del litio y la defensa de la vida. Salares, agua y territorios y Comunidades en la región atacameña*. En Bruno Fornillo, (coord.) *Litio en Sudamérica, geopolítica, Energía, Territorios*. Buenos Aires: El Colectivo.

Bertinat, Pablo; Chemes, Jorge y Fernanda Forero, Lyda. (2021). *Energy Transition: Contributions for collective reflection*. Transnational Institute y Taller Ecologista. <https://transicion-energetica-popular.com/wp-content/uploads/2021/11/Energy-Transition-report-web.pdf>

Chilesustentable.net (mayo de 2019). Cada tonelada de litio requiere la evaporación de dos mil litros de agua. <http://www.chilesustentable.net/cada-tonelada-de-litio-requiere-la-evaporacion-de-2-mil-litros-de-agua/>

El Independiente (1 de febrero de 2018). Bolivia crea la empresa estatal Yacimientos del Litio Boliviano. <https://www.elindependiente.com.ar/pagina.php?id=163689>

Fornillo, Bruno (coord.) (2019). *Litio en Sudamérica, geopolítica, Energía, Territorios*. Buenos Aires: El Colectivo.

González Reyes, Luis. (2018). *Educación para la transformación ecosocial*. Madrid: Fuhem. <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/44358>

Poveda Bonilla, Rafael. (2020). *Estudio de caso sobre la gobernanza del litio en Chile*. Santiago: CEPAL.

Sánchez, Jeannette; Domínguez, Rafael; León, Mauricio; Samaniego, Jose Luis y Sunkel, Osvaldo. (2019). *Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad: 70 años de pensamiento de la CEPAL*. Santiago: CEPAL.

Svampa, Maristella. (2018). Imágenes del fin: Narrativas de la crisis socioecológica en el Antropoceno. *Nueva Sociedad*, 278.

Svampa, Maristella y Bertinat, Pablo (comps.) (2022). *La transición energética en Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Zicari, Julián; Fornillo, Bruno y Gamba, Martina. (2019) *El mercado mundial del litio y el eje asiático. Dinámicas comerciales, industriales y tecnológicas*. En Bruno Fornillo (coord.), *Litio en Sudamérica, geopolítica, Energía, Territorios*. Buenos Aires: El Colectivo.

Descolonizar la transición energética en África del Norte

Hamza Hamouchène

Introducción

Hace tiempo que se habla del potencial del desierto del Sahara, en el norte de África, para generar grandes cantidades de energía renovable gracias a su clima seco y a sus vastas extensiones de tierra. Durante años, los europeos, en particular, lo han considerado una fuente potencial de energía solar que podría satisfacer una parte considerable de la demanda energética europea. En 2009, una coalición de empresas industriales e instituciones financieras europeas puso en marcha el proyecto Desertec, una ambiciosa iniciativa para abastecer de energía a Europa a partir de plantas solares saharianas.

El proyecto se fundó sobre la hiperbólica idea de que una minúscula superficie del Sahara puede satisfacer la demanda total de electricidad del mundo. Así pues, en la primera década de este siglo, un consorcio “internacional” de empresas formó la Iniciativa Industrial Desertec (Desertec Industrial Initiative [Dii]) con accionistas de peso como E.ON, Munich Re, Siemens y Deutsche Bank. Se formó como una iniciativa del sector privado liderada en gran medida por

Alemania, con el objetivo de convertir el concepto de Desertec en un proyecto empresarial rentable al suministrar en torno al 20 % de la electricidad de Europa para 2050 mediante cables de transmisión de corriente continua de alta tensión (Hamouchène, 2015).

El proyecto Desertec, orientado a la exportación, debe considerarse en un contexto de acuerdos comerciales favorables a las empresas y de lucha por la influencia y los recursos energéticos, que recuerda a los esquemas coloniales de apropiación y saqueo. En ellos, el Sahara suele describirse como una vasta tierra vacía, escasamente poblada, que representa un Eldorado de la energía renovable, constituyendo así una oportunidad de oro para suministrar electricidad a Europa y que esta pueda continuar con su extravagante estilo de vida consumista y su derrochador consumo energético. Sin embargo, esta narrativa engañosa ofusca las cuestiones de propiedad y soberanía. También enmascara las actuales relaciones globales de hegemonía y dominación que facilitan el saqueo de recursos, la privatización de bienes comunes y la desposesión de comunidades, consolidando así formas antidemocráticas y excluyentes de gobernar la transición.

Tras algunos años de entusiasmo inicial, el proyecto Desertec finalmente se estancó en medio de críticas por sus costes astronómicos y sus connotaciones neocoloniales. Sin embargo, la idea parece haber cobrado nueva vida como posible respuesta a las necesidades de hidrógeno renovable de Europa. A principios de 2020, Dii Desert Energy lanzó la Alianza de Hidrógeno de Oriente Medio y África del Norte, que reúne a actores de los sectores público y privado, de la ciencia y del mundo académico para poner en marcha economías verdes de hidrógeno.¹ Antes de analizar esta supuesta nueva iniciativa, bautizada como Desertec 3.0, merece la pena echar un vistazo a algunos grandes proyectos solares norteafricanos que siguieron adelante a pesar de la previa desaparición de los planes Desertec y aprender algunas lecciones sobre cómo la transición hacia las

¹ MENA Hydrogen Alliance: <https://dii-desertenergy.org/mena-hydrogen-alliance/>

energías renovables puede, en realidad, consagrar la desposesión y reproducir los mismos patrones de explotación y saqueo.

Transiciones energéticas, desposesión y expropiación

Algunas transiciones a energías renovables pueden ser de naturaleza extractivista y mantener las mismas prácticas de desposesión, dependencias y hegemonías. Veamos algunos ejemplos de África del Norte (en particular de Marruecos). Todos ellos muestran cómo se reproduce el colonialismo energético en forma de colonialismo o acaparamiento verdes. Si bien es loable el objetivo de Marruecos de aumentar la cuota de energías renovables en su mix energético hasta el 52 % para 2030 en términos de capacidad instalada, es necesario hacer, sin embargo, una evaluación crítica si lo que realmente nos importa no es cualquier tipo de transición, sino una “transición justa” que beneficie a los empobrecidos y marginados de la sociedad, en lugar de profundizar su exclusión socioeconómica.

La planta de energía solar de Ouarzazate se puso en marcha en 2016, justo antes de las conversaciones de las Naciones Unidas sobre el clima (COP22) celebradas en Marrakech. Fue elogiada como la mayor planta de energía solar del mundo y la monarquía marroquí fue declarada campeona de las energías renovables. Sin embargo, si rasamos un poco bajo la superficie, se descubre otro panorama. En primer lugar, la planta fue instalada en las tierras (3 000 hectáreas) de unas comunidades agropastoriles *amazigh* sin su aprobación y consentimiento, lo que constituye una apropiación de tierras para una agenda supuestamente verde (acaparamiento verde). En segundo lugar, este megaproyecto está controlado por intereses privados y se ha construido mediante la contratación de una enorme deuda de nueve mil millones de dólares estadounidenses con el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y otros. Esta deuda está respaldada por garantías del gobierno marroquí, lo que significa potencialmente más deuda pública para un país ya sobrecargado de deudas. En

tercer lugar, el proyecto no es tan ecológico como pretende ser. El uso de energía solar concentrada (Concentrated Solar Power [CSP]) requiere un uso intensivo de agua para enfriar y limpiar los paneles. En una región semiárida como Ouarzazate, desviar el uso del agua del consumo humano y la agricultura es, simplemente, una barbaridad (Hamouchène, 2016).

El proyecto Noor Midelt constituye la Fase II del plan de energía solar de Marruecos y tiene por objeto proporcionar más capacidad energética que la planta solar de Ouarzazate. Se trata de un híbrido entre CSP y energía solar fotovoltaica [PV]. Con ochocientos megavatios [MW] previstos para su primera fase, será uno de los mayores proyectos solares del mundo en combinar tecnologías CSP y PV. En mayo de 2019, un consorcio formado por EDF Renewables (Francia), Masdar (EAU) y Green of Africa (conglomerado marroquí) fue seleccionado como adjudicatario para construir y explotar la instalación en colaboración con la Agencia Marroquí de Energía Solar [MASEN] durante un periodo de veinticinco años. Hasta la fecha, el proyecto ha contraído deudas por valor de más de dos mil millones de dólares estadounidenses con el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, la Agencia Francesa de Desarrollo y KfW (NS Energy, s. f.).

La construcción del proyecto comenzó en 2019 y su puesta en marcha está prevista para 2024. El complejo solar Noor Midelt será desarrollado en un terreno de 4 141 hectáreas situado en la meseta de Haute Moulouya, en la región central de Marruecos, a unos 20 km al noreste de la ciudad de Midelt. Un total de 2 714 hectáreas son gestionadas como tierras comunales / colectivas por las tres comunidades agrarias étnicas de Ait Oufella, Ait Rahou Ouali y Ait Massoud Ouali. Al mismo tiempo, aproximadamente 1 427 hectáreas son consideradas tierras forestales y son gestionadas por las comunidades. Las tierras han sido confiscadas a sus propietarios mediante leyes y reglamentos nacionales que permiten la expropiación para servir al interés público. La expropiación se concedió a favor de MASEN por

decisión del tribunal administrativo en enero de 2017 y la decisión judicial se hizo pública en marzo de 2017.

Perpetuando la narrativa colonial sobre el medioambiente que etiqueta las tierras a expropiar como marginales e infrautilizadas y, por lo tanto, disponibles para invertir en energía verde, el Banco Mundial —en un estudio realizado en 2018— subraya que “el terreno arenoso y árido solo permite el crecimiento de pequeños matorrales, y la tierra no es apta para el desarrollo agrícola debido a la falta de agua” (Banco Mundial, 2018). Este argumento / narrativa también fue utilizada para promocionar la planta de energía solar de Ouarzazate a principios de la década de 2010. Entonces, alguien declaró:

La gente del proyecto habla de esto como un desierto que no se utiliza, pero para la gente de aquí no es un desierto, es un pastizal. Es su territorio y su futuro está en la tierra. Cuando me quitan mi tierra, me quitan mi oxígeno. (Activista anónimo citado en Rignall, 2012)

El informe del Banco Mundial no se detiene ahí, sino que continúa afirmando que “la adquisición de tierras para el proyecto no tendrá repercusiones en los medios de subsistencia de las comunidades locales”. Sin embargo, la tribu de pastores trashumantes de Sidi Ayad, que lleva siglos utilizando esas tierras para el pastoreo de sus animales, discrepa. Hassan El Ghazi, un joven pastor, declaró en 2019 a un activista de la asociación ATTAC Maroc:

Nuestra profesión es el pastoreo y ahora este proyecto ha ocupado nuestras tierras donde pastan nuestras ovejas. En el proyecto no nos contratan a nosotros, sino a extranjeros. Han ocupado la tierra en la que vivimos. Están destruyendo las casas que construimos. Estamos oprimidos y la región de Sidi Ayad está siendo oprimida. Sus hijos están oprimidos, y sus derechos y los derechos de nuestros antepasados se han perdido. Somos “iletrados” que no sabemos leer ni escribir. [...] Muchos de estos niños no fueron a la escuela. Las carreteras y los caminos están cortados. [...] Al final, somos invisibles y no existimos para ellos. Exigimos que los funcionarios presten atención

a nuestra situación y a nuestras regiones. Con esas políticas, no existimos, ¡y es mejor morir, es mejor morir! (Declaración extraída del documental *Oh Land*. Ver ATTAC Maroc, 2019)

En este contexto de desposesión, miseria, subdesarrollo e injusticia social, los habitantes de Sidi Ayad llevan expresando su descontento desde 2017 mediante varias protestas. En febrero de 2019 llevaron a cabo una sentada, que condujo a la detención de Said Oba Mimoun, miembro de la Unión de Pequeños Agricultores y Trabajadores Forestales. Fue condenado a doce meses de cárcel.

Mostepha Abou Kbir, otro sindicalista que ha estado apoyando la lucha de la tribu Sidi Ayad, describió cómo se cercó la tierra sin la aprobación de las comunidades locales que llevan décadas soportando una exclusión socioeconómica. De hecho, el terreno ha sido vallado y nadie puede acercarse. Este sindicalista también contrasta los megaproyectos de desarrollo del estado marroquí con la inexistencia de infraestructuras básicas en Sidi Ayad. Además, señala otra dimensión del cercado y del acaparamiento de recursos, que es el agotamiento de los recursos hídricos en la región de Drâa-Tafilalet en beneficio de estos proyectos gigantescos (la planta de energía solar de Midelt se alimentará de la cercana presa de Hassan II) de los que las comunidades se quejan de que no se benefician (Declaración del sindicalista Mostepha Abou Kbir extraída del documental *Oh Land*. Ver ATTAC Maroc, 2019). En este complejo contexto en el que los pequeños propietarios de rebaños están siendo expulsados del sector mientras que la riqueza se concentra en unas pocas manos, junto con la mercantilización del mercado ganadero y las sequías crónicas, el proyecto solar de Midelt agravará la amenaza que pesa sobre los medios de subsistencia de estas comunidades de pastores y empeorará su marginación.

No solo las comunidades de Sidi Ayad han expresado su preocupación por este proyecto. Algunas mujeres del movimiento Soulaliyate también han reivindicado su derecho a acceder a la tierra en la región de Drâa-Tafilalet y han pedido una indemnización apropiada

por sus tierras ancestrales en las que ha sido construida la planta solar. El concepto “mujeres Soulaliyate” se refiere a las mujeres tribales de Marruecos que viven en tierras colectivas. El movimiento de mujeres Soulaliyate comenzó a principios de la década del 2000 y surgió en el contexto de una intensa mercantilización y privatización de las tierras colectivas (ATTAC Maroc, 2020). Las mujeres tribales exigieron igualdad de derechos y participación cuando sus tierras fueron privatizadas o divididas. A pesar de la intimidación, las detenciones y los asedios por parte de las autoridades públicas, el movimiento se ha extendido por todo el país, y mujeres de distintas regiones se han unido tras la bandera de la igualdad y la justicia.

A pesar de todas estas preocupaciones e injusticias, el proyecto sigue adelante, protegido por la monarquía y sus herramientas represivas y de propaganda. Parece que la lógica de externalizar los costes socioecológicos y desplazarlos en el espacio y el tiempo, característica de la pulsión extractivista del capitalismo, no tiene fin.

Colonialismo verde y ocupación en el Sahara Occidental

Mientras que algunos de los proyectos en Marruecos, como la planta de energía solar de Ouarzazate y Midelt, pueden calificarse de “acaparamiento verde” —apropiación de tierras y recursos con fines supuestamente medioambientales (Fairhead et al., 2012, pp. 237-261.)—, otros proyectos similares de energías renovables (solar y eólica) que se están llevando a cabo en los territorios ocupados del Sahara Occidental pueden calificarse de “colonialismo verde”, ya que se realizan sin contar con los saharauis, y en sus tierras ocupadas.

El colonialismo verde puede definirse como la extensión de las relaciones coloniales de saqueo y desposesión (así como la deshumanización del otro) a la era verde de las energías renovables, con el consiguiente desplazamiento de los costes socioambientales a los países y comunidades periféricos. Básicamente, se mantiene el mismo sistema, pero con una fuente de energía diferente, pasando de

los combustibles fósiles a la energía verde, mientras se mantienen los mismos patrones globales de producción y consumo intensivos en energía y permanecen intactas las mismas estructuras políticas, económicas y sociales que generan desigualdad, empobrecimiento y desposesión.

En la actualidad, hay tres parques eólicos operativos en el Sahara Occidental ocupado. Se está construyendo un cuarto en Boujdour y varios están en fase de planificación. Combinados, estos parques eólicos tendrán una capacidad de más de mil MW. Estos parques eólicos forman parte de la cartera de Nareva, la empresa de energía eólica que pertenece al grupo de empresas de la familia real marroquí. El 95 % de la energía que necesita la empresa estatal marroquí de fosfatos, OCP, para explotar las reservas de fosfatos no renovables del Sahara Occidental en Bou Craa procede de molinos de viento. La energía renovable es generada por 22 turbinas de viento Siemens en el parque eólico de 50 MW de Foug el Oued, operativo desde 2013 (Western Sahara Resource Watch, 2022).

En noviembre de 2016, con ocasión de la cumbre del clima COP22 de las Naciones Unidas, la empresa saudí ACWA Power firmó un acuerdo con MASEN para desarrollar y explotar un complejo de tres centrales de energía solar fotovoltaica [PV] ascendiendo a 170 MW. Sin embargo, dos de estas centrales (actualmente operativas), que juntas suman 100 MW, no están situadas en Marruecos, sino dentro del territorio ocupado (El Aaiún y Boujdour). También han sido elaborados planes para desarrollar una tercera planta solar en El Argoub, cerca de Dakhla (Western Sahara Resource Watch, 2022).

Estos proyectos de energías renovables están siendo utilizados para afianzar la ocupación, estrechando los lazos de Marruecos con los territorios ocupados, con la evidente complicidad de las empresas y del capital extranjeros. Tras este pequeño desvío, volvamos a Desertec y al hidrógeno.

El hidrógeno, la nueva frontera energética en África

El hidrógeno limpio o verde hace referencia a la extracción de hidrógeno a partir de sustancias más complejas mediante procesos “limpios” (cero emisiones de carbono). La mayor parte de la producción actual de hidrógeno es el resultado de la extracción a partir de combustibles fósiles, lo que conlleva grandes emisiones de carbono (hidrógeno gris). Mediante la tecnología de captura de carbono, por ejemplo, este proceso puede hacerse más limpio (hidrógeno azul). Sin embargo, la forma más limpia de extracción de hidrógeno utiliza electrolizadores para dividir las moléculas de agua, que pueden funcionar con electricidad procedente de fuentes de energía renovables (hidrógeno limpio o verde).

La *Estrategia europea para el hidrógeno*, publicada en julio de 2020 en el marco del Pacto Verde Europeo, es una ambiciosa hoja de ruta para pasar al hidrógeno verde y limpio de aquí a 2050. En ella se propone que la Unión Europea [UE] podría obtener parte de su futuro suministro de África, en particular de África del Norte, que ofrece un enorme potencial de energías renovables y una gran proximidad geográfica (Comisión Europea, 2020).

La idea surgió de un documento publicado en marzo de 2020 por la organización comercial Hydrogen Europe en el que se exponía la *Iniciativa de hidrógeno verde 2 x 40 GW*. Según este concepto, para 2030, la UE dispondría de cuarenta gigavatios [GW] de capacidad interna de electrolizadores de hidrógeno renovable e importaría otros 40 GW de electrolizadores de zonas vecinas, entre ellas los desiertos de África del Norte, utilizando los gasoductos de gas natural existentes que ya conectan Argelia y Libia con Europa (Parnell, 2020). Uno de los autores de este documento también coescribió el “Manifiesto” de la Alianza de Hidrógeno de Oriente Medio y África del Norte de Dii en noviembre de 2019.²

² Dii Desert Energy. A North Africa-Europe Hydrogen Manifesto. <https://dii-desertenergy.org/publications-library/>

Dentro de Europa, Alemania está a la vanguardia de los esfuerzos por producir hidrógeno verde en África. Colabora con la República Democrática del Congo, Marruecos y Sudáfrica en el desarrollo de “combustible descarbonizado” generado a partir de energía renovable para exportar a Europa y está explorando otras posibles zonas / países especialmente adecuados para la producción de hidrógeno verde (Clifford Chance, 2021). En 2020, el gobierno marroquí se asoció con Alemania para desarrollar la primera planta de hidrógeno verde del continente. Como siempre, Marruecos, que cuenta prácticamente con la economía más neoliberal(izada) de la región, sigue cosechando elogios por su entorno favorable a los negocios, su apertura al capital extranjero y su “liderazgo” en el sector de la energía renovable. Según algunas estimaciones, el país podría acaparar hasta el 4 % del mercado mundial de Power-to-X (producción de moléculas verdes) de aquí a 2030, dados sus “excepcionales recursos renovables y su exitoso historial en el despliegue de plantas de energías renovables a gran escala” (Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, 2019).

En primer lugar, es importante subrayar desde el principio que lo que está en juego en todos estos documentos, manifiestos, políticas e iniciativas es, ante todo, la seguridad energética de la UE. Europa, sus prioridades y su visión son siempre el centro de atención, y todo lo demás debe remodelarse y adaptarse, aunque con cierta retórica sobre los beneficios compartidos y de efecto goteo (*trickle-down*) para todas las partes implicadas.

Por ejemplo, la propuesta Desertec, que aboga por un sistema energético europeo basado en un 50 % de electricidad renovable y un 50 % de hidrógeno verde para 2050, parte de la presunción de que “debido a su limitado tamaño y densidad de población, Europa no podrá producir toda su energía renovable en la propia Europa”. Por lo tanto, asume que una gran parte del hidrógeno será importado, y ¿qué mejor región que África del Norte, dotada de sol y viento, para garantizar esto? La nueva propuesta de Desertec intenta distanciarse del enfoque de los primeros días de la iniciativa que estaba puesto

en las exportaciones, añadiendo la dimensión de desarrollo local de un sistema energético limpio. Sin embargo, no se puede subestimar ni rehuir la agenda de exportación: “[...] más allá de satisfacer la demanda interna, la mayoría de los países de África del Norte tienen un enorme potencial en términos de tierras y recursos para producir hidrógeno verde destinado a la exportación”. Por si esto no fuera lo bastante convincente para las élites políticas y empresariales de ambos lados del Mediterráneo, el equipo de Desertec tiene otros trucos bajo la manga: “Además, un enfoque conjunto europeo-norteafricano de las energías renovables y del hidrógeno crearía desarrollo económico, empleos orientados hacia el futuro y estabilidad social en los países de África del Norte, reduciendo potencialmente el número de emigrantes económicos de la región hacia Europa”. No estoy seguro de si esto es un acto desesperado o si es propio de las estrategias de venta agresiva, pero parece que la visión de Desertec se presta al ánimo general de consolidar la fortaleza Europa y de expandir un régimen inhumano de imperialismo fronterizo, mientras se intenta aprovechar el potencial energético de bajo coste de África del Norte que depende de una mano de obra infravalorada y disciplinada.

Desertec se presenta, por lo tanto, como una solución a la transición energética de Europa, una oportunidad para el desarrollo económico en África del Norte y un freno a la migración Sur-Norte. Sin embargo, si realmente se toma en serio la resolución de estos problemas, es necesario atacar sus causas estructurales que residen en un modelo económico mundial destructivo e injusto. Al tratarse más bien de una solución tecnológica apolítica, promete superar estos problemas sin cambios fundamentales, manteniendo el *statu quo* y las contradicciones del sistema mundial que condujeron a estos problemas en primer lugar. Siguiendo esta línea, adopta la obsesión por un crecimiento económico sin fin, reenvasado en el oxímoron “crecimiento verde”, y da la ilusión de una disponibilidad infinita de energía y recursos, perpetuando así, indirectamente, estilos de vida consumistas. Esto no contribuirá en nada a que nuestro sistema

socioeconómico se ajuste a los límites planetarios, a tiempo para evitar el colapso climático y ecológico.

Las grandes “soluciones” centradas en la ingeniería, como Desertec, tienden a presentar el cambio climático como un problema compartido sin contexto político ni socioeconómico. Esta perspectiva oculta las responsabilidades históricas del Occidente industrializado, los problemas del modelo energético capitalista y las diferentes vulnerabilidades entre los países del Norte y del Sur. Además, al utilizar un lenguaje como “cooperación mutua”, “en beneficio de ambos”, que presenta a la región euromediterránea como una comunidad unificada (¡ahora somos todos amigos luchando contra un enemigo común!), enmascara al verdadero enemigo de los pueblos africanos, que son las estructuras neocoloniales de poder que los explotan y saquean sus recursos.

Además, al impulsar el uso de la actual infraestructura de gasoductos, aboga de forma efectiva por un mero cambio de fuente de energía manteniendo la dinámica política autoritaria existente y dejando intactas las jerarquías del orden internacional. Tal vez esto sea demasiado pedirle a Desertec, pero el hecho de que esté fomentando el uso de gasoductos desde Argelia y Libia (incluso a través de Túnez y Marruecos) plantea la cuestión de cuál será el futuro de las poblaciones de estos dos países ricos en combustibles fósiles. ¿Qué ocurrirá cuando Europa deje de importar gas de estos países (el 13 % del gas que consume Europa procede de África del Norte)? ¿Qué pasa con el actual caos y desestabilización causados por la intervención de la OTAN en Libia? ¿Se tendrán en cuenta en esta ecuación las aspiraciones de democracia y soberanía de los argelinos, bien expresadas en el levantamiento de 2019-2021 contra la dictadura militar? ¿O se trata simplemente de otra versión del *statu quo* en el que el hidrógeno sustituye al gas? Quizá no hay nada nuevo bajo el sol, al fin y al cabo.

Para colmo de males, el manifiesto de Desertec señala que “en una fase inicial (entre 2030-2035), se puede producir un volumen sustancial de hidrógeno mediante la conversión de gas natural en hidrógeno, almacenando el CO₂ en yacimientos vacíos de gas / petróleo

(hidrógeno azul)”. Esto, junto con el uso de los escasos recursos hídricos para producir hidrógeno, puede considerarse un ejemplo más del vertido de residuos en el Sur global y del desplazamiento de los costes medioambientales del Norte hacia el Sur (con la creación de zonas de sacrificio), una estrategia del capital imperialista en la que el racismo medioambiental se une al colonialismo energético.

Asimismo, al hablar de los beneficios mutuos para Europa y África del Norte, el manifiesto afirma: “África del Norte carece de la tecnología, capital y de una mano de obra cualificada para desarrollar un sistema de energía limpia por sí misma”. Sin embargo, es necesario preguntarse, en primer lugar, ¿por qué pasa esto? ¿Tiene algo que ver con las relaciones de dominación y apropiación de la riqueza? ¿Es atribuible a la tecnología monopolizadora y al régimen de propiedad intelectual que mostró su crueldad en la actual pandemia? ¿Podría deberse a todos los programas de ajuste estructural impuestos que vaciaron los servicios públicos como la sanidad y la educación en estos países? La cuestión de la transferencia de conocimientos y de tecnología es primordial. Como cualquier otra tecnología, las cuestiones de quién la utiliza, a quién pertenece, cómo se implementa y para qué agenda y en qué contexto se promueve, son de gran importancia.

Por último, si asumimos que el enfoque Desertec es el camino por seguir, todavía queda un reto por delante: su coste. Se necesitaría una enorme inversión inicial para establecer la infraestructura necesaria para producir y transportar hidrógeno verde. Dadas las experiencias anteriores en la realización de proyectos de tan alto coste y tan intensivos en capital (como, por ejemplo, la planta de energía solar de Ouarzazate), la inversión acaba endeudando más al país receptor, profundizando su dependencia de los préstamos multilaterales y de la ayuda exterior.

Conclusión

En este contexto, es fundamental rasgar bajo la superficie de las expresiones “energías limpias” y “reducción de emisiones de carbono” para observar y analizar la materialidad de la transición a energías renovables. El análisis intentó examinar diferentes proyectos e iniciativas a través de la lente de crear nuevas cadenas de materias primas, revelando que los efectos pueden no ser diferentes de los destructivos combustibles fósiles y actividades mineras en la región y más allá.

Lo que parece unir a todos los proyectos mencionados y al entusiasmo que los rodea es la suposición profundamente errónea de que cualquier avance hacia la energía renovable debe ser bienvenido y de que cualquier cambio respecto a los combustibles fósiles, independientemente de cómo se lleve a cabo, merece la pena. Seamos claros: la crisis climática a la que nos enfrentamos actualmente no es atribuible a los combustibles fósiles *per se*, sino a su uso insostenible y destructivo para alimentar la maquinaria capitalista. En otras palabras, el capitalismo es el culpable. Si nos tomamos en serio nuestros esfuerzos por abordar la crisis climática (apenas una de las facetas de la crisis multidimensional del capitalismo), no podemos eludir las cuestiones de cambiar radicalmente nuestras formas de producir y de distribuir las cosas, nuestros patrones de consumo y las cuestiones fundamentales de equidad y justicia. De ello se desprende que un mero cambio de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovables, permaneciendo en el marco capitalista de mercantilización y privatización de la Naturaleza en beneficio de unos pocos, no resolverá el problema. Si seguimos por este camino, solo acabaremos exacerbando o creando otra serie de problemas en torno a la propiedad de la tierra y a los temas de recursos naturales.

La mayoría de las publicaciones sobre sostenibilidad, transiciones energéticas y cuestiones medioambientales en África del Norte están dominadas por instituciones neoliberales internacionales y grupos de reflexión. Sus análisis son limitados y no incluyen

cuestiones de clase, raza, género, poder o historia colonial. Las soluciones y recetas que proponen se basan en el mercado y adoptan un enfoque de arriba hacia abajo sin abordar las causas profundas de las crisis climática y ecológica. El “conocimiento” producido por tales instituciones es profundamente desempoderador y pasa por alto cuestiones de opresión y resistencia, centrándose en gran medida en los consejos de los “expertos” y excluyendo las voces “de abajo”. En todos los casos, los ciudadanos de a pie y los trabajadores pobres son excluidos de cualquier estrategia y se les tacha de ineficaces, atrasados y poco razonables. Los norteafricanos cuyas vidas se verán más afectadas por la crisis climática / ecológica (y por el enfoque de arriba hacia abajo y las formas injustas de abordarla) serán los pequeños agricultores familiares, los pescadores a pequeña escala, los pastores (cuyos pastizales están siendo apropiados para construir megacentrales solares y proyectos eólicos), los trabajadores de las industrias extractivas y de combustibles fósiles, los trabajadores informales y las clases pauperizadas. Sin embargo, se les margina y se les impide dar forma a su futuro. En su lugar, las políticas económicas, energéticas y de desarrollo suelen estar determinadas por intereses nacionales e internacionales muy arraigados.

Una transición verde y justa debe transformar y descolonizar fundamentalmente nuestro sistema económico mundial, que no es apto para su propósito a nivel social, ecológico e incluso biológico (como lo demostró la pandemia de COVID-19). También requiere una revisión de los modelos de producción y consumo, que consumen mucha energía y son un auténtico despilfarro, especialmente en el Norte global. En este sentido, el decrecimiento puede ser una vía para explorar los núcleos del sistema global.

Debemos hacernos siempre las preguntas (ahora más que nunca) pertinentes: ¿quién es dueño de qué? ¿Quién hace qué? ¿Quién obtiene qué? ¿Quién gana y quién pierde? Y ¿a qué intereses sirven? Tenemos que romper con la lógica imperial y racista (así como sexista) de externalización de costes que, si no se cuestiona, solo generará colonialismo

verde y una mayor búsqueda de extractivismo y explotación (de la Naturaleza y del trabajo) para una agenda supuestamente verde.

La lucha por la justicia climática y una transición justa debe tener en cuenta las diferentes responsabilidades y vulnerabilidades entre el Norte y el Sur. Así, la deuda ecológica y climática debe pagarse a los países del Sur global que son los más afectados por el calentamiento global y que han sido encerrados por el capitalismo global en un extractivismo depredador.

En un contexto mundial de liberalización forzada, de presión por acuerdos comerciales injustos, de lucha imperial por la influencia y los recursos energéticos, la transición ecológica y el discurso sobre la sostenibilidad no deben convertirse en una fachada para los planes neocoloniales de saqueo y dominación.

Bibliografía

ATTAC Maroc. (2019). *Oh Land*. [Documental]. <https://m.facebook.com/attac.maroc/videos/199096351435545/>

ATTAC Maroc. (2020). The Soulaliyate movement: Moroccan women fighting land dispossession. *War on Want*. <https://waronwant.org/news-analysis/soulaliyate-movement-moroccan-women-fighting-land-dispossession>

Banco Mundial. (2018). Informe n.º PAD2642. Documento de proyecto sobre una propuesta de préstamo adicional por valor de cien millones de dólares estadounidenses y una propuesta de préstamo del fondo de tecnologías limpias por valor de veinticinco millones de dólares estadounidenses a la Agencia Marroquí para la Energía Sostenible (MASEN) para una financiación adicional del proyecto de energía solar Noor de Marruecos. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/138481528687821561/pdf/>

Morocco-Noor-AF-project-paper-P164288-May17-clean-05212018.pdf

Clifford Chance. (2021). Focus on hydrogen: a new energy frontier for Africa. <https://www.cliffordchance.com/briefings/2021/01/focus-on-hydrogen--a-new-energy-frontier-for-africa.html>

Comisión Europea. (2020). A Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301>

Fairhead, James; Leach, Melissa y Scoones, Ian. (2012). Green grabbing: a new appropriation of nature? *Journal of Peasant Studies*, 39 (2), 237-261.

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI. (2019). Study on the opportunities of “POWER-TO-X” in Morocco-10 hypotheses for discussion. *EconBiz*. <https://www.econbiz.de/Record/study-on-the-opportunities-of-power-to-x-in-morocco-10-hypotheses-for-discussion-eichhammer-wolfgang/10012238280>

Hamouchène, Hamza. (2015). Desertec: the renewable energy grab. *New Internationalist*. <https://newint.org/features/2015/03/01/desertec-long>

Hamouchène, Hamza. (2016). The Ouarzazate solar plant in Morocco: triumphal “green” capitalism and the privatization of nature. *Jadaliyya*. <https://www.jadaliyya.com/Details/33115>

NS Energy. (s. f.). Noor Midelt Solar Power Project, Morocco. <https://www.nsenergybusiness.com/projects/noor-midelt-solar-power-project-morocco/>

Parnell, John. (9 de julio de 2020). European Union sets gigawatt-scale targets for green hydrogen. *Greentech Media*. <https://www.greentechmedia.com/articles/read/eu-sets-green-hydrogen-targets-now-blue-hydrogen-has-to-keep-up>

Rignall, Karen. (2012). Theorizing sovereignty in empty land: contested global landscapes. *Land Deal Politics Initiative*. <https://www.yumpu.com/en/document/view/35781099/theorizing-sovereignty-in-empty-land-contested-global-landscapes>

Western Sahara Resource Watch. (2022). Dirty green energy on occupied land. <https://wsrw.org/en/news/renewable-energy>

¿Pueden los grandes contaminadores salvar el planeta?

Perspectivas sobre Estados Unidos,
la Unión Europea y China

John Feffer y Edgardo Lander

Introducción

Estados Unidos, la Unión Europea [UE] y China son responsables de la mayor parte de las emisiones de carbono en el mundo actual: un total del 52 %, siendo China responsable de más de la mitad (Ritchie y Roser, 2017). También son responsables de más de la mitad de todas las emisiones producidas a lo largo de la historia. Estados Unidos y la UE han emitido el 47 % y China alrededor del 13 %.

Sin embargo, estas cifras ocultan lo ocurrido desde 1990, fecha en la que los gobiernos empezaron a debatir la importancia de reducir las emisiones de carbono. De 1990 a 2017, las emisiones mundiales aumentaron un 63 %.¹ Durante ese mismo periodo, la UE redujo sus emisiones en un 20 %. En cambio, Estados Unidos alcanzó una reducción de apenas el 0,4 %, mientras que las emisiones de China

¹ Wikipedia. Lista de países por emisiones de dióxido de carbono. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions

aumentaron un 350 %. Los países europeos se tomaron muy en serio el riesgo de cambio climático. Mientras tanto, Estados Unidos fue cambiando de posición sobre esta cuestión dependiendo de la política del gobierno de turno. China, por su parte, siguió dando prioridad al crecimiento económico, argumentando su “derecho al desarrollo”.

El legado de los últimos treinta años sigue pesando mucho en las políticas medioambientales y energéticas de estos tres actores clave. Hoy, en apariencia, los tres han reconocido la importancia de reducir rápidamente las emisiones de carbono como parte de una transformación económica sin precedentes. Estados Unidos y la UE se han comprometido a alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, mientras que China se ha comprometido a alcanzar el pico de emisiones en 2030, antes de alcanzar la neutralidad en carbono para 2060. En este periplo, la UE avanza deprisa, Estados Unidos a trompicones y China todavía no ha dado un paso.

Los planteamientos de estas tres potencias mundiales respecto a la descarbonización también reflejan sus respectivas economías políticas. La UE, con su “Pacto Verde”, ha forjado un compromiso entre sus miembros que combina una estrategia industrial “limpia” con diversos mecanismos de mercado, lo que refleja las raíces socialdemócratas de la UE junto con su más reciente adopción de programas neoliberales. Por su parte, algunos estados miembros han adoptado estrategias de descarbonización más estrictas que podrían sentar importantes precedentes mundiales.

Estados Unidos ha adoptado un enfoque fragmentado a nivel federal que dispersa diversos incentivos a las “energías limpias” a través de una serie de políticas bajo una serie de nombres engañosos —la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley Bipartidista de Infraestructuras, la Ley CHIPS y la Ley de Ciencia—, mientras que algunos estados como California y ciudades como Ithaca (Nueva York) han adoptado medidas mucho más audaces. Los intereses creados, en particular por las empresas de combustibles fósiles, han ejercido una considerable influencia política para socavar cualquier esfuerzo por coordinar un enfoque federal más eficaz (Lefebvre, 2022).

China tiene previsto seguir dando prioridad a la expansión económica, aplazando la reducción general de las emisiones de carbono hasta después de 2030. Sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles para alimentar esta economía en expansión, con una dependencia abrumadora del carbón, la más contaminante de estas fuentes de energía. Sin embargo, China también ha impulsado una rápida expansión de las energías renovables, con especial énfasis en la eólica y la solar. Está añadiendo más capacidad de este tipo que ningún otro país del mundo (Maguire, 2022). También en este caso, algunas provincias están impulsando una transformación más rápida, lo que podría adelantar el pico de emisiones del país en su conjunto y la fecha límite para alcanzar la neutralidad en carbono.

En este capítulo, evaluaremos los Pactos Verdes de Estados Unidos, la UE y China para ver hasta qué punto se quedan cortos respecto a su propia retórica y a las reducciones en carbono necesarias para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales para 2050 establecido por el Acuerdo de París. También analizaremos cómo estas transformaciones dependen de una serie de mecanismos que trasladan la agricultura, la industria manufacturera y los servicios con mayor huella de carbono a los países del hemisferio Sur como estrategia para externalizar las emisiones. En medio de estas transiciones en los países más contaminantes del mundo se encuentra una persistente mentalidad de suma cero que reduce las emisiones de carbono y los impactos negativos del extractivismo en el Norte en gran medida exportando esos problemas hacia el Sur. Al mismo tiempo, los países más ricos se niegan a abordar el motor subyacente del cambio climático: el consumo excesivo.

El Pacto Verde Europeo

Sobre el papel, los países europeos se toman muy en serio el cambio climático. Finlandia se ha comprometido a ser neutra en emisiones

de carbono para 2035, Austria para 2040 y Alemania y Suecia para 2045. Varios países europeos —Dinamarca, Francia, Hungría— incluso han plasmado sus compromisos en leyes. Estos compromisos son aún más importantes por el hecho de que los países europeos tienen una de las peores huellas de carbono del mundo. En términos de emisiones per cápita, Alemania ocupa el séptimo lugar con 10,4 toneladas métricas por persona, mientras que Francia se sitúa en el puesto catorce con 6,6 toneladas (que es también, aproximadamente, la media de la UE) (Roper, 2021; Eurostat, 2022).

Todas estas promesas de neutralidad en carbono están dentro de lo posible. A diferencia de otras partes del mundo, los países europeos están actuando de forma concertada en respuesta al cambio climático. En julio de 2021, la Unión Europea dio a conocer su plan Objetivo 55 por el que el bloque regional de veintisiete países pretende reducir sus emisiones colectivas en un 55 % para 2030. Este plan de reducción de emisiones de carbono forma parte de un Pacto Verde Europeo más amplio, presentado por primera vez en diciembre de 2019, que promete un “crecimiento económico desvinculado del uso de recursos” (Comisión Europea, 2020). Este plan más amplio, que los estados miembro europeos aún están debatiendo, prevé aumentar la proporción de energías renovables hasta el 40 % del uso total de energía, renovar treinta y cinco millones de edificios para hacerlos más eficientes energéticamente, crear ciento sesenta mil nuevos empleos verdes en el sector de la construcción e impulsar la agricultura ecológica como parte de un programa “De la granja a la mesa” que pretende hacer más sostenibles la producción, la distribución y el consumo agrícolas (Comisión Europea, 2021; Organic Action Plan, 2021; Farm to Fork Strategy, 2020).

Todo esto costará, sin duda, mucho dinero. La UE se ha comprometido a dedicar a la lucha contra el cambio climático hasta el 30 % de su presupuesto a largo plazo, lo que supondría unos setecientos mil millones de dólares estadounidenses (BBC, 2021). Para recaudar ingresos, la UE propone un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono [MAFC] que aplicaría de forma efectiva un arancel a los

productos con altos niveles de emisiones de carbono que lleguen a la UE. Un Mecanismo para una Transición Justa de unos ochenta y cinco mil millones de dólares estadounidenses repartidos a lo largo de seis años ayudaría a las regiones más pobres del bloque a cumplir los objetivos del plan. Dentro de este mecanismo, un Instrumento de Préstamo al Sector Público combinaría subvenciones del presupuesto de la UE con financiación del Banco Europeo de Inversiones. La Unión Europea también emitió su primer “bono verde” con la expectativa de recaudar catorce mil millones de dólares estadounidenses para su presupuesto del Pacto Verde Europeo.

La financiación del Pacto Verde Europeo depende en gran medida de la financiación privada y de la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE [RCDE]. Creado en 2005, el RCDE es actualmente el mayor mercado de carbono del mundo y afecta a fábricas, centrales eléctricas y compañías aéreas. El plan Objetivo 55 propone incluir las emisiones de los buques y, en un nuevo mercado aparte, el transporte por carretera y el sector de la construcción. El aumento del precio del carbono que probablemente se producirá ha dividido a la UE en su eje este-oeste, sobre todo porque Europa oriental depende más de los combustibles fósiles que la occidental.

Los responsables políticos europeos han reconocido en repetidas ocasiones la magnitud de la crisis climática y la urgencia de actuar cuanto antes. Pero, por ambicioso que parezca sobre el papel, el Pacto Verde Europeo sigue siendo insuficiente. Poner en marcha esta iniciativa histórica podría ser una victoria, incluso una victoria impresionante si se compara con lo que están haciendo China o Estados Unidos. Pero el Pacto Verde Europeo no hace honor a su nombre. Sus promesas de creación de empleo son bastante frágiles. Compárese, por ejemplo, las apenas ciento sesenta mil nuevas vacantes para empleos verdes en infraestructuras con los cuatrocientos mil mil trabajadores de la UE directamente implicados en el sector del petróleo, el gas y el carbón en 2016, una cifra que se ha mantenido estable (con la excepción de la minería del carbón) durante algunos años (Czako, 2020).

A primera vista, Europa está reuniendo una cantidad considerable de dinero para su Pacto Verde. El Plan de Inversiones para una Europa Sostenible espera movilizar un billón de dólares estadounidenses de aquí a 2030. Alrededor de la mitad de este dinero procederá directamente del presupuesto de la UE, que a su vez desencadenará una cofinanciación nacional de ciento catorce mil millones de dólares estadounidenses durante el periodo de 2021 a 2027. El fondo de garantía Invest EU también estimulará inversiones públicas y privadas por valor de doscientos setenta y nueve mil millones. Y el Mecanismo para una Transición Justa ayudará a las zonas más pobres y dependientes de los combustibles fósiles a seguir el ritmo del resto de la UE.

Sin embargo, gran parte de este dinero no es más que vino viejo en botellas nuevas. El fondo Invest EU, por ejemplo, no es más que la continuación del antiguo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. Al mismo tiempo, la UE sigue agotando gran parte del presupuesto mundial de carbono restante mediante más lagunas y compensaciones en los mercados de carbono, al tiempo que sigue invirtiendo miles de millones de dólares en subvenciones a los combustibles fósiles y ampliando las infraestructuras de combustibles fósiles en Europa y África tras la invasión rusa de Ucrania (Larson, 2022).

Además, mientras la UE habla de crear un fondo para abordar la desigualdad *dentro* de Europa, ha hecho relativamente poco para abordar la desigualdad mundial. Se ha reservado poco dinero para ayudar a los socios comerciales de Europa a cumplir los nuevos y estrictos requisitos del MAFC. Según los consultores del FMI, He Xiaobei, Zhai Fan y Ma Jun, “el MAFC podría dar lugar a un *beneficio* anual para el bienestar en los países desarrollados de ciento cuarenta y un mil millones de dólares estadounidenses, mientras que los países en desarrollo verían una *pérdida* anual de bienestar de ciento seis mil millones de dólares estadounidenses, en comparación con un escenario de referencia” (Xiaobei et al., 2022).

Sin embargo, los distintos países europeos han aportado anticipos tanto a la financiación climática como a las pérdidas y daños que actualmente sufre el Sur global. De los cien mil millones de dólares estadounidenses anuales que los países más ricos prometieron transferir a los países más pobres para adaptación y mitigación, varios países europeos —Alemania, Noruega, Italia, Suecia— se han esforzado por cumplir sus obligaciones, a pesar de que la cifra global ha alcanzado oficialmente unos ochenta y tres mil millones de dólares estadounidenses, y que gran parte de este dinero procede de nuevos préstamos y seguros (Carty y Kowalzig, 2022). En cuanto a pérdidas y daños, Escocia se comprometió en la COP de 2022 en Sharm El-Sheikh a aportar tres millones de libras esterlinas adicionales a lo ofrecido el año anterior, con lo que su total ascendió a cinco millones de libras esterlinas. Este compromiso llevó a Irlanda, Austria, Bélgica, Dinamarca y Alemania a seguir su ejemplo. Al final, las doscientas naciones presentes en la COP 27 de Sharm El-Sheikh acordaron un nuevo fondo para pérdidas y daños, aunque sigue sin estar claro cuánto dinero entregará este nuevo mecanismo a los países más afectados del Sur, ni cómo lo hará.

El *Green New Deal* de Estados Unidos

En noviembre de 2018, el *Green New Deal* (Nuevo Pacto Verde) se convirtió en un grito de guerra para los activistas climáticos estadounidenses cuando los miembros del Sunrise Movement ocuparon el despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y adoptaron el lema como mensaje unificador. Unos meses más tarde, la diputada Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata de Nueva York), que se había unido a los jóvenes activistas en el despacho de Pelosi, llevó este mensaje al Congreso cuando se asoció con el senador Ed Markey (demócrata de Massachusetts) para presentar su resolución *Green New Deal*.

Más manifiesto que legislación vinculante, la resolución exponía una visión de una transición energética limpia y equitativa para Estados Unidos. Estaba llena de viñetas y propuestas generales, como “invertir en las infraestructuras y la industria de Estados Unidos para afrontar de forma sostenible los retos del siglo XXI” y proporcionar a todos los estadounidenses “acceso a agua limpia, aire limpio, alimentos sanos y asequibles, y a la Naturaleza”.

Al inspirarse en el lenguaje y la historia del *New Deal* de Franklin Roosevelt de los años treinta, los activistas climáticos esperaban aunar dos vertientes del movimiento progresista: el ecologismo y la justicia económica. Los activistas instaron a Estados Unidos a reducir radicalmente su huella de carbono y, al mismo tiempo, a crear empleos bien remunerados, especialmente para aquellos trabajadores que abandonarían sectores económicos asociados a la energía “sucia”. Al igual que el programa de Roosevelt, el *Green New Deal* depende de la dirección y la financiación del gobierno para impulsar esta gran transformación económica.

Desde la resolución original, han surgido otros proyectos de ley del *Green New Deal*, sobre educación, vivienda y ciudades. Las ciudades estadounidenses también han establecido iniciativas del *Green New Deal* a nivel municipal, y muchas organizaciones cívicas siguen defendiendo el *Green New Deal* como una visión radical para reorientar la sociedad estadounidense. En 2022, muchas disposiciones anteriores relacionadas con el clima aparecieron en un único paquete legislativo. La Ley de Reducción de la Inflación, enmarcada como un esfuerzo para hacer frente al aumento de los precios, reducir la deuda federal y proporcionar ayuda económica específica, contiene una serie de disposiciones sobre energía limpia, desde subvenciones en bloque para la justicia climática hasta la creación de un banco verde nacional. Estas disposiciones suman unos trescientos sesenta y nueve mil millones de dólares estadounidenses en nuevos gastos, la mayor inversión federal en energías limpias de la historia de Estados Unidos. Además, acercan mucho más a Estados Unidos al objetivo

del gobierno de Biden de reducir a la mitad las emisiones de carbono de aquí a 2030.

En términos de inversiones concretas, la ley ofrece una especie de política industrial para Estados Unidos al canalizar sesenta mil millones de dólares estadounidenses hacia la fabricación de “energías limpias” y la creación de empleo en torno a paneles solares, baterías y otros componentes. Esto se suma a los sesenta y siete mil millones de dólares estadounidenses en inversiones en industrias de cero emisiones de carbono y en investigación climática de la Ley CHIPS. Como parte del planteamiento *Justice40*² del gobierno de Biden —según el cual el 40 % de todo el gasto en clima debe destinarse a las comunidades desfavorecidas—, la ley destina dinero a los hogares con rentas bajas para que electrifiquen sus casas. Las asignaciones también incluyen fondos para electrificar el transporte público y los vehículos del servicio postal, basándose en las inversiones en transporte menos contaminante de la Ley Bipartidista de Infraestructuras. Otros veinte mil millones se destinarán a los agricultores para que adopten prácticas sostenibles, como la rotación de cultivos. La factura de estos programas se compensará en gran medida con un aumento de los impuestos, incluido un impuesto mínimo del 15 % sobre las empresas con ingresos superiores a mil millones de dólares estadounidenses y un impuesto especial del 1 % sobre la recompra de acciones por parte de las empresas.

Lamentablemente, la ley también hace algunas concesiones desalentadoras a las empresas de combustibles fósiles, como la ampliación de los permisos de minería y perforación y una desgravación fiscal que podría mantener en funcionamiento las centrales de carbón. Parte de la financiación, en particular la Ley CHIPS, enmarca las inversiones en “energías limpias” como parte integrante de una política más agresiva hacia China, en términos geopolíticos.

Los estados de Estados Unidos siguen divididos respecto a estas cuestiones medioambientales y energéticas, y algunos de ellos siguen

² <https://www.thejustice40.com/>

apostando fuertemente por los combustibles fósiles (carbón en Virginia Occidental, petróleo en Texas, gas natural en Pensilvania). Estas divisiones dificultan la posibilidad de conseguir una política federal más coordinada. También complica cualquier compromiso nacional con los esfuerzos internacionales. Las obligaciones del Acuerdo de París son voluntarias, por ejemplo, principalmente porque el negociador estadounidense John Kerry dejó claro que un pacto con objetivos obligatorios no sería aprobado por el Congreso. Además, mientras que la UE y China han mantenido posturas políticas muy coherentes a lo largo de los distintos gobiernos, Estados Unidos ha pasado de la cooperación (Obama) a la hostilidad (Trump) y de nuevo a la cooperación (Biden). Estos cambios de humor político socavan los esfuerzos de Estados Unidos por liderar esta cuestión.

La revolución verde de China

En lo que respecta a la transición mundial hacia una energía limpia, China es a la vez parte del problema y parte de la solución. En cuanto al problema, China es el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo por un margen bastante amplio (aunque solo sea el número cuatro en cuanto a emisiones per cápita).

Al mismo tiempo, China ha sido un líder mundial en el cambio de combustibles fósiles a energías renovables, añadiendo más capacidad de energía renovable que cualquier otro país. A finales de 2022, China está a punto de instalar ciento cincuenta y seis gigavatios de capacidad adicional proporcionada por turbinas eólicas y paneles solares, lo que supone un 25 % más que el récord que estableció en 2021 (Ellerbeck, 2022). En comparación, se espera que Estados Unidos instale solo unos treinta gigavatios de energía solar y eólica este año (Storrow, 2022).

La economía china sigue creciendo, aunque de forma menos espectacular que en décadas anteriores, y también lo hacen sus necesidades energéticas. El consumo total de energía ha aumentado en

torno a un 4 % en lo que va de 2022 en comparación con el año pasado (China National Energy Administration, 2022). Desde que China se comprometió por primera vez a luchar contra el cambio climático en 2009, su economía se ha triplicado, pero su consumo de energía solo ha crecido la mitad de esa cifra. China también ha impulsado acuerdos internacionales sobre el clima. Su acuerdo bilateral de 2014 con Estados Unidos hizo posible el posterior acuerdo de París.

En el espacio de una generación, China se ha transformado en un gigante económico mundial. Ahora se enfrenta a una tarea de urgencia y escala comparables. En el espacio de una generación, China debe liderar el mundo ecologizando su enorme economía. De la rapidez con que Beijing pueda y quiera alcanzar este objetivo dependerá en gran medida que el mundo pueda evitar que la temperatura global supere los 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales.

A pesar de su compromiso de ampliar su infraestructura energética renovable, China sigue siendo el principal consumidor de combustibles fósiles del mundo, utilizando el doble que Estados Unidos. Además, más de la mitad del consumo energético de China procede del carbón, que libera más carbono a la atmósfera que el petróleo o el gas natural.

Sin embargo, el gobierno chino se ha comprometido a alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y a lograr la neutralidad en carbono para 2060. El plazo para China es muy apretado, pues pretende lograr en una sola generación lo que a Europa o Estados Unidos les llevó dos generaciones. La cuota del carbón en el consumo de energía primaria sigue siendo del 56 %, por lo que debe reducirse drásticamente y rápidamente (China Power, s. f.). China también se ha comprometido a elevar el porcentaje de fuentes de energía no fósiles —eólica, solar, hidráulica, biomasa y nuclear— al 80 % del consumo total de energía para 2060 (Yin, 2021). Podría alcanzar este objetivo antes si las provincias con visión de futuro en materia de clima acaban impulsando la política nacional.

Tanto Estados Unidos como China han dedicado un esfuerzo considerable en establecer normas que puedan elevar el nivel medioambiental de los proyectos de desarrollo. Estados Unidos ha desempeñado un papel decisivo en el establecimiento de la Blue Dot Network, que promueve “inversiones en infraestructuras de calidad que sean abiertas e inclusivas, transparentes, económicamente viables, alineadas con el Acuerdo de París, sostenibles desde el punto de vista financiero, medioambiental y social, y conformes con las normas, leyes y reglamentos internacionales”. China, por su parte, ha desarrollado un “sistema de semáforo” para garantizar que sus proyectos de la Belt and Road Initiative [BRI] reduzcan los riesgos medioambientales y contribuyan a una transformación ecológica, representando el verde una contribución positiva, el amarillo una neutra y el rojo una negativa.

Es discutible que China esté trabajando lo suficientemente rápido para pasar a la energía limpia. Lo que no es discutible, sin embargo, es la previsibilidad de China. Ha establecido objetivos y ha seguido adelante para alcanzarlos. Lo que hace que las posiciones chinas sean razonablemente coherentes a lo largo del tiempo es la determinación de los actuales dirigentes de aumentar la seguridad energética del país reduciendo la dependencia de proveedores externos de combustibles fósiles. El gobierno de Beijing también es muy consciente del apoyo público por un aire, una tierra y un agua más limpios, lo que ha generado protestas en el pasado que pusieron en entredicho la estabilidad del régimen. Un tercer factor de motivación es el deseo de China de posicionarse como líder climático mundial en un momento en que la política climática de Estados Unidos ha oscilado salvajemente. China también goza de cierta credibilidad como “desarrollador tardío” que solo ahora está reconsiderando su dependencia de los combustibles fósiles, lo que puede resultar persuasivo para los países del Sur que intentan equilibrar desarrollo y descarbonización.

El nuevo colonialismo verde

Aunque el Norte global se apresura a adoptar nuevas tecnologías “limpias” como la eólica y la solar, en gran medida ha ido añadiendo energías renovables sin reducir el consumo de combustibles fósiles ni el uso de energía. El consumo excesivo en el Norte sigue reforzando un desequilibrio de poder neocolonial con el Sur.

Consideremos, por ejemplo, las piedras angulares de las “transiciones limpias” en el Norte: paneles solares, turbinas eólicas y baterías de litio para coches eléctricos. En primer lugar, los (Nuevos) Pactos Verdes e iniciativas similares siguen situando el crecimiento en el centro de la política económica y, con ese crecimiento, un elevado consumo de energía. En segundo lugar, estas mejoras tecnológicas están diseñadas para mantener un estilo de vida de alto consumo que está vinculado a importantes emisiones de carbono. En tercer lugar, estas innovaciones requieren importantes insumos del Sur global: cobre y aluminio para los paneles solares; zinc, elementos de tierras raras y madera de balsa para las turbinas eólicas; y litio, cobalto y níquel para el almacenamiento de las baterías. Por último, el uso previsto de estas tecnologías muestra a menudo un sesgo individualista que omite la necesaria transformación estructural: coches eléctricos para uso individual o campañas de descarbonización dirigidas a consumidores individuales (por ejemplo, para reducir el uso de bolsas de plástico o pajitas de plástico).

El Norte también ha desarrollado nuevos marcos conceptuales para promover las “transiciones energéticas limpias”. Para promulgar la idea de que la descarbonización puede tener lugar con los niveles actuales de consumo en los países más ricos, la anterior campaña a favor del “desarrollo sostenible” ha sido emparejada con la agenda más contemporánea de la “energía renovable”. Pero muchos de los componentes de esta energía renovable —litio, cobalto— son tan finitos como el petróleo y el gas, lo que cuestiona la sostenibilidad de la empresa. El punto ciego de estos insumos es comparable a la

externalización de los costes medioambientales que ha acompañado durante mucho tiempo a las medidas convencionales de crecimiento económico (ver el artículo de Bengi Akbulut sobre el decrecimiento feminista en este libro). En otras palabras, si el verdadero coste de la contaminación de la tierra, del agua y del aire se tuviera en cuenta en muchos procesos de fabricación, estos no serían rentables; del mismo modo, si los verdaderos costes medioambientales de los insumos se tuvieran en cuenta en las tecnologías de “energía limpia”, estas no serían sostenibles.

Otro marco conceptual es el que se centra principalmente en la descarbonización, excluyendo otras urgentes preocupaciones medioambientales y económicas. Este marco comienza con la “huella de carbono”, que fue originalmente una idea de una empresa de publicidad contratada por British Petroleum, que sitúa la responsabilidad en el consumidor individual en lugar de en los contribuyentes institucionales al cambio climático, en particular las empresas de combustibles fósiles. Este marco de descarbonización se extiende a los pactos que constituyen el núcleo del acuerdo de París sobre el clima, que movilizan la acción colectiva para reducir las emisiones de carbono, y aún más a los mercados de carbono, que permiten las emisiones de carbono en un lugar siempre que se compensen con reducciones en otros lugares, lo que acaba por no suponer ninguna reducción absoluta.

Aunque la descarbonización es esencial, no es la única crisis medioambiental a la que se enfrenta el planeta, que incluye, entre otras, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de fertilidad del suelo y la disminución del acceso al agua potable. El hecho de que estas últimas crisis sean especialmente agudas en el Sur solo contribuye a la creencia de que los países más ricos se centran principalmente en la descarbonización porque el cambio climático amenaza sus intereses económicos específicos de una manera diferente a como lo hace, por ejemplo, la falta de acceso a agua limpia en el Sur. Sin duda, muchas de las tecnologías de “energía limpia” requieren un aumento, en lugar de una disminución, de los daños

medioambientales en el Sur, al afectar a las cuencas hidrográficas, los bosques y las tierras agrícolas expoliadas por la minería, si no son explotadas como tierras productivas y usadas para instalar amplios paneles solares, o la tala generalizada de madera de balsa para abastecer los proyectos eólicos chinos.

En resumen, las “transiciones energéticas limpias” de Estados Unidos, Europa y China deben evaluarse no solo en función de la brecha entre las promesas y los objetivos globales y la brecha entre las políticas declaradas y la implementación real, sino también en términos del daño neto global para el medioambiente y los pueblos del Sur cuando se tienen en cuenta en la ecuación todos los costes sociales y medioambientales para las naciones proveedoras. En los antiguos modelos coloniales, la riqueza y la seguridad del Norte dependían de la riqueza expoliada al Sur. Bajo el nuevo colonialismo verde, el Norte sigue asumiendo que la Naturaleza y la mano de obra barata de los países del Sur están naturalmente a su disposición para mantener los modos de vida insostenibles y efectivamente imperiales de sus habitantes (Ulrich y Wissen, 2021). Cualquier *Nuevo Pacto Verde Mundial* no solo debe ser plenamente global y equitativo, sino que también debe trascender los supuestos fundamentales sobre crecimiento y consumo que, para empezar, han generado las crisis medioambientales planetarias.

Bibliografía

BBC (21 de abril de 2021). Climate change: EU to cut CO2 emissions by 55 % by 2030. <https://www.bbc.com/news/world-europe-56828383>

Carty, Tracy y Kowalzig, Jan. (19 de noviembre de 2022). Climate Finance Short-changed. Oxfam. <https://policy-practice.oxfam>.

org/resources/climate-finance-short-changed-the-real-value-of-the-100-billion-commitment-in-2-621426/

China National Energy Administration (13 de octubre de 2022). http://www.nea.gov.cn/2022-10/13/c_1310669666.htm

China Power (s. f.). How Is China's Energy Footprint Changing? <https://chinapower.csis.org/energy-footprint/>

Comisión Europea. (2020). Un Pacto Verde Europeo. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

Comisión Europea. (2021). Cumplir el Pacto Verde Europeo. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_es

Czako, Veronika (9 de julio de 2020). Employment in the Energy Sector. Comisión Europea. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/93e5be77-c254-11ea-b3a4-01aa75ed71a1/language-en>

Ellerbeck, Stefan (26 de agosto de 2022). These regions produce a lot of carbon emissions - here's what they plan to do about it. Foro Económico Mundial. <https://www.weforum.org/agenda/2022/08/electricity-capacity-power-renewable-energy/>

Eurostat (Marzo de 2022) Greenhouse gas emission statistics-carbon footprints. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Greenhouse_gas_emission_statistics_-_carbon_footprints

Farm to Fork Strategy. (2020). https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

Larson, Krista. (12 de octubre de 2022). Europe turns to Africa in bid to replace Russian natural gas. *Associated Press*. <https://>

apnews.com/article/russia-ukraine-middle-east-africa-business-senegal-52c9da7d4d79d99fef1e35d0430dba25

Lefebvre, Ben. (28 de julio de 2022). Easter eggs' in climate bill delight oil and gas industry. *Politico*. <https://www.politico.com/news/2022/07/28/manchin-oil-gas-biden-schumer-climate-bill-00048514>

Maguire, Gavin. (23 de noviembre de 2022). China on track to hit new clean & dirty power records in 2022. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/energy/china-track-hit-new-clean-dirty-power-records-2022-maguire-2022-11-23/>

Organic Action Plan. (2021). https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan_en

Ritchie, Hannah y Roser, Max. (2017). CO2 Emissions. *Our World in Data*. <https://ourworldindata.org/co2-emissions>

Roper, Willem. (1 de marzo de 2021). Wealthy Nations Lead Per-Capita Emissions. *Statista*. <https://www.statista.com/chart/24306/carbon-emissions-per-capita-by-country/>

Storrow, Benjamin. (14 de octubre de 2022). Wind and solar are booming, but emissions aren't falling. *ClimateWire, E&E News*. <https://www.eenews.net/articles/wind-and-solar-are-booming-but-emissions-arent-falling/>

Ulrich, Brand y Wissen, Markus. (2021). *The Imperial Mode of Living: Everyday Life and the Ecological Crisis of Capitalism*. Londres: Verso Books.

Xiaobei, He; Fan, Zhai y Jun, Ma (11 de marzo de 2022). The Global Impact of the Carbon Border Adjustment Mechanism. Task Force on Climate, Development, and the International Monetary Fund. <https://www.bu.edu/gdp/files/2022/03/TF-WP-001-FIN.pdf>

Yin, Ivy (25 de octubre de 2021). China commits to 80 % of energy mix from non-fossil fuels by 2060. *S & P Global*. <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-transition/102521-china-commits-to-80-of-energy-mix-from-non-fossil-fuels-by-2060#:~:text=China%20will%20work%20toward%20having,the%20country's%20highest%20executive%20body%2C>

Acumulación y desposesión por descarbonización

Ivonne Yáñez y Camila Moreno

Introducción

En las últimas décadas, el capitalismo se ha vuelto a reinventar. Por un lado, a través del discurso del *desarrollo sustentable* y sus ramificaciones institucionales, entre las que están la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus protocolos, acuerdos y marcos legales; o el Convenio de Diversidad Biológica y sus avances obsesivos para colocar la tercera parte del planeta bajo regímenes de conservación. Pero también, por otro, a través de diversas formas de expandir el capital hacia nuevas fronteras, con mercancías y mercados inimaginables, para lo cual se requieren más formas de control territorial y máscaras verdes. Esto se acompaña, necesariamente, de un lenguaje de propaganda, confuso, pero que vende y engaña.

El horizonte de la descarbonización articula hoy los diversos ámbitos del nuevo capitalismo verde, tal como la transición energética, los mecanismos de conservación y restauración vía mercados, así como los nuevos activos digitales. Tres espacios que pueden estar

relacionados entre ellos, pero que no implican una desmaterialización de la economía. De hecho, llevan a un control de tierras y, en muchos casos, a la vulneración de derechos y una prolongación del neocolonialismo. El objetivo de este capítulo es analizar las nuevas caras del capitalismo verde, enmarcadas en el paraguas de la descarbonización, que permiten a los principales contaminadores reinventarse apelando a una retórica supuestamente ecológica. Empecemos con un recuento de las propuestas de descarbonización de la economía y la transición energética, que son capitalistas y coloniales e implican una imposición imperialista como veremos a lo largo del texto.

La descarbonización capitalista y colonial

En un escenario de desastres climáticos extremos, la narrativa y la agenda que se impone desde el Norte, y que cuenta ya con muchos adeptos entre los actores hegemónicos del Sur global, nos dice que para evitar estas catástrofes debemos avanzar hacia la *transición energética* y *descarbonizar* nuestras economías. En la práctica, estamos frente a un nuevo tipo de reacomodo enverdecido del capitalismo, con consecuencias negativas para los pueblos y la Naturaleza.

La propuesta de *descarbonización* tiene su origen en el capitalismo verde asociado a la crisis climática. En 2007, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC por sus siglas en inglés] ya incluyó este término en uno de sus reportes sobre mitigación al cambio climático y lo definió como la “vía hacia una economía con baja intensidad de carbono” (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC], 2007, p. 219). Asimismo, postularon que se podría alcanzar la descarbonización a través de planes de geoingeniería como la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono [BECCS]. No deben sorprendernos estas propuestas del IPCC, pues suele estar alineado con las falsas soluciones al cambio climático. Inclusive el concepto de *mitigación* forma parte

del *pool* de propuestas que se enmarcan en la economía de mercado de carbono, en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [CMNUCC].

Las formas hegemónicas de *descarbonizar mientras se crean nuevas dinámicas de acumulación* van desde el mercado de certificados de compensación de carbono a la inversión en activos financieros especulativos como son los bonos verdes o azules. Incluyen también el despliegue masivo y peligroso de millones de artefactos con tecnologías basadas en energías renovables, la expansiva electrificación del transporte o la extracción de los llamados minerales estratégicos para la transición energético-digital, entre ellos las tierras raras o el litio.

Estas propuestas de *descarbonización* (que no se centran en el carbono fósil, sino en el carbono de las moléculas de CO₂) son acciones que permiten continuar con el modelo de acumulación de capitales y crecimiento económico basado en los combustibles fósiles. En realidad, no representan formas reales de descarbonización (dejar barriles de petróleo, metros cúbicos de gas o toneladas de carbón en el subsuelo) ya que, en la práctica, significan más carbono, más CO₂ en la atmósfera. Se trata de una transición en la que, al mismo tiempo que la industria, junto al rol regulador de los estados cimentan nuevas fuentes de energía como el hidrógeno, se usan pozos agotados de petróleo como espacios para captura y almacenamiento de CO₂, se expanden los monocultivos de árboles para biomasa y los cultivos para agrocombustibles y se amplía la narrativa para relanzar la energía nuclear en pequeños reactores modulares, para uso local y descentralizado.

En esta lógica de *descarbonización de la economía* no se descarboniza nada. En la búsqueda de un resultado *Net Zero* para las emisiones, se validan falsas equivalencias entre las moléculas de carbono biológico —que son parte del ciclo de la vida— y aquellas que fluyen a la atmósfera a partir de la acción humana de extraer materia fósil geológica (petróleo, gas y carbón) (Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática [PLACJC], 2022). En conjunto,

las acciones de descarbonización bajo el guion del cero neto mantienen un mismo patrón de civilización, anclado en lógicas históricas y mecanismos de profundización de las desigualdades. Como consecuencia, esta *descarbonización* hegemónica empeora el clima y viola derechos humanos y de la Naturaleza.

Además, la *descarbonización* capitalista y neoliberal va de la mano con otras ideas más recientes como el de carbono neutral, carbono cero neto, la economía circular, las propuestas de agricultura 4.0, la minería climáticamente inteligente, la digitalización de la economía, el desacoplamiento entre la economía y la Naturaleza, el carbono digital, y otras. Todos estos planes alientan la ampliación de la frontera petrolera y un enorme acaparamiento de millones de hectáreas de tierras como *sumideros de carbono* para la extracción de más minerales. Más adelante veremos cómo esto también ocurre en la superdigitalización de los procesos económicos y la información digitalizada que está convirtiéndose en el activo más importante en la economía global, bajo el nuevo concepto de *desarrollo digital*.

Los sentidos de la nueva gobernanza climática

En el contexto de la nueva gobernanza climática, las ideas gemelas de *descarbonización* y *cero neto* se han convertido en absolutamente cruciales para entender cómo se reinventan los grandes contaminadores. La idea de descarbonización se utiliza cada vez más para referirse y dar sentido a un futuro compartido y a un horizonte histórico común. El régimen de gobernanza mundial del clima que se ha negociado desde 1992 con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y el auge del *clima* como tema central de la agenda ambiental internacional coinciden con la acelerada globalización que tuvo lugar con el orden mundial neoliberal posterior a la Guerra Fría.

Desde que se alcanzó el Acuerdo de París en 2015 hemos tenido una convergencia de las agendas climática y de desarrollo, así como de las agendas de financiación climática y del desarrollo, en el marco

de referencia de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sustentable [ODS]. De hecho, las instituciones, los actores y el pensamiento económico hegemónico han adoptado plenamente el paradigma de la economía verde expuesto en el Informe Stern de 2006 sobre la economía del cambio climático, que consiste en internalizar los costes de la destrucción del medio ambiente, incorporar al sistema de cuentas nacionales el capital natural (todo el espectro de los *servicios medioambientales*) y volver así visible la Naturaleza para el capital.

En este proceso, la Política Climática Internacional y sus mecanismos se han convertido en la correa de transmisión clave para entender cómo se está incorporando este metaproceto en los contextos nacionales y locales y cómo se establecen nuevos marcos legislativos (como los Códigos Forestales, los Códigos Mineros, la regulación del agua, etcétera) para dar cabida al paradigma económico verde. Ello también sirve como base para construir el fundamento legal y la seguridad jurídica para los nuevos contratos y transacciones relativos al capital natural y el avance de la mercantilización sobre la frontera de los intangibles.

¿Cómo se plasma el paradigma de la economía verde y sus mecanismos sobre los territorios? Requieren nuevas formas de expropiación y asentarse en territorios concretos (bosques, manglares, pastos, etcétera). También adentrarse sobre nuestras estructuras mentales para definir el lenguaje de cómo nos comunicamos sobre el cambio climático y cómo damos sentido a este esfuerzo compartido. Por ejemplo, los conceptos de *descarbonización* y el *cero neto* ya son de uso generalizado. Cada vez más, los usamos para dar sentido a los objetivos compartidos, la transparencia y a la rendición de cuentas.

El mandato político de *descarbonizar* la economía y la sociedad —y ahora de digitalizarlas— se ha convertido en la columna vertebral del régimen de gobernanza climática mundial y en el horizonte a largo plazo hacia la neutralidad climática. Los Pactos Verdes hegemónicos y muchas de las vías de *transición justa* también están atravesados por esta lógica de la *descarbonización*. Sin embargo, si

tenemos en cuenta la evolución del régimen multilateral de las últimas tres décadas para abordar el cambio climático en el marco de la ONU, no existe una definición consensuada de lo que significa la descarbonización.

¿Qué significa *descarbonizar*? ¿Qué significa *cero neto*?

En la evolución del régimen, desde la CMNUCC (1992) hasta el Acuerdo de París (2015), tenemos un acuerdo y un lenguaje explícito sobre el aumento de la temperatura global con respecto a los niveles preindustriales. Sin embargo, con el Acuerdo de París, se introdujo el lenguaje relativo a “las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros” (CMNUCC, 2015), incorporando el funcionamiento del ciclo del CO₂ como ámbito de la acción climática y, como tal, de las normas y mecanismos globales de gobernanza climática. Desde este enfoque, hemos visto cómo el concepto inicialmente confuso del cero neto ganaba terreno rápidamente, alcanzando su punto álgido en el periodo previo a la COP26 celebrada en Glasgow en noviembre de 2021. Allí, en medio de una agenda multilateral poscovid y enmarcada por la narrativa de los Green Deals verdes, el slogan del cero neto ganó un lugar muy destacado en la CMNUCC y en la construcción de alianzas con las corporaciones y el sector financiero, incluyendo el de seguros. Iniciativas características del capitalismo multistakeholder como el industry-led, UN-convened Net Zero Banking Alliance asumieron el mando del paraguas de acción climática. En este escenario, también es central la “net zero by 2050” de la We Mean Business Coalition.

Según las normas del régimen de la ONU, hoy es imposible abordar la llamada acción climática por separado del cero neto. A través de argumentos científicos se justifica la economía de las compensaciones de emisiones de carbono (*offsets*). Mecanismos y enfoques de mercado están presentes, aunque no se llame explícitamente *comercio*, por ejemplo, cuando abordamos la idea de los Resultados de Mitigación

Transferibles Internacionalmente [ITMO por sus siglas en inglés]. En esta contabilidad global de la mitigación de emisiones, se apropian de la Naturaleza y de sus ciclos ecológicos que están invariablemente ocurriendo en territorios, inseparables de su contexto social y enmarcados en contextos políticos como relaciones de poder.

La Unión Europea [UE] tuvo un papel crucial en este cambio de objetivo de reducción de emisiones al hablar de grados de temperatura. A través del programa europeo para la adaptación y mitigación, involucró a cientos de científicos en el continente dando como resultado la creación de los Representative Concentration Pathways [RCP], que se convirtieron en el eje central del IPCC y de las negociaciones sobre clima a partir de ese momento. Los RCP desplazaron a los Special Report of Emissions Scenarios [SRES] que se enfocaban sobre todo en cambios sociales para enfrentar el calentamiento global, forzando una migración del enfoque desde emisiones a grados de temperatura. Los modelos en los que se basan los RCP son complicadas evaluaciones físicas y económicas, vaciadas de cualquier viso societal.

La descarbonización a través del cero neto se enmarca, por lo tanto, en este nuevo contexto de entender el cambio climático como moléculas y fórmulas en manos de científicos y no en transformaciones profundas, incluidas las políticas, para avanzar hacia un camino posextractivista. Por eso, es crucial entender lo que implica el cero neto a mediados de siglo y en qué consiste realmente esta jerga aparentemente técnica.

Jerga técnica y lenguaje mercantil

Lo que aparece bajo un lenguaje altamente técnico del Libro de Reglas para la operacionalización del Artículo 6 del Acuerdo de París,¹ el motor central del Acuerdo, es emblemático de lo que se ha

¹ El artículo 6 del Acuerdo de París, concertado en Glasgow, es el que se refiere al libro de reglas de los mercados de carbono. Entre otras cosas permite negociar

identificado y criticado en las últimas décadas como la nueva cara verde del capitalismo, remodelando su dinámica de expropiación para extraer hasta la última gota de hidrocarburos y sacar provecho del colapso medioambiental.

Han pasado ya casi tres décadas desde que se incorporara la idea de comercio de carbono en el régimen de gobernanza climática mundial. Con el Protocolo de Kioto (1997), se incluyeron los llamados mecanismos de flexibilidad para permitir a los países industrializados (incluidos en el Anexo I del Protocolo) cumplir con sus obligaciones. Uno de los mecanismos, el Mecanismo de Desarrollo Limpio [MDL], permitía a los países industrializados llevar a cabo sus proyectos de reducción de emisiones en países del Sur global “anfitriones”, con el fin de crear oportunidades de cooperación para ambas partes y para el clima.

En un principio, se trataba de la consagración en el orden multilateral de una idea que procedía de la política medioambiental nacional de EE. UU., relativa al comercio con permisos de contaminación con partículas. En otras palabras, derechos a contaminar que el gobierno concedía al sector privado hasta un cierto umbral —que luego se comercializaban dentro de este sector—, con el objetivo de que las fuerzas del mercado y la racionalidad de la rentabilidad apoyaran al cumplimiento de la normativa medioambiental. De aquí nacen las nociones de “servicios ecosistémicos” y “servicios ambientales”. Bajo esta lógica, emisiones cero neto no significa para nada cero emisiones, sino que uno puede seguir contaminando mientras logra que otros aseguren que la misma cantidad de toneladas de carbono va a ser absorbida en algún “sumidero”. Se equipara así la emisión de CO₂ en un contexto con la supuesta absorción en otro, sin

voluntariamente entre países las reducciones de emisiones o también llamados “resultados de mitigación” para alcanzar sus objetivos propuestos en los documentos nacionales [NDC] bajo la supervisión de la CMNUCC; el artículo también reconoce los enfoques “no comerciales” e introduce la financiación, la transferencia de tecnología. Hasta hoy, siguen las negociaciones sobre la hoja de ruta para la implementación de este artículo.

considerar las condiciones, los actores, los lugares y las relaciones de poder concretas involucradas.

Si observamos el largo camino recorrido desde que surgió por primera vez la idea de comerciar con el carbono, vemos un avance masivo de un ecologismo basado en el mercado en las políticas públicas a todos los niveles, que se asienta como la mentalidad culturalmente hegemónica sobre cómo actuar ecológicamente: definiendo las acciones por el planeta como una gran oportunidad de negocio.

En su contribución a este libro, John Feffer y Edgardo Lander han analizado los planes de descarbonización de los países que son los principales contaminadores del planeta: Estados Unidos, Unión Europea y China. Los autores también muestran cómo estas políticas se basan en un nuevo colonialismo verde, que se expresa precisamente en una mentalidad de suma cero que busca reducir los impactos negativos del extractivismo en el Norte, exportando los problemas al Sur. En el caso de Ecuador, es ya conocido el caso de la madera de balsa (Bravo y Yáñez, 2021), demandada en los últimos años principalmente por China para la construcción de las hélices de los aerogeneradores. Pero más allá de los impactos concretos en los territorios, también es importante que miremos a cómo los gobiernos nacionales en la periferia mundial se están reposicionando ante estas disputas mundiales.

En Ecuador, el gobierno de Guillermo Lasso empezó a construir en 2022 el Plan Nacional de Descarbonización, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Energética, quien ha armado una alianza público-privada con fondos como el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible [FIAS] cuyo objetivo es, según su sitio web, “apoyar el financiamiento de la gestión ambiental, mediante la implementación de estrategias y mecanismos financieros para la protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales”. Sectores extractivistas petroleros y mineros, los grandes industriales o empresas agroexportadoras de los sectores bananero, camaronero y palmicultor están clamando también por la descarbonización.

Al mismo tiempo, el gobierno ecuatoriano anunció su interés en duplicar la extracción de petróleo (Cazar Baquero, 2021), está expandiendo la minería a gran escala (Empresa Nacional Minera, 2020) y ampliando la frontera agroindustrial. La descarbonización empresarial también llega a las cementeras, que ya tienen el sello de Carbono Neutral, por reciclar basura en sus instalaciones, o disponer de certificados de compensación de emisiones. Por ejemplo, UNACEM, propietaria de la cementera Selva Alegre, recibió el Distintivo Cuantificación Huella de Carbono del Programa Ecuador Carbono Cero [PECC], por contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero. Para esto bastó con que la compañía cuantifique y verifique su inventario de gases con la certificadora. Como *greenwashing*, este sello le permitirá a la empresa decir que está en un camino de descarbonización, incluso a pesar de que la industria de cemento a nivel global es responsable de, al menos, un 8 % de las emisiones globales. “Si la industria de cemento fuera un país, sería el tercer emisor más grande, luego de Estados Unidos y China” (Watts, 2019).

Otras formas de descarbonizar, otros tiempos para la transición

Descarbonizar de manera real y efectiva requiere romper con el discurso hegemónico y con la idea de enmarcar el clima a partir del Acuerdo de París. En realidad, se trata de un tratado comercial de carbono, en cuyo corazón están las compensaciones de carbono que, como se ha señalado, no reducen emisiones, sino que son, en la práctica, permisos para contaminar.

A finales de los años 1990 e inicios del siglo XXI, las luchas sociales se opusieron a la globalización neoliberal, al libre comercio, a la subordinación de los estados nacionales y al poder de la Organización Mundial de Comercio. Pasadas dos décadas, el horizonte y repertorio de las luchas sociales se han resignificado. El tema ambiental y el giro hacia los territorios ha ganado espacio y protagonismo al mismo tiempo que el capitalismo verde se iba instaurando como

nueva agenda hegemónica, sobre todo después de la crisis financiera de 2008. Emergieron nuevas mercancías y nuevos mercados, en un proceso que se cristaliza a partir de 2012 con la conferencia de RÍO +20, el mandato para la creación de los ODS y la Agenda 2030. El Acuerdo de París de 2015 se enmarca en esta nueva etapa del régimen de gobernanza ambiental global. Plantearnos como horizonte las metas del Acuerdo de París significa apoyar esta agenda de falsas soluciones y la carbonización continua del planeta con más combustibles fósiles.

Necesitamos descarbonizar nuestro lenguaje y desterrar al CO₂ como referente central de nuestro discurso. Esta es una condición para enfrentar el cambio climático, avanzar hacia la justicia global, con los pueblos y la Naturaleza, hoy sacrificados en la transición energética hegemónica. Tenemos que replantearnos qué es lo que queremos cambiar, cómo, entre quienes, cuándo, y hacia dónde.

Para los pueblos kichwas andinos del Ecuador, la *transición* podría llamarse *tukuna*, que significa transformarse y convertirse, pero también volverse o, más aún, poder y ser capaz de algo. Esto nos exige repensar la reflexión sobre la temporalidad. No es transitar hacia algo mejor *en el futuro*, sino, como lo proponen varios pueblos indígenas en Abya Yala, es parte del andar con el pasado delante. Sabemos que el tiempo no es único, ni lineal, ni homogéneo. Es clave pensar en estas múltiples nociones de tiempo, sobrepuestas y en conflicto, a la hora de trazar los tiempos para la *transición*.

Los tiempos Waorani, Kichwa² o Shuar (Acción Ecológica, 2023) entran en contradicción con los tiempos modernos, que buscan siempre poseer, comprar, vender y apropiarse del tiempo de los trabajadores, del cuerpo de las mujeres, de los ciclos y funciones de la Naturaleza. La aceleración constante en el tiempo, en el transporte y en las computadoras ultrarrápidas, es parte de la destrucción del

² Los kichwas amazónicos tienen una “forma de vivir en el presente sin hablar del futuro” lo que deviene en un contra-sentido del tiempo moderno y de la imposición de políticas de planificación centrada en el progreso donde el pasado desaparece y se agota; los waorani, entienden el “antes” y el “después” de una manera distinta.

planeta. Como contraste, una *transición* en *Pacha*, solo puede hacerse considerando el tiempo-espacio, el cosmos en donde se da la reproducción de la vida, en correspondencia, complementariedad y reciprocidad; donde las personas humanas no son el centro, sino una parte de la Gran Casa.

Pero la transición energética en forma de real descarbonización también debe tomar en cuenta el espacio. Por ejemplo, el que ocupan las energías fósiles. Cuando se extrae petróleo, sale de un espacio a otro y al mismo tiempo ocupa otra temporalidad. Porque no es lo mismo el carbono fósil subterráneo que el carbono de los árboles o los suelos. Si no entendemos el elemento espaciotemporal no podremos construir otras formas de transitar. Lo que la propuesta del Yasuní en el Ecuador buscaba era eso, avanzar hacia una economía verdaderamente descarbonizada.

Las casi tres décadas de las COP, desde 1995 en Berlín, no solo han sido inútiles en cuanto a combatir el cambio climático, sino que han agravado el problema. Este es el camino de una *descarbonización fallida*. Sin embargo, en este mismo periodo de tiempo, numerosos pueblos han logrado detener en parte la extracción petrolera, como los Ogoni en Nigeria, o el Pueblo Kichwa de Sarayaku en Ecuador (ver a este respecto el capítulo de Tatiana Roa y Pablo Bertinat). Estas experiencias son mucho más inspiradoras para una transición ecológica que lo que han logrado miles de delegados oficiales en las cumbres del clima. Pero también están cada vez más vigiladas y asediadas por las nuevas estrategias digitales de la economía verde.

El control digital: nuevas amenazas a los territorios y a los derechos

A fines del año 2022, se firmó un convenio entre una organización indígena de la Amazonía ecuatoriana, la FICSH (Federación Interprovincial de Centros Shuar) de Ecuador, y una empresa llamada ONE AMAZON (Acción Ecológica, 2023). Este convenio ha

alertado sobre el nuevo tipo de negocios basados en la digitalización de la información obtenida de tierras y territorios de pueblos indígenas. El caso dice mucho sobre hacia dónde se están moviendo los capitales en un contexto de economía verde cada vez más diversificada.

Estos convenios suelen ser presentados como propuestas para desarrollar actividades relacionadas con la protección, defensa y conservación de las selvas, pero por lo general crean un sistema para recoger toda la información posible de los territorios y financiarizar la selva y su conservación. Se recogen datos mediante imágenes satelitales y otras tecnologías (digitales, documentales, videográficas, auditivas y de otra índole), que son asociados a la emisión de “activos digitales” llamados “valores” (*tokens* o Digital Security Assets) con el uso de tecnología *blockchain* (cadena de bloques).

Un “activo digital” puede referirse a distintas mercancías digitales como, por ejemplo, los *tokens* no fungibles (conocidos como NFT, *Non Fungible Token*) y las criptomonedas. Es muy probable que los contratos y las empresas que vienen apareciendo en la Amazonía estén interesadas en hacer negocios con la información que van a obtener de los territorios indígenas. Personas en cualquier parte del mundo que compren NFT o *tokens* de imágenes asociadas a territorios indígenas digitalizadas y colocadas en la cadena de bloques no serán directamente propietarios de los pedazos de territorio, pero sí podrían acceder fácilmente a los archivos de datos sobre la hectárea concreta de territorio a la que está asociado el NFT. Es decir, los compradores de los NFT emitidos sobre la base de territorios indígenas amazónicos, podrían decir que poseen activos digitales que pueden vincularse “auténticamente” a cada uno de los árboles o insectos vivos de una hectárea del bosque.

En Ecuador, opera también la empresa Bit-CO₂,³ que está en comunidades de la nacionalidad amazónica Achuar. Bit-CO₂ ha emitido

³ Ver Bit-CO₂, *Ecosistema Descentralizado de Compensación Ecológica*, https://www.bit-co2.net/es_index-tokens y Youtube, Green CryptoCurrency Chanel, 2020, <https://www.youtube.com/@greence9274/discussion>

un *token* de supuesto “patrocinio” de actividades de conservación del carbono en el territorio Achuar⁴ de Ecuador, pero, a diferencia de los NFT, es una criptomoneda. En otros países, como Brasil, la corporación Nemus emitió NFT forestales⁵ que son *tokens* fabricados a partir del territorio forestal ancestral del pueblo Apurinã. Para ello, Nemus ha dividido el territorio indígena en pequeños cuadrados territoriales, cada uno potencialmente representado por un NFT único que se vende en el mercado internacional. Al entrar al sitio web de Nemus, se puede ver el territorio indígena Apurinã cuadrado para emitir NFT.

Estos son ejemplos que dan cuenta de la mentalidad de las nuevas empresas que lucran con los NFT, con las criptomonedas, o mueven la Web 3.0. Una secuela es que, debido a sus características, las NFT son idóneas para inflar burbujas especulativas rápidamente e inclusive son terreno fértil para lavar dinero de forma ilícita, como aquel ligado al narcotráfico. Es, además, una manera indirecta de acaparar las tierras en países del Sur.

Este tipo de empresas también podrían estar interesadas en la construcción del “Internet de los Bosques” (modelado en el llamado “Internet de las Cosas”) en la Amazonía. Esto significa la implementación de sistemas tecnológicos para recoger imágenes y otros archivos de los bosques para obtener información, complementado con la instalación de sensores, radares u otros equipos en terreno. Una vez instalada toda esta infraestructura, y construido el Internet del Bosque, será fácil para las empresas monetizar estos datos. Por ejemplo, venderlos a quienes compran servicios ambientales. Estos datos en sí no equivaldrían a *tokens* de servicios ambientales, pero, en un proceso aparte, sí podrían ser utilizados por empresas que emiten certificados de compensación (*offsets*) en forma de *tokens* y, por tanto,

⁴ Ver Bit-CO₂, *Información del Proyecto*, https://bit-co2.net/es_index-proj-add/0c-6fny6 y Bit-CO₂, *Proyectos de Conservación Forestal / Nodo-08*, https://www.bit-co2.net/es_index-proj-card-achu01

⁵ Nemus es un NFT coleccionable diseñado para proteger la selva amazónica. Guardian App, <https://app.nemus.earth/map>

obtendrían algún tipo de derecho de propiedad sobre las capacidades biológicas, los ciclos y las funciones de la Naturaleza en la Amazonía. Recordemos que los *tokens* de servicios ambientales se venden habitualmente a empresas y estados como permisos para destruir la Naturaleza en otro lugar del planeta, incluida la biodiversidad y las fuentes de agua. También se venden como derechos para contaminar la atmósfera con dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero.

En una economía en la que cada vez más prima la digitalización, los bosques amazónicos están siendo transformados en un banco de Big Data y también relacionados con la venta de servicios ambientales *tokenizados*. Esto puede significar que los posibles *tokens* de servicios ambientales serán equivalentes a derechos de destrucción comprados por instituciones públicas o privadas y tendrían el potencial de perjudicar las vidas y los territorios. También hay el riesgo de que la información recopilada por la infraestructura que recogerá datos para las empresas en territorios indígenas pueda venderse a estados o empresas privadas que necesiten información para realizar biología sintética, o inclusive para planes de canjes de deuda. En términos prácticos, la recopilación y venta de los datos relevantes sobre territorios indígenas podría llegar a reducir indirectamente el acceso, control y la capacidad de autogobierno de los pueblos indígenas sobre su territorio.

Todos estos ejemplos son manifestaciones nefastas —en este caso, digitales— de la descarbonización hegemónica, de la cual se hacen socias las grandes corporaciones y el capital financiero, con el respaldo de muchos estados. A la vez que vulneran derechos, impulsa un programa de ajuste estructural climático, tecnológico y financiero que legaliza toda una arquitectura de datos para la producción de falsas equivalencias, violentas “compensaciones” y nuevas subalternidades.

Bibliografía

Acción Ecológica (enero de 2023). Amenazas del capitalismo digital: el caso de One Amazon. <https://www.accionecologica.org/observaciones-al-convenio-de-asociacion-entre-one-amazon-y-la-ficsh/>

Bravo, Elizabeth y Yáñez, Ivonne. (2021). La energía eólica. El caso de China. En *Energías renovables, selvas vaciadas. Expansión de la energía eólica en China y la tala de balsa en el Ecuador*. Quito. <https://www.naturalezaconderechos.org/wp-content/uploads/2021/09/LA-BALSA-SE-VA.pdf>

Cazar Baquero, Diego (1 de septiembre del 2021). Duplicar la producción petrolera, la controvertida apuesta del gobierno de Ecuador. *Plan V*. <https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/duplicar-la-produccion-petrolera-la-controvertida-apuesta-del-gobierno-ecuador>

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [CMNUCC]. (2015). Acuerdo de París. Artículo 35.

Empresa Nacional Minera. (2020). Plan de negocios 2020. <https://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04/PLAN-DE-NEGOCIOS-EXPANSI%C3%93N-E-INVERSI%C3%93N-2020.pdf>

Empresa Nacional Minera. (2022). Portafolio minero 2022. <https://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/06/POR-TAFOLIO-2022.pdf>

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC]. (2007). Fourth Assessment Report: Climate Change 2007. Working Group III: Mitigation of Climate Change, p. 219.

Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática [PLACJC]. (2022). Glosario de la Justicia Climática. <https://www.accionecologica.org/glosario-de-la-justicia-climatica/>

Watts, Jonathan (25 de febrero de 2019). Concrete: the most destructive material on Earth. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/cities/2019/feb/25/concrete-the-most-destructive-material-on-earth>

Parte II

Analizando el colonialismo verde: interdependencias y entrelazamientos globales

Continuidades e intensificación de la apropiación imperial en la economía global

Christian Dorninger

Introducción

La historia ambiental ha demostrado que el ascenso de Europa Occidental está estrechamente relacionado con la apropiación coercitiva de los recursos naturales y de la mano de obra durante el periodo colonial. Posteriormente, los colonos europeos en Norteamérica o Australia también desarrollaron una orientación imperial similar hacia el Sur global. Al menos desde la década de los cincuenta se ha criticado la narrativa generalizada de que, con el fin de la dominación colonial, también llegaron a su fin las formas imperiales de apropiación (Prebisch, 1950; Rodney, 1972; Wallerstein, 1974). Sin embargo, hoy en día, la apropiación imperial es mucho más sutil y se camufla bajo las reglas del libre comercio y de los precios de mercado, basadas en el entendimiento de que tales relaciones son económicamente beneficiosas para todas las partes participantes (Feenstra, 2015). Cabe señalar que el intercambio desigual entre estados-nación viene precedido por el “colonialismo interno”, una apropiación desigual por parte de las zonas centrales dentro de los estados-nación

(Martínez-Alier et al., 2016) que, sin embargo, no puede captarse con un análisis a nivel nacional como el del presente estudio.

La teoría del intercambio ecológicamente desigual postula, en contraste con la economía dominante, que la *materialidad* del comercio y la producción y el consumo económicos son clave para entender las desigualdades e interdependencias prolongadas entre las regiones más ricas y más pobres del mundo. Las transferencias netas asimétricas de recursos de las regiones más pobres a las más ricas del mundo, incluidas las materias, la energía, la tierra y la mano de obra incorporadas¹ en todo tipo de bienes y servicios comercializados, subyacen al actual régimen de comercio internacional. Esta apropiación desigual de los recursos, según la teoría del intercambio ecológicamente desigual, tiene un carácter autorreforzador, ya que los países que se apropian en términos netos son capaces de generar más bienes y servicios y de mayor valor añadido, lo que les permite actuar como apropiadores netos de recursos en los años siguientes sin tener que experimentar impactos socioambientales proporcionales derivados de la extracción de recursos (Hornborg, 2014; Hornborg, 2019). Adoptar una perspectiva biofísica para evaluar las actividades económicas puede arrojar luz sobre cuestiones urgentes de justicia global (la distribución de los bienes y cargas medioambientales) en medio de los esfuerzos por transformar la sostenibilidad.

El Norte global depende de tecnologías e infraestructuras industriales intensivas en recursos cuyo perfecto funcionamiento depende de la entrada anual neta de recursos y mano de obra incorporada procedentes de zonas distantes y a menudo las más pobres del Sur global (Frey et al., 2018). Además, los países del Norte global obtienen una compensación monetaria significativamente mayor por los recursos y

¹ *Incorporadas* se refiere a los recursos que no necesariamente se comercian y cruzan fronteras como tales, pero que se necesitan —y son puestos en marcha o se utilizan— en la cadena de producción para producir un determinado bien o servicio que finalmente se exporta. Por ejemplo, la tierra, la energía y la mano de obra necesarias para producir un bien agrícola no se comercializan como tales, pero con el método utilizado en este capítulo, estos flujos “previos” u “ocultos” externalizados pueden rastrearse desde el país de extracción / utilización hasta el país de la demanda final.

mano de obra incorporada que exportan que las naciones más pobres, lo que a menudo se correlaciona con las posiciones que ocupan en las cadenas mundiales de suministro (Piñero et al., 2019; Prell et al., 2014). Medida en transferencias netas asimétricas de volúmenes de recursos y transferencias monetarias, esta desigualdad es crucial para que los distintos países alcancen el crecimiento económico y acumulen capital e infraestructura tecnológica (Grossman y Helpman, 1991).

Este capítulo se basa en gran medida en publicaciones recientes sobre los patrones globales de intercambio ecológicamente desigual (Dorninger et al., 2021) y el drenaje del Sur global a través de la apropiación imperial (Hickel et al., 2022). Estas contribuciones muestran cómo los patrones de intercambio ecológicamente desigual y de apropiación imperial no se detuvieron con el fin del dominio colonial, sino que continúan hasta la fecha. Aquí reviso brevemente estos hallazgos con una nueva base de datos y para años más recientes.

Metodología y datos

Para este capítulo, he utilizado la versión 055 de la base de datos GLORIA (Global Resource Input-Output Assessment), una base de datos multirregional insumo-producto [MRIO, por sus siglas en inglés] (Lenzen et al., 2022), construida en el Global MRIO Lab (Lenzen et al., 2017). Los análisis insumo-producto (*input-output*) extendidos al medioambiente permiten calcular cuentas basadas en el consumo que suelen denominarse indicadores de la huella. El indicador de la huella de un país determinado para cada indicador socioambiental se calcula como la suma de la extracción / utilización nacional del recurso más los usos de recursos previos incorporados en las importaciones del país, menos las necesidades directas e indirectas de recursos para producir bienes y servicios destinados a la exportación. Para este capítulo, utilizo las siguientes extensiones medioambientales: extracción de materias primas (medida en toneladas métricas), uso de tierra (hectáreas), suministro de energía (julios) y necesidades

de mano de obra (equivalentes persona-año).² En el anexo de este capítulo se ofrece más información técnica sobre la metodología y los datos, así como la lista de agrupaciones de países.³

Patrones de intercambio ecológicamente desigual

En un primer paso, en la Figura 1, evalué el intercambio de tres recursos naturales más la mano de obra relevantes para la producción económica de bienes y servicios, es decir, equivalentes de materias primas, energía, tierra y mano de obra que se incorporan a las exportaciones de un país, para determinar el intercambio ecológicamente desigual entre el Norte global y el Sur global en las tres últimas décadas (Dorninger y Hornborg, 2015). El Norte global está representado por las “economías avanzadas” del FMI e incluye a los actuales países de la Unión Europea (excepto Bulgaria, Croacia, Hungría, Polonia y Rumanía), Australia, Canadá, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Corea del Sur, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. El resto de países pertenecen a las “economías emergentes y en desarrollo” del FMI y representan el Sur global en este estudio. Cabe señalar que proceder con esta agrupación de países sitúa a China en el Sur global, lo que podría ser discutible, ya que China ha ganado un peso significativo durante estas tres décadas, tanto en términos biofísicos como geopolíticos. Sin embargo, este cambio solo puede tratarse superficialmente en este capítulo. La Figura 4 ofrece un análisis del drenaje monetario del Sur global en relación con su PIB, una vez incluyendo a China y otra sin incluir a China.

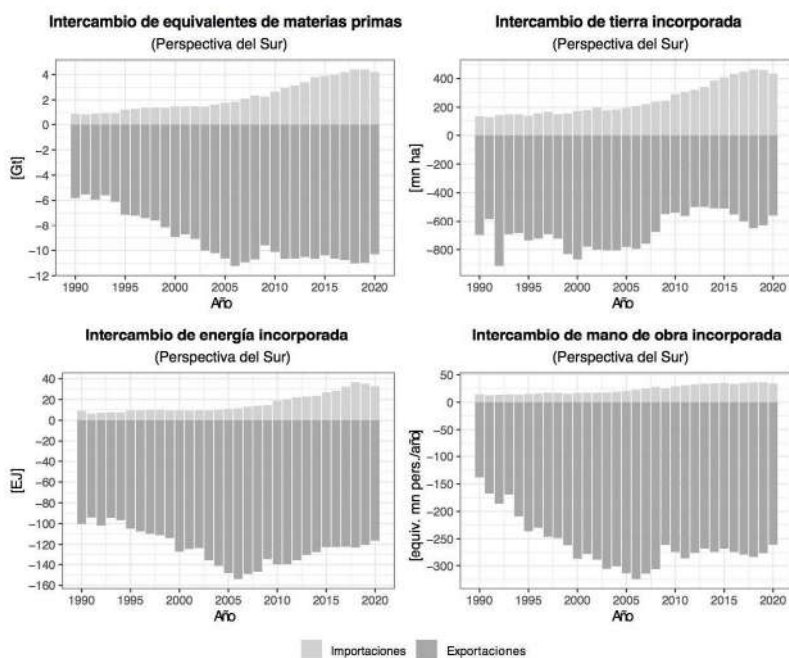
En la Figura 1 se puede visualizar las exportaciones e importaciones de equivalentes de materias primas (en gigatoneladas), tierra incorporada (en millones de hectáreas), energía incorporada (en exajulios) y mano de obra incorporada (en equivalentes de millones de

² Para más información sobre la metodología y los datos, ver Dorninger et al., 2021.

³ El anexo puede ser consultado en: <https://shorturl.at/ekuR8>

personas / año) entre el Norte y el Sur. Las barras por debajo de la línea cero indican la exportación directa e indirecta de recursos y mano de obra, las barras por encima de la línea cero las importaciones. Las exportaciones netas del Sur al Norte se calculan como exportaciones menos importaciones.

Figura 1. Exportaciones e importaciones de equivalentes de materias primas, tierra, energía y mano de obra incorporada entre el Norte Global y el Sur Global



Fuente: elaboración propia.

La Figura 1 muestra una apropiación neta relativamente estable del Norte global por parte del Sur global a lo largo de los cuatro flujos evaluados y del periodo observado. La apropiación neta del Norte se define como las exportaciones del Sur al Norte menos las importaciones

del Sur procedentes del Norte. Para la mayoría de los indicadores, se materializó algún tipo de estabilización de las ratios de intercambio ecológicamente desiguales tras la crisis financiera mundial del año 2008. Los resultados indicaron que, en el caso de equivalentes de materias primas, el Sur global proporcionó al Norte global alrededor de 7 gigatoneladas netas (exportaciones menos importaciones) al año entre 1990 y 2020. En términos de energía primaria incorporada en bienes y servicios comercializados internacionalmente, el Norte global se apropió de unos ciento siete exajulios netos al año y de casi doscientos cuarenta millones de equivalentes persona-año durante el mismo periodo. El Sur también actuó como proveedor neto constante de tierra incorporada para el consumo final del Norte, en torno a cuatrocientos treinta millones de hectáreas al año, pero en los diez años más recientes (es decir, de 2011 a 2020), esta provisión neta media disminuyó a unos ciento sesenta millones de hectáreas al año, como indican las menores exportaciones de tierra incorporada desde 2007 hasta 2015 y las importaciones en constante aumento hasta 2018. En resumen, las economías del Norte global dependen de un flujo neto constante de recursos naturales y mano de obra del Sur global que permite el crecimiento económico al tiempo que conserva los recursos nacionales.

Representación monetaria del intercambio desigual

A continuación, pretendo representar este intercambio desigual en términos de valor utilizando el indicador TiVA (Trade in Value Added) en dólares estadounidenses [USD] constantes de 2015.⁴ Sin embargo, es sumamente importante comprender qué puede expresarse en términos de valores de intercambio monetario y qué no. En primer lugar, no existe un “precio correcto o justo” para ningún bien o servicio que compense, en ningún sentido, el intercambio ecológico desigual

⁴ Todos los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses y deflactados para el año 2015.

analizado anteriormente. En segundo lugar, el valor monetario tampoco puede utilizarse para definir lo que el Sur global *podría* ganar en condiciones más justas, porque el esquema del comercio mundial sería muy diferente si no hubiera estos diferenciales de precios. Por lo tanto, este ejercicio no consiste en encontrar un precio de intercambio al que el comercio internacional entre el Norte y el Sur globales pasaría a ser justo, sino simplemente en representar el drenaje del Sur en términos de precios de mercado existentes y, de este modo, desvelar la ventaja para el Norte global causada por estas estructuras de intercambio desiguales que incluyen diferenciales de precios.

Drenaje representado en precios del Norte

Para empezar, representaré el drenaje monetario del Sur en términos de precios del Norte, es decir, la compensación monetaria que reciben los países del Norte global por unidad de flujo de recursos incorporados, como sugieren Amin y Köhler (Amin, 1978; Köhler, 1998). Para evaluar el drenaje (como transferencia de valor a través del intercambio desigual) del Sur en términos monetarios, multipliqué el drenaje neto de recursos del Sur (como se muestra en la sección anterior) por la compensación que reciben los países del Norte por la misma unidad de exportaciones (“precios del Norte”), y resto la transferencia monetaria neta real del Norte al Sur. Para maximizar la comparabilidad de los recursos y el TiVA, solo he utilizado los flujos comercializados internacionalmente, excluyendo los flujos exclusivamente nacionales. Se puede utilizar la siguiente ecuación para representar el drenaje del Sur valorado en precios del Norte:

$$T = R_{neto} * P_N - M_{neto} \quad ^5$$

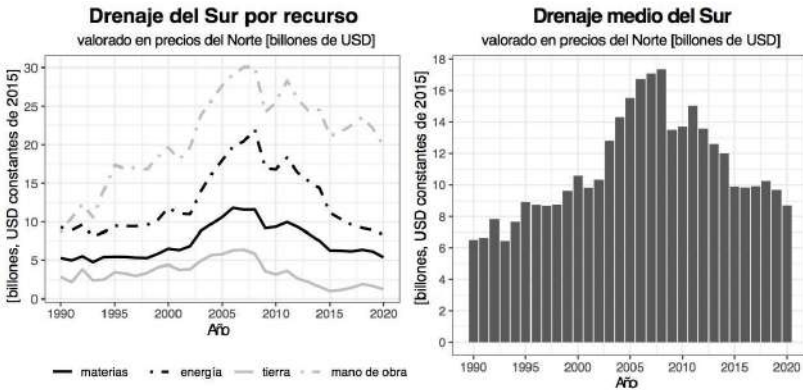
⁵ T = transferencias de valor mediante intercambios desiguales

R_{neto} = drenaje neto de recursos del Sur al Norte

P_N = precio de exportación del Norte por unidad de recurso

M_{neto} = transferencias monetarias netas del Norte al Sur

Figura 2. Drenaje del Sur representado en precios del Norte, billones de USD constantes de 2015, 1990-2020



Fuente: elaboración propia.

Nota: El gráfico de la izquierda muestra el drenaje en función de cada uno de los cuatro indicadores evaluados; el gráfico de la derecha muestra la media de estos cuatro flujos.

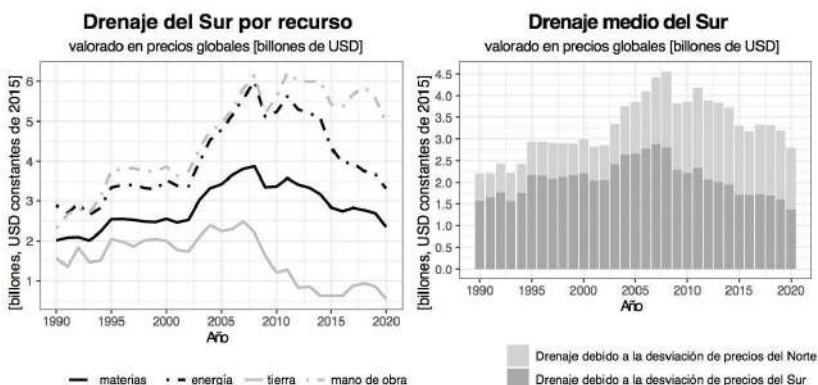
El gráfico de la izquierda de la Figura 2 muestra los resultados de esta ecuación cuando se aplica a los cuatro indicadores evaluados. Muestra que el uso de tierra, seguido del de materias, es el flujo de recursos incorporados que se compensa de forma más equitativa. Los dos más desigualmente compensados son la energía y la mano de obra incorporados. Al promediar el drenaje basado en estos cuatro tipos de flujos (gráfico de la derecha), se observa que el drenaje medio valorado en precios del Norte aumentó de unos seis billones de USD en 1990 a más de diecisiete billones de USD en 2008, tras lo cual volvió a disminuir a más de ocho billones de USD en 2020. A lo largo del periodo 1990-2020, este drenaje medio anual asciende a trescientos cuarenta y tres billones de USD y representa una importante ganancia imprevista para las economías del Norte.

Drenaje representado en precios mundiales

A título comparativo, evalúo aquí el drenaje del Sur valorado en precios mundiales, es decir, la compensación monetaria de las exportaciones (TiVA) por cualquier país (países del Norte y del Sur). De este modo, evalúo tanto el drenaje debido a la desviación del precio del Norte con respecto a este precio medio mundial como el drenaje debido a la desviación del precio del Sur con respecto al precio medio mundial. La siguiente ecuación es la base de este cálculo:

$$T = R_{neto} * P_M - M_{neto}^6$$

Figura 3. Drenaje del Sur representado en precios mundiales, billones de USD constantes de 2015, 1990-2020



Fuente: elaboración propia.

Nota: El gráfico de la izquierda muestra el drenaje basado en cada uno de los cuatro indicadores evaluados, el gráfico de la derecha muestra la media de estos cuatro flujos diferenciados por el drenaje debido a la desviación de los precios del Norte y el drenaje debido a la desviación de los precios del Sur.

6 T = transferencias de valor mediante intercambios desiguales

R_{neto} = drenaje neto de recursos del Sur al Norte

P_M = precio medio natural

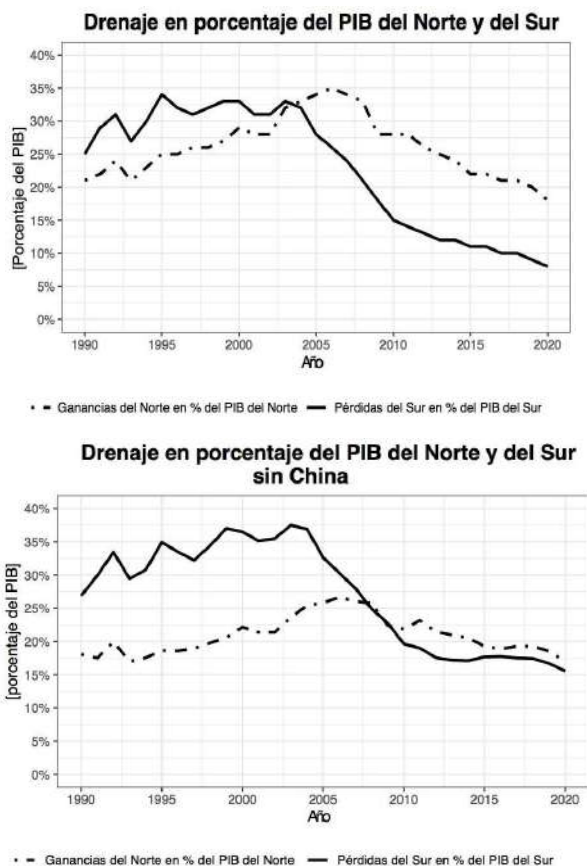
M_{neto} = transferencias monetarias netas del Norte al Sur

En el lado izquierdo de la Figura 3, el drenaje valorado en precios mundiales se distingue entre los cuatro parámetros evaluados y muestra de nuevo que la mano de obra y la energía son los insumos más desigualmente compensados, mientras que las materias y, en particular, la tierra, son más igualmente compensadas, lo que da lugar a un menor drenaje. Promediando estos cuatro tipos de drenaje, en el panel derecho de la Figura 3, el gris claro representa la parte del drenaje que se debe a la desviación de los precios del Norte por encima de la media mundial, mientras que el gris oscuro representa la parte que se debe a la desviación de los precios del Sur por debajo de la media mundial. En resumen, a lo largo de las tres décadas, el drenaje anual expresado en precios mundiales representó un beneficio total de unos ciento un billones de USD para el Norte global.

Drenaje en relación con el producto interior bruto (PIB)

Una vez evaluado el drenaje del Sur tanto en precios del Norte como en precios mundiales, para valorar su importancia para las respectivas economías, se pueden comparar los resultados (1) con el PIB del Norte en términos de precios del Norte para estimar la ventaja resultante para las economías del Norte, en contraste con un escenario contrafactual en el que la producción de los respectivos bienes se hubiera llevado a cabo en los países del Norte en lugar de externalizarla a los países del Sur; y (2) con el drenaje medido en precios mundiales con respecto al PIB del Sur, para ilustrar las pérdidas del Sur en comparación con un mundo de comercio igualitario.

Figura 4. Drenaje del Sur medido en precios del Norte como porcentaje del PIB del Norte y medido en precios mundiales (arriba), y la misma medición del drenaje excluyendo a China del Sur (abajo)



Fuente: elaboración propia.

De este modo, podemos ver en el gráfico de arriba de la Figura 4 que las ratios han sido significativas, sobre todo para el Norte. Como promedio, el drenaje del Sur global medido en precios del Norte ascendió al 26 % del PIB del Norte durante el periodo 1990-2020. Esto representa

una importante ganancia imprevista y un ahorro de costes para el Norte global. Para el Sur global, el drenaje medido en precios mundiales ascendió al 23 % del PIB del Sur en una tasa media anual durante las últimas tres décadas. Sin embargo, la ratio disminuyó de más del 30 % a principios de siglo y a menos del 10 % en 2020. Esto se debe a que el PIB del Sur aumentó considerablemente, sobre todo de 2003 a 2013, debido principalmente a China. Sin embargo, los diferenciales de precios (o, dicho de otro modo: los términos de intercambio —*terms of trade*—) entre el Norte global y el Sur global no convergieron.

Para esclarecer los efectos debidos únicamente al intercambio con China y al desarrollo de su PIB, el gráfico de abajo de la Figura 4 muestra el drenaje como porcentaje del PIB del Norte y del Sur excluyendo todos los intercambios con China y excluyendo también el PIB chino del “PIB del Sur”. Observando en primer lugar las ganancias del Norte como porcentaje del PIB del Norte, podemos ver que el drenaje del Sur disminuyó al excluir el intercambio desigual con China en una media del 5 % durante el periodo observado (en comparación con el gráfico de arriba). Sin embargo, al excluir el intercambio desigual con China, pero también su PIB del Sur global, se produce un aumento del drenaje del Sur como porcentaje del PIB del Sur en un 4 % de media entre 1990 y 2020. Esto significa que la exclusión de China del Sur global aumenta el drenaje como porcentaje del PIB del Sur hasta una media del 27 % durante el periodo observado.

Aun así, el Norte global también ganó con el drenaje de China, pero el punto álgido fue en 2006, cuando la diferencia entre las ganancias del Norte en porcentaje del PIB del Norte incluyendo el intercambio desigual con China frente a la exclusión de China fue de más del 8 % (comparando las dos líneas discontinuas en los gráficos de arriba y de abajo). Esta ratio se redujo al 1 % en los años 2019 y 2020.

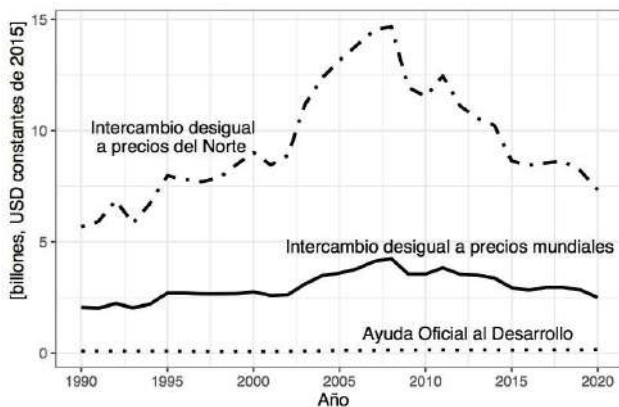
El PIB de China se multiplicó por más de 18 entre 1990 y 2020 y solo representaba el 9 % del PIB total del Sur en 1990, pero casi el 44 % en 2020. Sin embargo, si excluimos este espectacular aumento de la producción económica china del PIB del Sur global (gráfico de abajo), aún podemos observar una fuerte disminución de las

pérdidas del Sur como porcentaje del PIB del Sur entre 2003 y 2013. Este descenso se debe al aumento del PIB en otros países del Sur, ya que el drenaje representado en los precios mundiales no disminuyó en tal medida (comparar la parte derecha de la Figura 3).

Drenaje en relación con la ayuda oficial al desarrollo [AOD]

Para situar la magnitud del drenaje de recursos del Sur en otra perspectiva, cuestionando aún más la narrativa del Norte global que pretende ayudar a “desarrollar” el Sur global, comparo aquí el drenaje resultante del intercambio desigual con los flujos de ayuda oficial al desarrollo [AOD]. Para este análisis, se ha elaborado una nueva lista de países que distingue entre “donantes” (es decir, el Comité de Ayuda al Desarrollo [CAD]) y “receptores” de AOD. La lista de países está incluida en el apéndice.

Figura 5. Drenaje del Sur resultante del intercambio desigual expresado en precios del Norte y precios mundiales en comparación con la ayuda oficial al desarrollo (AOD), de 1990 a 2020, en billones de USD constantes de 2015



Fuente: elaboración propia.

Los resultados indican que la cuantía de la AOD parece extremadamente pequeña en relación con el drenaje resultante del intercambio desigual. Mientras que el drenaje medido en precios del Norte ascendió a una media anual de nueve billones y medio de USD entre 1990 y 2020, y en precios mundiales a tres billones de USD, la AOD se limitó a una media anual de 0,11 billones de USD. Es decir, el drenaje en precios del Norte supera a la AOD en un factor de 86, y el drenaje expresado en precios mundiales supera a la AOD en un factor de 27. Parece que reducir el intercambio desigual proporciona más palanca para crear un “terreno de juego equilibrado” que centrarse en aumentar la AOD.

Discusión y conclusión

Comencé el análisis empírico en este capítulo con evaluaciones del actual intercambio ecológicamente desigual a escala mundial. El análisis revela cómo el elevado consumo masivo y el crecimiento económico de los países del Norte global se alimentan del mantenimiento de un intercambio asimétrico de recursos y tiempo de mano de obra con el Sur global. Esta apropiación neta se constata para los tres indicadores de recursos y mano de obra evaluados y se aplica a todo el periodo evaluado. Esta continua reasignación de bienes y cargas medioambientales en la división internacional de la mano de obra y de la Naturaleza subraya la dependencia de recursos de las economías de renta alta respecto a las economías más pobres. Pero este intercambio ecológicamente desigual también implica que las personas y la Naturaleza del Sur global sufren de forma desproporcionada los daños medioambientales infligidos por la explotación de recursos al servicio directo e indirecto de los países más ricos. Como expresan Hickel et al., esta

[...] cantidad de materias primas, tierra, energía y mano de obra del Sur *podría* utilizarse para abastecer las necesidades humanas y

desarrollar una capacidad industrial soberana en el Sur, pero en lugar de ello se moviliza en torno a proporcionar consumo en el Norte global. (2022, p. 5)

El quinto indicador evaluado, el TiVA para representar la compensación monetaria a los precios de mercado vigentes, no solo muestra que los recursos y la mano de obra incorporados a las exportaciones del Sur global se compensan a niveles significativamente más bajos comparado con las exportaciones del Norte, sino también que este acceso desigual a los recursos productivos permite un TiVA total más elevado en los países del Norte, y esto es, mayores tasas de PIB, es decir, crecimiento económico. Esto también evidencia que el crecimiento es fundamentalmente una cuestión de apropiación y que el avance aparentemente neutro de la innovación tecnológica en el Norte depende de las diferencias en cómo se compensan los recursos naturales y el tiempo de mano de obra humana en las distintas partes del mundo (Hornborg, 2016).

El indicador TiVA se utilizó para representar estos diferenciales de precios, así como el drenaje monetario para los países del Sur y, al mismo tiempo, el beneficio monetario para el Norte global. Aunque las réplicas de los análisis realizados por Hickel et al. (2022) con la nueva base de datos GLORIA en este capítulo muestran, parcialmente, desviaciones debidas a un conjunto diferente de países y actualizaciones en las extensiones medioambientales de la nueva base de datos, los patrones generales de intercambio ecológicamente desigual y de drenaje monetario siguen siendo los mismos.

Si se mide el intercambio desigual en términos de precios del Norte, es decir, suponiendo que los países del Sur global fueran compensados con la misma cantidad que las exportaciones del Norte por unidad exportada de recurso incorporado o insumo de mano de obra, el drenaje —como promedio de los cuatro indicadores evaluados— del Sur global es extremadamente alto y asciende a más de trescientos cuarenta billones de USD en treinta y un años (1990-2020). Esto equivale aproximadamente al 26 % del PIB generado en el

Norte global durante el mismo periodo de tiempo. Así pues, el drenaje del Sur se traduce en un beneficio ecológico y económico directo para el Norte.

Si se expresa este intercambio desigual en términos de precios mundiales, es decir, si las exportaciones de los países del Norte y del Sur se compensaran con el precio medio mundial anual vigente en el mercado (por unidad de recurso o mano de obra incorporados), el drenaje del Sur sería menor, ya que los precios mundiales son mucho más bajos que los del Norte. Sin embargo, la hipótesis de un precio medio mundial también implicaría una menor compensación para las exportaciones del Norte. El drenaje medido en precios mundiales asciende a ciento un billones de USD entre 1990 y 2020, lo que corresponde, de media, al 23 % del PIB del Sur durante el mismo periodo (excluyendo a China, este porcentaje aumenta hasta el 27 %).

El análisis también indica que los cuatro indicadores evaluados (materias, energía, tierra y mano de obra incorporadas) son compensados de manera muy diferente. Los insumos de energía y de mano de obra son los que sufren las mayores desigualdades en términos de compensación. Por ejemplo, en 2020, los insumos de mano de obra incorporados en las exportaciones de los países del Norte global recibieron alrededor de ocho veces más compensación monetaria que la misma unidad de mano de obra incorporada en las exportaciones del Sur global. El argumento de que las diferencias en la compensación de los insumos de mano de obra se deben a la mayor productividad de los países del Norte global queda truncado. Más bien, la productividad laboral es una función de la apropiación previa de recursos que permiten la industrialización, la acumulación de infraestructura industrial y tecnológica, y la aparición de sectores de servicios en primer lugar. Además, como han argumentado Hickel et al. (2022, p. 9), “las desigualdades salariales no se deben a que los trabajadores del Sur sean menos productivos, sino a que se les explota más intensivamente”. Para un análisis más profundo de este tema, ver también Suwandi et al., 2019.

Sin embargo, lo que puede detectarse en la mayoría de las evaluaciones de este capítulo es que la intensidad del intercambio desigual disminuyó en algunos indicadores a partir de 2008 (comparar las Figuras 2 y 3). Esto se debe probablemente a las secuelas de la crisis financiera de 2008, pero también al aumento del comercio Sur-Sur y al crecimiento de las economías del Sur en general. No obstante, cabe señalar que el “Sur global”, tal y como se define en este capítulo, es muy heterogéneo. Incluye tanto a países como China como a todos los países menos desarrollados (he excluido a China de uno de los análisis presentados en la Figura 4 para aludir a esta cuestión).

Este capítulo también cuestiona las visiones dominantes del desarrollo sostenible y de la ayuda al desarrollo en general y del comercio internacional en particular. La ayuda oficial al desarrollo no parece ser más que una gota de agua en el océano si se compara con el drenaje estructural que experimenta anualmente el Sur global. La consideración de los aspectos biofísicos del comercio internacional y la actividad económica también sugiere que un desarrollo de tipo “para ponerse a la misma altura” es estructuralmente imposible en la mayor parte del mundo, ya que el elevado consumo masivo de los países del Norte depende de la externalización y de la apropiación neta de recursos de los mercados mundiales, lo que significa continuas entradas netas de recursos y mano de obra de las regiones más pobres.

Para ello, las vías de transformación hacia la sostenibilidad no solo deben tener en cuenta los límites naturales globales en los que operan nuestras economías, sino también las estructuras y la magnitud del intercambio desigual, con el fin de avanzar hacia la justicia global y una vida digna para todos.

Bibliografía

Amin, Samir. (1978). Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism. *Science and Society*, 42 (2).

Dorninger, Christian y Hornborg, Alf. (2015). Can EEMRIO Analyses Establish the Occurrence of Ecologically Unequal Exchange? *Ecological Economics*, 119, 414-18. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.08.009>

Dorninger, Christian; Hornborg, Alf; Abson, David J.; Von Wehrden, Henrik; Schaffartzik, Anke; Giljum, Stefan; Engler, John-oliver; Feller, Robert L., y Hubacek, Klaus. (2021). Global Patterns of Ecologically Unequal Exchange: Implications for Sustainability in the 21st Century. *Ecological Economics*, 179, Artículo 106824. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106824>

Feenstra, Robert C. (2015). *Advanced International Trade: Theory and Evidence*. Princeton: Princeton University Press.

Frey, R. Scott; Gellert, Paul K. y Dahms, Harry F. (2018). *Ecologically Unequal Exchange: Environmental Injustice in Comparative and Historical Perspective*. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Grossman, Gene M. y Helpman, Elhanan. (1991). Quality Ladders in the Theory of Growth. *The Review of Economic Studies*, 58 (1), 43-61.

Hickel, Jason; Dorninger, Christian; Wieland, Hanspeter y Suwandi, Intan. (2022). Imperialist Appropriation in the World Economy: Drain from the Global South through Unequal Exchange, 1990-2015. *Global Environmental Change*, 73, Artículo 102467.

Hornborg, Alf. (2014). Ecological Economics, Marxism, and Technological Progress: Some Explorations of the Conceptual

Foundations of Theories of Ecologically Unequal Exchange. *Ecological Economics*, (105), 11-18. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.05.015>

Hornborg, Alf. (2016). *Global Magic: Technologies of Appropriation from Ancient Rome to Wall Street*. New York: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137567871>

Hornborg, Alf. (2019). *Nature, Society, and Justice in the Anthropocene: Unraveling the Money-Energy-Technology Complex*. Cambridge: Cambridge University Press.

Johnson, Robert y Noguera, Guillermo. (2012). Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added. *Journal of International Economics, Elsevier*, 86 (2), 224-236.

Köhler, Gernot. (1998). The Structure of Global Money and World Tables of Unequal Exchange. *Journal of World-Systems Research*, 4 (2), 145-68.

Lenzen, Manfred; Moran, Daniel; Kanemoto, Keiichiro y Foran, Barney. (2012). International Trade Drives Biodiversity Threats in Developing Nations. *Nature*, 486 (7401), 109-12.

Lenzen, Manfred; Moran, Daniel; Kanemoto, Keiichiro y Geschke, Arne. (2013). Building Eora: a Global Multi-Region Input-Output Database at High Country and Sector Resolution. *Economic Systems Research*, 25 (1), 20-49. [10.1080/09535314.2013.769938](https://doi.org/10.1080/09535314.2013.769938)

Lenzen, Manfred; Geschke, Arne; Abd Rahman, Muhammad Daaniyall; Xiao, Yanyan; Fry, Jacob; Reyes, Rachel; Dietzenbacher, Erik; Inomata, Satoshi; Kanemoto, Keiichiro; Los, Bart; Moran, Daniel; Schulte in den Bäumen, Hagen; Tukker, Arnold; Walmsley, Terrie; Wiedmann, Thomas; Wood, Richard y Yamano, Norihiko. (2017). The Global MRIO Lab-Charting the World

Economy. *Economic Systems Research*, 29 (2), 158-86. <https://doi.org/10.1080/09535314.2017.1301887>

Lenzen, Manfred; Geschke, Arne; West, James; Fry, Jacob; Malik, Arunima; Giljum, Stefan; Milà i Canals, Llorenç; Piñero, Pablo; Lutter, Stephan y Wiedmann, Thomas. (2022). Implementing the Material Footprint to Measure Progress towards Sustainable Development Goals 8 and 12. *Nature Sustainability*, 5 (2), 157-66.

Martinez-Alier, Joan; Temper, Leah y Demaria, Federico. (2016). Social metabolism and environmental conflicts in India. En *Nature, Economy and Society* (pp. 19-49). Springer.

Piñero, Pablo; Bruckner, Martin; Wieland, Hanspeter; Pongrácz, Eva y Giljum, Stefan. (2019). The Raw Material Basis of Global Value Chains: Allocating Environmental Responsibility Based on Value Generation. *Economic Systems Research*, 31 (2), 206-27.

Prebisch, Raúl. (1950) *The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems*. United Nations Department of Economic Affairs, Economic Commission for Latin America [ECLA], New York. <http://archivo.cepal.org/pdfs/cdPrebisch/002.pdf>

Prell, Christina; Feng, Kuishuang; Sun, Laixiang; Geores, Martha y Hubacek, Klaus. (2014). The Economic Gains and Environmental Losses of US Consumption: A World-Systems and Input-Output Approach. *Social Forces*, 93 (1), 405-28. <https://doi.org/10.1093/sf/sou048>

Rodney, Walter. (1972). *How Europe Underdeveloped Africa*. London: Bogle-L'Ouverture Publications.

Suwandi, Intan; Jonna, R. Jamil y Foster, John Bellamy. (2019). Global commodity chains and the new imperialism. *Monthly Rev.*, 70 (10), 1-24.

Wallerstein, Immanuel. (1974). *The Modern World-System*. New York: Academic Press.

Wiedmann, Thomas y Lenzen, Manfred. (2018). Environmental and social footprints of international trade. *Nature Geosci*, 11, 314-321. <https://doi.org/10.1038/s41561-018-0113-9>

Wiedmann, Thomas; Schandl, Heinz; Lenzen, Manfred; Moran, Daniel; Suh, Sangwon; West, James y Kanemoto, Keiichiro. (2015). The material footprint of nations. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 112 (20), 6271-6276.

Enfrentando las deudas eternas desde el Sur

Miriam Lang, Alberto Acosta y Esperanza Martínez

*Resistencia de los pueblos que gritamos ¡libertad!,
es tiempo que reparen. Esto tiene que acabar.
Deudas que desangran nuestra tierra.
La erosión e inundaciones, la vida de la gente... No debemos nada
Las reglas son simples: deudas o destierro...*

Deudas eternas ¡basta!¹

Introducción

La deuda es una de las herramientas que, a lo largo de la historia, han servido para construir y reafirmar jerarquías y desigualdades de todo tipo. La deuda ha sido un poderoso medio de explotación, sometimiento y esclavización, que con el pase del tiempo ha adoptado diferentes caras.

El endeudamiento de los conquistadores y la servidumbre por deudas fueron pilares del sistema colonial en las Américas: exigir altos impuestos, prestar dinero con intereses a quienes no podían pagar y exigir que devolvieran los préstamos en forma de trabajo

¹ Rap “Deudas Eternas ¡Basta!”, producido por el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y Acción Ecológica (el vídeo, estrenado el 12 de octubre de 2020, se puede ver en: www.youtube.com/watch?v=OnPQX6tv3cM)

(Graeber, 2014). En la misma línea, investigaciones recientes revelan que aproximadamente una cuarta parte de las personas esclavizadas entre 1600 y 1800 lo fueron como consecuencia del endeudamiento (Spicksley, s. f.). Más tarde, luego de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, prácticas de préstamo racialmente discriminatorias fueron usadas sistemáticamente para prevenir que la población negra pudiera participar de la sociedad y de la economía en condiciones de equidad (Táiwó, 2022).

Así, la idea de “raza” sirvió para justificar “científicamente” la explotación diferenciada al trabajo de personas negras, indígenas o de color, expandiendo el poder imperial por el mundo y estableciendo diferentes formas de control sobre cuerpos y subjetividades para cada grupo y género humano. La deuda también tuvo su papel en la subordinación de trabajadorxs, de campesinxs, en la separación entre trabajo considerado “productivo” y otro considerado “reproductivo”, normalmente no remunerado, estableciendo así violentamente esferas de lo femenino y lo masculino, o en la separación entre sociedades humanas y la Naturaleza en la que estas están insertas. Y esas deudas, de una u otra manera, aparecen desde los orígenes de los estados modernos.

La deuda interviene reforzando las asimetrías entre diferentes actores y escalas, correspondientes a patrones de dominación y sus entramados interseccionales: el de clase, el de raza, el de género, la colonialidad, las relaciones sociedad-Naturaleza. Como nos enseñan las lecturas feministas, a pesar del postulado de neutralidad y abstracción que es propio del mundo de las finanzas, la deuda explota todas las diferencias sociales de manera muy concreta y situada (Cavallero y Gago, 2019).

Hay múltiples formas o tipos de deuda: la pública, la privada, la interna, la externa, la comercial, la monetaria y no monetaria; la personal, colectiva, familiar, colonial, racial, patriarcal, ecológica o climática. El concepto en sí habla de una obligación, moral o jurídica, de pagar o devolver algo. Pero a lo largo de la historia abundaron

las disputas acerca de las preguntas ¿quién le debe a quién? y ¿quién tiene el poder de definirlo?

Este capítulo se propone arrojar luz sobre los efectos y las intersecciones de varias formas de deuda, priorizando los entramados globales y las condiciones estructurales que generan aquellas interdependencias que están en la base de la geopolítica de la transición ecosocial. Lo central respecto del debate que plantea este libro es que la deuda dio forma a la división internacional del trabajo que estructura las relaciones entre los Nortes y los Sures del mundo, entendidos en su dimensión geopolítica, geoepistémica, geoeconómica y en su heterogeneidad geográfica. Se configura así en una poderosa herramienta de dominación provocando una injusticia global estructural.

La economía-mundo: una cancha claramente inclinada

La narrativa dominante respecto de la deuda, profundamente arraigada en las subjetividades, ubica la responsabilidad por el endeudamiento, así como sus consecuencias de todo tipo, en las clases populares, los grupos sociales racializados o los países del Sur global, categorizados como “en desarrollo”. Reza así: Es por su incapacidad, su irresponsabilidad, sus deficiencias y su implícita inferioridad que han tenido que endeudarse y no logran cancelar esos compromisos adquiridos libremente; los acreedores les *ayudan* generosamente y la deuda sería, por ende, legítima. Esta narrativa se construye sobre el supuesto imposible de que la economía mundial es un terreno de juego equilibrado, que el éxito depende únicamente del esfuerzo de cada persona —o de cada país—, y que, en el mercado mundial, los precios que se pagan resultan simplemente de la interacción entre oferta y demanda.

Sin embargo, en la práctica, algunas deudas se presentan como eternas. La deuda de la independencia latinoamericana demoró mucho en ser cancelada, en algunos casos más de siglo y medio. Se transformó en una deuda de la dependencia, quizás por efectos

hereditarios de una antigua maldición que se inició hace más de quinientos años, con el rescate del inca Atahualpa. Para conseguir su libertad, consciente de la codicia de los españoles, el monarca inca aceptó el millonario rescate impuesto por sus captores, el que, a la postre, no le salvó de ser ajusticiado. Solamente por el saqueo de oro y plata llegado a Europa procedente de América Latina entre 1503 y 1660 en los Archivos de Sevilla se registra un volumen de ciento ochenta y cinco mil kilos de oro y dieciséis millones de kilos de plata. Recursos que, llevados a valor presente, representarían una cantidad muy superior al valor total de la deuda externa de toda América Latina (Acosta, 2002). Y más tarde, a partir del enorme peso que representaron las deudas de la independencia, los países de la región, con diversos grados de intensidad, en medio de una larga y compleja historia de imposiciones y violencias, entraron de lleno en la vorágine de las deudas externas.

Existen muchas deudas ilegítimas o incluso odiosas. Muchas veces los acreedores toman conscientemente el riesgo de que no se les devuelva un préstamo. Fue el caso cuando en la década de 1970 se forjó la llamada crisis de la deuda que afectó tan duramente a América Latina durante los años 1980 y 1990. La elevada liquidez internacional que la originó no surgió simplemente como consecuencia del alza de los precios del petróleo. Su real punto de partida se encuentra en el impacto económico de la guerra de Vietnam y en la pugna comercial entre las grandes potencias. Según Aldo Ferrer, fueron los Estados Unidos los que originaron una nueva fase del proceso de endeudamiento: aprovechando su posición monetaria dominante, financiaron sus desequilibrios económicos *exportando* su moneda nacional. La liquidez se acumuló en los bancos centrales y se filtró progresivamente hacia la banca privada, aumentando su capacidad para conceder créditos (Ferrer, 1984). Luego creció el monto de recursos financieros con los petrodólares, los cuales, al no encontrar utilización productiva en el Norte, fueron canalizados hacia el Sur, tradicionalmente marginado de los mercados financieros internacionales. Los acreedores no tomaron en consideración la capacidad

de pago de los deudores, pues el negocio financiero radica en prestar, no en mantener los dólares guardados. Las tasas de interés bajas, inferiores a la inflación, eran una invitación para continuar endeudándose. Como narra David Graeber, “estos préstamos comenzaron a tipos de interés extraordinariamente bajos, solo para dispararse casi inmediatamente a tipos de más del veinte por ciento por las estrictas políticas de EE. UU. a principios de los ochenta” (Graeber, 2014).

Junto a los bancos asomó una multitud de compañías extranjeras, muchas de ellas transnacionales, que participaron activamente en la danza de los millones, vendiendo incluso tecnologías obsoletas o construyendo obras que por errores de diseño son verdaderos monumentos a la ineficiencia. Por ejemplo, una planta termonuclear por dos mil quinientos millones de dólares en Filipinas sobre terreno sísmico que no funciona; una fábrica de papel en Santiago de Cao en el Perú que no pudo operar por no tener suficiente agua, o una refinería de estaño en Karachipampa, Bolivia, que por estar ubicada a cuatro mil metros de altura, no tiene suficiente oxígeno para trabajar (Acosta, 2002). Estos y otros muchos proyectos hoy permanecen como un pasivo que debe ser pagado por los países pobres. En muchos, el costo final fue muy superior al inicialmente presupuestado. También la compraventa de armas muchas veces se financia con créditos externos. La lista de casos de corrupción relacionados a la deuda externa es enorme; se trata de una corresponsabilidad del acreedor y del deudor.

Así se crearon aquellas deudas impagables que permitieron luego al Fondo Monetario Internacional imponer sus programas de ajuste estructural, obligando a los países del Sur a desfinanciar sus sistemas de salud y educación pública, a abandonar las subvenciones a los alimentos básicos y privatizar su infraestructura, entregando así buena parte de su soberanía y volviéndose dependientes de nuevos préstamos en un círculo vicioso. Mientras tanto, el sistema de intereses compuestos garantizaba que, a pesar de que estos países ya hubieran pagado varias veces el monto nominal que debían, no se reducía su deuda.

Como lo hemos visto en múltiples ocasiones en las últimas décadas, mientras la ganancia se privatiza y se concentra en pocas manos, el costo de servir la deuda se suele socializar. Se torna una herramienta de redistribución desde abajo hacia arriba, una máquina de ensanchamiento de desigualdades. Fue el caso de los múltiples salvatajes bancarios, como los de los años 1990 en México o Ecuador, o los inducidos en EE. UU. y Europa por la crisis financiera de 2007/2008; crisis en la que las decisiones irresponsables de ciertos gerentes fueron reparadas con enormes sumas de dinero público de lxs contribuyentes, que ya no pudo ser empleado en la satisfacción de necesidades comunes.

En suma, la economía mundial está determinada por instituciones altamente injustas en sus estructuras internas y por una suerte de clubes exclusivos como la OCDE, el G7 o el Club de París. Los desequilibrios son especialmente marcados en las instituciones financieras globales como el Fondo Monetario Internacional [FMI] o el Banco Mundial [BM]: en ambos organismos Estados Unidos tiene poder de veto de facto sobre todas las decisiones importantes y, junto con el resto del G7 y la Unión Europea, controla bastante más de la mitad de los votos. Mientras los países de renta media y baja albergan el 85 % de la población mundial, tienen una participación solo minoritaria en los votos cuando se toman decisiones en el BM o el FMI. El antropólogo económico Jason Hickel señala también un fuerte desequilibrio racial en el gobierno de las finanzas mundiales: En promedio, los votos de las personas no blancas solo valen una fracción del peso de los de sus homólogos blancos (Hickel, 2021). Frente a esta realidad, no asombra que el filósofo afroamericano Olúfémi Táíwó caracterice al sistema mundo capitalista como un “imperio racial global” (Táíwó, 2022).

El ajuste estructural y el endeudamiento popular

En ese contexto, con la imposición de la razón neoliberal y una economía cada vez más global, se ha venido consolidando una verdadera economía de la deuda que no solamente alteró las formas de acumulación de capital, sino también las relaciones de clase y las posibilidades de acción política. Hablar del endeudamiento en su forma contemporánea implica no hablar solo del endeudamiento público o soberano (de la deuda tomada por los estados), sino también del endeudamiento de la gente en la vida cotidiana. La deuda se ha vuelto omnipresente, afecta hoy en día a miles de millones de personas de manera muy desigual (Federici, 2014). Existe un amplio consenso de que la introducción de esta economía de la deuda fue una estrategia para contrarrestar el auge de luchas sociales en las décadas de 1960 y 1970 que amenazaba las tasas de acumulación, una suerte de contrarrevolución del capital que impuso la razón neoliberal en la economía y en todas las demás esferas de la sociedad (Lander, 2002).

El desmantelamiento de las provisiones de los estados del bienestar en el Norte y la imposición de las medidas de ajuste estructural en el Sur llevaron a la privatización masiva del ámbito de la reproducción. Mediante ajuste estructural, el costo del servicio de la deuda se trasladó a los sectores más empobrecidos de la población, que intentaron solventar sus economías cotidianas mediante el endeudamiento, dado que la educación e incluso los servicios de salud ya solo eran accesibles vía préstamos (Federici, 2014).

Esta privatización del ámbito reproductivo coincidió con el momento histórico en el que una proporción significativa de las mujeres, antes confinadas al mundo *privado* del trabajo reproductivo y de cuidados, invisible y carente de reconocimiento, accedió al trabajo remunerado. Así, su inclusión al mercado de trabajo pagado sucedió a la par del gran retroceso neoliberal en derechos y garantías laborales, arrojándolas a condiciones de precariedad. Con el tiempo se multiplicaron las llamadas deudas “no bancarias” por medicamentos,

alquileres, servicios de luz, agua, gas, etcétera, a la vez que la proporción de mujeres entre la población empobrecida creció. Silvia Federici, Verónica Gago y Lucy Cavallero constatan que también allí hubo una suerte de contrarrevolución, una respuesta desde arriba a las luchas feministas: “La invasión de las finanzas en la reproducción social que se dirige especialmente a economías feminizadas responde a la disputa feminista por el reconocimiento de tareas históricamente devaluadas, mal pagas e invisibilizadas y a un deseo de autonomía económica” (Federici et al., 2021). La llamada “inclusión financiera” o “alfabetización financiera” de las clases medias y también populares no solamente las puso a la merced de los bancos y sus condiciones, sino que terminó despojándoles de un mecanismo común: entre el siglo XIX y la segunda posguerra, como señala Federici, la cultura obrera incluía el fiado en la tienda de la esquina o préstamos mutuales para llegar al día de paga, que era una manera de circular los escasos recursos de manera solidaria. Esto terminó con la bancarización de la deuda y sus exigencias de garantías como estrategia de despojo y expropiación (Federici, 2014).

El hecho de que no quede otra opción que endeudarse para vivir, que fue agravado aún más con la pandemia de la COVID-19, opera como una herramienta productiva, ya que obliga a trabajar cada vez más, a la vez que vampiriza la energía social y transformadora e individualiza a través del sentimiento de culpa (Federici et al., 2021). Así, el endeudamiento tiene poderosas implicaciones de género. No solamente tiene una relación específica con las tareas de reproducción, también afecta sobreproporcionalmente a las mujeres y cuerpos feminizados, como madres solteras o jefas de hogar, y se articula con las violencias patriarcales.

Reivindicando la deuda ecológica

Al finalizar el siglo XX, desde América Latina se levantaron muchas voces para desafiar el discurso dominante de la deuda y la injusticia

global; cabe destacar que en el Norte global también algunos grupos se hicieron eco de respaldo a estos reclamos, como sucedió en varios países europeos y en los mismos Estados Unidos. Comenzó a cuestionarse esta estructura de dominación, planteando inclusive el reclamo de la deuda ecológica (Acosta, 1997). “¡No somos deudores, somos acreedores!” fue el lema del Encuentro Latinoamericano y Caribeño realizado en Ecuador en 2007, que planteó que a la deuda externa, ya múltiples veces retribuida, se le contrapone una inmensa deuda ecológica, histórica y colonial, que en realidad los países industrializados les deben a los pueblos del Sur (Yáñez y Donoso, 2008).

En años recientes, se ha avanzado en metodologías que permiten cuantificar, al menos simbólicamente y para fines políticos, esta deuda que el Norte le debe al Sur, en el contexto de lo que se ha llamado intercambio comercial y ecológicamente desigual. El artículo de Christian Dorninger en este libro es un ejemplo. Otros autores demuestran, en perspectiva más histórica, que el progreso tecnológico en el Norte a partir de la revolución industrial no fue consecuencia de la genialidad de ciertos hombres blancos, sino que algunos inventos se impusieron porque, gracias al sistema de esclavitud que proporcionaba mano de obra gratuita y materia prima barata, resultaron ser muy rentables en su momento (Hornborg, 2016). Otros, a su vez, desmienten algunos mitos respecto de las desigualdades Norte-Sur. Por ejemplo, que las exportaciones del Norte tienen un mayor “valor añadido” porque incorporan una mayor productividad laboral. En realidad, los datos empíricos indican que las diferencias reales de productividad entre los trabajadores son mínimas y no pueden explicar las desigualdades salariales entre Nortes y Sures. Más bien, estas se deberían al mayor poder de negociación cuasi-monopólico de las empresas y gobiernos del Norte a la hora de determinar los precios de sus exportaciones (Hickel et al., 2022).

Todo lo anterior lleva a concluir que no habrá justicia social sin justicia global, y que plantear justicia social a nivel de países individuales es insuficiente: los estados-nación nunca fueron ni son hoy en día circuitos cerrados, sino que su prosperidad o su disfuncionalidad

se han generado en interdependencia a lo largo de la historia. La prosperidad de unos, como ya advertían los teóricos de la dependencia, se construyó sobre el saqueo y la subordinación de los otros.

Esta interdependencia condiciona fuertemente las condiciones de una transformación ecosocial con justicia en sus múltiples dimensiones. No las capacidades o la institucionalidad de un país o de su población. En palabras de Táíwó, “una nación colonizada está literalmente regulada por una entidad externa, y no por su sistema de gobierno interno, mientras que lo que una nación colonizadora ofrece a sus ciudadanos depende directamente de lo que extraen de las colonias” (Táíwó, 2022). Una nación altamente endeudada se encuentra en una situación muy similar.

En torno a las Conferencias de las Partes que se celebran desde hace tres décadas anualmente en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, sin lograr efectivamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se ha generado la demanda de justicia climática. De esta manera se quiere evidenciar que los países industrializados desde hace siglos tienen una responsabilidad mucho mayor en haber contribuido al calentamiento global que los países del Sur. En este contexto, el concepto de deuda climática se derivó de la deuda ecológica que es un concepto más abarcativo.

Aunque en la COP 27 en Egipto se acordó finalmente instaurar un fondo para compensar las pérdidas y daños de los países más afectados por el cambio climático, resta por ver si la instrumentación de este mecanismo no genera nuevos endeudamientos de los países receptores, por ejemplo, si los fondos son entregados como préstamos, bajo una lógica bastante común en lo que se denomina financiamiento climático en el marco del sistema financiero mundial. Además, en muchas partes del mundo se han puesto nuevamente en boga los canjes de deuda por clima o por naturaleza, que, bien sabemos, no resuelven ni el tema de la deuda ni consiguen aportar con significativos recursos para sostener las políticas ambientales. Son acuerdos que generalmente ponen a las políticas ambientales

de los países endeudados bajo el control de los organismos financieros internacionales, y que permiten a los países más contaminantes contabilizar estos canjes dentro de sus “Contribuciones Nacionales Determinadas” para sí mismos bajo el Acuerdo de París de 2015. Todo esto hace que toda la acción climática efectiva recaiga sobre el país deudor, mientras los históricos colonizadores, acreedores y contaminadores aparecen como si hubiesen cumplido con sus obligaciones. En la disputa por los mecanismos que regirán el fondo de pérdidas y daños, es clave incluir la perspectiva de la deuda ecológica, así como considerar la soberanía de los países del Sur sobre sus propios procesos de transición ecosocial. Aunque las nociones de deuda ecológica y deuda climática han circulado ampliamente, y aunque muchas organizaciones y movimientos sociales han reclamado la justicia ambiental y justicia climática, no se ha avanzado significativamente en su implementación política. Esta supondría, como lo planteó recientemente el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, la anulación de las deudas externas de los Sures como un primer paso, con base en el reconocimiento de siglos de apropiación colonial y de intercambio ecológicamente desigual, que perdura hasta la actualidad.

En lugar de reconocer, en términos sociales y civilizatorios, el enorme aporte de la Naturaleza y del trabajo feminizado de cuidados a los ciclos productivos y al sostenimiento de la vida, el pensamiento económico dominante ejecutó el movimiento inverso: a nombre de *valorar* estos aportes, los transformó en nuevas mercancías para extraerles valor monetario y generar así nuevas oportunidades de acumulación. Poco después de la Cumbre de la Tierra en Río 1992, se inventó el mecanismo de “canje de deuda por conservación” (Salvador et al., 1990; Moncada y Cuéllar, 2004), que vincula la supuesta obligación de los países del Sur de pagar su deuda externa con otra obligación adicional para ellos: la de conservar sus bosques y su biodiversidad para intereses ajenos, por ejemplo, en el contexto de la compensación de emisiones (Salleh, 2009). Se reduce la deuda externa nominalmente, pero grupos de la plutocracia ambiental de los países deudores adquieren a cambio, en complicidad con los

acreedores, el derecho de injerencia sobre las políticas ambientales, sobre la relación de los pueblos con sus territorios y también sobre los modos concretos de conservación. De esta manera, este mecanismo termina siendo una nueva estrategia de apropiación neocolonial que refuerza las relaciones de poder entre acreedores y deudores, disfrazada, como tantas veces, de una solución *ganar-ganar*.

Hace casi tres décadas que las negociaciones climáticas multilaterales no han logrado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que aumentan año a año. El reconocimiento de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” entre países industrializados y los del Sur global que existía en el protocolo de Kyoto, sin demasiada trascendencia en la práctica, desapareció en el Acuerdo de París. Los países industrializados se niegan a reconocer su responsabilidad histórica en el calentamiento global y a asumir las consecuencias redistributivas que se derivan de esta. Y tienen el poder de negociación necesario para hacer primar su punto de vista. En la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático COP 27 en Egipto, en 2022, se acordó un mecanismo de pago de daños y pérdidas a los países más afectados por desastres, sin que haya quedado claro si tendrá suficientes fondos ni bajo qué lineamientos y criterios estos fondos serían desembolsados. En la actualidad, buena parte del financiamiento climático se canaliza en estrecha cooperación con el Banco Mundial y resulta en nuevos endeudamientos para los países receptores (Schumacher, 2021). De esta manera, se cierra un círculo perverso que se inicia con acumulación originaria, continúa con la acumulación por desposesión y se proyecta con la acumulación por conservación.

Las perspectivas de que la anulación de las deudas externas y el pago de la deuda climática se puedan operacionalizar mediante las instituciones internacionales existentes tampoco son muy alentadoras. Es cierto que, a inicios del 2020, bajo el primer impacto de la pandemia, ciertos personajes destacados como el Papa Francisco y el presidente francés Emmanuel Macron propusieron reducir o incluso condonar la deuda de los países más pobres (Gozoa, 2020). Pero la

carrera geopolítica entre las grandes potencias mundiales las incita a siempre buscar su propio beneficio en última instancia.

También a nivel de subjetividades, en las poblaciones del Norte geopolítico, está muy arraigada la convicción implícita que, de alguna manera, ellxs merecen vivir mejor, con mayor seguridad frente a todo tipo de amenazas, con mejores prestaciones sociales e instituciones más eficientes que las poblaciones racializadas del Sur. Esta noción de superioridad implícita, basada en la introyección del modo imperial de vida, opera como una suerte de gramática cultural, un sustrato invisible que tomó forma a lo largo de los siglos. Los movimientos y partidos militantemente antimigratorios son solamente la expresión más radical de este sentir, que se basa en lo que Aníbal Quijano llamó de patrón colonial del poder. Se basa en una justificación cruelmente tautológica: porque se vive mejor y siempre ha sido así, “naturalmente” se tiene derecho a vivir mejor. Esto complica la viabilidad política de la construcción de justicia global desde el Norte.

Cuestionando la (i)lógica de las deudas “eternas”: posibles estrategias de reparación

Un primer paso hacia la justicia global es, sin duda, la desobediencia frente a la deuda. Organizarse para no pagar, sea a nivel de barrio, a nivel nacional o a nivel regional.

Para avanzar en el cobro de la deuda climática o de la deuda ambiental, ambas estrechamente imbricadas con la deuda colonial, quizás hace falta pensarlo desde abajo, desde una multiplicidad de actores, en lugar de esperar que se resuelva al nivel multilateral oficial, cada vez más copado por las corporaciones (ver el artículo de Mary Ann Manahan en este libro). Repensando solidaridades, exigiendo desde los Sures dejar atrás la lógica de compensación que solo “ayuda” cuando resulta en un beneficio propio, por ejemplo, el derecho a seguir emitiendo gases de efecto invernadero.

El mundo por construir opera por fuera del individualismo posesivo, sus hilos conductores son la reciprocidad y el sentimiento de justicia. La reducción absoluta de emisiones de GEI es imperativa y solamente se puede alcanzar saliendo de la dinámica de compensaciones. Construir relaciones horizontales entre pueblos, entre municipios, entre organizaciones dispuestas a asumir esta perspectiva de la deuda ecológica, es decir, iniciar con la retribución incondicional por siglos de saqueo, está al orden del día. Esto no implica, en absoluto, abrir paso a la llamada “responsabilidad social empresarial”: las corporaciones, desde su andamiaje legal, son entes guiados estrictamente por la rentabilidad, y la rentabilidad es lo que nos ha llevado al colapso.

Otro aspecto importante es salir de la centralidad del dinero que rige la civilización capitalista. Aunque se hable de deuda, sea esta colonial, ambiental o climática, no se trata solamente de organizar grandes flujos de dinero del Norte al Sur, ni de país a país, ni hacia comunidades o individuos. El dinero es el lenguaje del capitalismo, sirve en primer lugar para reforzar las relaciones capitalistas que justamente tenemos que desmontar. En lugar de restringir la mirada al *pago* de la deuda, es importante introducir al debate las nociones de restitución y de reparación. Olúfémi Táíwó propone una perspectiva constructiva sobre reparaciones. Reparaciones que, aunque son motivadas por injusticias pasadas, en su operacionalización no apuntan ni a la reconciliación ni a la redención. Apuntan, más bien, a rehacer el mundo en otros términos, con otras reglas del juego y otras estructuras, a “crear un orden político completamente nuevo, caracterizado por la autodeterminación, la no dominación y la solidaridad” (Táíwó, 2022). Esto incluye, por supuesto, construir otra economía (Acosta y Cajas Guijarro, 2018; Acosta y Cajas Guijarro, 2021) con estructuras económicas internacionales radicalmente distintas (Acosta y Cajas Guijarro, 2020).

Se trata entonces de restituir en la medida de lo posible lo que se quitó o destruyó, en todas sus dimensiones, materiales, ambientales y simbólicas. Por ejemplo, restituir la soberanía de tomar

decisiones colectivas democráticamente sobre el propio futuro, de manera situada y apropiada a cada contexto en territorios de diversidad cultural; restituir la soberanía sobre el territorio y la soberanía alimentaria; la soberanía sobre la política económica por fuera del yugo de la deuda externa; restituir y reconocer los modos de vida que giran alrededor de la calidad de las relaciones y del equilibrio entre humanos y con la Naturaleza, en lugar de poner al centro la acumulación de dinero y la concentración de poder. De la misma manera que el colonialismo y la colonialidad del poder, la economía global y la financiarización han constituido cierto tipo de mundo (Getachew, 2018), debemos construir una resistencia que sea a la vez constitutiva de otro mundo.

Bibliografía

Acosta, Alberto. (1997). La deuda externa acrecienta la deuda ecológica. *Revista Ecología Política*, (14). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=153342>

Acosta, Alberto. (2002). La increíble y triste historia de América Latina y su perversa deuda externa. https://www.lainsignia.org/2002/diciembre/econ_019.htm y https://www.lainsignia.org/2002/diciembre/econ_022.htm

Acosta, Alberto y Cajas Guijarro, John. (2018). Reflexiones sobre el sin-rumbo de la economía-De las “ciencias económicas” a la posteconomía. *Ecuador Debate*, 103.

Acosta, Alberto y Cajas Guijarro, John. (2020). Del coronavirus a la gran transformación - Repensando la institucionalidad de la

economía global. En Pablo Amadeo (ed.), *Posnormales-Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias*. ASPO.

Acosta, Alberto y Cajas Guijarro, John. (2021). Naturaleza, economía y subversión epistémica para la transición. Buscando fundamentos biocéntricos para una poseconomía. En Günter, Griselda y Meireles, Monika (coords.), *Voces Latinoamericanas. Mercantilización de la naturaleza y resistencia social*. México: UAM-Xochimilco.

Cavallero, Lucy y Gago, Verónica. (2019). *Una lectura feminista de la deuda*. Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburgo.

Federici, Silvia. (2014). From Commoning to Debt. Financiarization, Microcredit, and the Changing Architectures of Capital Accumulation. *The South Atlantic Quarterly* 113 (2), 231-244.

Federici, Silvia; Gago, Verónica y Cavallero, Luci (eds.). (2021). ¿Quién le debe a quién? Ensayos transnacionales de desobediencia financiera. Buenos Aires: Tinta Limón / Fundación Rosa Luxemburgo.

Ferrer, Aldo. (1984). Deuda, soberanía y democracia en América Latina. *Estudios Internacionales*, 17 (67), 309-323. <https://doi.org/10.5354/0719-3769.1984.15797>

Getachew, Adom. (2018). *Worldmaking after Empire: The Rise and Fall of Self-Determination*. Princeton University Press.

Gozoa, Rodrigue (22 de abril de 2020). Dette des pays pauvres: Macron échange avec le pape François. *La Nouvelle Tribune*. <https://lanouvelletribune.info/2020/04/dette-des-pays-pauvres-macron-echange-avec-le-pape-francois/>

Graeber, David. (2014). *En deuda: una historia alternativa de la economía*. Barcelona: Editorial Ariel.

Hickel, Jason (7 de enero de 2021). Apartheid in the World Bank and IMF. Exploring banking, race and colonialism. *Positive money*.

<https://positivemoney.org/2021/01/apartheid-in-the-world-bank-and-the-imf>

Hickel, Jason; Dorninger, Christian; Wieland, Hanspeter, y Suwandi, Intan (2022). Imperialist appropriation in the world economy: Drain from the global. South through unequal exchange, 1990-2015. *Global Environmental Change*, 73, 1-13.

Hornborg, Alf. (2016). *Global Magic. Technologies of Appropriation from Ancient Rome to Wall Street*. London: Palgrave Macmillan.

Lander, Edgardo. (2002). La utopía del mercado total y el poder imperial. *Revista Venezolana de Sociología*, 8 (2), 51-79.

Moncada, Martha y Cuéllar, Juan Carlos. (2004). *El peso de la deuda externa ecuatoriana y el impacto de las alternativas de conversión para el desarrollo*. Quito: Abya-Yala.

Salleh, Ariel. (2009). Ecological Debt: Embodied Debt. En *Eco-Sufficiency and Global Justice. Women write Political Ecology*. London: Pluto Press.

Salvador, Mónica; Posso, Roberto; Hollihan, Michael, y Tobar, Bayardo. (1990). *Mecanismos de conversión de deuda-Alcances y limitaciones*. Quito: FONDAD CAAP.

Schumacher, Juliane. (2021). *Green New Deals*. Bruselas: Rosa Luxemburg Stiftung.

Spicksley, Judith (s. f.). *Debt, poverty and slavery*. University of Hull. <https://www.hull.ac.uk/research/institutes/wilberforce/debt-poverty-and-slavery-in-historical-perspective>

Táíwó, Olúfémi. (2022). *Reconsidering Reparations*. New York: Oxford University Press.

Yáñez, Ivonne y Donoso, Aurora. (2008). *Sur, soberanía y dignidad: No Somos Deudores, Somos Acreedores*. Quito: Acción Ecológica.

¿Qué esperar del estado en las transformaciones socioecológicas?

Ulrich Brand y Miriam Lang

Introducción

La forma más fácil de imaginar transiciones ecosociales justas es recopilar una larga lista de políticas públicas que aplicarían los estados nacionales. Pero, ¿hasta qué punto es esto realista o ciego a la experiencia histórica y a las relaciones de poder concretas de la sociedad? A lo largo de la historia, las fuerzas emancipadoras han encontrado serios obstáculos a la hora de apostar por el estado como actor principal de las transformaciones. Las experiencias históricas de los movimientos anticoloniales y su “conversión en estado” son un ejemplo destacado: al convertirse en estados partes, las fuerzas anticoloniales del Sur global renunciaron en su mayoría a sus antiguos ideales revolucionarios y anticapitalistas (Hobsbawm, 1994). Otro ejemplo son los límites que ha encontrado la política socialista en el bloque soviético, que, en retrospectiva, difícilmente puede enmarcarse como emancipadora. Los partidos socialdemócratas y los estados del bienestar en el Norte global serían un tercer ejemplo: contribuyeron a la mejora material de las condiciones de vida de las

masas y a su integración política en un proyecto de crecimiento capitalista acelerado, a costa de la mayor parte del Sur global y de los ecosistemas globales (Bhambra y Holmwood, 2018; Steffen et al., 2015). En particular, en América Latina, las experiencias de los gobiernos progresistas entre 1999 y 2014, pero también de los actuales gobiernos de izquierda o centroizquierda, como en Chile o Brasil, muestran elocuentemente que la política ecosocial no es solo una cuestión de acción estatal adecuada (Gaudichaud et al., 2019). Lo que es difícil de aceptar para las fuerzas emancipadoras es que existe una clara tendencia a que, en momentos de crisis, el estado intervenga más bien a favor de los intereses económicos y políticos dominantes.

Hoy en día, en aquellos países en los que el capital y las tecnologías “verdes” están suficientemente desarrollados y son competitivos a escala internacional, experimentamos una transformación hacia un “estado ecocapitalista”. Esto no significa en absoluto que la crisis ecológica cada vez más profunda y las injusticias asociadas estén resueltas, sino únicamente que las fracciones relevantes del capital, lxs trabajadorxs y sus organizaciones, la ciencia dominante, el público, los consumidores y también el estado, pretenden abordar ciertos aspectos de la crisis ecológica. Pero esta transformación tiende a producirse en las condiciones establecidas por las fuerzas dominantes, una constelación que Gramsci denominó “revolución pasiva” (Gramsci, 1971; Ryner, 2021).

Por otro lado, en las propuestas del Nuevo Pacto Verde (Green New Deal [GND]) elaboradas por distintas constelaciones de la izquierda del Norte global, las ideas de dirección política suelen estar moldeadas por perspectivas (eco)keynesianas. El estado, o las instituciones de la Unión Europea [UE], se entienden sobre todo como reguladores, responsables políticos y mecanismos de redistribución que impulsarían los procesos de transformación socioecológica en las correspondientes condiciones políticas y gubernamentales de la izquierda.¹ Los

¹ También resulta sorprendente y políticamente muy problemático que casi todos estos planteamientos liberales y de izquierdas dejen de lado la dimensión internacional e imaginen las transiciones ecosociales a escala nacional o de la Unión Europea.

debates actuales y las estrategias políticas en torno a un “Pacto Verde Europeo” o un “Nuevo Pacto Verde” [GND] más izquierdista sugieren, a pesar de diferencias muy significativas, que el estado podría (re) asumir un papel mucho más prominente invirtiendo masivamente en infraestructuras y energías renovables o introduciendo impuestos fronterizos relacionados con las emisiones (Comisión Europea, 2019; ver también la visión general de las diferentes propuestas del Nuevo Pacto Verde en Schumacher, 2021).

El hecho de que el estado sea un interlocutor principal cuando se trata de preocupaciones socioecológicas constituye una paradoja que es necesario comprender. Porque, en primer lugar, hay que reconocer que el estado es uno de los principales impulsores de la actual escalada de crecimiento económico y de los modelos insostenibles de producción y consumo.

La reciente revalorización del estado se limita sobre todo al nivel de las propuestas políticas, a veces con una referencia crítica al lado favorable al capital y represivo del estado. Pero no se desarrolla una comprensión crítica del estado (o de instituciones supranacionales como la UE). No se asume su carácter dominante, estructuralmente selectivo y multiescalar, y rara vez se cuestiona la economía política centrada en el imperativo del crecimiento capitalista. Este es el tema central de este capítulo, que también pretende desarrollar argumentos y conceptos para comprender mejor esta entidad vaga y ambigua que llamamos “estado”. Examinar estos obstáculos al cambio, las contradicciones en el seno de los modelos dominantes que reproducen las relaciones sociales capitalistas y los puntos de entrada para las transformaciones socioecológicas, es la fuerza de un pensamiento crítico que evita una visión centrada en el estado (que caracteriza a la mayoría de los enfoques científicos sociales y filosóficos) y examina también las propias sociedades que encarnan y posibilitan el estado, y que también, en parte, están estructuradas por él (ver también Lang, 2022 y Brand, 2016).

Comprender el estado

Por supuesto, reflexionar sobre “el estado” es complicado, porque las manifestaciones históricamente concretas del estado son muy diferentes.² Los estados de Bolivia, China, Alemania, Rusia o Tanzania son difíciles de comparar, más aún desde una perspectiva crítica, en la que el estado no se considera un regulador más o menos neutral y un fijador de marcos para la economía y la sociedad, sino que se entiende como entretejido con las sociedades, las culturas y las economías. Pero a pesar de esas diferencias, que hay que reconocer y que se discutirán más adelante, las teorías histórico-materialistas del estado nos ayudan a comprender algunas características centrales del estado capitalista y sus ambigüedades, que esbozamos en los siguientes párrafos.

Para empezar, el estado es una relación de dominación, separada de la economía y la sociedad capitalistas, pero intrínsecamente ligada a ellas. Su “función general”, como señaló Nicos Poulantzas, es asegurar las condiciones del modo de producción capitalista: las condiciones para la acumulación, como la disponibilidad de asalariados, recursos naturales, infraestructuras, dinero y un cierto orden y estabilidad (Poulantzas, 1978). Al mismo tiempo, sin embargo, el estado no es simplemente el “instrumento del capital” (porque el capital suele actuar en condiciones de competencia con tendencias monopolísticas), sino que mantiene una cierta “autonomía relativa” para asegurar el capitalismo como tal y no para servir a fracciones distintas y concretas del capital.

Esto se hace evidente cuando pensamos en la base material con la que cuentan los estados: consiste en gran parte en impuestos y aranceles recaudados de la producción capitalista de mercancías y en los impuestos directos e indirectos de los asalariados. Por lo

² Además, en los debates centrados en el estado, este se confunde a menudo con el gobierno, asumiendo un mero proceso descendente de elaboración de políticas y dejando de lado todas las complejidades, conflictos y contingencias de los aparatos estatales.

tanto, el estado no es una entidad autónoma “por encima” del resto de la sociedad, sino parte integrante de ella. Tampoco representa una “voluntad general” social preexistente, porque los intereses sociales están demasiado divididos. Muchas luchas sociales pretenden que determinados intereses se “generalicen” a través del estado (por ejemplo, como parte de la dinámica hacia el capitalismo y el colonialismo verdes), es decir, que se impongan también a otros intereses y se promuevan y garanticen mediante políticas estatales.

Además, el capital no es un actor homogéneo, sino que está lleno de tensiones y conflictos. Las estrategias de acumulación pueden contradecirse entre sí, por ejemplo, orientarse más hacia el mercado mundial o hacia el mercado interior. Por lo tanto, otra función central del estado es organizar políticamente al capital y, en cierto modo, desorganizar a las clases subalternas. Sin embargo, también los intereses de lxs asalariadxs o de lxs subalternxs están parcial y asimétricamente inscritos en el estado (como resultado de luchas anteriores).

El estado depende de una economía capitalista en funcionamiento, ya sea de la producción de excedentes absolutos o relativos, ya sea de la renta, por ejemplo, la venta de concesiones a empresas mineras o petroleras. Los estados realmente existentes forman parte del régimen de crecimiento capitalista dominante, que pone en práctica formas de dominación y explotación basadas en la clase, el género y la raza, así como formas globales de dominación y explotación.

Los enfoques histórico-materialistas subrayan cómo los principios estructurales centrales del capitalismo global impregnan y conforman las estructuras y procesos estatales. Por ejemplo, la propiedad privada sobre los medios de producción, que implica intereses sociales contrapuestos y antagónicos; o el impulso inherente del capital hacia la acumulación mediante la maximización de los beneficios, debido a la presión competitiva. Esto se corresponde con un imperativo de crecimiento inherente que, en principio, es indiferente a sus consecuencias ecológicas. En las condiciones de la globalización económica neoliberal, las empresas transnacionales compiten

a escala mundial, y mantener y aumentar la competitividad internacional se ha convertido en uno de los principales objetivos políticos de los estados-nación, a menudo a costa de una regulación medioambiental más estricta.

El estado no es un regulador neutral, sino que está muy entrelazado con múltiples relaciones sociales. Tampoco es solo un actor entre otros, como sugieren los debates más recientes sobre “gobernanza” (ver el capítulo de Mary Ann Manahan en este libro). Es el terreno central de las relaciones de poder de la sociedad en el que las fuerzas sociales dominantes se organizan llevando a cabo sus conflictos, guiadas por las normas. En consecuencia, las relaciones de poder entre las fuerzas sociales y los actores políticos específicos se inscriben históricamente en la estructura política del estado, por lo que las instituciones estatales constituyen una “condensación material” de dichas relaciones de poder (Poulantzas, 1978).

Esto también es un punto de entrada para las reivindicaciones y las fuerzas emancipadoras. Se debe observar sin ninguna inocencia. Las reivindicaciones emancipadoras y los conflictos relacionados con ellas en torno a políticas concretas o a la orientación general de la política se libran en un terreno institucional preestructurado y asimétrico. Esto significa que determinadas estrategias e intereses gozan de un acceso privilegiado, históricamente desarrollado y arraigado, a los ámbitos decisivos clave: las llamadas selectividades estructurales y estratégicas (Jessop, 2007).

Sin embargo, el estado no solo puede entenderse como un terreno asimétrico de luchas, sino también como un sistema que puede bloquear intereses poderosos y dar a las reivindicaciones y logros emancipadores o ecosociales cierta durabilidad (Lang y Brand, 2015): dejar el petróleo en el suelo, detener el funcionamiento de las centrales nucleares y el uso de transgénicos, permitir la expansión del transporte público sostenible y las transiciones energéticas democráticas, crear normas y actuar contra la violencia de género o racializada, crear un sistema educativo que forme parte de las transformaciones de las que hablamos, introducir un sistema fiscal que

las apoye, etcétera. Esto puede promoverse mediante la generación de normas vinculantes, limitando las dinámicas destructivas impulsadas por las estructuras de poder existentes, y dedicando recursos a promover procesos socioecológicos como el establecimiento de sistemas de aprovisionamiento e infraestructuras socioecológicas que no se guíen por el lucro.

La teoría crítica del estado también destaca un aspecto que podemos observar en la vida cotidiana, pero que a menudo se subestima en los análisis del estado: los diversos aparatos estatales mantienen una relación tensa entre sí, incluso contradictoria en algunas partes. Por lo tanto, es un reto político comprometer a los diversos actores y organizaciones en una misma línea, o formular y aplicar un “proyecto de estado” razonablemente coherente y realizable (Jessop, 2007). El movimiento neoliberal ha demostrado históricamente cómo puede formularse y aplicarse un proyecto de estado de este tipo, y actualmente es una cuestión abierta si las fuerzas ecocapitalistas son capaces de hacerlo también.

Diferencias entre estados del Norte y del Sur globales

Como ya se ha mencionado anteriormente, aunque se asume que en todos los estados históricamente concretos está presente una determinada forma abstracta y lógica del estado, estos, al mismo tiempo, difieren considerablemente (Lang, 2022; García Linera et al., 2010; Boos y Brand, 2022).

La forma concreta de la economía política en la que se inserta tiene consecuencias para el estado. Los estados de la periferia del sistema mundial capitalista moderno desempeñan un papel, por ejemplo, a la hora de coordinar la explotación de la mano de obra y canalizar el flujo de recursos naturales hacia los centros capitalistas, de aceptar o incluso imponer determinados acuerdos comerciales, o de organizar las divisas “fuertes” a través de créditos y deudas. Además, los países del Sur global se caracterizan por una fuerte presencia de

capital internacional a través de la inversión extranjera directa. La influencia del capital extranjero —así como de los actores políticos extranjeros— está fuertemente inscrita en los aparatos estatales, un fenómeno que Cardoso y Faletto denominaron la “internalización de los intereses externos” (Cardoso y Faletto, 1979). En resumen, a los estados (semi)periféricos les resulta más difícil formular proyectos transformadores ambiciosos que sean independientes de los intereses extranjeros. El capital extranjero solo alimenta los procesos de industrialización en condiciones muy particulares, como ocurrió históricamente en los mayores países de América Latina, Turquía o China.

Si la base material de los estados periféricos procede de las concesiones extractivistas y de las rentas, la burocracia estatal y los empleos de funcionarios que crean fieles seguidores se basan en los ingresos de las rentas y refuerzan la tendencia al clientelismo. En general, el estado desempeña un papel más importante en la economía. En las periferias, el estado periférico / colonial se estructuró sobre la base de la superexplotación de la tierra y mano de obra de sujetos racializados a los que negó la ciudadanía hasta hace poco (Quijano, 2000). De este modo, el estado periférico rompe con la apariencia de libertad de contrato entre propietarios formalmente iguales, al menos para una gran parte de su población. En el Sur colonial, el estado de derecho ha servido históricamente como herramienta estratégica para legitimar la apropiación y el saqueo (Mattei y Nader, 2008). Lo que se plasmó en las leyes fue la exclusión de las mayorías por motivos étnicos y, más tarde, raciales, la exclusión del trabajo remunerado, del uso de los recursos naturales y de la participación política. Sin duda, este legado complica aún más cualquier agenda política hacia transformaciones ecosociales en el Sur global. Las formas periféricas de estado se caracterizan por la precariedad de sus estructuras institucionales, que surge de una serie de desequilibrios tanto internos como globales y de las relaciones de violencia asociadas (Lang, 2022).

Por otra parte, otra diferencia importante entre los países —y, por tanto, sus estados— del Norte y del Sur globales es que en este último

hay más espacios que no están totalmente impregnados de lógicas capitalistas, como las economías de subsistencia. Junto al modo de (re)producción capitalista, otros modos siguen siendo importantes. La teoría de la dependencia denominó “heterogeneidad estructural” a esta coexistencia simultánea de formas capitalistas y no capitalistas de (re)producción. En lo que respecta a la autoridad política, estos estados capitalistas también pueden coexistir con otras autoridades, a menudo indígenas. Este es el principio de los “estados plurinacionales”, como por ejemplo Ecuador y Bolivia (Lang, 2019). Estas formas de (re)producción pueden entenderse como modos de vida marginales, pero verdaderamente sostenibles, que pueden y deben informar las estrategias hacia la justicia ecosocial sobre la base de sus propias epistemologías y prácticas (ver el capítulo de Tatiana Roa y Pablo Bertinat, así como el de Arturo Escobar y María Campo en este libro).

El estado como una relación social multiescalar: la internacionalización del estado

Nuestro argumento hasta ahora es que particularmente el estado nacional (y su forma ideológica como estado-nación) es una instancia crucial para asegurar relaciones sociales capitalistas, patriarcales, racializadas e internacionales, así como relaciones de naturaleza societal que son altamente dominantes, insostenibles y desiguales. Además, el estado es un terreno de contestación altamente asimétrico, lo que complica las estrategias de transformación ecosocial centradas en el estado nacional y sus políticas públicas.

Sin embargo, el estado nacional desempeña un papel crucial en la reproducción de estructuras y procesos sociales y es, en sí mismo, una estructura y un proceso de este tipo, es decir, una relación social. Sus enormes recursos materiales, sus funciones legales, burocráticas y coercitivas, su poder para establecer normas y sancionar y el hecho de que el estado sea generalmente aceptado por gran parte de

la población como estado —a pesar de todas sus disfunciones o de su carácter represivo— contribuyen a su destacado papel en nuestras sociedades. El estado tiene poder discursivo (por ejemplo, enmarcando constantemente sus decisiones con “progreso”, “crecimiento”, “los inmigrantes son un problema”) y también genera conocimiento sobre la sociedad y la economía para dirigirla y controlarla más adecuadamente, es decir, mediante datos demográficos, económicos o medioambientales, y mediante estudios, comités de expertos, etcétera. Además, el estado interviene en la economía y la prestación de servicios, o en la creación y mantenimiento de infraestructuras físicas y sociales, a través de empresas públicas o estatales; o como estado que recibe rentas de la extracción de recursos naturales.

Esta es la razón por la que muchas luchas políticas son luchas por el poder estatal y gubernamental (que no es lo mismo) y por la que los partidos políticos y las luchas dentro de ellos y entre ellos desempeñan un papel importante —en países con partidos únicos, como China, evidentemente las luchas dentro del partido son decisivas (y en tiempos de dictadura, los partidos no suelen desempeñar ningún papel)—.

También por eso la izquierda emancipadora —centrada en el estado o crítica con el estado, por buenas razones— necesita interactuar con el estado. Incluso la política emancipadora alejada del estado tiene que tratar con esta entidad realmente existente.

Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es el carácter multiescalar del estado. Esto es bastante obvio y políticamente importante cuando nos fijamos en los niveles subestatales, es decir, regiones y provincias, ciudades y unidades administrativas del campo. También hay estructuras estatales y burocracias que tienen más o menos poder decisorio y fiscal. En los últimos años, se han producido muchas experiencias progresistas y emancipadoras a nivel municipal o en regiones (semi)rurales (ver, por ejemplo, M’barek et al., 2019).

Pero también podríamos hablar de un estado a escala internacional, ya que determinados modos de establecimiento de normas, negociación de conflictos y burocracia se han internacionalizado

cada vez más, especialmente en lo que se ha denominado gobernanza medioambiental global. Lo mismo puede decirse de determinadas funciones del estado, en particular la garantía de las condiciones para reproducir el capitalismo políticamente, es decir, a través de los derechos de inversión extranjera o los derechos de propiedad intelectual.

El proceso de globalización capitalista desde principios de la década de los noventa condujo a lo que la doctrina crítica denomina la “internacionalización del estado”³ (Brand et al., 2011; Sauer y Wöhl, 2011). La creación de la Organización Mundial del Comercio [OMC], pero también la modernización del Banco Mundial y el FMI, fueron expresión de ello (Slobodian, 2018). También se ha producido una amplia legislación medioambiental internacional. En noviembre de 2020, el Proyecto de Base de Datos de Acuerdos Ambientales Internacionales [IEADP, por sus siglas en inglés] enumeraba mil trescientos acuerdos multilaterales y dos mil doscientos bilaterales.⁴ Así que, de ninguna manera, la globalización neoliberal significó una “retirada del estado”, más bien fue promulgada por el estado (Hirsch, 2016).

La globalización y la internacionalización del estado no fue algo que simplemente ocurrió a los estados-nación, sino que fue un proceso activamente configurado por estados-nación particularmente dominantes, que establecieron aparatos estatales internacionales, como organizaciones internacionales, regímenes o redes de gobernanza. Basándose en la noción del estado como condensación de una relación de fuerzas sociales, estos aparatos estatales internacionales pueden interpretarse como una “condensación de segundo orden”, es decir, son una condensación de relaciones de fuerza *entre* estados-nación (que son a su vez una condensación de relaciones de poder a escala nacional),

³ La “internacionalización del estado” no solo se refiere a la creciente importancia de los aparatos estatales internacionales, sino también a una orientación más internacional de los aparatos nacionales, como la estricta orientación hacia la “competitividad internacional”.

⁴ Ver el Proyecto de Base de Datos de Acuerdos Ambientales Internacionales [IEADP]: <https://iea.uoregon.edu/>

así como *entre estados-nación y otros actores que operan a escala global* (Brand et al., 2011) (ver, de nuevo, el capítulo de Mary Ann Manahan en este libro). Una ventaja crucial de este enfoque es que permite considerar las asimetrías de poder y la competencia entre estados-nación en la gobernanza (medioambiental) mundial, incluido el perdurable legado colonial de las asimetrías Norte-Sur (Okereke et al., 2021).

Transformaciones emancipadoras y papel del estado

El imperativo del crecimiento capitalista, uno de los principales motores de la crisis múltiple, no es solo el resultado de más y más producción, consumo y valorización del capital. El imperativo del crecimiento también está asegurado por las estructuras del estado y profundamente inscrito en ellas.

Desarrollar respuestas políticas adecuadas a la crisis múltiple no es simplemente una cuestión de superar lógicas abstractas de dependencia de la trayectoria (*path dependence*), o de encontrar soluciones cooperativas y tecnocientíficas, sino de enfrentarse a intereses creados y altamente organizados para transformar relaciones sociales de producción, provisión y consumo profundamente arraigadas. Un primer paso para los gobiernos de izquierdas que aspiran al cambio ecosocial sería crear una “autonomía relativa” frente a las fuerzas económicas y políticas nacionales oligárquicas y transnacionales. Pero esto implica la capacidad de cambiar las relaciones de poder, es decir, debilitar las oligarquías y el papel del capital transnacional para poder formular proyectos sociales y estatales alternativos, lo que podría requerir alianzas más allá del ámbito nacional.

Entonces, ¿cómo lidiar con el estado en las transformaciones ecosociales? En primer lugar, se deben transformar por completo las lógicas y estructuras del estado capitalista, imperial, patriarcal, colonial y racista; y esta lucha también tiene que producirse dentro del estado (Lang, 2022). En segundo lugar, esto solo será posible en conjunción con movimientos sociales, personas conscientes,

organizadas y comprometidas, debates críticos y ciencias (sociales), empresas públicas y privadas progresistas. En tercer lugar, es necesario el *principio de estado* —también podríamos llamarlo *entidades públicas institucionalizadas*— a varias escalas, desde la local a la global (Lang y Brand, 2015). Esto significa que la gente establezca estructuras y procesos para tratar los conflictos, para crear normas y mecanismos vinculantes sobre cómo convivir (incluso económicamente) de forma transparente y democrática, para reconocer las diferencias; algún tipo de instituciones que den cierta durabilidad a las múltiples formas de convivir, y que sean capaces de defenderlas cuando el poder y los intereses creados actúen contra los principios democráticos que garantizan el buen vivir para todxs, incluida la Naturaleza. Esto es especialmente cierto si consideramos también la necesidad de algún tipo de mecanismos democráticos y transparentes de coordinación a escala mundial. Las estructuras y procesos democráticos a escalas locales, como promueven muchos activistas del enfoque ascendente, son decisivos, pero no suficientes, porque tienen dificultades para bloquear a los poderes externos. También hay un vasto campo de sistemas tecnológicos e infraestructuras existentes (comunicaciones, energía, redes de agua, etcétera) que hay que tratar de forma democrática y ecológicamente sostenible. Participar conscientemente en la configuración emancipadora de las competencias y poderes de las diferentes escalas forma parte de esta lucha.

En este sentido, las relaciones entre estado (esfera pública, instituciones, etcétera), comunidad y autonomía no pueden ser “o lo uno o lo otro”. Estas distintas dimensiones son, y seguirán siendo, parte del mundo, y tenemos que lidiar con las tensiones y complejidades de sus relaciones. Ya hemos destacado que una función crucial del estado es bloquear potencialmente los intereses poderosos y dar una relativa durabilidad a las reivindicaciones y logros emancipatorios. Definitivamente, las estrategias que pretenden ir más allá del capitalismo verde, del colonialismo verde y del discurso imperial (casi promesa) de una transición “justa” limitada en gran medida al Norte global, necesitan repensar y rehacer las divisiones internas e internacionales del

trabajo y la Naturaleza. Una diversificación y contracción planificada de las economías, siguiendo estrictos criterios ecosociales, es clave (ver también los capítulos de Luis González Reyes y Bengi Akbulut en este libro). No se trata solo de comercio, sino de las propias formas materiales y modos de (re)producción de las sociedades, e incluye una reconversión de las infraestructuras materiales, por ejemplo, de transporte, suministro de energía y agua, hacia infraestructuras sociales y ecosociales que, en principio, permitan un buen vivir para todxs, no a costa de las demás personas ni de la Naturaleza.

Lo que podemos aprender de las experiencias pasadas y necesitamos tener en mente estratégicamente, es que la propia transformación de los aparatos estatales, sus estructuras, procesos, lógicas, selectividades y el personal de las burocracias a muchos niveles es de suma importancia, al menos tan importante como una transformación de las *políticas*. Pero esto solo puede tener éxito si se opera un cambio en toda la sociedad, un cambio en las relaciones de poder existentes que engloban al estado. Este cambio cultural incluye todo tipo de actores sociopolíticos, así como fuertes niveles de organización y movilización. Los movimientos climáticos impulsados por las generaciones más jóvenes desde 2018 en todo el mundo podrían ser, con suerte, una primera muestra de ello.

Bibliografía

Bhambra, Gurminder K. y Holmwood, John. (2018). Colonialism, Postcolonialism and the Liberal Welfare State. *New Political Economy*, 23 (5), 574-587. <https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1417369>

Boos, Tobias y Brand, Ulrich. (2022). State Transformation. En Olaf Kaltmeier, Anne Tittor, Daniel Hawkins y Eleonora Rohland

(eds.), *The Routledge Handbook to the Political Economy and Governance of the Americas* (pp. 221-230). London: Routledge.

Brand, Ulrich. (2016). How to get out of the multiple crisis? Towards a critical theory of social-ecological transformation. *Environmental Values*, 25 (5), 503-25.

Brand, Ulrich; Görg, Christoph y Wissen, Markus. (2011). Second-order condensations of societal power relations. environmental politics and the internationalization of the state from a neo-Poulantzian perspective. *Antipode*, 43 (1), 149-75.

Cardoso, Fernando H. y Faletto, Enzo. (1979). *Dependencia y Desarrollo en América Latina*. Berkeley: University of California Press.

Comisión Europea. (2019). *The European Green Deal*. COM/2019/640 final

Schumacher, Juliane. (2021). *Green New Deals. A big deal for fair climate protection or just the latest version of the capitalist model?* Brussels: Rosa Luxemburg Foundation.

García Linera, Álvaro; Prada, Raúl; Tapia, Luis y Vega Camacho, Óscar. (2010). *El Estado. Campo de lucha*. La Paz: CLACSO / Muela del Diablo Editores / Comuna.

Gaucichaud, Franck; Webber Jeffery, y Modonesi, Massimo. (2019). *Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica*. México: UNAM.

Gramsci, Antonio. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.

Hirsch, Joachim. (2016). Globalization of capital, nation-states and democracy. *Studies in Political Economy*, 54 (1), 39-58.

Hobsbawm, Eric. (1994). *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991*. London: Vintage Books.

Jessop, Bob. (2007). *State Power: A Strategic-relational Approach*. Cambridge: Polity Press.

Lang, Miriam. (2019). Plurinationality as a strategy. Transforming local state institutions toward Buen Vivir. En Elise Klein y Carlos Eduardo Morreo (eds.), *Postdevelopment in practice. Alternatives, Economies, Ontologies* (pp. 176-189). New York / London: Routledge.

Lang, Miriam. (2022). El rol del Estado en la transición hacia una sociedad posextractivista: aportes para un debate necesario. *Ecuador Debate*, 117, 143-169.

Lang, Miriam y Brand, Ulrich. (2015). Dimensiones de la transformación social y el rol de las instituciones. En Miriam Lang; Belén Cevallos y Claudia López (eds.), *¿Cómo transformar? Instituciones y cambio social en América Latina y Europa* (pp. 7-32), Quito: Abya Yala / Fundación Rosa Luxemburg.

M'barek, Mabrouka; Velegrakis, Giorgos; Hoetmer, Raphael, y Ana Rodríguez (eds.). (2019). *Cities of Dignity. Urban Transformations around the World*. Brussels: Rosa Luxemburg Foundation.

Mattei, Ugo y Nader, Laura. (2008). *Plunder. When the rule of law is illegal*. Malden, Oxford y Carlton: Blackwell Publishing.

Okereke, Chukwumerjie; Fuchs, Doris y Hayden, Anders. (2021). North-South Inequity and Global Environmental Governance. En Agni Kalfagianni, Doris Fuchs y Anders Hayden (eds.), *Routledge Handbook of Global Sustainability Governance*, (pp. 167-179). London: Routledge.

Poulantzas, Nicos. (1978). *State, Power, Socialism*. London: Verso.

Quijano, Aníbal. (2000). Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America. *Nepentia. Views from the South*, 1 (3), 533-580.

Ryner, Magnus. (2021). *Passive Revolution/Silent Revolution: Europe's Recovery Plan, the Green Deal, and the German Question*. Helsinki: Global Political Economy Working Papers.

Sauer, Birgit y Wöhl, Stefanie. (2011). Feminist Perspectives on the Internationalization of The State. *Antipode*, 43 (1), 108-128.

Schumacher, Juliane. (2021). *Green New Deals. A big deal for fair climate protection or just the latest version of the capitalist model?* Brussels: Rosa Luxemburg Foundation.

Slobodian, Quinn. (2018). *Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism*. Boston: Harvard University Press.

Steffen, Will; Broadgate, Wendy; Deutsch, Lisa; Gaffney, Owen, y Ludwig, Cornelia. (2015). The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. *The Anthropocene Review*, 2 (1), 81-98. <https://doi.org/10.1177/2053019614564785>

El colonialismo verde en las estructuras coloniales

Una perspectiva panafricana

Nnimmo Bassey

Introducción

Cuando se considera a África como un estado, ignorando la fragmentación del continente en muchos países, se pasa por alto la multiplicidad inherente de realidades y subjetividades. África puede haber sido un país, pero únicamente en el origen de la humanidad y por poco tiempo. Dado que los territorios son algo más que expresiones geográficas, debemos tener presentes las múltiples realidades de África. La lucha por forjar una realidad panafricana ha ilustrado la extensión multilocal de África, incluso a través de la comprensión de quiénes son lxs africanxs. Ayuda a ver la configuración de África tanto en términos geográficos como más allá de las fronteras físicas. Este encuadre ayuda a comprender las enormes influencias de la diáspora en las luchas por la verdadera liberación del continente y apunta a una reconstrucción inclusiva que se basa en los principios de justicia de género y justicia ecológica, con claros fundamentos ecosocialistas.

No tenemos por qué pintar un cuadro idílico de la vida en África. Sin embargo, el continente poseía una historia de reinos y culturas avanzadas antes de la llegada perturbadora de los aventureros y comerciantes europeos en el siglo XV. Si bien no deseamos reconstruir aquellos momentos, es pertinente señalar que los siglos posteriores dieron origen a violentos enfrentamientos, que se afianzaron con el colonialismo y que persisten hasta la fecha. Los visitantes se encontraron con comunidades y reinos en gran medida ordenados, con acuerdos sociales basados en el respeto, la interdependencia y el cuidado.

La vida en las comunidades se regía por un estado de integración: la comprensión de que la acción humana se rige por nuestras interconexiones con el mundo que nos rodea. Según Omedi Ochieng, esta integración implica reconocer los antecedentes ecológicos e históricos que estructuran y forman lo que somos y dan forma a los horizontes de lo que podríamos llegar a ser. Empieza por prestar atención al aire que respiramos, a la tierra que pisamos, al agua que bebemos, al fuego que utilizamos y al formidable peso de la historia: la política, la economía y la cultura (Ochieng, 2018). Estas han sido en gran parte aplastadas o distorsionadas por años de conquista, colonialismo y expropiación imperial.

La visión de África como un vasto paisaje con recursos ilimitados por explotar quedó rígidamente arraigada en la mentalidad colonial e impulsó conceptos de conservación que ignoraban la verdadera causa de la degradación que se desataba de su explotación y consumo sin sentido. Algunos han entendido estos conceptos como conservación de fortalezas (Marcus, 2021), que exige la expulsión de la población de los paisajes africanos supuestamente para “proteger la Naturaleza”. Esta invención de la mentalidad colonial ha dado lugar a graves injusticias sociales en los intentos de recrear el mítico “Edén Africano” (Land Portal, 2022).

Para el colonialista, los territorios colonizados deben ser zonas desprovistas de seres humanos y de comunidades humanas. Esta postura radica en la visión de África o de cualquier territorio

colonizado como un territorio sacrificado y vacío que solo es aplicable en los términos establecidos por el colonialista. Como expongo en mi libro de 2012 *To Cook a Continent* (Cocinar un continente), la pregunta que se plantea a menudo en los círculos políticos es qué se puede hacer con África, y, en momentos de generosidad, la pregunta pasa a ser qué se puede hacer por África (Bassey, 2012).

Colonialismo verde e interno en África

En el contexto del colonialismo verde, también debemos analizar qué se le ha hecho a África. El colonialismo verde es una fusión y extensión del colonialismo político, económico y sociocultural. Se ha construido y cimentado sobre el colonialismo profundamente arraigado a través del cual los líderes africanos han sido programados para crear, por ejemplo, en el sistema internacional de conservación del patrimonio, y han utilizado las llamadas normas internacionales o ajenas para promover sus propios intereses (Blanc, 2021).

Además de la conservación de fortalezas, el colonialismo vendió a las élites locales la idea de buscar dinero en las economías exteriores a cambio de materiales naturales y mano de obra. Los estados neocoloniales mantienen este modelo de buscar inversiones extranjeras directas [IED] que principalmente extraen mano de obra y materias primas y les dan divisas cuyos valores se fijan a distancia. Ejemplos de cómo las colonias quedaron atrapadas en estos callejones sin salida de divisas pueden verse en la agricultura de plantación, que cambió el cultivo de alimentos por el cultivo lucrativo. La agricultura de cultivos comerciales de la época colonial perpetuó los sistemas agrícolas explotadores creados bajo la esclavitud. Hoy en día, la agricultura de plantación sigue produciendo cultivos de exportación, provocando acaparamientos de tierras y excluyendo a los agricultores de la producción de alimentos para sus comunidades. Para complicar el asunto, las plantaciones y los monocultivos, además de alimentar los mercados exteriores, ahora también proporcionan biocombustibles

para las máquinas o para la bioenergía. Ya sea en el sector agrícola, minero o de los combustibles fósiles, los dirigentes africanos siguen buscando sobre todo divisas, a precios en cuya fijación no desempeñan ningún papel.

Las estructuras erigidas por el colonialismo y la era poscolonial alteraron drásticamente la dinámica socioeconómica y política del continente africano. El colonialismo sembró las semillas de los modelos rentistas y las manipulaciones de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional [FMI] las regaron. La deuda también ha sido una herramienta para alterar los imaginarios de desarrollo y presionar a los países para que se abran más al saqueo (sobre la deuda, ver también el capítulo de Miriam Lang, Alberto Acosta y Esperanza Martínez en este libro). Los gobiernos se ven presionados para pagar el servicio de la deuda externa y satisfacer las necesidades de importación, y conceden a las empresas transnacionales condiciones económicas liberales, como exenciones fiscales, cuotas laborales y libertad para repatriar todos los beneficios de sus transacciones. Además, se asocian de forma incestuosa con estas empresas, lo que hace imposible instituir un control regulador serio. La falta de voluntad o la incapacidad de los gobiernos para controlar las acciones de las empresas han conducido a una explotación ecocida, que ya ha creado zonas muertas en algunas áreas.

La consolidación de la libertad de explotación también se ha visto favorecida por la creación de zonas de libre comercio o zonas económicas especiales, que se han caracterizado por ser enclaves de excepción (Adunbi, 2022) (ver el capítulo de Rachmi Hertanti en este libro sobre las repercusiones de las normas comerciales). Una clase de zona de libre comercio [ZLC] es la zona franca industrial [ZFI], creada generalmente en los países en desarrollo por sus gobiernos para promover las exportaciones industriales y comerciales. Según el Banco Mundial, estas zonas son “pequeñas áreas cercadas, libres de impuestos, que ofrecen instalaciones de depósito, almacenamiento y distribución para el comercio, el transbordo y las operaciones

de reexportación” (Akinci y Crittle, 2008). Muchos países ven en esas zonas el principal estímulo para atraer inversiones extranjeras directas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD] informa de que hay más de doscientas zonas económicas especiales [ZEE] repartidas por treinta y ocho países africanos. También señala que “al menos cincuenta y seis zonas están en construcción, y otras se encuentran todavía en una fase temprana de desarrollo” (UNCTAD, 2021). En África hay unas ciento cincuenta mil hectáreas de terreno dedicadas a ZEE, y se han movilizado más de dos mil seiscientos millones de dólares estadounidenses en inversiones para la agroindustria, la industria manufacturera y los servicios (Aro, 2022).

El régimen de extracción para obtener divisas ha sido una historia interminable de sustracción, que apenas añade valor a las personas o al planeta. Los principios voluntarios y superficiales de derechos humanos y las iniciativas de transparencia ayudan a las empresas a maquillar de verde sus actividades y a exportar suciedad a los “políticos corruptos”. Esta desafortunada situación fue prevista por Frantz Fanon cuando señaló en su clásico libro *Los condenados de la tierra* que el colonialismo se contenta con sacar a la luz los recursos naturales, que extrae y exporta para satisfacer las necesidades de las industrias de la madre patria, permitiendo así que ciertos sectores de la colonia se enriquezcan relativamente. “Mientras el resto de la colonia continúa, si no lo ahonda, su subdesarrollo y su miseria” (Fanon, [1961] (2004). Fanon vio cómo las estructuras coloniales fragmentan las naciones y amplían las subjetividades que frenan los esfuerzos por construir la unidad africana. Señaló que

[...] la unidad africana, fórmula vaga a la que los hombres y mujeres de África se habían ligado emocionalmente y cuyo valor funcional consistía en presionar terriblemente al colonialismo, revela su verdadero rostro y se desmenuza en regionalismos dentro de una misma realidad nacional. La burguesía nacional, como piensa solo en sus intereses inmediatos, como no ve más allá de sus narices, se

muestra incapaz de realizar la simple unidad nacional, incapaz de edificar a la nación sobre bases sólidas y fecundas. El frente nacional que había hecho retroceder al colonialismo se desintegra y consume su derrota.

Nuestra lectura de Fanon aclara cómo la élite política llega a verse a sí misma como productora de nichos de oportunidad para sus naciones y a la búsqueda de rentas como el motor del progreso. Esto explica por qué los líderes actuales se aferran tanto a la postura de que la explotación de combustibles fósiles y otros minerales para la exportación / dinero es un derecho que no se puede negociar. Esto también encierra la noción engañosa de que el “ecocidio debe aceptarse al igual que no se pueden hacer tortillas sin romper los huevos”.

La explotación depredadora exige un replanteamiento profundo del desarrollo. El papel del Banco Mundial y del FMI en la desfinanciación de servicios sociales como la sanidad y la educación, así como de ayudas económicas, a través de sus infames programas de ajuste estructural, destacan como manipulaciones coloniales que trastornaron el sentido común, invirtieron el progreso, instituyeron la pobreza y construyeron el subdesarrollo. La perversa influencia de estas instituciones subraya la necesidad de prestar mucha atención a las desigualdades de poder, utilizando una lente ecosocialista y anticolonial.

Mozambique, uno de los últimos países africanos en acceder a la independencia, nos enseña las dinámicas políticas derivadas de las estructuras coloniales y postcoloniales. La nación se independizó en 1975. Le siguió una cascada de fases, incluido el desmantelamiento de la mayoría de las estructuras coloniales y el establecimiento de un sistema comunista / socialista. La nación sufrió 16 años de guerra civil y celebró sus primeras elecciones en 1994. Se esperaba que esas elecciones trajeran una era democrática. Pero, según Anabela Lemos,

[...] esta nueva democracia no fue más que la apertura total de las puertas al libre mercado y a todo tipo de inversiones extranjeras en nombre del desarrollo. Estas “inversiones” empezaron a llegar de

diferentes formas, como fundiciones masivas de aluminio, plantaciones a gran escala de monocultivos de árboles exóticos, introducción masiva de cultivos comerciales y de exportación, y muchas otras. Se introdujo una economía “minera”, en la que todo se sacaba del país. (Lemos, 2022)

A la caza de fósiles

En el caso de la carrera por el petróleo y el gas africanos, los dirigentes solo ven una oportunidad para que sus países se beneficien de proyectos acelerados. El argumento es que el aumento de la producción mejoraría el acceso de sus pueblos a la energía, aunque se trate de una afirmación fatua, dado que décadas de extracción solo han producido devastación ecológica y pobreza (Bassey, 2022).

La fijación en el comercio colonial había construido lo que también puede denominarse economía vudú. En este sistema, el dinero entra sin apenas producir ni transformar las materias primas. Esto ha arraigado una cultura de rentismo o dependencia por la que los países africanos dependen de las empresas extractivas multinacionales para sus ingresos nacionales. No es de extrañar que los ingresos del petróleo representen al menos el 20 % del PIB en Libia, Argelia, Gabón, Chad, Angola y la República del Congo. Asimismo, aunque el petróleo y el gas aportan un modesto 6 % del PIB real de Nigeria, representan el 95 % de los ingresos en divisas y el 80 % de los ingresos públicos (Ayuk, 2022). El grupo de naciones de la Unión Africana utilizó las negociaciones sobre el clima de la COP27 en Sharm El-Sheikh en 2022 para presionar a favor de la expansión (Harvey, 2022) de la producción de combustibles fósiles para beneficiarse de los vastos recursos, como supuestamente han hecho las naciones más ricas. Su argumento carece de un examen crítico de los mecanismos de apropiación y externalización que hicieron posible que las naciones más ricas se beneficiaran de vastos recursos.

La raíz del acaparamiento de recursos en África no puede extraerse del colonialismo, ya que proporcionó la base para la impunidad sin temor a tener que rendir cuentas. El saqueo y la impunidad han crecido con los años, con una fuerza brutal cuando ha sido necesario. Esto ha hecho que el mapa de los recursos naturales y los conflictos en el continente se solapen casi a la perfección. La explotación ha sido respaldada por ejércitos nacionales, agentes especiales de seguridad y mercenarios. La extracción se lleva a cabo literalmente detrás de escudos militares, ignorando los derechos humanos y colectivos.

Patrick Bond, ecologista político, capta muy bien la preocupante situación de la incesante presión por los combustibles fósiles frente al calentamiento global utilizando el papel de Francia, Sudáfrica y Ruanda. “Las actuales operaciones de Total en África siguen un viejo patrón: explotación de combustibles fósiles y corrupción de las economías, gobiernos, sociedades y medioambiente de los países en desarrollo, todo ello respaldado por el poder estatal francés”. También afirmó que: “Emmanuel Macron [el presidente de Francia] dejó esto muy claro en 2021, cuando insistió en defender los activos de gas de veinte mil millones de dólares de Total en Mozambique mediante una intervención militar, dirigida por soldados ruandeses y sudafricanos. El papel subimperialista de Pretoria explica su desesperado apoyo a los nuevos magnates del petróleo con los que Total se ha aliado desde mediados de la década de 2010 para explotar grandes reservas de gas y buscar nuevos yacimientos mediante voladuras sísmicas” (Bond, 2022). Bond señala que han surgido dos formas de resistencia contra la reactivación del imperialismo fósil y el subimperialismo en este eje desde 2021: conflictos violentos que han sacudido a Total, el gigante francés del petróleo y el gas; y movilizaciones medioambientales y sociales en la costa de Sudáfrica que han puesto nervioso al gobierno de ese país.

El papel de Francia, país que mantiene un estricto control colonial sobre las naciones francófonas de África, es especialmente interesante. Aunque Francia ha prohibido la fracturación hidráulica y la

extracción de petróleo crudo en sus territorios (Agence France-Presse, 2017), así como la publicidad de combustibles fósiles (Frost, 2022), su gigante del petróleo y del gas, TotalEnergies, sigue extrayendo en otros lugares, sobre todo en Cabo Delgado, Mozambique, desde donde se realizó el primer envío (Africanews, 2022) de gas fósil mientras se celebraba la COP27 en Sharm el Sheij. El momento del primer envío ilustra cómo la violencia no ha detenido la extracción de recursos en África, ya que a menudo van de la mano. Así lo demuestran los casos de los diamantes de sangre de Liberia y la actual inestabilidad en la República Democrática del Congo.

Total es uno de los principales actores en la extracción de gas en Cabo Delgado. El parque terrestre de gas natural licuado [GNL] de Afungi, construido para el negocio de los fósiles, ha provocado el desplazamiento de más de quinientas cincuenta familias para construir una carretera de setenta kilómetros hasta el parque, que cuenta con un aeródromo, así como plantas de tratamiento e instalaciones portuarias. Las comunidades pesqueras costeras han sido desplazadas a un “pueblo de reubicación” que se encuentra a más de diez km tierra adentro, aislándolas del mar y negándoles sus tierras de cultivo, sus caladeros, sus medios de vida en general, su cultura y todo lo que importa a las comunidades costeras (Rawoot y Ribeiro, 2022). Cabo Delgado alberga los tres mayores proyectos de GNL de África: el proyecto Mozambique LNG (Total, antes Anadarko), valorado en veinte mil millones de dólares estadounidenses, el proyecto Coral FLNG (ENI y ExxonMobil), valorado en cuatro mil setecientos millones de dólares estadounidenses, y el proyecto Rovuma LNG (ExxonMobil, ENI y CNPC), valorado en treinta mil millones de dólares estadounidenses (Rawoot, 2020). Cabo Delgado puede ser el escenario de una de las mayores catástrofes empresariales del continente.

En una reunión sobre impunidad corporativa¹ organizada por Justiça Ambiental en Maputo, una persona procedente de la

¹ A esta reunión, celebrada durante una semana en noviembre de 2022, asistieron más de cien personas procedentes de las comunidades de todo Mozambique.

comunidad declaró de forma conmovedora: “Para nosotros, las empresas multinacionales no trajeron el desarrollo, trajeron la desgracia”. Sustitúyase “empresas multinacionales” por “colonialismo” y se obtiene una imagen más completa. Otro delegado presente en la reunión se preguntó si la destrucción de sus tierras podía llamarse desarrollo. Luego preguntó retóricamente: “¿Es ese el desarrollo que queremos?”.

El colonialismo, ya sea negro, azul o verde, nunca consulta a la gente. Esta falta de consulta se alimenta de una arraigada falta de respeto por la gente y el planeta. Siguiendo el juego colonial, las zonas en las que opera Total, la compañía de petróleo y gas, sufren el aumento de las desigualdades sociales y las divisiones resultantes, con el único factor unificador de que se conocen generalmente como Zonas Total.

El acaparamiento de gas en África y el vuelco de la crisis climática

La guerra de Ucrania y el desprecio generalizado por la necesidad de tomar medidas reales contra el cambio climático han provocado recientemente inversiones masivas en el sector de los combustibles fósiles en África. La actual carrera de las empresas petroleras por nuevos proyectos de petróleo, gas y carbón está en marcha en 48 países africanos. Cuando quedó claro que todos los combustibles fósiles de las reservas conocidas no pueden extraerse y quemarse sin llegar al punto de inflexión climático, las empresas petroleras planean invertir doscientos treinta mil millones de dólares estadounidenses en nuevos proyectos de petróleo y gas en la próxima década y 1,4 billones de dólares estadounidenses para 2050 (Ayuk, 2020). Como para animar a las empresas fósiles, un empresario africano, NJ Ayuk, insiste en que “boicotear a las empresas de petróleo y gas en África es una medida equivocada”. Gabriel Obiang Lima, ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, jura que: “bajo ningún

concepto vamos a pedir disculpas. [...] Cualquiera que salga del continente diciendo que no debemos desarrollar esos yacimientos [de petróleo y gas], es un criminal” (George y Nasralla, 2019). A pesar de la insistencia en el dinero de los combustibles fósiles, lo cierto es que diecisiete de los veinte países más vulnerables al cambio climático se encuentran en África, y el continente necesita “financiación para ayudarlo a adaptarse al reto económico y humanitario de los repetidos desastres climáticos” (Milman, 2022).

Como si esperara que sonaran los silbatos, la industria de los combustibles fósiles está haciendo todo lo posible para arraigar en el imaginario colectivo la impresión de que la dependencia de los combustibles fósiles, incluso en el futuro, es inevitable. Los líderes africanos están totalmente alineados con este imaginario y se unen a los especuladores de combustibles fósiles de otros lugares para subrayar el hecho de que la guerra contra Ucrania es una oportunidad para afianzar la dependencia fósil. Es un argumento conveniente porque el mundo se estremece ante los horrores de la exposición de los ucranianos a un invierno frío. Además, ambas partes del conflicto también necesitan más combustibles para hacer funcionar su maquinaria bélica.

Las empresas de combustibles fósiles pueden tomarse con calma el conflicto de Cabo Delgado (Mozambique). Construir un oleoducto de mil cuatrocientos kilómetros de crudo pesado desde Uganda hasta unas instalaciones de exportación en Tanzania es solo un juego. Pueden proponer oleoductos conflictivos desde el delta del Níger (Nigeria) hasta Marruecos y otro a través del desierto del Sahara hasta Argelia para alimentar las necesidades energéticas de Europa. Dado que el 89 % de las infraestructuras de gas en África se destinan a la exportación, satisfacer las necesidades energéticas del propio continente africano está fuera de las cartas.

Descolonizar la transición para seguir avanzando

La transición a la energía verde no asegura la justicia ni la ruptura con el patrón colonial asociado a la energía sucia. Este patrón ya está surgiendo con los enormes parques solares de Marruecos (Allan, 2021) y el parque eólico instalado en el lago Turkana (Business & Human Rights, 2021) en el norte de Kenia. Las cuestiones que preocupan en este caso son la apropiación de tierras, el desplazamiento de comunidades de los dones de la Naturaleza de los que habían disfrutado durante milenios y la pobreza energética que las instalaciones no eliminan, debido a los problemas de acceso y a que están diseñadas para la exportación y no para las comunidades anfitrionas inmediatas. Así pues, el modelo colonial de acaparamiento de tierras y falta de consulta puede persistir igualmente en escenarios de energía verde (ver también el capítulo de Hamza Hamouchène en este libro).

Otro punto conflictivo está relacionado con la extracción de los minerales necesarios para construir partes de los aparatos requeridos para los sistemas de energía verde o renovable. La extracción de los materiales, incluso para las baterías necesarias para el almacenamiento de energía, sigue afectando a comunidades y territorios. La consecuencia es que la transición no se refiere únicamente a la energía, sino a la necesidad de descolonizar todo el sistema energético, económico y político.

Aunque las líneas que separan los sectores formal e informal son a veces difusas, las formaciones informales o no oficiales tienen la clave para descolonizar y liberar el continente africano y construir un futuro ecosocialista. El sector informal debe embarcarse en severos compromisos y confrontaciones con el sistema asimilado por los poderes coloniales, cuyos imaginarios han sido desconectados de las posibilidades independientes y de un futuro con dignidad y respeto. Siempre será una tarea ardua, ya que los intereses creados se afanan por mantener el control explotador de las palancas del poder.

Pensemos en lo que ocurrió en Guinea cuando el entonces presidente Sékou Touré convocó un referéndum en 1958 sobre la adhesión a la propuesta de unión monetaria de la Communauté Financière Africaine [CFA]. Los votos arrojaron un rotundo 95 % de rechazo a la unión. Entonces, según David Hundeyin, “el gobierno de Charles de Gaulle retiró inmediatamente a más decuatro mil funcionarixs, jueces / juezas, profesorxs, médicxs y técnicxs, dándoles instrucciones para que sabotearan todo lo que dejaban atrás” (Hundeyin, 2019). A lo largo de los años ha habido menos actos flagrantes de sabotaje y bandolerismo, pero todos sus efectos han contribuido a impedir el progreso del continente.

Los gobiernos africanos colaboran cada vez más con empresas transnacionales y filantropocapitalistas en foros multilaterales como la Conferencia de las Partes de las Convenciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y la biodiversidad. A diferencia de lo que ocurría hace unas décadas, hoy estos gobiernos adoptan falsas soluciones basadas en el mercado en un intento de atraer ayudas financieras. Parece que han quedado atrás los días en que la Unión Africana (entonces Organización para la Unidad Africana [OUA]) tenía una estricta ley modelo para ayudar a los países africanos a garantizar la bioseguridad en sus países. Parece que se acabaron los días en los que un negociador africano rompió a llorar en una rueda de prensa en la COP15 del clima en Copenhague (*350.Org.*, 2019) porque se les estaba presionando para firmar un “pacto suicida”.

Pero no tan pronto. En el continente hay una fuerte agitación de movimientos de masas sobre el cambio climático, la soberanía alimentaria y la justicia medioambiental. Desde abajo se alzan voces firmes contra el ecocidio y en defensa de sus bosques y océanos. Los ogoni del delta del Níger son un ejemplo de pueblo que ha expulsado con decisión a las grandes petroleras de sus tierras y pantanos, rechazando la apertura de pozos petrolíferos (Iheamnochor, 2020) en su territorio y forzando un programa de limpieza de la contaminación por hidrocarburos en su entorno tras una evaluación del PNUMA (UNEP, 2017). Vemos a las comunidades del litoral de

Sudáfrica oponerse con firmeza a la prospección sísmica de crudo y gas, defendiendo sus medios de vida, su cultura y su espiritualidad. Vemos a jóvenes que se levantan contra los oleoductos, a pescadores y comunidades dependientes de los bosques que defienden sus derechos. La historia es la misma con los agricultores que defienden con firmeza la soberanía alimentaria y rechazan el colonialismo de las semillas, defendiendo sus tierras de cultivo contra la contaminación por petróleo.

El horizonte rebosa tanto de luchas como de esperanzas. Es necesaria una unión de fuerzas con análisis políticos claros para construir un África verdaderamente unida, con cohesión económica interna y pleno respeto de los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra.

Bibliografía

350.Org.(2019).Africanleadersshedtearsandprotesta“politicaldeal”.
<https://350.org/african-leaders-shed-tears-and-protest-political-deal/>

Adunbi, Omolade. (2022). *Enclaves of Exception – Special Economic Zones and Extractive Practices in Nigeria*. Bloomington: Indiana University Press.

Africanews (Noviembre de 2022). Mozambican leader announces first LNG export shipment. <https://www.africanews.com/2022/11/13/mozambican-leader-announces-first-lng-export-shipment//>

Agence France-Presse. (20 de diciembre de 2017). France bans fracking and oil extraction on all of its territories.

<https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/20/france-bans-fracking-and-oil-extraction-in-all-of-its-territories>

Akinci, Gokhan y Crittle, James. (2008). *Special Economic Zone: Performance, Lessons Learned, and Implication for Zone Development*. Washington D. C.: Banco Mundial.

Allan, Joanna (26 de noviembre de 2021). Renewable energy is fuelling a forgotten conflict in Africa's last colony. *The Conversation*. <https://theconversation.com/renewable-energy-is-fuelling-a-forgotten-conflict-in-africas-last-colony-170995>

Aro, Busola (2 de diciembre de 2022). AfCFTA: Africa must compete favourably with other free zones, says Buhari. *The Cable*. <https://www.thecable.ng/afcfta-africa-must-compete-favourably-with-other-free-zones-says-buhari>

Ayuk, Nj. (19 de enero de 2020). Africa will develop with oil and gas – whether the West likes it or not. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2020/01/africa-oil-gas-development/>

Ayuk, Nj (7 de noviembre de 2022). Africa must oppose measures at COP27 that restricts its fossil fuels. *BusinessDay*. <https://businessday.ng/news/article/africa-must-oppose-measures-at-cop-27-that-restricts-its-fossil-fuels/>

Bassey, Nnimmo. (2012). *To Cook a Continent – Destructive Extraction and the Climate Crisis in Africa*. Oxford: Fahamu Press.

Bassey, Nnimmo. (Noviembre de 2022). The Colonial Exploitation of Africa's fossil fuels must stop. *Context*. <https://www.context.news/net-zero/opinion/the-colonial-exploitation-of-africas-fossil-fuels-must-stop>

Blanc, Guillaume. (7 de enero de 2021). Interview of Flammarion, author of *The invention of Green Colonialism – Putting an end to*

the myth of the African Eden. *iD4D*. <https://ideas4development.org/en/green-colonialism-western-outlook/>

Bond, Patrick. (Diciembre de 2022). French fossil imperialism, South African subimperialism and anti-imperial resistance. *CADTM*. <http://www.cadtm.org/French-fossil-imperialism-South-African-subimperialism-and-anti-imperial>

Business & Human Rights. (1 de noviembre de 2021). Kenya: Court rules that Lake Turkana Wind Power acquired community land unprocedurally. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/kenya-court-rules-that-lake-turkana-wind-power-acquired-community-land-unprocedurally/>

Fanon, Frantz. (2004 [1961]). *The Wretched of the Earth*. New York: Grove Press.

Frost, Rosie. (24 de agosto de 2022). France becomes the first European country to ban fossil fuel ads – but does the new law go far enough? *Euronews*. <https://www.euronews.com/green/2022/08/24/france-becomes-first-european-country-to-ban-fossil-fuel-ads-but-does-the-new-law-go-far-e>

George, Libby y Nasralla, Shadia (8 de noviembre de 2019). No apologies: Africans say their need for oil cash outweighs climate concerns. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-africa-oil-climate-idUSKBN1XI16X>

Harvey, Fiona (1 de agosto de 2022). African nations expected to make case for big rise in fossil fuel output. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2022/aug/01/african-nations-set-to-make-the-case-for-big-rise-in-fossil-fuel-output>

Hundeyin, David (21 de noviembre de 2019). The “French Colonial Tax”: A misleading heuristic for understanding Françafrique. *The Africa Report*. <https://www.theafricareport.com/20326/>

the-french-colonial-tax-a-misleading-heuristic-for-understanding-francafrrique/

Iheamnachor, Davies (9 de noviembre de 2020). No oil exploration in Ogoni, until Saro-Wiwa, others are exonerated – MOSOP vows. *Vanguard*. <https://www.vanguardngr.com/2020/11/no-oil-exploration-in-ogoni-until-saro-wiwa-others-are-exonerated-mosop-vows/>

Land Portal (14 de junio de 2022). Guillaume Blanc. The Invention of Green Colonialism – the roots of Africa’s wildlife NGOs come under withering scrutiny. <https://landportal.org/node/102593>

Lemos, Anabela. (2022). Africa: The oil New Frontier. *FightTheFire*. <https://www.fightthefire.net/africa-the-old-new-frontier/>

Marcus, Hannah. (13 de marzo de 2021). Fortress Conservation: The Green Colonialism that Must End to Achieve Ecological Harmony in a Post-COVID World. *Planetary Health Alliance*. <https://phalliance.medium.com/fortress-conservation-the-green-colonialism-that-must-end-to-achieve-ecological-harmony-in-a-41010b631c6f>

Milman, Oliver. (31 de octubre de 2022). Two-thirds of US money for fossil fuel pours into Africa despite climate goals. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/31/two-thirds-of-us-money-for-fossil-fuel-pours-into-africa-despite-climate-goals>

Ochieng, Omedi. (10 de septiembre de 2018). What African Philosophy Can Teach You About the Good Life. *iai.tv*. <https://iai.tv/articles/what-african-philosophy-can-teach-you-about-the-good-life-auid-1147>

Rawoot, Ilham. (24 de febrero de 2020). Gas-rich Mozambique may be headed for a disaster. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/>

opinions/2020/2/24/gas-rich-mozambique-may-be-headed-for-a-disaster/

Rawoot, Ilham y Ribeiro, Daniel. (27 de julio de 2022). A Total Mess. *Stopmozgas*. <https://stopmozgas.org/article/total-mess/>

UNCTAD. (2021). Annual Report 2021.

UNEP. (7 de agosto de 2017). Nigeria Launches \$1 Billion Ogoni-land Clean-up and Restoration Programme. <https://www.unep.org/news-and-stories/story/nigeria-launches-1-billion-ogoni-land-clean-and-restoration-programme>

Bajo el yugo del comercio “verde” neoliberal

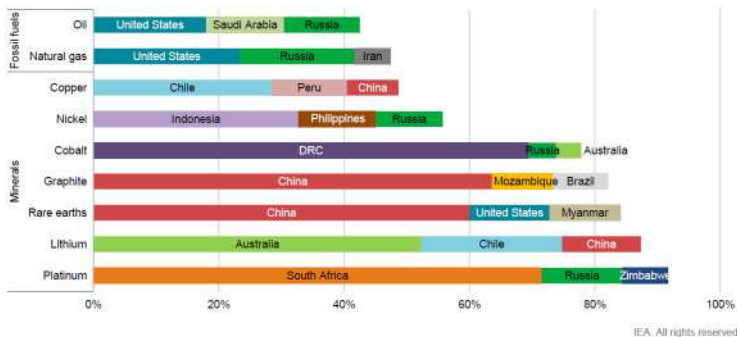
Rachmi Hertanti

Introducción

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, la pandemia de COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania han perturbado la cadena mundial de suministro de minerales críticos. Esta perturbación se agudiza debido a la importante dependencia del comercio mundial de los suministros de producción concentrados en unos pocos países. El informe de 2021 de la Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés) sobre el rol de los minerales fundamentales en la transición hacia una energía limpia afirma que la concentración de la producción y el procesamiento de minerales en solo unos pocos países hace que el suministro sea vulnerable a la inestabilidad política, los riesgos geopolíticos y las posibles restricciones a la exportación. Como se muestra en el gráfico, China, Estados Unidos y Myanmar son los principales productores de elementos de tierras raras; mientras que Australia, Chile y China son los principales productores de litio; e Indonesia, Filipinas y Rusia son los principales productores de níquel (Agencia Internacional de la Energía, 2021).

Principales productores mundiales de minerales críticos

Figura 1. Participación de los tres principales países productores en la producción total de determinados minerales y combustibles fósiles



Fuente: Informe 2021 de la IEA sobre el rol de los minerales críticos en las transiciones hacia una energía limpia.

Más allá de estas advertencias políticas y económicas, este capítulo analiza críticamente la pugna geopolítica por asegurar los minerales críticos centrándose en dos dinámicas interrelacionadas: por un lado, la posición insegura de los países poderosos en la cadena de suministro mundial de minerales críticos y, por otro, el papel de los acuerdos de libre comercio e inversión. Sostiene que los acuerdos de libre comercio e inversión son mecanismos concretos desplegados por los países poderosos, en particular los pertenecientes al G7 (grupo de los 7),¹ y las empresas multinacionales para asegurarse los minerales necesarios para producir la tecnología verde que requiere la llamada transición ecológica. Un elemento especialmente insidioso de esta nueva generación de acuerdos son los mecanismos que permiten a los inversores demandar a los estados cuando no se protegen sus intereses. Estos mecanismos limitan la soberanía estatal, y este

¹ El G7 es un foro político intergubernamental compuesto por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido; asimismo, la Unión Europea es un “miembro no numerario”.

capítulo problematiza el papel del estado, que también es cómplice en la creación de estos acuerdos. Además, la prisa mundial por conseguir minerales críticos para una transición ecológica expone las falacias de este modelo: se basa en extraer materias no renovables de la tierra, y en una agenda de “desarrollo sostenible” que no se preocupa por las personas ni por el planeta. Refuerza un sistema económico político mundial en el que los países “centrales” fuerzan la apertura de los países de la “periferia” como fuentes de minerales críticos mediante normas comerciales injustas y asimétricas.

Más libre comercio para abrir el mercado de las cadenas de suministro de minerales críticos

El Informe de la OCDE sobre un suministro seguro y sostenible de minerales críticos (ver OCDE, 2022), presentado en la reunión del G7 en Alemania, reforzó el informe de la IEA: la mayoría de los países del G7 no son los mayores productores de minerales críticos, y no son grandes actores en la industria de procesamiento de minerales para materias primas clave en la tecnología verde, como el litio, el cobalto, el bismuto y los minerales de tierras raras. La mayoría de estas materias primas se procesan fuera de los países del G7. La OCDE explicó además que las reservas minerales que poseen los países del G7 son insuficientes para satisfacer su demanda industrial interna; por lo tanto, la expansión del comercio y las inversiones en países ricos en reservas minerales son necesarias para diversificar la cadena de suministro de minerales críticos.²

² Refuerza los resultados de la reunión del G7 de 2021 celebrada en Cornwall (Reino Unido), en la que se elaboró una agenda denominada “Reconstruir un mundo mejor [B3W por sus siglas en inglés]”. La agenda de B3W se propuso como una estrategia de recuperación global del G7 para abordar la brecha de infraestructura global, la recuperación de COVID-19; y desacoplar el dominio y la influencia de China en el mundo “en desarrollo” (Liao y Beal, 2022).

Los ministros de comercio del G7 acordaron en una reunión posterior en Alemania en 2022 (Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania [BMWK], 2022) que intensificarán la cooperación comercial multilateral, regional y bilateral para abordar las restricciones a la exportación y las barreras comerciales a la hora de garantizar los minerales críticos a nivel internacional. Algunas de estas barreras comerciales se refieren a lo que denominan prácticas comerciales “desleales” y poco transparentes, como la transferencia forzosa de tecnología, el robo de propiedad intelectual, la reducción de las normas laborales y medioambientales para obtener ventajas competitivas, las acciones de las empresas estatales que distorsionan el mercado y las subvenciones industriales perjudiciales, incluidas las que conducen a un exceso de capacidad. Prácticas, que apuntan a las prácticas comerciales dominantes de China en el suministro de minerales críticos.

Los países del G7 siguen pidiendo reformas en la Organización Mundial del Comercio [OMC], el único organismo multilateral que se ocupa de las normas comerciales entre países, para garantizar que el mecanismo de transparencia de la OMC sea cumplido por todos sus miembros en el contexto de las cadenas de suministro de minerales fundamentales (InsideTrade.Com, 2022). En el mecanismo de transparencia de la OMC, las restricciones a la exportación se han convertido en una preocupación importante y en un blanco fácil de disputa en el organismo multilateral. Un ejemplo es la disputa sobre materias primas entre la UE e Indonesia en 2019. El bloque regional presentó una queja ante la OMC contra la prohibición política de Indonesia a las exportaciones de níquel a la UE. Indonesia aplicó las restricciones para dar prioridad a sus requisitos de procesamiento y obligaciones de mercado nacionales. La disputa tipifica cómo las normas del comercio internacional pueden instrumentalizarse para garantizar mercados mundiales sin barreras que faciliten el suministro ininterrumpido de minerales críticos para países poderosos como la UE.

Otro mecanismo que utilizan los países del G7 para reforzar la resistencia de su cadena de suministro y contener el dominio de China es fomentar una mayor coherencia política a través de la cooperación bilateral y transatlántica / transpacífica en materia de comercio e inversión entre ellos y los países ricos en minerales críticos (Schneider-Petsinger, 2021). En la actualidad, en la región Asia-Pacífico se observan cuatro tendencias de cooperación relacionada con el comercio para asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos.

En primer lugar, para contrarrestar la creciente influencia económica de China en Asia-Pacífico y las Américas, el gobierno estadounidense puso en marcha el Marco Económico Indo-Pacífico [IPEF por sus siglas en inglés]³ y la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas [APEP por sus siglas en inglés], respectivamente. Ambos instrumentos están diseñados para resolver la interrupción de la cadena de suministro mundial, en particular en el pilar de resiliencia de la cadena de suministro del IPEF. La necesidad de garantizar cadenas de suministro seguras y resistentes de minerales críticos en el IPEF se llevaría a la práctica minimizando las distorsiones del mercado, promoviendo el cumplimiento de la normativa, respetando los principios del mercado y actuando de forma coherente con las respectivas obligaciones de la OMC (Marco Económico Indo-Pacífico [IPEF], 2022). Ya no es un secreto que este acuerdo es un modelo de cooperación comercial utilizado por EE.UU. para reforzar su estrategia de fomento del *onshoring* y *nearshoring*,⁴ incluyendo importan-

³ Los miembros del IPEF son Australia, Brunei Darussalam, Fiyi, India, Indonesia, Japón, la República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

⁴ El *onshoring* se refiere al traslado o establecimiento de instalaciones de producción dentro de las fronteras de un país. El *nearshoring*, por su parte, implica el establecimiento de instalaciones en las proximidades del país de demanda o consumo. En el contexto de las cadenas de suministro de minerales críticos, ambas estrategias pretenden estimular el control nacional sobre el suministro y reducir la dependencia de los proveedores extranjeros, y en el proceso, estimular tanto la industrialización como la reducción de las tasas de inflación.

tes disposiciones de apoyo únicamente a las cadenas de suministro nacionales como parte de su estrategia de reducción de la inflación (Majkut, 2023).

En segundo lugar, el plan para acelerar la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales⁵ con el fin de diversificar el comercio y garantizar el suministro ininterrumpido de los minerales críticos necesarios para la transición verde de la región. En el marco de esta ley europea, la cooperación comercial internacional es una parte esencial de la estrategia de apoyo a la agenda general, mediante la ampliación de los acuerdos de libre comercio [ALC] y el fortalecimiento de las normas de la OMC (Comisión Europea, 2023a), en particular para garantizar la regulación de las prácticas comerciales desleales en las medidas de restricción de las exportaciones, y la aplicación de la solución de diferencias en materia de comercio e inversión (Comisión Europea, 2023b). Otro elemento importante es un capítulo dedicado a la energía y las materias primas en el ALC de la UE. En este capítulo, la UE abordará cuestiones relacionadas con las materias primas, como los procedimientos previsibles de evaluación de impacto o el trato no discriminatorio para los inversores en terceros países, y reforzará las disciplinas sobre comercio e inversión en materias primas. Actualmente, la UE está aumentando la cooperación comercial con varios países estratégicos como Chile, México, Nueva Zelanda, Australia, India y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático [ASEAN por sus siglas en inglés].

En tercer lugar, como uno de los principales actores en la cadena de suministro de minerales críticos, Canadá también se ve afectado por la interrupción de la cadena de suministro mundial. En junio de 2021, se iniciaron por primera vez las negociaciones del Acuerdo

⁵ Las siguientes materias primas se considerarán estratégicas para la UE en virtud de la Ley de Materias Primas Fundamentales: Bismuto; Boro - grado metalúrgico; Cobalto; Cobre; Galio; Germanio; Litio - grado batería; Magnesio metálico; Manganeso - grado batería; Grafito natural - grado batería; Níquel - grado batería; Metales del grupo del platino; Elementos de tierras raras para imanes (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm y Ce); Silicio metálico; Titanio metálico; Tungsteno.

de Asociación Económica [AAE] entre Canadá e Indonesia. Canadá afirma que la cooperación en la región asiática creará dependencias mutuamente beneficiosas en varias áreas vitales de ventaja comparativa, a saber, minerales críticos, tierras raras, agricultura, energía y recursos naturales (Nagy, 2022). El posicionamiento de Canadá en la región asiática está motivado por su programa de diversificación, que excluye a China como fuente, y refuerza la cooperación estratégica con Estados Unidos (a través de la Asociación para la Seguridad de los Minerales) y la UE (Asociación Estratégica UE-Canadá sobre minerales críticos) (Comisión Europea, 2021).

En cuarto lugar, la Asociación Económica Integral Regional de la ASEAN [RCEP, por sus siglas en inglés] amplía la cooperación de los Acuerdos de Libre Comercio de la ASEAN Más Uno [ALC ASEAN+1] a otros cinco socios económicos de la ASEAN, a saber, Japón, China, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Los ALC ASEAN+1 son acuerdos que establecen zonas de libre comercio entre los países de la ASEAN y algunas de las principales economías del mundo sobre una base bilateral, en un intento de reforzar su participación en la cadena de suministro mundial y aumentar la integración regional.

El RCEP cambia las reglas del juego. Desde el principio, el RCEP se formó a la sombra de la cooperación ASEAN+3⁶ para abrir nuevos mercados y facilitar el acceso al mercado en la región del Sudeste Asiático. La apertura de nuevos mercados, sin embargo, no se basa en la liberalización arancelaria, sino en mecanismos de facilitación del comercio, es decir, procesos relacionados con la exportación e importación de bienes y servicios, que abren oportunidades para profundizar en las actividades de la cadena de valor regional a través de Reglas de Origen efectivas o conjuntos de criterios para determinar la procedencia nacional de un producto (Organización Mundial del Comercio, s. f.). Con esta configuración, Rashmi Banga, economista principal de la UNCTAD, declaró en un estudio de 2020 que el RCEP solo tendrá un impacto positivo en los estados no miembros de

⁶ Más tres se refiere a Japón, China y Corea del Sur.

la ASEAN, como Japón, Corea del Sur y China (Global Development Policy Center, 2021). Estos tres países están preparados para beneficiarse más del esquema de cadena de valor regional del RCEP porque tienen la tecnología, los conocimientos técnicos y son exportadores de productos acabados como componentes electrónicos y maquinarias que dependen de minerales críticos y cuyo principal mercado objetivo es la ASEAN (Asia Pacific Forum on Women, Law and Development [APWLD], 2021).

Más protección para los inversores en los acuerdos comerciales y de inversión

La expansión de las inversiones en los países ricos en minerales ha consolidado las actividades en los sectores de la minería, el refinado y el procesamiento de materias primas, así como en las industrias manufactureras y de tecnologías verdes, en particular la automoción y la electrónica. En este sentido, hay que destacar el papel de las empresas multinacionales [MNC por sus siglas en inglés] como inversores clave.

Las empresas mineras están prevenidas de que los riesgos geopolíticos y las políticas nacionales de los países ricos en minerales crearán mayores riesgos de inversión (Bendall, 2022). Para hacer frente a estos riesgos potenciales, las MNC utilizan un mecanismo adicional que les permite demandar a un estado anfitrión que sea parte de un acuerdo. Conocido como Solución de Controversias Inversor-Estado [ISDS, por sus siglas en inglés], es un mecanismo que institucionaliza la impunidad corporativa, que despoja a los países del poder de negociación política para regular la corporación y proteger los derechos de las personas y el medioambiente. Ha convertido al estado en rehén de los intereses de los inversores. Además, los inversores y las empresas extranjeras pueden recurrir al ISDS para reclamar indemnizaciones por el incumplimiento de las obligaciones de inversión de un país. Los estados tendrían entonces que pagar la indemnización

con dinero público, lo que en consecuencia reduce los recursos necesarios para subvenciones sociales a la población. Además, el mecanismo envía un enfriamiento normativo que convierte a los estados en cómplices, al no proteger los derechos de las personas y el medioambiente. La disposición también ha limitado la lucha de la población contra los efectos negativos de las actividades empresariales en sus vidas, como las violaciones de los derechos humanos, las pérdidas económicas y los daños medioambientales en general.

Este mecanismo está incorporado en varios acuerdos internacionales de comercio e inversión, como los mencionados en la sección anterior. La inclusión de mecanismos de ISDS en los tratados internacionales suele argumentarse como una forma de que los estados fomenten los flujos de inversión extranjera en un país. Por el contrario, la evidencia demuestra que el mecanismo ha sido una herramienta para atar las manos de un estado anfitrión a favor de la protección de los intereses corporativos y, en el proceso, trasladar perversamente su poder de negociación a los actores económicos privados más poderosos, y aumentar las deudas públicas (Van Harten, 2016).

En el contexto de la crisis climática, la UNCTAD ha dado la voz de alarma por el aumento de las demandas ISDS, que o bien cuestionan (i) las políticas nacionales de protección del medio ambiente promulgadas para prevenir y abordar los impactos socioambientales de los proyectos de inversión, o (ii) las medidas reguladoras relacionadas con la producción de energías renovables (UNCTAD, 2022). El informe del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)⁷ lo corrobora al subrayar que la energía eléctrica y otras energías son los principales casos de demandas de inversores ante tribunales internacionales de arbitraje, mientras que los

⁷ El CIADI, que forma parte del Grupo del Banco Mundial, es una institución internacional de arbitraje creada en 1966 para la resolución jurídica de controversias y la conciliación entre inversores internacionales y estados.

sectores del petróleo, el gas y la minería ocupan el segundo lugar (CIADI, 2002).

Por ejemplo, las multinacionales mineras Glencore y Anglo-American iniciaron en 2021 una demanda de arbitraje contra el gobierno de Colombia en un tribunal ajeno al sistema judicial del país. Las empresas invocaron estratégicamente el ISDS para eludir la aplicación de una decisión de la Corte Constitucional colombiana en 2017, que suspendió la expansión de la mina de carbón del Cerrejón, la mayor mina de carbón térmico a cielo abierto de América Latina, en favor de las comunidades indígenas y afrodescendientes wayúu y la protección del río Bruno (Institute for Policy Studies, 2022). Del mismo modo, en 2011, recurriendo a otro tribunal de la Cámara de Comercio Internacional, Tethyan Copper, filial del gigante canadiense Barrick Gold, demandó al gobierno de Pakistán, alegando que el estado debía a Tethyan once mil millones de dólares de ingresos perdidos debido a que el Tribunal Supremo anuló su permiso de explotación minera. El permiso se invalidó porque la empresa había infringido las leyes nacionales de minería y contratos (Inequality.org, 2022). En 2017, en virtud de un acuerdo de libre comercio entre Australia y Tailandia, la empresa australiana Kingsgate demandó a Tailandia por treinta mil millones de baht tailandeses (1,27 mil millones de USD) como compensación del gobierno tailandés por el cierre forzoso de la mina. Pero menos de quince días antes de la publicación del fallo del tribunal de arbitraje con sede en Singapur, en abril de 2023, el gobierno de Tailandia reabrió la mina para Kingsgate con el fin de evitar la ignominia de la derrota ante el tribunal y un pago de una cifra de nueve ceros (Barett, 2022).

Indonesia, el mayor productor de níquel del mundo, ha recibido amenazas de demanda por parte de inversores extranjeros, porque el país ha promulgado una política para restringir la exportación de minerales críticos. Por ejemplo, las amenazas de demanda de dos empresas estadounidenses, Newmont Nusa Tenggara (Van Der Pas y Damanik, 2014) y Freeport McMoran (Supriyatna, 2017), desafiaron la Ley de Minería de Indonesia, que da prioridad a la necesidad de

procesamiento nacional de materias primas frente a la actividad exportadora. El efecto de enfriamiento normativo de estas demandas de los inversores ha socavado el control de la población sobre sus tierras y otros recursos naturales (Indonesia for Global Justice, 2019). Del mismo modo, la demanda de Churchill Mining y Planet Mining, dos empresas originarias del Reino Unido y Australia, respectivamente, se centra en la revocación por parte del gobierno regional de permisos de minería a cielo abierto que se solapan. Las concesiones mineras están situadas en zonas de conservación y bosques protegidos que violan los derechos de los indígenas de siete pueblos de Kutai Timur, Kalimantan, y dañan el medioambiente. En este caso, Churchill y Planet Mining exigieron al estado indonesio una indemnización de mil millones de USD. La misma cantidad equivale a la asignación anual de subsidios alimentarios de Indonesia. El gobierno ganó el caso, pero tuvo que pagar el coste del procedimiento de arbitraje, que ascendió a ocho millones de USD.

Los acuerdos comerciales y de inversión obstaculizan una transición justa en el Sur global: el caso de Indonesia

Según el estado indonesio, la nueva generación de acuerdos de libre comercio e inversión obstaculiza su “derecho al desarrollo”. Con grandes reservas de níquel y otros minerales críticos necesarios para la transición energética, Indonesia está atrapada en un vórtice de competición mundial por el suministro de minerales. En particular, Indonesia planea asumir un papel importante en las actividades de la cadena de suministro para la producción mundial de baterías eléctricas y el suministro de recursos minerales. Esta agenda forma parte de los compromisos del gobierno indonesio para transformar su economía de país exportador de materias primas a exportador de productos altamente competitivos. Es una política importante para romper con el modelo de desarrollo colonialista depredador que depende en gran medida de la exportación de materias primas.

El gobierno del presidente Jokowi Widodo planea implementar esta agenda a través de un plan de transición e industrialización de energía verde que se centra en la creación de su capacidad para producir baterías eléctricas y suministros para vehículos eléctricos [EV por sus siglas en inglés] (Secretaría del Gabinete de la República de Indonesia, 2019), como se indica en el Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo 2019-2024 [RPJM por sus siglas en indonesio] (República de Indonesia, 2020). Con el fin de cambiar su posición de exportador de materias primas a exportador de productos acabados, el gobierno ha instituido una política para priorizar el uso interno de minerales críticos necesarios para la industrialización nacional de la producción de baterías para EV. Esto ha conllevado necesariamente restricciones en las exportaciones de minerales críticos. En 2020, el gobierno prohibió la exportación de mineral de níquel (Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, 2020), y más adelante, en diciembre de 2022, de bauxita (Secretaría del Gabinete de la República de Indonesia, 2022). Ambos minerales serán procesados y refinados en el país.

Según el gobierno indonesio, esta política se basa en el cumplimiento de su mandato constitucional de utilizar la riqueza natural propiedad del estado para el bienestar de su pueblo.⁸ El papel fuerte y central del estado en el control y la gestión de los recursos naturales del país también se aplica a través de la nacionalización del sector minero, tal y como se describe y regula en la Ley de Minas 4/2009. La ley obliga a las empresas mineras a procesar y refinar los productos mineros en el país antes de exportarlos para aumentar el valor añadido de las materias primas minerales⁹. Además, la ley pretende

⁸ Apartados 2 y 3 del artículo 33 de la Constitución de Indonesia de 1945. El apartado (2) establece que “el estado controla los sectores de la producción que son importantes para el estado y que afectan a la vida del pueblo en general”. El apartado (3) establece que “la tierra, el agua y los recursos naturales son controlados por el estado y utilizados para la mayor prosperidad del pueblo”.

⁹ Artículos 102 y 103 de la Ley de Minas 4/2009. El artículo 102 establece que “los titulares de IUP (licencia minera) e IUPK (licencia minera especial) están obligados a aumentar el valor añadido de los recursos minerales y/o del carbón en la ejecución

nacionalizar las empresas mineras extranjeras, lo que obliga a las industrias mineras de propiedad extranjera a ceder progresivamente sus acciones al gobierno indonesio a través de empresas estatales [SOE por sus siglas en inglés] o industrias locales, convirtiéndose en una minoría accionarial en un plazo de cinco años,¹⁰ y en un plazo de diez años, a aumentar las acciones propiedad de indonesios hasta el 51 %.¹¹ Aparte de las restricciones a la exportación de minerales clave, Indonesia está aplicando políticas proteccionistas en materia de energía y materias primas, como la limitación de la prohibición de requisitos de contenido local,¹² la transferencia de tecnología y la privatización de SOE (Ministerio de Industria de Indonesia, 2019). Con ello se pretende proteger y desarrollar las industrias nacionales.

Sin embargo, las normas del comercio internacional volverán a impedir que Indonesia aplique su programa de transición energética. Por ejemplo, los intereses de la UE en el marco de las negociaciones del Acuerdo General de Asociación Económica entre Indonesia y la UE [IEU-CEPA] pueden socavar los planes de Indonesia. Como era de esperar, la UE expresó su preocupación por estas políticas

de las actividades de extracción, transformación y refinado, así como la utilización de los minerales y el carbón”. El artículo 103 establece que “los titulares de Operaciones de Producción IUP e IUPK están obligados a procesar y refinar los productos mineros a nivel nacional”.

¹⁰ El artículo 112 de la Ley de Minas 4/2009 establece que “después de cinco años de producción, las entidades empresariales titulares de IUP e IUPK cuyas acciones sean propiedad de extranjeros están obligadas a ceder sus acciones al gobierno, al gobierno regional, a las empresas estatales, a las empresas de propiedad regional o a las empresas privadas nacionales [...]”.

¹¹ El artículo 27 del Reglamento del ministro de Energía y Recursos Minerales 25/2018 establece que “los titulares IUP de la Operación de Producción y los titulares IUPK de la Operación de Producción en el marco de la inversión extranjera, al pasar cinco años después de la producción están obligados a llevar a cabo una desinversión gradual de las acciones, de modo que en el décimo año al menos el 51 % de las acciones sean propiedad de participantes indonesios”. La Ley de Minas 4/2009 ha sido modificada por la nueva Ley de Minas n.º 3/2020, pero en ella se reafirmaron obligaciones y requisitos similares.

¹² Los requisitos de contenido local son normas que obligan a una empresa extranjera a obtener una determinada cantidad de su bien o servicio final de empresas nacionales, ya sea mediante compras locales o producción real.

proteccionistas en un documento de alcance, alegando que obstaculizarán su necesario suministro de minerales críticos.¹³ Además, el capítulo sobre inversiones del IEU-CEPA adopta un enfoque similar al ISDS al incorporar un sistema de tribunales de inversiones que protege firmemente los derechos y beneficios de los inversores. Se espera que el programa de nacionalizaciones de Indonesia sirva de base para que las empresas demanden al país en virtud de este acuerdo bilateral (Transnational Institute, 2018).

Más allá de la amenaza de que países poderosos socaven las ambiciones de transición energética de Indonesia, el control del estado sobre los recursos naturales y la aplicación de la actual transformación económica nacional han suscitado serias preocupaciones entre los movimientos populares y de base del país. Las principales críticas se centran en las contradicciones y repercusiones que genera esta agenda extractivista y antidemocrática.

La realización de la transformación económica de Indonesia basada en los recursos naturales, en particular en la industrialización de baterías para EV, requiere una expansión de la industria minera y de procesamiento y el desarrollo de infraestructuras a gran escala que se regula en el marco del Proyecto Estratégico Nacional [PSN por sus siglas en indonesio]. En 2021, había un total de trescientos treinta y nueve permisos activos para negocios mineros (Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, 2021) que cubrían una extensión total de ochocientas treinta y seis mil hectáreas, lo que ha incitado y aumentado los conflictos agrarios. Han estallado unos cuarenta conflictos que afectan a 11 466,923 hectáreas (Consortio para la Reforma Agraria de la República de Indonesia, 2022). Estos conflictos suelen caracterizarse por violaciones de los derechos humanos e impactos socioambientales que afectan a numerosas comunidades.

¹³ Ver la sección sobre Materias Fundamentales y Energía en el *Scoping Paper CEPA of Indonesia-EU*, 16.

Además, el plan de industrialización de Indonesia sigue dependiendo en gran medida de las inversiones extranjeras. El gobierno necesita treinta mil novecientos millones de USD como inversión total para desarrollar la industria de la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos del país (Investor.id, 2022). Con el fin de atraer inversiones extranjeras para apoyar esta política industrial, el gobierno aprobó una controvertida ley de regulación nacional llamada Ley Ómnibus de Creación de Empleo que facilita a los inversores extranjeros la obtención de licencias comerciales, incluidos los permisos para acceder a los recursos naturales y el arrendamiento de tierras, y flexibiliza la legislación laboral (Indonesia for Global Justice, 2020).

Las contradicciones de la transición energética del gobierno indonesio plantean la cuestión del papel del estado en la realización de una transición y transformación justas en el país. En mi opinión, la transición justa comprende un giro sistémico, a través de medios genuinamente democráticos, que se aleja de la explotación, la extracción y la alienación, para acercarse a sistemas de producción y reproducción centrados en el bienestar humano y la regeneración de los ecosistemas.¹⁴ La transición justa es mucho más que un cambio de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables o verdes (Transnational Institute, 2022).

Pero incluso dentro de esta cuestión de la transición energética, hay que cuestionar la propiedad y el control estatales y corporativos y el acceso a las fuentes de energía, los materiales y las tecnologías necesarias. Para ello también es necesario cuestionar los acuerdos de libre comercio e inversión que limitan la posibilidad de democratizar la transición energética para las personas y el planeta. Implica desplazar el poder y el control en todos los aspectos del sector: desde la producción a la distribución y el suministro, desde las finanzas a la tecnología y el conocimiento, y desde lxs usuarixs de la energía a lxs trabajadorxs (Transnational Institute, 2016). En el caso de Indonesia,

¹⁴ Ver <https://www.tni.org/en/publication/just-transition>

esto significa cuestionar la agenda de transición energética dirigida por el estado y su continua dependencia de las normas y acuerdos comerciales que, paradójicamente, socavan esta misma agenda.

Una transición verdaderamente justa significa embarcarse en un proceso que desarrolle la praxis de una transición energética popular dirigida por la clase trabajadora del país (Transnational Institute, 2019). Una transición energética popular debe basarse en la construcción del derecho a la energía, el fortalecimiento de diversas formas de esfera pública, la descentralización y democratización de los procesos de toma de decisiones en torno a la energía, y la construcción de nuevas relaciones sociales ancladas en la armonía entre las personas y la Naturaleza.

Bibliografía

Agencia Internacional de la Energía. (2021). *The role of critical minerals in clean energy transitions*. OECD Publishing.

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development [APWLD]. (25 de marzo de 2021). Press Release: ASEAN's Fate Hangs in an RCEP Balance. <https://apwld.org/press-release-aseans-fate-hangs-in-an-rcep-balance/>

Barett, Chris. (7 de febrero de 2022). Thai PM Prayut under Fire over Reopening of Australian Gold Mine. *Sydney Morning Herald*. <https://www.smh.com.au/world/asia/thai-prime-minister-under-fire-over-reopening-of-australian-gold-mine-20220207-p59ud5.html>

Bendall, Paul A. (2022). *Mine 2022: A Critical Transition*. PwC. <https://www.pwc.com/id/en/pwc-publications/industries-publications/energy-utilities---mining-publications/mine-2022.html>

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones [CIADI]. (2002). Annual Report 2022. https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/ICSID_AR.EN.pdf

Comisión Europea. (2021). *EU and Canada Set up a Strategic Partnership on Raw Materials*. https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/eu-and-canada-set-strategic-partnership-raw-materials-2021-06-21_en

Comisión Europea. (2023a). *European Critical Raw Materials Act*. https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/european-critical-raw-materials-act_en

Comisión Europea. (2023b). *Critical Raw Materials: ensuring secure and sustainable supply chains for EU's green and digital future*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661

Consortio para la Reforma Agraria de la República de Indonesia [Konsorsium Pembaruan Agraria] (24 de septiembre de 2022). Menuntun Jalan Sejati Reforma Agraria. https://www.kpa.or.id/kabar-agraria/view/menuntun-jalan-sejati-reforma-agraria_38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52

Global Development Policy Center (24 de marzo de 2021). RCEP: Goods Market Access Implications for ASEAN. <https://www.bu.edu/gdp/2021/03/24/rcep-goods-market-access-implications-for-asean/>

Indonesia for Global Justice. (2019). Gugatan ISDS: Ketika Korporasi Mengabaikan Kedaulatan Negara. <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Majalah-IGJ-ISDS-Lawsuit-compressed.pdf>

Indonesia for Global Justice (Abril de 2020). RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja. https://igj.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Framing-Paper-IGJ_RUU-Omnibus-Cilaka.pdf

Inequality.org (14 de abril de 2022). Ousted Pakistani Leader Was Challenging Investment Treaties That Give Corporations Excessive Power. <https://inequality.org/research/pakistan-khan-investment-treaties/>

InsideTrade.Com (15 de septiembre de 2022). G7 Trade Ministers Eye Progress on WTO Reform, Economic Coercion. <https://insidetrade.com/daily-news/g7-trade-ministers-eye-progress-wto-reform-economic-coercion>

Institute for Policy Studies (Septiembre de 2022). Resumen de Amicus Curiae a la Corte Constitucional de Colombia instando a la aplicación de la decisión a favor del pueblo indígena wayúu y la protección del río Bruno afectado por la mina de carbón térmico a cielo abierto del Cerrejón. <https://ips-dc.org/wp-content/uploads/2022/09/Summary-of-Amicus-Curiae-to-the-Constitutional-Court-of-Colombia.docx.pdf>

Investor.id (7 de diciembre de 2022). Menkomarves Catat Pipeline Investasi Hilirisasi Tambang US\$ 30,9 Miliar, Berikut Daftarnya. <https://investor.id/business/315583/menkomarves-catat-pipeline-investasi-hilirisasi-tambang-us-309-miliar-berikut-daftarnya>

Liao, Cynthia y Beal, Theo (24 de junio de 2022). *The Role of the G7 in Mobilizing for a Global Recovery*, Chatham House).

Majkut, Joseph (1 de marzo de 2023). The Inflation Reduction Act: A Race to the Top or Protectionism in High Gear? *Center For Strategic & International Studies [CSIS]*. <https://www.csis.org/analysis/inflation-reduction-act-race-top-or-protectionism-high-gear>

Marco Económico Indo-Pacífico [IPEF]. (2022). Ministerial Statement for Pillar II of the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. <https://www.commerce.gov/sites/default/files/2022-09/Pillar-II-Ministerial-Statement.pdf>

Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia [Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]. (Enero de 2020). Biji Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/biji-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020>

Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia [Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]. (2021). Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Grand Strategy Mineral Dan Batubara. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf>

Ministerio de Industria de Indonesia [Kemenperin Perindustrian]. (2019). Pemerintah Targetkan Indonesia Jadi Pusat Kendaraan Listrik Di ASEAN. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/21279/ghs>

Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania [BMWK] (15 de septiembre de 2022). *G7 Trade Ministers' Statement*. Neuhardenberg. <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/G/20220915-g7-trade-ministers-statement-neuhardenberg-15-september-2022.html>

Nagy, Stephen R. (15 de febrero de 2022). Canada Critical to Helping Ensure Global Supply Chain Security. *The Japan Times*. <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2022/02/15/commentary/world-commentary/canada-supply-chains/>

OCDE. (2022). *Security of Supply for Critical Raw Materials: Vulnerabilities and Areas for G7 Coordination*. Cumbre de Líderes del G7, 26-28 de junio de 2022, Schloss Elmau. <https://www.>

bundesregierung.de/resource/blob/974430/2059152/913f41a5d-52c8aa68b1bb0e03176879d/2022-07-01-security-of-supply-for-critical-raw-materials-data.pdf?download=1

Organización Mundial del Comercio (s. f.). *Technical Information on Rules of Origin*. https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_info_e.htm

República de Indonesia. (2020). *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia. Narasi*, 18. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Dokumen%20RPJMN%202020-2024/Lampiran%201.%20Narasi%20RPJMN%202020-2024.pdf

Schneider-Petsinger, Marianne (14 de septiembre de 2021). US and European Strategies for Resilient Supply Chains. *Chatham House – International Affairs Think Tank*. <https://www.chathamhouse.org/2021/09/us-and-european-strategies-resilient-supply-chains>

Secretaría del Gabinete de la República de Indonesia [Sekretariat Kabinet Republik Indonesia] (15 de agosto de 2019). Inilah Perpres N.º 55/2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. <https://setkab.go.id/inilah-perpres-no-55-2019-tentang-program-kendaraan-bermotor-listrik-berbasis-baterai/>

Secretaría del Gabinete de la República de Indonesia [Sekretariat Kabinet Republik Indonesia] (21 de diciembre de 2022). Oficina del Asistente del Secretario Adjunto del Gabinete para Documentos de Estado y Traducción. *Gov't to Impose Export Ban on Bauxite Ore June Next Year*. <https://setkab.go.id/en/govt-to-impose-export-ban-on-bauxite-ore-june-next-year/>

Supriyatna, Iwan (21 de febrero de 2017). Pemerintah Diminta Cuek terhadap Ancaman Freeport. *Kompascom*. <https://money.kompas.com/read/2017/02/21/112522526/NaN>

Transnational Institute (13 de septiembre de 2022). *From Crisis to Transformation*. <https://www.tni.org/en/publication/from-crisis-to-transformation>

Transnational Institute (15 de febrero de 2018). The EU - Indonesia CEPA Negotiations. <https://www.tni.org/en/publication/the-eu-indonesia-cepa-negotiations>

Transnational Institute. (19 de mayo de 2016). *Towards Energy Democracy*. <https://www.tni.org/en/publication/towards-energy-democracy>

Transnational Institute. (6 december 2019). *Towards a Corporate or a People's Energy Transition?* <https://www.tni.org/en/publication/towards-a-corporate-or-a-peoples-energy-transition>

UNCTAD. (2022). IIA Issues Note. International Investments Agreements, N.º 4. https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2022d7_en.pdf

Van Der Pas, Hilde y Damanik, Riza (November 12, 2014). The case of Newmont Mining vs. Indonesia. *TNI*. <https://www.tni.org/en/publication/the-case-of-newmont-mining-vs-indonesia>

Van Harten, Gus. (2016). A Critique of Investment Treaties. *Rethinking Bilateral Investment Treaties: Critical Issues and Policy Choices*, 41-50.

“Soluciones basadas en la naturaleza”

La mercantilización de la gobernanza ambiental mundial¹

Mary Ann Manahan

Introducción

El sistema multilateral está en crisis. En concreto, el multilateralismo, encarnado principalmente por el sistema de las Naciones Unidas [ONU], se ha visto empañado por las controversias en torno a su legitimidad, credibilidad y relevancia como institución mundial capaz de fomentar la cooperación y la acción internacionales en torno a los problemas más acuciantes de la actualidad, como el cambio climático, la creciente desigualdad, la salud y la pandemia de COVID-19 (Monsalve, 2021). Sin embargo, la crisis del multilateralismo no es nueva. No es más que una continuación de procesos políticos e históricos que comenzaron a finales de los años setenta.

Según Adom Getachew, esta década estuvo marcada por una contrarrevolución neoliberal del capital que trajo consigo cambios

¹ Este capítulo recupera y amplía mi investigación llevada a cabo conjuntamente con Madhuresh Kumar publicada bajo el título *Asalto al poder: Mapeo del multistakeholderismo en la gobernanza mundial* (ver Manahan y Kumar, 2021).

significativos dentro del sistema de la ONU. En primer lugar, el rechazo de la visión del Nuevo Orden Económico Internacional [NOEI] de dismantelar los vestigios económicos del colonialismo (Getachew, 2019). El NOEI fue defendido por los nuevos países independientes del Sur global que abogaban por el bienestar internacional, la redistribución y la justicia global a través de un nuevo sistema global interdependiente como vías para poner fin a las relaciones comerciales explotadoras e injustas y a un orden financiero construido por Occidente que mantenía estructuralmente la hegemonía global de Estados Unidos (Doucouré, 2023). En segundo lugar, la retirada gradual de Estados Unidos de la ONU y otras instituciones multilaterales en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial (Getachew, 2019, pp. 176-77). En lugar de participar en un orden internacional basado en normas, Estados Unidos adoptó un “nuevo soberanismo” que promovía la intervención militar y rechazaba las normas internacionales (Getachew, 2019, pp. 178-79).

En tercer lugar, se generalizó la crítica a la ineficacia del sector público y a la regulación estatal. Los defensores de esta crítica afirmaban que el sector privado y el mercado eran más eficientes y, por tanto, debían tener un mayor papel en la política y la gobernanza públicas. A principios de la década de los ochenta, este pensamiento neoliberal se convirtió en hegemónico, imponiendo lógicas empresariales de “calidad” y “eficiencia” como normas universales que debían adoptar las instituciones públicas a múltiples escalas (Lander y Arconada Rodríguez, 2019). Esta evolución se vio reforzada por la popularización del concepto de “gobernanza” por parte del Banco Mundial en la década de los noventa, que abrió tácitamente el espacio para que las empresas, como parte de la “sociedad civil”, participaran en la toma de decisiones sobre una serie de temas internacionales, en particular en el suministro de bienes públicos mundiales (ver Kaul et al., 1999).

El multistakeholderismo² se convirtió en el nuevo enfoque para poner en práctica este cambio paradigmático que introdujo “todo un conjunto nuevo de actores de gobernanza y un nuevo proceso para elaborar leyes y regulaciones globales” (Gleckman, 1998). El siglo XXI fue testigo de la creciente influencia de las empresas transnacionales [ETN] y otros actores privados que dan más importancia a los intereses políticos y económicos que a las cuestiones de interés público y al destino del planeta. Su papel se ha visto reforzado por la modalidad de las asociaciones público-privadas (McKeon, 2017) y el Pacto Mundial de la ONU, la mayor iniciativa de “sostenibilidad” empresarial de la década de los años 2000 (Manahan y Kumar, 2021).

Con raíces en la ciencia y prácticas de gestión empresarial, el concepto de “partes interesadas” en el multistakeholderismo se refiere a organizaciones y personas que tienen “intereses en juego” o un interés en debatir un reto político específico o en generar acciones para abordarlo. Sin embargo, el lenguaje de las partes interesadas y de los intereses en juego, sobre todo a escala mundial, está impregnado de cuestiones políticas indiscutibles y asimetrías de poder que a menudo se ocultan o eluden en el intento de alcanzar un consenso orientado a la acción. No todas las partes interesadas tienen la misma posición y no todos los intereses en juego definen la agenda, los planes y las acciones dentro de las iniciativas de multistakeholderismo. A menudo, los más poderosos, ya sean países, donantes o empresas, son los que inclinan la balanza de la gobernanza.

Este capítulo ofrece una crítica del multistakeholderismo como una forma de gobernanza mundial privatizada marcada por la captura corporativa, el déficit democrático y de rendición de cuentas, y una ONU cómplice. Contribuye a los debates sobre transformación ecosocial explorando críticamente las articulaciones concretas del multistakeholderismo en la gobernanza ambiental mundial. Analiza

² Multistakeholderismo es un anglicismo que retoma la dicción usada a nivel internacional para referirse al principio de múltiples partes interesadas, que pretende abrirse a la participación y consideración de los enfoques de todos los actores que participan en una determinada iniciativa o política.

los actuales entrelazamientos entre los Nortes y los Sures geopolíticos, argumentando que la gobernanza ambiental mundial bajo el multistakeholderismo se sustenta en discursos y perspectivas coloniales y capitalistas sobre la Naturaleza. Estas epistemes dieron lugar a las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, en las que invierten lucrativamente las grandes ETN contaminantes y otros actores privados. Impulsadas por la lógica neoliberal de que una solución solo es viable si es, ante todo, rentable, las iniciativas de multistakeholderismo en torno a las “soluciones basadas en la naturaleza” están configurando predominantemente los límites de las soluciones a las crisis ecosociales. Por último, el capítulo concluye con una reflexión sobre las posibilidades de reconstituir un multilateralismo democrático radical en el actual sistema de gobernanza mundial.

La privatización de la gobernanza ambiental mundial

Varias dinámicas coalescentes han facilitado el auge del multistakeholderismo en el gobierno de los ecosistemas mundiales. Una es el ejercicio de la autoridad política nacional por parte de poderosos gobiernos productores de contaminación en cuestiones ecosociales que requieren una acción colectiva más allá de las fronteras nacionales. Un ejemplo es la insistencia de EE. UU. y la UE en considerar el índice de emisiones de gases de efecto invernadero como un asunto nacional, y no como una cuestión de toma de decisiones a nivel internacional (Gleckman, 1998). Esta flagrante muestra de dominio nacional por parte de los países poderosos cuando conviene a sus intereses ha obstaculizado la gobernanza ambiental multilateral.

La segunda es la institucionalización del “desarrollo sostenible”, un término que se situó en el mapa gracias al Informe “Nuestro Futuro Común” de 1987, también conocido como Informe Brundtland, y a la Cumbre de la Tierra de 1992 que engendró la Agenda 21 y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El desarrollo

sostenible se definió en el informe Brundtland como “el desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias” (ONU, 1987). Aunque el concepto ha sido muy debatido por su ambigüedad, en su núcleo está la certeza de que el crecimiento económico ilimitado y la protección de la Naturaleza pueden ir de la mano, incluso en un planeta finito, y de que no existe un conflicto inevitable entre ambos (The Sustainable Development Knowledge Platform, 2022). Veinte años después, en la Cumbre de Río+20, los estados miembro de la ONU renovaron los mismos objetivos de desarrollo de beneficios, personas y planeta. Pero esta vez incluso abogando por una “relación de refuerzo mutuo [...] de los objetivos de crecimiento económico, protección de la naturaleza y equidad social” (Wilshusen, 2014) bajo un nuevo marco: la “economía verde”, en cuyo centro se encuentra la continuación de la lógica dominante del capitalismo depredador y neoliberal.

En este nuevo marco, salvar la Naturaleza y la biodiversidad solo puede lograrse mediante la revalorización y la incorporación de los pueblos y los ecosistemas a las condiciones de los mercados financieros y mundiales (Büscher et al., 2012). Para ello, los estados, el sector privado y la sociedad civil han reformulado las medidas y acciones de gobernanza medioambiental, pasando de una normativa ambiental centralizada y dirigida por el estado a enfoques descentralizados y basados en el mercado (por ejemplo, el pago por servicios ecosistémicos) (Dressler et al., 2012). La reorientación hacia enfoques basados en el mercado se considera la respuesta “alternativa” a las pesadas y estrictas regulaciones de los años sesenta y setenta, o lo que Naomi Klein denomina la “edad de oro de la legislación medioambiental”, respaldada por el principio de que quien contamina paga y que limitaba severamente la contaminación y otras formas de degradación medioambiental mediante sanciones efectivas (Klein, 2015). Según Klein, estas políticas se diseñaron para regular la contaminación y proteger la salud pública y el medioambiente, pero luego fueron duramente criticadas por los neoliberales que las

consideraban costosas, ineficaces y opresivas, argumentando que impedían el crecimiento económico y la innovación (Klein, 2015). En otras palabras, acusaron a estas regulaciones medioambientales de ser onerosas para las empresas y, en su lugar, defendieron enfoques voluntarios de las regulaciones medioambientales y soluciones basadas en el mercado como formas más eficientes de abordar los problemas socioecológicos.

La tercera y última dinámica se refiere a la disminución de los recursos procedentes de los miembros más ricos de la ONU, en particular Estados Unidos, que llevó a las agencias de la ONU a depender cada vez más de las megafilantropías y las empresas donantes para cubrir este déficit de financiación. Desde los mandatos de los exsecretarios generales de la ONU, Boutros Boutros-Ghali y Kofi Annan (Michéle, et al., 2019), esta estrecha alianza entre la ONU y los actores corporativos se afianzó aún más a través de diversos acuerdos mundiales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio [ODM], los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS] y el Acuerdo de París de 2015 (Manahan y Kumar, 2021, p. 5). El último acuerdo que formalizó las relaciones entre la ONU y el Foro Económico Mundial [FEM], una asociación mundial de las personas e instituciones más influyentes del mundo empresarial, político, científico y cultural, es el Marco de Asociación Estratégica de 2019, cuyo objetivo es profundizar en los acuerdos institucionales para acelerar la implementación de los ODS (Tedeneke, 2019). Este acuerdo legitima lo que el fundador y director del FEM, Klaus Schwab, denomina “capitalismo de multistakeholderismo”, o un “nuevo paradigma de gobernanza internacional de multistakeholderismo análogo al plasmado en la teoría de gobernanza empresarial por multistakeholderismo sobre la que se fundó el propio Foro Económico Mundial” (Foro Económico Mundial, 2010). Este tipo de multistakeholderismo refleja un discurso capitalista que da prioridad a los intereses de las empresas y los accionistas, mientras que aparentemente aboga por un enfoque más amplio de la gobernanza mundial basado en las partes interesadas. El problema aquí no es solo que el FEM es un club privado de ricos y adinerados sin ninguna

legitimidad democrática, sino también que defiende descaradamente un modelo de gobernanza de enfoque tecnocrático y elitista, desconectado de las necesidades y las voces de las comunidades locales y de la mayoría de la población mundial. Por lo tanto, es muy dudoso que su llamamiento a un cambio de paradigma en la gobernanza conduzca a resultados más equitativos y justos para todas las “partes interesadas”.

Un ejercicio de mapeo de veintiséis iniciativas de multistakeholderismo (Manahan, 2021) reveló la complicidad de la ONU y el alto grado de influencia que ejercen las empresas y las grandes ONG en estos espacios. Por ejemplo, las empresas dominan las estructuras de toma de decisiones de la Alianza para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética (Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership [REEEP]). Lanzada originalmente por el gobierno del Reino Unido, en 2002, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, la REEEP pretendía facilitar la transformación del mercado de las energías renovables en Asia y África utilizando mecanismos de financiación públicos y privados. Como entidad autónoma respaldada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, su consejo asesor y su consejo de administración están formados por grandes empresas energéticas (como General Electric, First Energy Asia y Enel) y de inversión (como Glennmont Partners, Southbridge Investments y Finite Carbon) que han accedido a mercados emergentes del Sur global.

Desentrañando el multistakeholderismo ambiental mundial

En el mismo ejercicio de mapeo mencionado anteriormente, se identificaron dos focos temáticos e imperativos discursivos distintos de las iniciativas ambientales de multistakeholderismo. Entre 2000 y 2010, la mayoría de ellas se centraron en la gestión del uso de los bosques, la regulación de la minería, el petróleo y el gas, así como de las industrias de agrocombustibles emergentes y en la bursatilización

del medioambiente. En todos estos temas, el encuadre que se ha promovido es que el medioambiente, la biodiversidad y la Naturaleza están sumamente amenazados, y la amenaza a su existencia se plantea como urgente para poder obviar así justificadamente el debate político (ver Mitchell, 2016). Este marco ha facilitado la elaboración de normas sociales y medioambientales que dependen en gran medida de la responsabilidad social corporativa y del cumplimiento voluntario de las empresas, reduciendo la acción gubernamental a la supervisión.

La atención prestada a las normas voluntarias generó múltiples mesas redondas centradas en los productos básicos de exportación (por ejemplo, aceite de palma, diamantes) y las etiquetas ecológicas (por ejemplo, Marine Stewardship Council). En 2002 se creó la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas [EITI por sus siglas en inglés], un estándar global de multistakeholderismo, para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros en cincuenta y cinco países. Contaba con el respaldo de una coalición de gobiernos, ONG y empresas. Sin embargo, su retórica de rendición de cuentas y transparencia oculta la negligencia de la EITI ante la corrupción de los gobiernos participantes y los impactos socioambientales y sobre los derechos humanos de las industrias extractivas (ver ActNow, 2015). La EITI ha sido una herramienta para maquillar de verde al estado y las empresas, así como para la expansión de nuevos territorios para la minería.

De 2011 a 2020, las iniciativas de multistakeholderismo abordaron temas (más) nuevos, como la financiación de la lucha contra el cambio climático, las soluciones climáticas naturales y basadas en la naturaleza, y las energías renovables. Estas iniciativas se formaron durante un periodo de intensos debates y negociaciones multilaterales sobre el cambio climático a escala mundial, por un lado. Por otro, se produjo un aumento de la concienciación mundial y de las demandas de acción para hacer frente a los efectos del “Antropoceno”, un nuevo periodo geológico no oficial que marca los innegables impactos de las actividades humanas sobre el clima y los ecosistemas

de la Tierra.³ Las soluciones basadas en la naturaleza y sus iteraciones, como el concepto de “soluciones positivas para la naturaleza”, surgieron como otras palabras de moda en materia de sostenibilidad. Estas estrategias subrayan la idea de “trabajar con la naturaleza para que haga lo que ya hace desde hace millones de años: capturar y almacenar el carbono”.⁴ Abarcan los esfuerzos de conservación, restauración y mitigación basados en la tierra que pretenden aumentar el almacenamiento de carbono o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero en bosques, paisajes y humedales de todo el mundo. En un vídeo de propaganda empresarial (WBCSD, s. f.), grandes emisores y contaminadores como Shell hacen un llamamiento descarado a las empresas para que se unan con el fin de liberar el potencial (de beneficios) de las soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a la crisis climática.

Ejemplos concretos son las iniciativas de multistakeholderismo lideradas por el FEM denominadas Alianza para las Soluciones Climáticas Naturales (Natural Climate Solutions Alliance [NCSA]) y Naturaleza por el Clima [Nature4Climate], cuyos objetivos principales son aumentar las inversiones e influir en los responsables políticos para inducir acciones especialmente en los sectores agrícola y forestal. Las iniciativas abogan por la creación de nuevas métricas y modelos de negocio que capitalicen las transiciones necesarias en tres sistemas socioeconómicos⁵ que, según los proponentes, pueden generar ostensiblemente 9,3 billones de euros de oportunidades de negocio anuales y trescientos noventa y cinco millones de puestos de trabajo de aquí a 2030 (ver Foro Económico Mundial, 2020). El FEM enumera modelos empresariales “innovadores e impulsados por la

³ Para una buena introducción sobre el Antropoceno, ver Hamilton et al., 2015.

⁴ El Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible [WBCSD por sus siglas en inglés] es la mayor organización dirigida por directivos de más de doscientas empresas internacionales, y está conectada con sesenta organizaciones empresariales regionales y nacionales (ver WBCSD, s. f.).

⁵ Los tres sistemas que requieren transformaciones fundamentales son el uso de los alimentos, la tierra y los océanos; las infraestructuras y el entorno construido; y la energía y las industrias extractivas.

tecnología”, como las proteínas alternativas a los alimentos y las tecnologías de ahorro de residuos. El FEM subraya la idea de que se pueden obtener enormes beneficios en medio de la crisis climática y ecológica si las empresas están dispuestas a cambiar sus operaciones y a realizar una transición hacia prácticas no solo sostenibles, sino “positivas para la naturaleza”.

¿Cuáles son los principales problemas de estos nuevos marcos de sostenibilidad? Refuerzan las relaciones de explotación entre la Naturaleza y la sociedad que han provocado la destrucción de las bases de la vida en primer lugar. Es decir, no serán eficaces para construir la sostenibilidad medioambiental. Además, eufemismos como soluciones basadas en la naturaleza son la última moda en materia de conservación que se utiliza para impulsar diversas formas de compensaciones y soluciones tecnológicas en el Sur global. Los proyectos de compensación de emisiones de carbono, por ejemplo, a menudo han provocado acaparamientos masivos de tierras, desplazamientos y desposesiones, abusos de los derechos humanos contra las comunidades indígenas y forestales, al tiempo que han permitido la contaminación por parte de las industrias interesadas en la compensación (ver Bachram, 2004). Por tanto, las soluciones basadas en la naturaleza son nuevas formas de maquillar de verde que incentivan perversamente a las grandes empresas contaminantes para que sigan lucrándose con el saqueo de la Tierra y la miseria humana.

La Naturaleza como activo para las estrategias de acumulación

Las iniciativas de multistakeholderismo en torno a soluciones basadas en la naturaleza afianzan la valoración de la Naturaleza como capital, un activo económico que fundamentalmente tiene un precio en todas sus dimensiones, servicios y funciones (por ejemplo, la purificación del agua por cuencas hidrográficas prístinas o el secuestro de carbono de bosques y océanos) (Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2011). En consecuencia, la Naturaleza se ve arrastrada a los mercados financieros y, al mismo tiempo, los ecosistemas quedan atrapados en el auge y la caída del mundo financiero, al tiempo que los bosques, los océanos y las tierras se desvinculan de sus lugares de origen, sus historias y sus relaciones con las personas y las comunidades que dependen de ellos (Fairhead, 2012).

La valoración de la Naturaleza como activo económico se refleja mejor en la Declaración del Capital Natural, que pretende desarrollar modelos para monetizar, comercializar y mercantilizar la Naturaleza y los servicios que presta (Büscher y Fletcher, 2015). Firmada por los principales directores ejecutivos de varias empresas mundiales con el apoyo del PNUMA durante la Cumbre de Río+20 en 2012, sostiene que:

El Capital Natural incluye los bienes naturales de la Tierra (suelo, aire, agua, flora y fauna) y los servicios de los ecosistemas derivados, que hacen posible la vida humana. Los bienes y servicios provenientes del Capital Natural tienen un valor de miles de millones de USD cada año y proporcionan alimentos, fibras, agua, salud, energía, seguridad climática y otros servicios esenciales para todos. Ninguno de estos servicios, ni el stock de Capital Natural que los produce, son adecuadamente valuados en comparación con el capital social y financiero. Aunque sean fundamentales para nuestro bienestar, su uso diario pasa casi inadvertido en nuestro sistema económico. Utilizar el Capital Natural de esta manera no es sustentable. El sector privado, gobiernos, y todos nosotros, debemos día con día comprender y darnos cuenta del uso del Capital Natural, reconociendo el verdadero costo del crecimiento económico y del bienestar humano de hoy y mañana. (Natural Capital Declaration, 2012)

Esta declaración señala el “compromiso” del sector empresarial y financiero de trabajar para integrar el “capital natural” en sus visiones, estrategias, operaciones, productos y servicios. Marca el comienzo de la invasión capitalista de la Naturaleza, que valora económicamente

diecisiete servicios ecosistémicos y dieciséis biomas por un valor mínimo de entre quince y cincuenta billones de euros (Costanza et al., 1997). La declaración también dio origen a varias iniciativas de multistakeholderismo, como la Coalición del Capital Natural (Natural Capital Coalition) y la Coalición de Capitales (Capitals Coalition).

Sin embargo, valorar la Naturaleza como capital para las estrategias de acumulación tiene implicaciones de largo alcance. En primer lugar, la Naturaleza solo puede salvarse si se le pone precio. Esto ha generado nuevos mercados como el Mercado de Ecosistemas y el comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos, y también abre la posibilidad de que se agote la Naturaleza en el mismo momento en que esto resulte más rentable que su conservación. En segundo lugar, requiere nuevas modalidades, normas globales e infraestructuras de toma de decisiones que faciliten la participación de los agentes empresariales y financieros para impulsar su integración en múltiples niveles de gobernanza. Un ejemplo es la creación del Protocolo del Capital Natural,⁶ un nuevo marco estandarizado para que las empresas midan, gestionen y valoren sus impactos y dependencias de la Naturaleza. En tercer lugar, esta transformación de nuestra comprensión de la Naturaleza se extiende a los cambios en las relaciones sociedad-Naturaleza. Por ejemplo, el pago por los servicios ecosistémicos propugnado por The Economics of Ecosystem and Biodiversity, una iniciativa mundial para hacer visibles los valores de la Naturaleza, ha transformado a los pueblos indígenas y las comunidades forestales en vendedores y proveedores de servicios ecosistémicos, y a los residentes urbanos, industrias / empresas, etcétera, en usuarios y compradores de estos servicios, reduciendo las complejas relaciones entre el campo y la

⁶ El protocolo complementa otros marcos de contabilidad a nivel nacional, tal como el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico [SCAE] de la ONU, implementado por gobiernos a través de la Alianza Mundial por la Contabilidad de la Riqueza y la Valoración de los Servicios de los Ecosistemas (Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services [WAVES]) liderada por el Banco Mundial.

ciudad a simples transacciones financieras. Esta episteme, por tanto, reconfigura las realidades vividas por los pueblos sobre el terreno.

Además, la omnipresencia de este discurso capitalista sobre la Naturaleza ha sido posible gracias a las estrategias interrelacionadas desplegadas por las iniciativas de multistakeholderismo: combinar la convocatoria con la producción de conocimientos “científicos” y crear comunidades epistémicas. Las organizaciones líderes procedentes del sector empresarial se conectan con las grandes ONG internacionales, la comunidad académica y de investigación, y las agencias de la ONU para difundir sinérgicamente sus narrativas y soluciones a los problemas medioambientales que consideran no gobernados o abordados de forma inadecuada. Por poner un ejemplo ilustrativo, la Coalición del Capital Natural utiliza esta estrategia para hacer avanzar la idea del “capital natural” reuniendo a más de trescientas organizaciones gubernamentales, empresariales y conservacionistas, megafilántropos, agencias de ayuda y organismos de la ONU para apoyar el desarrollo de métodos de valoración del capital natural en las empresas. Esto genera redes o comunidades epistémicas bien conectadas y autorreferenciales (Haas, 1992), que a menudo se consideran poseedoras de “experiencia y competencia reconocidas en un ámbito concreto y una reivindicación autorizada de conocimientos relevantes para las políticas dentro de ese ámbito o área temática”⁷ (Haas, 1992). La enorme complejidad de estas estructuras, su poder económico, político e institucional y su

⁷ Un ejemplo de ello es el científico sueco Johan Rockström, coproductor del influyente informe *Planetary Boundaries and Global Commons in the Anthropocene*. Ha sido la base de iniciativas de multistakeholderismo, como la Global Commons Alliance [GCA], creada para transformar la economía mundial y mantener la resiliencia y estabilidad de los sistemas naturales del planeta. Está gobernada por una dirección compuesta por altos ejecutivos empresariales del FEM y el WBCSD, instituciones académicas y de investigación como el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute [WRI]), el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, el Centro para los Bienes Comunes Mundiales (Centre for Global Commons) y el gigante internacional de la conservación WWF Internacional.

pretensión de saber hacen difícil que los agentes de base se opongan a sus estrategias.

Entrelazamientos Norte-Sur

Las “soluciones basadas en la naturaleza” no solo difunden agresivamente la lógica capitalista. También están impregnadas de dominación colonial y cultural o de lo que Gurminder Bhambra y Peter Newell denominan “colonialismo de las empresas”, un fenómeno contemporáneo en el que las ETN saquean los recursos naturales y explotan la mano de obra en el Sur global, perpetuando patrones históricos de colonialismo (Bhambra y Newell, 2022). Un ejemplo es la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible [RSPO por sus siglas en inglés], un organismo de gobernanza por multistakeholderismo que proporciona certificaciones voluntarias para promover el crecimiento y la sostenibilidad de la industria del aceite de palma. La práctica del monocultivo de plantaciones de palma aceitera es una invención colonial que benefició principalmente a las autoridades coloniales y a las metrópolis (Rodney, 1972). Las plantaciones de palma aceitera también se han asociado a la subyugación, el despojo de tierras y la explotación laboral de los súbditos coloniales. Estas prácticas coloniales continúan hoy en día a pesar de las oximóricas afirmaciones de la RSPO sobre la sostenibilidad del aceite de palma. De hecho, ha sido duramente criticada por certificar a varias empresas industriales de aceite de palma que destruyen los bosques tropicales, desplazan a las poblaciones locales, inducen la pérdida de biodiversidad, fomentan los conflictos por la tierra y violan los derechos de los pueblos en África y Asia, a pesar de las quejas y la oposición de las comunidades (ver CADTM, 2022). El sistema de certificación de la RSPO se adapta bien a las plantaciones a gran escala que dan prioridad a la productividad, la tecnología y los recursos financieros sustanciales, que afianzan el poder empresarial (Sinaga, 2022).

Además, las organizaciones transnacionales de conservación que participan activamente en iniciativas de multistakeholderismo promueven soluciones basadas en la naturaleza en alianza con las ETN y los estados, evocando renovados llamamientos a la creación de áreas protegidas. Las retóricas recurrentes sobre la protección de los bosques como “última frontera” invocan construcciones coloniales y románticas sobre la Naturaleza y los espacios naturales recogidas por la doctrina *Terra Nullius* (de vastas tierras vacías y deshabitadas) (Manahan, 2021). Los esfuerzos por incluir a los pueblos indígenas como “socios naturales” en la conservación están impregnados de tópicos comunes que los culpan de la degradación medioambiental porque han perdido sus valores culturales y sus prácticas tradicionales de relación con la Naturaleza y los bosques y, por tanto, la solución es restaurar sus funciones tradicionales mediante la educación impartida por conservacionistas no indígenas, a menudo occidentales (Rubis y Theriault, 2022).

Estos puntos se refieren a los países del Sur global y a la “(in)capacidad” de los pueblos racializados para proteger el medioambiente. Getachew sostiene que el colonialismo alteró las estructuras políticas y sociales existentes en las sociedades colonizadas, sustituyéndolas a menudo por instituciones que servían a los intereses de las potencias coloniales (Getachew, 2019). Esto ha debilitado enormemente la capacidad de las sociedades del Sur para autogobernarse y crear sus propias instituciones. En el contexto del multistakeholderismo, se crearon plataformas mundiales para promover la producción “responsable” de recursos comercializados internacionalmente con la idea de que los países del Sur global que albergan estos recursos carecen de capacidad para establecer sus propias normas socioambientales y que, por lo tanto, las ONG medioambientales, los gobiernos y las empresas del Norte deben definir lo que constituye una gestión responsable de los recursos. En estos sistemas mundiales de certificación, los países del Sur tienen una influencia limitada a la hora de definir las normas y los procesos de toma de decisiones.

Otro aspecto de los entrelazamientos Norte-Sur es la extracción de recursos. El mejor ejemplo de ello es el sistema de certificación del Proceso de Kimberly (Kimberley Process Certification Scheme [KPCS]), una iniciativa política de multistakeholderismo que pretende impedir el comercio de diamantes conflictivos que se extraen en zonas de guerra y se utilizan para financiar conflictos armados y violaciones de los derechos humanos. Académicos y activistas críticos han denunciado que este sistema consolida relaciones de poder desiguales, ya que otorga a los países del Norte y a las empresas el poder de definir las normas de lo que puede considerarse “diamantes conflictivos”. También perpetúa el salvajismo blanco al situar a estos poderosos actores del Norte como los salvadores de las comunidades mineras del Sur frente a los diamantes conflictivos.

Igualmente insidioso es cómo esos esquemas pasan por alto el hecho de que, hasta la actualidad, la extracción de recursos y los abusos de los derechos laborales en el Sur global suelen estar impulsados por las demandas del Norte de bienes de lujo y minerales, así como por las injustas reglas mundiales del comercio y las instituciones financieras. Al mismo tiempo, los estados periféricos y sus élites político-económicas crean nichos de oportunidades que despliegan prácticas corruptas y de búsqueda de rentas, porque siempre han servido para canalizar las riquezas hacia las élites mundiales extranjeras (ver el capítulo de Nnimmo Bassey en este libro.) Los estados del Sur global no son víctimas inocentes de estos entrelazamientos Norte-Sur, sino actores activos que reproducen la matriz colonial del sistema mundial capitalista. En esta matriz colonial, las iniciativas de multistakeholderismo siguen perpetuando profundamente las relaciones asimétricas entre el centro y la periferia.

¿Reconstituir el multilateralismo radical?

¿Cómo salir de este atolladero? ¿Cómo reimaginar y reconstituir una gobernanza mundial que frene el poder de las empresas, los países

industrializados centrales y otros actores poderosos, y que dé primacía a las voces y realidades de los gobernados? Para reimaginar el futuro de un nuevo multilateralismo radical, el pasado nos ofrece algunos puntos de referencia.

El NOEI exigió un código de conducta para las ETN como pilar para promover la justicia económica y la descolonización en el Sur global. Su objetivo era regular estrictamente las actividades de las empresas y garantizar que respetan la soberanía y los derechos de las comunidades y los países en los que operan. Estas reivindicaciones también resuenan en las campañas mundiales contemporáneas lideradas por los movimientos sociales a favor de un tratado internacional vinculante que regule las actividades de las ETN y otras empresas.⁸ Una creciente comunidad epistémica contrahegemónica formada por movimientos sociales, ONG progresistas, académicos e instituciones de investigación está presentando propuestas para contrarrestar el dominio corporativo de la gobernanza mundial.

Una de ellas es la introducción de un Marco de Responsabilidad Corporativa para toda la ONU propuesto por un grupo de expertos internacionales en el sistema alimentario, denominado IPES-Food. La propuesta refuerza los llamamientos a favor de un instrumento jurídicamente vinculante que exija a las empresas transnacionales la diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente en sus operaciones globales, y que proporcione a las comunidades afectadas acceso a la justicia y a la reparación (IPES-Food, 2023). Concebida para ser aplicada por un organismo internacional independiente, se aleja de los problemáticos mecanismos de cumplimiento voluntario de las empresas en la legislación internacional sobre derechos humanos. Sin embargo, para que esta regulación sea posible, es urgente reconocer y abordar las relaciones de poder existentes en los organismos multilaterales y los conflictos de intereses,

⁸ Gracias a las presiones de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, en 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tomó medidas para elaborar este instrumento jurídicamente vinculante.

en lugar de perpetuar la narrativa diplomática de una comunidad de naciones y partes interesadas que persiguen los mismos objetivos.

Más allá de estas demandas de reforma del actual sistema multilateral, la reconstitución del multilateralismo exige volver a reclamar una redistribución de los recursos, la riqueza y el poder de decisión que no solo rectifique las injusticias históricas, sino que también cree un sistema multilateral radicalmente justo que ponga en primer plano las necesidades y aspiraciones de las comunidades marginadas de todo el mundo. Esto incluye emprender seriamente iniciativas y campañas de reparación que exijan compensaciones justas, tanto monetarias como no monetarias, por los daños ecológicos causados por las industrias extractivas, que puedan redirigirse a proyectos de autodeterminación de las comunidades locales e indígenas.

Además, las nuevas formas de multilateralismo exigen construir nuevos proyectos de gobernanza anclados en principios de solidaridad y ayuda mutua en lugar de competencia e individualismo. Los gobernados —los destinatarios de la gobernanza mundial, como las comunidades de base y los movimientos sociales— pueden tomar la iniciativa en estos espacios. Construir nuevas formas de colaboración implica enfrentarse a los legados del colonialismo que siguen configurando las relaciones de poder mundiales e impiden la realización de un multilateralismo democrático. Esta tarea es ciertamente compleja y desafiante, pero requiere un profundo compromiso con la justicia social y la transformación socioecológica, así como la creación de reglas mundiales que permitan que prosperen diferentes vías de construcción del mundo y de mantenimiento de la vida.

Bibliografía

ActNow (Junio de 2015). The Extractive Industry Transparency Initiative in Papua New Guinea: Just more corporate greenwashing? <https://actnowpng.org/node/25597>

Bachram, Heide (Diciembre de 2004). Climate Fraud and Carbon Colonialism: The New Trade in Greenhouse Gases. Essay, *Capitalism Nature Socialism*, 15 (4). <http://www.carbontradewatch.org/pubs/cns.pdf>

Bhambra, Gurminder y Newell, Peter. (2022). More than a metaphor: “climate colonialism” in perspective. *Global Social Challenges Journal*. <https://doi.org/10.1332/EIEM6688>

Büscher, Bram y Fletcher, Robert. (2015). Accumulation by Conservation. *New Political Economy*, 20 (2), 273-98.

Büscher, Bram; Sullivan, Sian; Neves, Katja; Igoe, Jim y Brockington, Dan. (2012). Towards a Synthesized Critique of Neoliberal Biodiversity Conservation. *Capitalism Nature Socialism*, 23 (2), 4-30.

CADTM (Diciembre de 2022). Roundtable on Sustainable Palm Oil [RSPO]: 19 years is enough. <https://www.cadtm.org/Roundtable-on-Sustainable-Palm-Oil-RSPO-19-years-is-enough>

Costanza, Robert; Monica, Grassot; Hannon, Bruce; Limburg, Karin; Shahid, Naeem; O’Neillt, Robert V.; Paruelo, Jose; Raskin; Robert G.; Sutton, Paul, y Van den Belt, Marjan. (1997). The value of the world’s ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387 (6630), 253-260.

Doucouré, Malick. (2023). The New International Economic Order. *New Age*. <https://www.newagebd.net/article/198941/the-new-international-economic-order>

Dressler, Wolfram; McDermott, Melanie; Smith, Will y Pulhin, Juan. (2012). REDD Policy Impacts on Indigenous Property Rights Regimes on Palawan Island, the Philippines. *Human Ecology*, 40 (5), 679-691.

Fairhead, James; Leach, Melissa y Scoones, Ian. (2012). Green Grabbing: a new appropriation of nature? *The Journal of Peasant Studies*, 39 (2), 237-261.

Foro Económico Mundial. (2010). *Everybody's Business: Strengthening International Cooperation in a More Interdependent World*. Davos: Global Redesign Initiative, 9.

Foro Económico Mundial. (2020). *The Future of Nature and Business*. https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Future_Of_Nature_And_Business_2020.pdf

Getachew, Adom. (2019). *Worldmaking After Empire: The Rise and Fall of Self-Determination*. Princeton: Princeton University Press.

Gleckman, Harris. (1998). *Multistakeholder Governance and Democracy: A Global Challenge*. London: Routledge, 37.

Haas, Peter. (1992). Introduction: epistemic communities and international policy coordination. *International Organization, Cambridge Journals*, 46 (1), 1-35.

Hamilton, Clive; Bonneuil, Christophe y Gemenne, François (eds.). (2015). *The anthropocene and the global environmental crisis: rethinking modernity in a new epoch*. Abingdon: Routledge. <https://www.routledge.com/The-Anthropocene-and-the-Global-Environmental-Crisis-Rethinking-modernity/Hamilton-Gemenne-Bonneuil/p/book/9781138821248>

IPES-Food. (2023). *Who's Tipping the Scales? The growing influence of corporations on the governance of food systems, and how to counter it*. <http://www.ipes-food.org/pages/tippingthescales>

Kaul, Inge; Grunberg, Isabelle y Stern, Marc (eds.). (1999). *Global public goods: international cooperation in the 21st century*. Oxford: Oxford University Press.

Klein, Naomi. (2015). *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate*. New York: Simon & Schuster Paperbacks.

Lander, Edgardo y Arconada Rodriguez, Santiago. (2019). *Crisis Civilizatoria: Experiencias de Los Gobiernos Progresistas y Debates En La Izquierda Latinoamericana*. Germany: Verlag.

Manahan, Mary Ann. (2021). Mercantilizar y vender la naturaleza para salvarla. El multistakeholderismo en la gobernanza ambiental mundial. En Manahan y Kumar, *Asalto al poder: Mapeo del multistakeholderismo en la gobernanza mundial*. Ámsterdam: Grupo de Trabajo de los Pueblos sobre Multistakeholderismo.

Manahan, Mary Ann y Kumar, Madhuresh. (2021). *Asalto al poder: Mapeo del multistakeholderismo en la gobernanza mundial*. Ámsterdam: Grupo de Trabajo de los Pueblos sobre Multistakeholderismo.

McKeon, Nora. (2017). Are Equity and Sustainability a Likely Outcome When Foxes and Chickens Share the Same Coop? Critiquing the Concept of Multistakeholder Governance of Food Security. *Globalizations*, 14 (3), 379-398. <https://doi.org/10.1080/14747731.2017.1286168>

Michéle, Laura; Prato, Stefano, y Rundall, Patti. (2019). *When the SUN Casts a Shadow: The human rights risks of multi-stakeholder partnerships: the case of Scaling up Nutrition [SUN]*. Heidelberg: FIAN International. https://www.fian.org/files/files/WhenTheSunCastsAShadow_En.pdf

Mitchell, Audra. (2016). Beyond Biodiversity and Species: Problematizing Extinction. *Theory, Culture & Society*, 33 (5), 23-42. <https://doi.org/10.1177/0263276415619219>

Monsalve, Sofia. (2021). Re-grounding Human Rights as Cornerstone of Emancipatory Democratic Governance. *Development*, 64, 13-18.

Natural Capital Declaration. (2012). *The Natural Capital Declaration*. <http://www.naturalcapitaldeclaration.org/wp-content/uploads/2013/12/The-Natural-Capital-Declaration-EN.pdf>

ONU. (1987). Brundtland Commission Report: Our Common Future. <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA]. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers*. http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_en.pdf

Rodney, Walter. (1972). *How Europe Underdeveloped Africa*. London: Bogle-L'Ouverture Publications.

Rubis, June y Theriault, Noah. (2022). Concealing protocols: conservation, Indigenous survivance, and the dilemmas of visibility. *Social & Cultural Geography*, 21 (7), 962-984.

Sinaga, Hariati. (2022). Sustaining Plantations and Certifying Inequalities: Towards A Decolonial Critique of Sustainable Palm Oil Certifications in Indonesia. *Working Paper n.º 17, Bioeconomy & Inequalities*. <https://www.bioinequalities.uni-jena.de/en/publications/working-papers>

Tedeneke, Alem (Junio de 2019). World Economic Forum and UN Sign Strategic Partnership Framework. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/press/2019/06/>

world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework/#:~:text=The%20Strategic%20Partnership%20Framework%20will,increase%20long%2Dterm%20SDG%20investments

The Sustainable Development Knowledge Platform (Diciembre de 2022). About the Rio+20 Conference. <https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/about>

WBCSD (s. f.), *Natural Climate Solutions*. <https://www.wbcsd.org/Programs/Climate-and-Energy/Climate/Natural-Climate-Solutions>.

Wilshusen, Peter. (2014). Capitalizing Conservation/Development. *Nature Inc*, 19.

Parte III

**Horizontes hacia un futuro digno
y habitable**

Resistir al extractivismo y construir una transición energética justa y popular en América Latina

Tatiana Roa Avendaño y Pablo Bertinat

Introducción

América Latina es una región rica en experiencias que han mantenido o recuperan la gestión de lo común y proponen otras formas de producción y de generación de la energía. Han sido décadas de debates y luchas contra todo tipo de proyectos que destruyen formas de vida, culturas, pueblos y ecosistemas. En ellas, las comunidades han incorporado cosmovisiones de los pueblos indígenas y originarios, que conciben el petróleo como la sangre de la tierra, los ríos como sagrados, el cuidado de los territorios, la gestión comunitaria y la producción agroecológica como central para la autonomía. Estos pueblos y comunidades nos muestran que la crisis climática y ambiental se puede enfrentar desde sus conocimientos y saberes, a través de otras maneras de relacionarnos con la Naturaleza, con la energía, con el agua y con el alimento. Todo ello implica repensar lo que hasta hoy hemos dado, por cierto, con el objetivo de propiciar

transformaciones culturales profundas y construir futuros donde el buen vivir o la vida sabrosa sean posibles.

Este capítulo busca presentar algunas propuestas que organizaciones y comunidades latinoamericanas han levantado y construido en torno a la energía y la transición energética. Inicia con un recuento de las luchas históricas contra los combustibles fósiles que han puesto el tema de la energía en la agenda de los movimientos. Re-coloca la comprensión de la energía misma, que frecuentemente es considerada un mero “sector” de la política que debe ser abordado desde el saber técnico, en el tejido de reproducción de la vida y las interrelaciones que la sostienen. Discute tanto formas alternativas de propiedad y gestión, como medidas requeridas por parte de los estados para viabilizarlas y llegar a un modelo energético justo, popular y sustentable. Finalmente, introduce la noción y las experiencias de energías comunitarias, que buscan recuperar el control y la gestión de la energía desde la organización social local.

Sendas transitadas para abandonar los combustibles fósiles

En la campaña presidencial de 2022 en Colombia, sorprendió el anuncio del entonces candidato Gustavo Petro, hoy presidente, de que su primer acto de gobierno sería suspender las nuevas exploraciones de hidrocarburos y prohibir el *fracking*, para avanzar en un desescalamiento del uso de los combustibles fósiles en el país. Si bien el planteamiento del presidente Petro asombró a muchas personas en Colombia y en el mundo, que consideraban imposible renunciar a la senda del petróleo, los debates y propuestas para dejar el crudo en el subsuelo y avanzar hacia sociedades pospetroleras tienen ya varias décadas de historia.

En junio de 1995, el pueblo u’wa, que habita en la frontera de Colombia y Venezuela, enfrentó la posibilidad de una explotación petrolera en su territorio. En respuesta, proclamaron un manifiesto público en el que afirmaban que preferían “una muerte digna” antes

que permitir la explotación de su tierra (Manifiesto Público del Pueblo u'wa, citado en Serje, 2003). Este manifiesto fue interpretado inicialmente como una amenaza de suicidio colectivo, pero en realidad fue una declaración de su determinación para luchar contra el bloque petrolero Samoré, que pertenecía a la petrolera estatal colombiana Ecopetrol y a la compañía estadounidense Occidental Petroleum Company (Oxy). El bloque petrolero ocupaba doscientas nueve mil hectáreas en el este de la Cordillera Oriental, en el departamento de Boyacá, y se traslapa con el territorio ancestral u'wa y algunos de sus resguardos.

La narrativa de la resistencia u'wa al petróleo se construyó a partir de su cosmovisión, que incluía una simple, pero contundente demanda: no querían la extracción de hidrocarburos en su territorio, ya que extraer petróleo de las entrañas de la tierra conllevaría la muerte de la Pacha Mama. Para este pueblo indígena, el petróleo significa “ruiría”, es decir, “la sangre de la Tierra”. Su intensa lucha, movilización y resistencia logró frenar la expansión petrolera sobre su territorio. En Colombia, esta lucha indígena amplió la perspectiva de las luchas sociales contra la explotación petrolera, incorporando elementos culturales como el valor sagrado, espiritual y simbólico del territorio para resistir al petróleo. Este puede considerarse uno de los primeros antecedentes de las resistencias para “dejar el crudo en el subsuelo” (Roa Avendaño, 2021).

En 1996, se creó en Ecuador la red sur-sur de Resistencias a las Actividades Petroleras, Oilwatch, impulsada por las organizaciones Acción Ecológica, de Ecuador, y Earth Rights Action [ERA], de Nigeria. Ambas compartían una posición radical contra la extracción y la industria petrolera. Sus críticas fundamentales se dirigían al papel que el petróleo ha desempeñado en el desarrollo capitalista moderno, los graves pasivos ambientales que ocasiona en los territorios y la crisis ambiental planetaria. Ese mismo año, durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático [COP] en Kyoto, Japón, Oilwatch presentó una declaración en la que llamaba a la moratoria de nuevos proyectos petroleros. La propuesta sonó radical y atractiva para

muchos grupos ambientalistas en el mundo, y cientos de organizaciones firmaron la declaración. La declaración de moratoria forzó a varias de estas agrupaciones a incorporar en el debate climático un asunto central: torcer el rumbo que trazaba el desafortunado ritmo de quema de petróleo en el mundo. De esta forma, las luchas contra el petróleo se fueron esparciendo como semillas (Roa Avendaño, 2021).

En 2007, mientras se discutía una nueva constitución política en Ecuador, organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas propusieron la iniciativa “dejar el crudo en el subsuelo” como solución concreta para enfrentar la crisis climática. La propuesta se basaba en que los países industrializados, responsables históricamente del cambio climático global, debían pagar a los países no industrializados con reservas petroleras (como Ecuador) para que estos dejaran el petróleo en el subsuelo, y con esos recursos, los países no industrializados se comprometerían con una transformación en su matriz productiva. El gobierno de Rafael Correa formalizó esta propuesta mediante la Iniciativa Yasuní, pero no tuvo suficiente apoyo de los gobiernos europeos ni de Norteamérica para asumir compromisos reales. Por otro lado, aunque los economistas ecológicos y ambientalistas ecuatorianos hicieron propuestas para conseguir el respaldo a esta iniciativa, el gobierno de Rafael Correa optó por continuar con la explotación petrolera en la Amazonía y no puso suficiente empeño en una diplomacia coherente con la iniciativa Yasuní.

Mientras tanto, Oilwatch presentó documentos cuestionando la sociedad dependiente del petróleo y explicando la urgencia de dejar el crudo en el subsuelo para construir modos de vida más sostenibles. En 2015, en la COP21 en París, Oilwatch propuso la creación de un Grupo “Anexo 0”¹ para reconocer y respetar los compromisos y

¹ La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en la Cumbre de Río de 1992, dividió a los estados parte en dos grupos: Anexo I y No Anexo I. El Anexo I incluye países industrializados del Norte y algunos en transición, mientras que el No Anexo I abarca principalmente países del Sur global. Posteriormente se estableció el Anexo II que incluye miembros del Anexo I, para que proporcionen recursos financieros y técnicos a los países del Sur para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según Oilwatch, el motor del desarrollo del capitalismo para

esfuerzos de las comunidades y organizaciones territoriales que están haciendo proyectos para no extraer petróleo, gas o carbón y así evitar el desastre climático (Oilwatch, 2015).

Tomando en cuenta estos antecedentes, el gobierno colombiano liderado por Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez Mina, del Pacto Histórico, anunció en 2022 la suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos y se comprometió a llevar a cabo una transición energética gradual, justa y ordenada. Durante la COP27, celebrada en noviembre de 2022 en Sharm El Sheikh, el presidente Petro presentó un decálogo de acciones para enfrentar la crisis climática, donde destacó la importancia de abandonar la senda de los combustibles fósiles. Petro (2022) declaró que “la crisis climática solo se puede superar si dejamos de consumir hidrocarburos. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón” y exigió a “la banca privada y multilateral del mundo [...] dejar de financiar la economía de los hidrocarburos”. Los planteamientos de Gustavo Petro vuelven a situar el debate de “dejar el crudo en el subsuelo” en el ámbito gubernamental e incluso en la agenda internacional de negociaciones para abordar la crisis climática.

En este contexto, Censat Agua Viva, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y otras organizaciones elaboraron el documento “Disminución planeada de la dependencia fósil en Colombia: entre el cambio cultural y la gestión participativa de la demanda”. El texto presenta cinco propuestas que conducen, en “un proceso no menor a quince años, a una transformación socioecológica hacia otras formas de relación entre las sociedades y el conjunto de las especies y

los países del Anexo I y II ha sido la explotación de combustibles fósiles, y han hecho todo lo posible para detener cualquier medida que limite su consumo. A pesar de décadas de negociaciones internacionales, el calentamiento global sigue aumentando sin soluciones efectivas para detenerlo. La propuesta de Grupo Anexo 0 de Oilwatch daría voz en las negociaciones a los pueblos y comunidades que están resolviendo las causas de la crisis climática. (Véase: <https://www.oilwatch.org/es/2015/07/16/es-tiempo-de-crear-el-grupo-anexo-0/>).

sistemas vivos que conforman nuestro planeta” (Censat Agua Viva et al., 2022, p. 3).

Sin duda, las luchas del pueblo u’wa y otras organizaciones locales en el mundo, así como las de las organizaciones integrantes de Oilwatch, han marcado el camino de una propuesta que cada vez tiene más fuerza: “Dejar el crudo en el subsuelo” como una medida concreta para alcanzar la sostenibilidad y garantizar un verdadero “zero”.

¿Qué se requiere cambiar y cómo?

Desde una perspectiva de justicia socioambiental y dentro del universo del ecologismo popular, defendemos una transición energética justa y popular que se base en una narrativa anticapitalista y socioecológica. Sin embargo, para lograr esto, es necesario realizar un diagnóstico de la situación actual y establecer el camino hacia un futuro deseado. En este sentido, es importante comprender la magnitud de los cambios necesarios para abordar los problemas asociados con la energía. Esto implica tener en cuenta no solo las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también las desigualdades sociales y los impactos socioambientales en los territorios, así como los conflictos asociados a la energía y la concentración del poder energético en pocas manos y grandes corporaciones.

Entendemos el sistema energético como un conjunto de relaciones sociales que nos vinculan como sociedad y en nuestras relaciones sociedad-Naturaleza y que están determinadas por las relaciones de producción (Svampa y Bertinat, 2022). La transición energética justa y popular requiere desmercantilizar, democratizar, desfosilizar, desconcentrar, descentralizar, democratizar, despatriarcalizar. Pero, ¿qué acciones y procesos son necesarios para lograrlo?

El camino de la desmercantilización y la democratización

La transición energética justa y popular se basa en la premisa de que todas las personas tienen derecho a la energía, y cuestiona la idea de que la energía es una mercancía. Se trata de desprivatizar y fortalecer las diversas formas de lo público, lo participativo y lo democrático (Svampa y Bertinat, 2022). Una de las consignas es desmercantilizar, lo que implica liberar a la energía del predominio de las lógicas mercantilizadas de beneficio económico y centrarla en la capacidad de controlar y reproducir la vida en todas sus dimensiones tanto materiales como simbólicas (Lang y Hoetmer, 2019).

Consideramos que la energía es parte de los comunes y, por lo tanto, es un derecho colectivo en congruencia con los derechos de la Naturaleza. Es necesario construir una visión de la energía como un derecho, tomando como ejemplo las luchas por el derecho al agua. Este derecho no solo es para los seres humanos, sino para todos los seres vivos. Incorporamos a la Naturaleza y todas sus especies en esta definición, porque reconocemos que hay una interdependencia entre el disfrute pleno de la vida del ser humano y el ambiente (Bertinat et al., 2012).

En el marco del sistema capitalista actual, los mercados son instrumentos que sirven a sectores cuya racionalidad es la acumulación de capital sin límites, más allá de los límites físicos y de la vida. Por lo tanto, los mercados capitalistas no son lugares neutrales (Aguirrezábal y Arelovich, 2011).

El concepto de desmercantilización desafía la centralidad de los mercados capitalistas para resolver determinadas necesidades. La recuperación de lo público es esencial en este camino. No solo implica debatir sobre la propiedad al restablecerlo de manos de los privados, sino también sobre la gestión. En nuestra perspectiva, recuperar lo público no debe limitarse a su asociación con lo estatal (nacional). Se trata de fortalecer y recrear todas las formas de lo público en términos de propiedad y gestión, incluyendo experiencias históricas en lo comunitario, comunal, municipal, colaborativo y cooperativo.

Estas son herramientas valiosas que deben ser potenciadas frente a la supuesta superioridad en eficiencia de las empresas privadas en la provisión de servicios.

Desmercantilizar y construir socialmente el derecho a la energía implica, entre otras tareas una amplia reforma legislativa, regulatoria y normativa que derogue las leyes de privatizaciones y la liberalización de los mercados que han colocado al sector privado en el centro del sistema energético. Igualmente, es clave avanzar en un proceso de desprivatización que incluya no solo a empresas de energía, sino también a otros servicios básicos, así como desarrollar herramientas que fortalezcan todas las formas de lo público en términos de propiedad y gestión, con énfasis en lo público cooperativo, comunitario y local, además de lo estatal y nacional. Es necesario fortalecer la institucionalidad necesaria para esto.

Como primer paso hacia un proceso de democratización del sector, es necesario establecer mecanismos de información que permitan la participación de cualquier comunidad implicada, urbana o rural, en la toma de decisiones. Para ello, hay que revisar, corregir e, incluso, en algunas ocasiones, revertir las políticas de subsidios directos a los combustibles fósiles y a diversos sectores de la economía fósil; y reconocer y potenciar instituciones y agentes implicados en la generación, distribución y gestión y consumo de energía por fuera del mercado capitalista.

Además, es importante asumir la posibilidad de decidir sobre la energía desde lo local, en sus diferentes dimensiones (generación, consumo, pobreza energética, etcétera). Las agencias municipales de energía y las experiencias de remunicipalización son experiencias que podrían ser potenciadas.² Como forma de dinamizar ese proceso, también toca avanzar en lo metodológico, desarrollando herramientas y procesos de construcción de políticas energéticas locales, comunales y municipales como forma de apropiación colectiva de las mismas.

² Véase Kishimoto y Petitjean, 2017.

No se trata solo de desfosilizar

Los sumideros, que son los mecanismos que absorben las emisiones de gases de efecto invernadero, y la finita disponibilidad de materiales y minerales, establecen un límite a la capacidad de sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables, en el marco de la matriz actual de producción y consumo. Por lo tanto, es fundamental disminuir el uso neto de energía como meta principal, aunque esta reducción debe ser planificada y ejecutada considerando equilibrar las desigualdades existentes y las necesidades de diferentes países y grupos sociales.

Además, es importante tener en cuenta que no es suficiente avanzar en el uso de fuentes de energía renovables, sino que es necesario considerar las dimensiones ambientales, sociales y políticas de cada emprendimiento específico para determinar su sustentabilidad.

Entre las acciones que se pueden tomar para enfrentar estos desafíos, se destacan: (a) Acordar la no explotación de los hidrocarburos no convencionales y convencionales en áreas de riesgo, como las zonas offshore, o disminuir su uso en el marco de un plan para abandonar los combustibles fósiles en el corto plazo; (b) Monitorear la disminución neta del uso de energía más allá de los compromisos climáticos asumidos; (c) Tener propuestas específicas para los diferentes sectores, como el transporte, que en América Latina es el principal consumidor de energía y debe ser considerado como un sector energético en sí mismo; (d) Desarrollar herramientas que permitan visualizar los beneficios socioeconómicos de la eficiencia energética y establecer cambios normativos que vayan en contra de la lógica mercantil; (e) Descartar las subastas de energías renovables entre grandes proveedores comerciales / transnacionales como única opción y priorizar el desarrollo descentralizado y desconcentrado de estas fuentes.

Sobre el modelo productivo y el consumo

Para avanzar hacia una transición energética justa y popular es necesario construir un modelo productivo compatible con la sostenibilidad de la vida y el cuidado de los sistemas y ciclos ecológicos que la hacen posible. Es esencial, como lo proponen las feministas, *colocar la vida en el centro* de este modelo.

La transición energética que proponemos exige reconocer los “límites físicos naturales y humanos, igual que la inmanencia y la importancia de los vínculos y relaciones como rasgos inherentes a la existencia de la vida” (Herrero, 2021, p. 12). Estas concepciones se asocian a nuevas formas de organizar la vida en sociedad, nuevas formas de producción, la revalorización del lugar que ocupan el trabajo productivo y reproductivo en las sociedades, y nuevas formas de consumo, asociadas a un cambio del metabolismo sociedad-Naturaleza.

Independientemente de las iniciativas asociadas a la eficiencia energética en diversos sectores, es necesario avanzar en análisis sectoriales que permitan cuestionar la matriz productiva y de transporte regional y buscar alternativas sustentables y justas. Propuestas concretas en este ámbito incluyen, por ejemplo: (a) Establecer circuitos máximos de circulación de mercancías y desarrollar cadenas cortas de producción que prioricen lo local; (b) Analizar las áreas de producción material que deben decrecer y determinar qué dejar de producir; analizar cómo potenciar servicios frente a bienes materiales. Así como establecer plazos para este decrecimiento (ver también los capítulos de Bengi Akbulut y Luis González Reyes en este libro); (c) Desarrollar nuevas áreas de producción y servicios menos intensivos energéticamente; (d) Establecer un plazo para el fin del uso de los vehículos individuales de combustión interna; (e) Implementar un proceso de cambio modal del transporte de carga; (f) Repensar el rol y el diseño de la infraestructura, ya que se financia con fondos públicos y determina las conductas y los consumos futuros.

Igualmente, se requiere enfrentar un proceso que nos permita avanzar en la construcción social de otras formas de satisfacción de

necesidades humanas. Se trata de un proceso intenso y extenso, pero que puede ser dinamizado mediante diversas herramientas, como, por ejemplo, el fortalecimiento de las redes urbanas de consumo sustentable; el desarrollo de una normativa que prohíbe la obsolescencia programada; la masificación de los análisis de ciclo de vida de los productos; la prohibición o restricción de la publicidad sobre determinadas ramas de productos; el establecimiento urgente de un programa de eliminación de la pobreza energética; la asociación de las políticas energéticas a las de hábitat; y la restricción de los usos suntuarios de la energía.

El camino que proponen las comunidades para abordar las energías

En América Latina, diversas organizaciones sociales, étnicas y comunitarias, urbanas y rurales, han implementado iniciativas locales de energías sustentables, autónomas y descentralizadas. Estas experiencias abordan la relación con la energía en conjunto con otras prácticas y procesos de reproducción de la vida, como la transformación de sistemas productivos, agroalimentarios y el cuidado de la Naturaleza, a través de procesos comunitarios organizados que promueven la generación de energía de forma autónoma y descentralizada.³

³ Algunas de estas experiencias pueden ser conocidas a través de la “Exhibición virtual de experiencias comunitarias de Transición Energética Justa [TEJ]”, impulsada desde 2020 por Censat Agua Viva, el Grupo Energía y Equidad, la Fundación de Expresión Intercultural, Educativa y Ambiental, Fundaexpresión, Comunidades Sembradoras de Territorio, Agua y Autonomía, Setaa y el Movimiento de Afectados por Represas de América Latina, MAR (veáse: <https://transicionenergeticajusta.org/>). Estas experiencias contribuyen a enriquecer los debates y perspectivas sobre la transición energética y las transiciones socioecológicas, cuestionan la propuesta de una transición limitada al cambio de la matriz energética en términos de la fuente de energía y proponen abordar los patrones de consumo, terminar con la centralización de la energía y promover la democratización de esta. Estas experiencias comunitarias

Pero ¿cómo se construyen las energías comunitarias en términos prácticos? Existen muchas posibilidades, como el impulso de tecnologías de energías renovables no convencionales como sistemas fotovoltaicos, pequeñas microcentrales hidroeléctricas y aerogeneradores, así como diversas tecnologías adaptadas a las condiciones locales, como biodigestores, secadores o deshidratadores solares, calefones solares, bicimáquinas y técnicas asociadas a cultivos dentroenergéticos / bosques leñeros, producción agroecológica, pacas digestoras, movilidad y arquitectura sustentable, siembras y cosechas de aguas, entre otros.

Las energías comunitarias se basan en la colaboración, el cuidado mutuo y la solidaridad. Soler (2022) se refiere a ellas como “Ubuntus Energéticos”, porque existen en la medida que otro existe. Estas energías buscan recuperar la autonomía, desafiando el sistema energético actual, que es centralizado, concentrado, antidemocrático, racista / colonialista, patriarcal y autoritario.

La transición energética propuesta por los procesos que impulsan las energías comunitarias exige una transformación cultural en cuanto a la generación, el uso y la concepción misma de la energía. Esta transición también implica la democratización y participación en torno a la energía, la relocalización de las actividades y el control local. Según Rátiva (2021, p. 181), se trata de una reapropiación social y colectiva de la energía, es decir, de producir y rescatar vínculos sociales y ecosistémicos que potencien el desarrollo de economías locales, de producción de conocimiento, de convivencia y de mejora de las condiciones de vida. En otras palabras, se busca “reconectar lo ecológico, lo social y lo político” (Rátiva, 2021, p. 181) para enfrentar las múltiples crisis: climática, energética y ambiental.

Las energías comunitarias proponen, en definitiva, una perspectiva del mundo que tiene una mayor comprensión de los límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo. Colocan como

también proponen nuevas narrativas, herramientas y metodologías para alcanzar la transición y la soberanía energéticas.

urgente frenar el ritmo desenfrenado de crecimiento, así como establecer relaciones más armónicas con la Naturaleza. Además, plantean que las comunidades locales deben convertirse en sujetos activos del sistema energético, dejando de ser meros consumidores de energía, asumiendo un rol como productores de su propia energía. En esta perspectiva, las energías comunitarias invitan a repensar la energía y asociarle otras dimensiones, más allá de la electricidad.

A manera de conclusión

La transición energética justa y popular es una necesidad urgente para abordar la crisis climática y ambiental que enfrentamos. Para tener éxito en esta transición, se necesita un modelo productivo compatible con la sustentabilidad de la vida y el cuidado de los sistemas ecológicos, colocando la vida en el centro. Es crucial construir formas de vida y relaciones distintas en torno a la energía, y reconocer que esta transición no solo es un proceso técnico, sino también social y cultural, que implica la construcción de otras formas de entender y satisfacer las necesidades humanas.

Para lograr una transición energética justa y popular, se deben realizar una serie de acciones y procesos, desde los estados y desde la sociedad organizada, que promuevan la desmercantilización, democratización, desfosilización, desconcentración, descentralización y despatriarcalización de la energía. Es fundamental construir una visión de la energía como un derecho colectivo en congruencia con los derechos de la Naturaleza y recuperar lo público en términos de propiedad y gestión, incluyendo experiencias históricas en lo comunitario, comunal, municipal, colaborativo y cooperativo.

Para alcanzar esto, desde los estados se necesitan reformas legislativas, regulatorias y normativas que deroguen las leyes de privatización y liberalización de los mercados que han dado lugar al dominio del sector privado en el sistema energético. También es necesario revisar y corregir las políticas de subsidios directos a los

combustibles fósiles y establecer mecanismos de información que permitan la participación pública en la toma de decisiones. Es igualmente importante reconocer y potenciar instituciones y agentes por fuera del mercado capitalista y desarrollar herramientas y procesos de construcción para la transición energética justa y popular.

Los debates y propuestas hacia las transiciones energéticas y socioecológicas desde los pueblos avanzan y disputan perspectivas y narrativas con otras lógicas de entender las transiciones. Son también una invitación para trabajar juntxs en la construcción de iniciativas que aseguren un futuro sostenible para todas las personas y el planeta.

Bibliografía

Aguirrezábal, Gerardo, y Arelovich, Sergio. (2011). *Desmercantilización. Aproximaciones al estado del debate. El caso particular del sector energético*. [Manuscrito no publicado]. Taller Ecologista.

Bertinat, Pablo; Chemes, Jorge y Forero, Lyda. (2020). *Transición Energética. Aportes para la reflexión colectiva*. TNI-Taller Ecologista.

Bertinat, Pablo; Chemes, Jorge y Moya, Laura. (2012). *Derecho y Energía. Curso de formación en energía*. [Manuscrito no publicado].

Censat Agua Viva, Pacto Ecosocial del Sur, Energía y Equidad, Oilwatch. (2022). *Disminución planeada de la dependencia fósil en Colombia: entre el cambio cultural y la gestión participativa de la demanda*. <https://censat.org/disminucion-planeada-de-la-dependencia-fosil-en-colombia-entre-el-cambio-cultural-y-la-gestion-participativa-de-la-demanda/>

Herrero-Lopez, Yayo. (2021). Prólogo. Repensar la vida en tiempos de emergencias. En Tatiana Roa Avendaño (comp.), *Energías para la transición. Reflexiones y relatos*. Censat Agua Viva, Fundación Heinrich Boll, Oxfam.

Kishimoto, Satoko y Petitjean, Olivier. (2017). *Remunicipalización. Cómo ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de los servicios públicos*. TNI. <https://www.tni.org/en/publication/reclaiming-public-services>

Lang, Miriam y Hoetmer, Raphael. (2019). Buscando alternativas más allá del desarrollo. En Miriam Lang y Raphael Hoetmer (comps.), *Alternativas en un mundo de crisis* (pp. 9-27). FRL, Universidad Andina Simón Bolívar.

Oilwatch. (2015). Propuesta para la COP21 de París, diciembre 2015. Es tiempo de crear el grupo “Anexo Cero”. http://www.oilwatchesudamerica.org/images/stories/ANEXO_CERO_OILWATCH_Espanol.pdf

Petro, Gustavo. (2022). Discurso ante la Conferencia de las Partes de Cambio Climático en Sharm el Sheik. <https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/presidente-petro-aseguro-cop-27-egipto-enfrentar-crisis-climatica-solucion-mundo>

Rativa-Gaona, Sandra. (2021). La interdependencia como una clave para pensar la transición energética. En Tatiana Roa Avendaño (comp.), *Energías para la transición. Reflexiones y relatos*. Censat Agua Viva, Fundación Heinrich Boll, Oxfam.

Roa Avendaño, Tatiana. (2021). Soberanía y autonomía energética. Treinta años de debates alrededor de asuntos cruciales. En Tatiana Roa Avendaño (comp.), *Energías para la transición. Reflexiones y relatos*. Censat Agua Viva, Fundación Heinrich Boll, Oxfam.

Serje, Margarita. (2003). ONG, indios y petróleo: el caso u'wa a través de los mapas del territorio en disputa. *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, 32. <https://doi.org/10.4000/bifea.6398>

Soler, Juan Pablo. (2022). Ubuntu energéticos en audiencia pública. *Revista Raya*. <https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/155-ubuntus-energeticos-en-audiencia-publica.html>

Svampa, Maristella y Bertinat, Pablo. (2022). *La transición energética en Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Perspectivas ecofeministas desde África

Zo Randriamaro

Introducción

Este capítulo presenta los debates africanos sobre el ecofeminismo y examina sus prácticas y conceptos contemporáneos, que tienen su origen en el contexto africano. Asimismo, explora las formas en que estas prácticas y conceptos contemporáneos están configurando vías transformadoras hacia un nuevo movimiento descolonizador panafricano desde abajo que abraza plenamente la política afrofeminista y, en este sentido, enmarca alternativas multidimensionales a las transiciones hegemónicas e injustas. El capítulo también muestra cómo este movimiento ecofeminista se basa en una filosofía africana como la de Ubuntu para ofrecer una forma alternativa de vida y un futuro diferente, centrado en la solidaridad colectiva y el intercambio entre los pueblos, junto con modos de vida verdaderamente sostenibles en armonía con la Naturaleza. La primera parte del capítulo explora las raíces, los conceptos actuales y las prácticas de los ecofeminismos africanos, incluida su lucha contra la nueva ola de extractivismo verde; la segunda parte analiza algunas de las principales corrientes de pensamiento y agendas políticas ecofeministas africanas. La última parte se centra en las visiones del mundo

y los valores africanos consagrados en la filosofía Ubuntu, y en cómo sustentan los movimientos ecofeministas africanos contemporáneos que luchan por alternativas justas, equitativas y sostenibles al sistema de desarrollo neoliberal y extractivista dominante.

Afrofeminismos y ecología

Para comprender mejor los ecofeminismos africanos es importante empezar por reconocer sus filiaciones ancestrales y panafricanas, a menudo olvidadas y posteriormente borradas de la historia y la memoria colectiva del movimiento ecofeminista mundial. Es igualmente importante explorar sus conceptos y prácticas actuales, que están anclados en sus respectivos contextos políticos, sociales y económicos, y cómo se relacionan con los debates y movimientos ecologistas.

Las raíces del ecofeminismo africano

De importancia central para el ecofeminismo africano es “la vida relacional entre seres humanos y otros aspectos físicos y animados del medioambiente” (Chemhuru, 2018), especialmente entre las mujeres y la Naturaleza. Aunque en el marco histórico eurocéntrico, la teoría ecofeminista se asocia con la década de los años setenta, la asociación entre las mujeres y la Naturaleza fue realizada mucho antes de ese periodo por movimientos feministas de África Oriental. Entre ellos se encuentran luchas políticas y religiosas como el Etiopianismo, el Nyabinghi, el movimiento Mau Mau y el Nuevo Rastafari, influyentes movimientos de resistencia durante la era colonial moderna, a pesar de haberse visto obstaculizados por la esclavitud y los intereses coloniales europeos (Gontharet, 2018, p. 16). Los presentaré brevemente en los siguientes párrafos.

A finales del siglo XIX surgió un movimiento religioso de resistencia al colonialismo llamado Etiopianismo, dentro del cual los activistas anticoloniales se organizaban en torno a la idea del

autogobierno. No solo abarcó Etiopía y el continente africano, sino también a los afrodescendientes del Caribe. En Jamaica, por ejemplo, los movimientos de resistencia encabezados por mujeres plasmaron la dimensión de género en las luchas de clases, como en la Cultura de los Pueblos Libres (Culture of the Free Villages)⁴, que reivindicaba la defensa de la tierra por una mayoría de mujeres (Gontharet, 2018, p. 17).

Estos movimientos se inspiraron en las mujeres Nyabinghi de Uganda, que se unieron contra la opresión colonial entre 1910 y 1930, especialmente las que se dedicaban a la producción de alimentos en las zonas rurales y eran las más vulnerables al dominio colonial. Más tarde, en Kenia, las mujeres rurales también se organizaron en torno a cuestiones relacionadas con la propiedad de la tierra, mientras que otras mujeres se unieron al movimiento Mau Mau, un movimiento nacionalista militante contra la dominación británica en la década de los años cincuenta, para evitar ser comercializadas como esposas por sus padres (Gontharet, 2018, p. 17).

Así pues, las ideas del ecofeminismo son visibles en el vínculo entre mujeres, tierra, producción de alimentos y derechos políticos que se estableció hace mucho tiempo en los contextos de África Oriental y de Jamaica por diferentes movimientos de mujeres rurales africanas y caribeñas, movilizadas en la lucha por sus derechos sobre la tierra y contra la opresión colonial (Gontharet, 2018, p. 17).

El ecofeminismo africano plantea a las feministas la siguiente pregunta: ¿cómo retiramos nuestro poder y nuestra energía del modelo de desarrollo económico y de poder masculino dominante, que históricamente ha evolucionado hacia una destrucción acelerada de la base misma de la vida en el planeta? Al mismo tiempo, las ecofeministas africanas también desafían a los ecologistas, cuestionando la visión teórica de un “ser humano” abstracto que es dominante y opresor sobre la Naturaleza e invitando a considerar en su lugar las

⁴ Inspirado por la Sra. James Mckenzie en 1902 y las mujeres Nyabinghi en Uganda, entre otras personas.

múltiples opresiones dentro de la propia sociedad humana, empezando por el sistema de género que es una causa fundamental de dominación y opresión.

Como tales, los ecofeminismos africanos forman parte de movimientos e iniciativas políticas comprometidas con la deconstrucción de las relaciones de dominación en la intersección de género, clase, origen étnico y “razas”, incluyendo el colonialismo, las jerarquías Norte / Sur, etcétera, con el objetivo de superar todo tipo de opresión contra las mujeres y la Naturaleza.

Conceptos y prácticas actuales

Los ecofeminismos africanos integran una reflexión crítica sobre los vínculos entre el modelo de “desarrollo” dominante, la crisis ecológica y las apuestas por la paz y la no violencia, lo que les permite plantear cuestionamientos innovadores y radicales, tanto sobre lo que es el feminismo como sobre la forma de abordar la ecología y la Naturaleza o, como se plantea en este libro, los procesos de transición ecosocial.

Si bien el movimiento mundial más amplio es a menudo distraído por un debate divisivo sobre si las asociaciones de género con la Naturaleza son reductoras de la mujer, parece que la mayoría de los movimientos comprometidos con el activismo feminista y medioambiental en África simplemente han tratado de crear alianzas estratégicas y políticas entre las mujeres, la Naturaleza y la protección del medioambiente.

Se puede decir que la keniana Wangari Maathai (1940-2011) y su Movimiento Cinturón Verde (Green Belt Movement [GBM]) representan el activismo colectivo y ecocéntrico que define la esencia del ecofeminismo africano. Como primera ecologista galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2004 por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz, Wangari Maathai ha subrayado la estrecha relación entre el feminismo africano y el activismo ecologista africano, que desafía tanto al patriarcado como a las estructuras

neocolonialistas que socavan el continente. En palabras de la especialista sudafricana en cuestiones de género Janet Muthuki, “el GBM de Wangari Maathai es un activismo ecofeminista africano, que a través de cuestiones e intervenciones medioambientales evidencia las relaciones de género y desafía al patriarcado dentro de las estructuras ideológicas nacionales y mundiales” (Muthuki, 2006).

Maathai también es conocida por entrelazar las creencias tradicionales sobre la desnudez y el género (Muthuki, 2006) con las luchas políticas contemporáneas para fomentar un momento decisivo en la lucha que llevó a las mujeres al centro de la arena política, en la que antes solo habían sido marginadas. Con ello, contribuyó decisivamente a promover el movimiento democrático en Kenia (Nyabola, 2015).⁵

El ecofeminismo interseccional subraya la importancia del género, la raza y la clase, y establece una fuerte conexión entre las preocupaciones feministas, la opresión humana dentro del patriarcado y la explotación del entorno natural del que las mujeres dependen con mayor frecuencia, pero del que en muchos entornos culturales también son consideradas guardianas. Dado que las mujeres experimentan las múltiples crisis a las que se enfrenta África de forma interseccional, es crucial adoptar un enfoque interseccional para crear movimientos radicales en favor del cambio. Como afirmó una de las líderes del ecofeminismo interseccional:

Lo que necesitamos son movimientos transnacionales verdaderamente radicales y revolucionarios, no pequeños brotes. Por supuesto, es importante prestar atención a las realidades locales. En un ámbito muy limitado, para mí un movimiento ecofeminista se ocupa de transformar las formas en que las mujeres acceden a los recursos económicos, intelectuales y ecológicos, especialmente las más vulnerables, y a menudo en primera línea de la devastación ecológica y del

⁵ “[...] revolucionó el acto de protesta en Kenia centrándolo en el cuerpo femenino. Instó a las madres de detenidos que protestaban a desnudarse cuando eran intimidadas por agentes de seguridad que amenazaban con disolver sus protestas [...]” (Nyabola, 2015).

cambio climático. También significa trabajar constantemente para reivindicar y reimaginar formas mucho más justas e igualitarias de convivir y, fundamentalmente, para mí, eso significa destruir el patriarcado y reivindicar las ideas de los bienes comunes. (Nyambura citada por Merino, 2017)

La dimensión antiextractivista es otro elemento del marco conceptual que caracteriza las luchas de los movimientos ecofeministas africanos contemporáneos, que ocupa un lugar central en los debates en torno a la justicia global y las transiciones ecosociales. Se plasma en el trabajo y la posición política de la alianza africana WoMin descritos a continuación:

África y otras partes del Sur global están sometidas a otra ronda de colonización cada vez más profunda, a medida que las empresas y sus gobiernos anfitriones del Norte global y de partes del Sur global persiguen las fronteras sin explotar y altamente rentables de la riqueza mineral y natural de África. Esto impulsa lo que WoMin denomina un modelo de desarrollo extractivista, un eslabón más en la cadena de colonización y explotación perpetuas de África y sus pueblos. [...] El extractivismo es profundamente patriarcal y racista, ya que depende de la mano de obra barata y remunerada de los hombres negros y morenos de la clase trabajadora, que trabajan en condiciones extremadamente explotadoras y peligrosas para garantizar los beneficios de las grandes empresas multinacionales y sus vastas cadenas de suministro. El trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres también se incorpora a la acumulación de beneficios para las corporaciones y los ricos, ya que trabajan para reproducir a los trabajadores y a sus familias mediante la producción de alimentos de subsistencia, el suministro de agua y combustible, y su trabajo de cuidados [...]. (Mapondera et al., 2020)

En el contexto de cambio climático y la consiguiente transición a fuentes de energía renovables, las activistas ecofeministas africanas participan cada vez más en las luchas contra los megaproyectos extractivistas para la producción de energías limpias / verdes como

la solar, la eólica, la térmica y el hidrógeno. Un ejemplo de ello es la extracción de tierras raras, muy demandadas para la transición energética en el Norte global, especialmente para la producción de componentes críticos de tecnologías verdes como turbinas eólicas, paneles solares y baterías híbridas de pilas de combustible. Los tremendos daños generados por las prácticas contemporáneas de producción de tierras raras incluyen el acaparamiento masivo de tierras, la contaminación y destrucción de ecosistemas y la consiguiente pérdida de medios de vida, además de los efectos devastadores sobre la salud de las personas que viven cerca de las operaciones de extracción y procesamiento de tierras raras, como cánceres, defectos de nacimiento y la descomposición de los sistemas musculoesqueléticos de las personas vivas (Klinger, 2017). En este contexto, las activistas ecofeministas están apoyando la resistencia de las comunidades afectadas contra un megaproyecto de explotación de tierras raras en Madagascar, donde es muy probable que el emplazamiento minero del proyecto se convierta en una zona de sacrificio para pagar los costes sociales, económicos y ecológicos de la minería de tierras raras para el consumo del Norte global.

Construir un nuevo movimiento descolonizador panafricano desde abajo

El movimiento ecofeminista africano se sitúa en la confluencia de tres movimientos distintos que luchan contra las mismas ideologías e instituciones imperialistas que trastocaron y socavaron las culturas e instituciones indígenas: el movimiento antineoliberal, apoyado principalmente por activistas de la justicia climática, el movimiento antimperialista impulsado por descolonialistas, y el movimiento antipatriarcal protagonizado por feministas. Como tales, las ecofeministas africanas se esfuerzan por dismantelar las estructuras de poder y las jerarquías que oprimen y explotan tanto a las mujeres como a la Naturaleza (Tamale, 2020).

Un movimiento feminista panafricano por la justicia climática

A nivel comunitario, cada vez hay más conciencia de las amenazas a la biodiversidad y a la resistencia climática derivadas de proyectos agroindustriales y extractivos a gran escala en todo el continente africano y de sus vínculos con los poderes corporativos y estatales. El ecofeminismo es inseparable de las luchas e iniciativas concretas en las bases para preservar, desarrollar o reparar espacios habitables y vínculos sociales mediante procesos materiales y culturales que permitan que una sociedad pueda reproducirse sin destruir otras sociedades o especies vivas.

Desde este punto de vista, debe prestarse especial atención a los movimientos de justicia climática que se centran en la crisis ecológica y sus causas profundas, desde una perspectiva feminista, basada en la creciente conciencia entre las personas afectadas de que el modelo de desarrollo neoliberal dominante es insostenible. Estos movimientos ecofeministas se centran en las crisis climática y ecológica de África, en sus vínculos con el desarrollo extractivista y sus impactos de género, y exigen “que se desmantele el injusto sistema capitalista para cuidar el planeta y reparar las violaciones históricas de los derechos de los pueblos y de la Naturaleza” (Mapondera et al., 2020).

Debido a su naturaleza transnacional, tanto el movimiento por la justicia climática como el proyecto de descolonización de África no pueden limitarse a un enfoque fragmentario, sino que requieren una línea de actuación panafricana. La fragmentación y las divisiones ideológicas del continente han contribuido en gran medida a perpetuar las diferentes formas de colonialismo en África, lo que implica que el panafricanismo es un pilar fundamental del proyecto de descolonización abrazado por las ecofeministas africanas.

Ecofeminismos africanos y descolonización⁶

Wangari Maatai afirmó que

[...] el colonialismo fue el comienzo del deterioro de la Naturaleza debido a la industrialización y a la extracción de recursos naturales. [...] La tala de bosques, las plantaciones de árboles importados que destruyeron el ecosistema, la caza de animales salvajes y la agricultura comercial fueron actividades coloniales que destruyeron el medioambiente en África. (Maathai, 2009).

Así pues, desde el principio, el ecofeminismo africano ha sido un pilar importante de un enfoque feminista decolonial⁷ para promover el cambio sistémico en África.

En este sentido, las ecofeministas africanas también se han apoyado en su rico patrimonio tradicional y su cultura indígena para desafiar al poder patriarcal y al neocolonialismo. Mientras que algunas feministas africanas han argumentado que la tradición cultural africana y la filosofía comunitaria no son compatibles con el feminismo porque son profundamente patriarcales,⁸ otras ecofeministas afirman que las filosofías y herramientas tradicionales africanas, tales como Ubuntu, pueden utilizarse para lograr la justicia de género, así como los demás objetivos del afrofeminismo.⁹

Como afirma la académica ugandesa y activista por los derechos humanos Sylvia Tamale, “los rasgos subyacentes del ecofeminismo se parecen mucho a los que se practican tradicionalmente en las culturas indígenas no occidentales”. En concreto, las prácticas ecofeministas tienen mucho que extraer de

⁶ El término “descolonización” utilizado en este capítulo es definido por Sylvia Tamale como “un proceso múltiple de liberación de la colonización política, económica y cultural. Quitar las anclas del colonialismo de los procesos físicos, ecológicos y mentales de una nación y su gente” (2020, p. 14).

⁷ Según Sylvia Tamale, “Decolonialidad: Un tipo específico de descolonización que aboga por la interrupción de los legados de desigualdades y dominación raciales, de género y geopolíticas” (2020, p. 14).

⁸ Ver por ejemplo Mangena, 2009.

⁹ Como Tamale, Sylvia y Chemhuru, Munamoto.

[...] la relación epistémica entre los pueblos indígenas y la Naturaleza (que) se manifiesta a través de su espiritualidad, los tótems de los clanes, los tabúes, los mitos ancestrales, los rituales, las fábulas, etcétera. [...] En particular, las consecuencias de violar un tabú no eran individualizadas y la responsabilidad de conformarse era comunalista. Si uno transgredía los tabúes sociales, sus parientes también sufrían las consecuencias [...]. (Tamale, 2020, pp. 87-89)

Una ilustración típica de esta relación epistémica es la siguiente afirmación, expresada por las mujeres guardianas de los lugares sagrados locales y del patrimonio biocultural (*Mpijoro tany*) del grupo indígena de la isla de Sakatia, en el noroeste de Madagascar:

Nuestro papel como “Mpijoro tany” es nuestro deber para con nuestro pueblo, que ha sido fundado por nuestro antepasado. Hay un lugar sagrado llamado Ankatafabe, y hay otro en Ampijoroa, y también en Ankofiamena. Antes no había iglesia, pero estos eran los lugares donde rezábamos a Dios, igual que hacemos en una iglesia. Estos son los lugares de “fijoroana” (ceremonia ritual de oración) anual para rezar y pedir bendiciones. [...] Nuestros antepasados observaban estrictamente los “fadin-tany” (tabúes de la tierra), y la mayoría de la gente de Sakatia sigue observándolos. Si una persona infringe un “fady” (tabú), debe matar un cebú en reparación del mal que ha hecho. (Justine Hamba, directora de oración ritual - Sakatia) (CRAAD-OI, 2021)

La otra guardiana de los lugares sagrados de la isla de Sakatia explicó así la razón de ser de los rituales y costumbres tradicionales, y la importancia vital de acatarlos para el bien común y para garantizar la unidad, la cooperación, el amor y la confianza en la comunidad, así como para establecer el respeto entre los vivos y los muertos:

[...] existe una forma de conservar el “kodry” (pescado) para la gente que lo come. solo se recoge la cantidad que se necesita; cualquier excedente debe distribuirse entre la comunidad; no puede tirarse ni venderse. Este es el sentido de la comunidad y el amor. Los que recogen la comida no son necesariamente los que se la comen; debe

compartirse con la comunidad. No puede venderse ni recolectarse en grandes cantidades; de lo contrario, se extinguirá y, al hacerlo, la gente hace daño al medioambiente. [...] Los pequeños animales del pueblo no pueden matarse sin motivo, por ejemplo, el “Anjava”, que es un pequeño animal que vive en lugares sombríos y frescos. No se debe talar el bosque verde donde se esconde. Si una persona mata a un animal así, le ocurrirá algo malo. La maldición no desaparecerá a menos que se quite el castigo (manala fady) y se disculpe ante los rezadores tradicionales del pueblo. [...] La persona que rompe el tabú comete una profanación; son tesoros de esta tierra que nuestros antepasados apreciaban y estos animales deben ser respetados y permanecer en el pueblo. [...] Está prohibido destruir los bosques que proporcionan la lluvia y el aire fresco que necesitamos para vivir. Por eso Sakatia es una isla verde, porque no tálamos los bosques de las colinas y también plantamos árboles. Y también protegemos la vida marina, incluidos los peces, e impedimos que lleguen hasta aquí los pescadores que utilizan redes no estandarizadas. Protegemos las tortugas marinas, y especies de peces endémicas como el “Horoko” y el “kodry”. [...] Tenemos una Dina (convención social tradicional con un sistema de sanciones) en el pueblo: por ejemplo, si dices palabrotas o usas un lenguaje soez, hay una sanción correspondiente en la “Dina”. Hay que acudir a los rezadores rituales y pedir disculpas, de lo contrario todos en el pueblo estarán bajo maldición. (Célestine, rezadora ritual - Sakatia) (CRAAD-OI, 2021)

Como demuestran las afirmaciones anteriores, las comunidades malgaches de Sakatia se rigen por la misma “ética de relación con la Naturaleza” (Ogungbemi, 1997) que los numerosos grupos indígenas del África subsahariana que también desconfían de las intervenciones antropocéntricas en la Naturaleza que socavan la saludable red de la vida de formas que amenazan la supervivencia del planeta. Como ha subrayado acertadamente Sylvia Tamale, “puede que las mujeres del Sur global no se hayan autoidentificado como “ecofeministas”, pero tienen una larga historia de conciencia ecológica y obligación moral hacia las generaciones futuras” (Tamale, 2020, p. 85)

Alternativas ecofeministas africanas al desarrollo¹⁰

Desde una perspectiva decolonial y ecofeminista, ya existen muchas alternativas en los niveles micro y meso. Muchas de estas alternativas fueron tomadas de África, como la economía solidaria y las soluciones colectivas al trabajo y a los recursos como las semillas y el dinero, y deben ser reconocidas y consolidadas. Al igual que ocurrió en América Latina con otras propuestas que adoptaban algunas de las posiciones y cosmovisiones de los pueblos indígenas, incluidos los derechos de la Naturaleza y la cosmovisión del “buen vivir” (para hacer referencia a una buena vida basada en una visión social y ecológica más amplia), existe sin duda un importante archivo africano de ideas, prácticas y conceptos políticos endógenos que yacen en la tradición, así como en las luchas anticoloniales y en las transformaciones poscoloniales de las que deberíamos inspirarnos y orientarnos, incluidos los sistemas de conocimiento indígenas; tenencia comunal / derechos indígenas sobre la tierra; cooperación social laboral.

Entre ellas destacan las alternativas críticas basadas en “la cosmovisión y filosofía africana conocida como Ubuntu en el sur de África” (Terreblanche, 2018), que se practica ampliamente en África subsahariana (Chuwa, 2014) y “trata en la medida de lo posible de reducir las visiones patriarcales, dualistas y antropocéntricas tradicionales de la existencia” (Chemhuru, 2018, pp. 19-20). Gracias al Ubuntu, los africanos han celebrado durante siglos los valores que conectan el pasado y el presente, así como a los seres humanos y la Naturaleza (Tamale, 2020).

Como paradigma ético africano, Ubuntu no es compatible con las relaciones capitalistas (Caromba, 2014), la propiedad privada (Van Norren, 2014) y la desigualdad generalizada (Cornell y Van Marle, 2015). Más bien exige un activismo de solidaridad y descolonización

¹⁰ Esta sección se basa en gran medida en la “Nota Conceptual sobre Alternativas al Desarrollo” elaborada en mayo de 2020 por Zo Randriamaro para WoMin.

frente a lo que Vishwas Satgar denomina “ecocidio imperial” (Satgar, 2018). La ética ecológica de Ubuntu ha generado “la noción radical del posextractivismo, es decir, dejar para las generaciones futuras los combustibles fósiles y los minerales que impulsan la acumulación capitalista destructiva y sus crisis, en particular el cambio climático” (Terreblanche, 2018, p. 169).

Desde una perspectiva ecofeminista, “la ética medioambiental Ubuntu pretende subrayar la necesidad de tratar con cuidado, reverencia y bondad diversos aspectos de la Naturaleza que tradicionalmente se han considerado moralmente insignificantes —como los seres animados no humanos— y otorgarles consideración ética”. Al mismo tiempo, esta dimensión ecofeminista del Ubuntu implica que los valores similares que emanan de las virtudes del Ubuntu —como el cuidado, la bondad y la reverencia— también podrían concederse o atribuirse a aspectos no animados de la Naturaleza, como la Naturaleza física, las plantas y las masas de agua que no necesariamente tienen la capacidad de sentir” (Chemhuru, 2018, p. 20).

En particular, las formas alternativas de vida ya han sido propuestas por las mujeres rurales e indígenas africanas en la defensa de sus territorios, su autonomía, sus formas de producción, sus relaciones comunitarias y su relación interdependiente con la Naturaleza, sin la cual no sobrevivirían, contra el modelo extractivista de desarrollo profundamente destructivo. Estas formas alternativas de vida pueden identificarse en las formas en que producen, intercambian, cuidan y regeneran nuestros recursos naturales; nutren a nuestras familias y comunidades; cooperan en nuestras comunidades, etcétera. Como dice WoMin,

[...] la mayoría de las mujeres africanas, que llevan la carga de la crisis climática y ecológica y que paradójicamente son las que menos han contribuido al problema, están practicando y proponiendo, en su resistencia profundamente ecofeminista al patriarcado extractivista, una forma alternativa de desarrollo que toda la humanidad debe

respetar y de la que debe hacerse eco si queremos que nosotros y el planeta sobrevivamos. (Mapondera et al., 2020, en *Resumen*)

En concreto, las alternativas justas y sostenibles para un futuro diferente, que se construirían sobre la filosofía Ubuntu y se centrarían en una solidaridad colectiva y en el reparto entre los pueblos junto con formas de vida verdaderamente sostenibles en armonía con la Naturaleza, incluirían los siguientes elementos propuestos por las ecofeministas africanas (WoMin, s. f.):

- soberanía alimentaria, mediante un modelo de agricultura agroecológica de bajos insumos;
- soberanía de las personas sobre su propio camino hacia el bienestar, mediante el concepto de consentimiento de las mujeres en el Sur global, que da credibilidad y espacio a las formas alternativas de desarrollo vividas a nivel local;
- soberanía energética mediante formas colectivas sostenibles y descentralizadas de energía renovable bajo el control de las comunidades y, específicamente, de las mujeres, y el fin de la extracción y quema de todos los combustibles fósiles;
- formas de extracción a pequeña escala y de bajo impacto, bajo formas colectivas de propiedad, sujetas a las prioridades locales y regionales;
- democracia participativa e inclusiva en todos los niveles de toma de decisiones, que reconozca el papel central de las mujeres en la sociedad, sus diferentes necesidades y la exigencia de un consentimiento pleno y permanente por parte de las comunidades afectadas y de las mujeres en particular;
- respeto y apoyo a los sistemas en los que los recursos naturales son “propiedad” y están gestionados por colectivos y grupos, y la expansión activa de las propiedades comunes como

parte fundamental de la lucha contra la privatización y la financiarización; y

- decrecimiento y una rápida transición hacia un estilo de vida de bajo consumo por parte de las clases ricas y medias en el Norte y en el Sur globales tradicionales.

Bibliografía

Caromba, Laurence. (2014). Review of Ubuntu: Curating the Archive. *Strategic Review for Southern Africa*, 37 (1), 208-211.

Chemhuru, Munamoto. (2018). Interpreting Ecofeminist Environmentalism in African Communitarian Philosophy and Ubuntu: An Alternative to Anthropocentrism, *Philosophical Papers*, 48 (2).

Chuwa, Leonard Tumaini. (2014). *African Indigenous Ethics in Goba Bioethics: Interpreting Ubuntu*. Vol. 1. New York: Springer.

Cornell, Drucina y Van Marle, Karin. (2015). *Ubuntu Feminism: Tentative Reflections*. Verbum and Ecclesia, 36 (2).

CRAAD-OI. (2021). Women's Dialogues to Dream and Imagine Development Alternatives. Informe del proceso de extensión en Sakatia, Madagascar.

Gontharet, Amélie. (2018). *An Ecofeminist Perspective of the Impact of Development Policies on Women's Lives. The Case of Ethiopia* (pp. 16-17). Universidad de Chipre, Máster Europeo en Derechos Humanos y Democratización. Ithaca / London: Cornell University Press.

Klinger, Julie Michelle. (2017). *Rare Earth Frontiers. From Terrestrial Subsoils to Lunar Landscapes*. Ithaca / London: Cornell University Press.

Maathai, Wangari. (2009). *The Challenge For Africa* (pp. 68-69). New York: Pantheon Books.

Mangena, Fainos. (2009). The Search for an African Feminist Ethic: A Zimbabwean Perspective. *Journal of International Women's Studies*, 11 (2), 18-30.

Mapondera, Margaret; Reddy, Trusha y Hargreaves, Samantha. (2020). *If another world is possible, who is doing the imagining? Building an Ecofeminist Development Alternative in a Time of Deep Systemic Crisis*. Accra: Bread & Butter Series, African Feminist Reflections on Future Economies.

Muthuki, Janet. (2006). *Rethinking Ecofeminism: Wangari Maathai and the Green Belt Movement In Kenya*. [Artículo de investigación]. Presentado en cumplimiento parcial de los requisitos para obtener el título de Máster en Ciencias Sociales (Estudios de Género) en la Facultad de Humanidades, Desarrollo y Ciencias Sociales, Universidad de Kwazulu-Natal, Howard College Campus.

Nyabola, Nanjala. (6 de octubre de 2015). Wangari Maathai Was Not a Good Woman. Kenya Needs More of Them. *African Arguments*. <https://africanarguments.org/2015/10/06/wangari-maathai-was-not-a-good-woman-kenya-needs-many-more-of-them>

Nyambura, Ruth, citada por Merino, Jessica (15 de noviembre de 2017) en Women Speak, Ruth Nyambura Insists On A Feminist Political Ecology. *MS Magazine*. <https://msmagazine.com/2017/11/15/women-speak-ruth-nyambura-feminist-political-ecology/>

Ogungbemi, Segun. (1997). An African Perspective on the Environmental Crisis. En Louis Pojman (ed.), *Environmental*

Ethics: Readings in Theory and Application (pp. 330-337). Belmont: Wadsworth Publishing Co.

Satgar, Vishwas (ed.). (2018). *The Climate Crisis: South African and Global Democratic Eco-socialist Alternatives*. South Africa: Wits University Press.

Tamale, Sylvia. (2020). *Decolonization and Afro-Feminism*. Ottawa: Daraja Press.

Terreblanche, Christelle. (2018). Ubuntu and the Struggle for an African Eco-socialist Alternative. En Vishwas Satgar (ed.), *The Climate Crisis: South African and Global Democratic Eco-socialist Alternatives* (p. 168). South Africa: Wits University Press.

Van Norren, Dorine Eva. (2014). The nexus between Ubuntu and Goba public goods: Its relevance for the post-2015 Agenda. *Development Studies Research, An Open Access Journal*, 1 (1), 255-266.

WoMin (s. f.). *Women Building Power: exploring our initial ideas about an African ecofeminist approach to campaigning*. [Documento de discusión].

Decrecimiento feminista para una transición desestabilizadora

Bengi Akbulut

Introducción

“Transición” es, sin duda, la palabra de moda de nuestro tiempo. Lejos de ser indiscutida, también ha sido empleada cada vez más frecuente y visiblemente por empresas, estados-nación y organizaciones internacionales del *statu quo*. La transición se invoca ahora en formas que corren el riesgo de perpetuar las injusticias medioambientales globales y las dinámicas neocoloniales de apropiación de recursos, y abren nuevos campos de acumulación de capital a la vez que trasladan la carga socioecológica de la transición al Sur global (o al Sur dentro del Norte). Sin embargo, el peligro que encierran estos usos y la circulación del término no se limita a las prácticas justificadas por el mensaje más ambiguo y domesticado que conlleva. El zumbido hegemónico de la transición, por así decirlo, también deja fuera visiones del mundo, luchas y propuestas históricas y contemporáneas que surgieron, florecieron y se han practicado, tanto en el Sur global como en el Norte. Una de esas propuestas es el decrecimiento.

André Gorz escribió en 1972, “el equilibrio global, para el cual el no-crecimiento —o incluso el decrecimiento— de la producción material es una condición necesaria, ¿es compatible con la supervivencia del sistema (capitalista)?” (Bosquet, 1972). Desde que se utilizó por primera vez el término “decrecimiento” —u originalmente *décroissance* en francés— se ha convertido en un poderoso marco conceptual y en un movilizador político para imaginar y poner en práctica formas alternativas de articular la sociedad, la economía y la Naturaleza. Desde entonces, la noción se ha introducido en la literatura académica, en el vocabulario de los movimientos sociales y en el debate público (incluso en el Parlamento Europeo). La literatura académica sobre el decrecimiento, en particular, ha alcanzado un volumen y un alcance impresionantes, abarcando desde cuestiones de ajuste infraestructural y reorganización del trabajo hasta el diseño de sistemas monetarios y una nueva arquitectura de las finanzas públicas.

Este capítulo sitúa el decrecimiento como una propuesta contrahegemónica que desestabiliza y va más allá de las concepciones dominantes de la transición. Entendiendo el decrecimiento como el hecho de recentrar y reorientar la economía (y no como una simple cuestión de reducción de escala biofísica), el capítulo delinea tres ejes fundamentales para este potencial: (a) poner en primer plano una concepción más amplia de lo que constituye el trabajo (b) justicia, en particular las injusticias históricas y actuales entre el Norte y el Sur globales, y (c) autonomía y democracia como principios organizativos de una economía del decrecimiento.

Definir el decrecimiento

A pesar de ser meramente, aunque equivocadamente, entendido como una reducción de escala material, el decrecimiento denota una transformación mucho más abarcadora. El decrecimiento es sin duda una propuesta de reducción voluntaria, equitativa y

democráticamente elegida de los materiales y de la energía que una sociedad extrae, procesa y elimina como residuos (Demaria et al., 2013). El decrecimiento se basa fundamentalmente en la bioeconomía y en la economía ecológica, que subrayan que los límites biofísicos al crecimiento, en forma de disponibilidad de recursos o capacidad de absorción de residuos, son vinculantes. En este sentido, el decrecimiento es un fuerte contrapunto a las visiones del crecimiento verde y de la ecomodernización, que se basan fundamentalmente en afirmaciones de desacoplamiento absoluto, es decir, de desvinculación del crecimiento económico de sus impactos biofísicos mediante el uso y el avance de tecnologías ecoeficientes. En diversos debates sobre los límites de la ecomodernización, los partidarios del decrecimiento han demostrado no solo la falta de pruebas de tal desvinculación, sino que también han puesto en duda que pueda llegar a alcanzarse y, más en particular, que se produzca al ritmo y con la consistencia necesarios para evitar una catástrofe climática (Hickel y Kallis, 2020). También han subrayado los “efectos rebote” de las tecnologías ecoeficientes, la menor producción de energía de las fuentes de energía renovables comparado con el insumo necesario para ello y, del mismo modo, los intensos requisitos materiales de las tecnologías ecoeficientes (Kallis, 2017). Sin embargo, este llamamiento a reducir la escala no se concibe como una cuestión técnica de reducción, sino más bien como un punto de entrada para un proceso democrático de toma de decisiones por parte de la sociedad sobre qué actividades abolir, cuáles limitar y qué actividades apoyar y ampliar. En otras palabras, un decrecimiento selectivo (Kallis, 2011; Brand et al., 2021).

El decrecimiento denota una transformación mucho más radical que desestabiliza las estructuras dominantes de nuestras economías de varias maneras. En primer lugar, es fundamentalmente un proyecto para romper con el concepto de crecimiento económico entendido como un objetivo de la sociedad, o sea, con la ideología del crecimiento (Latouche, 2005). Es una llamada a deconstruir la ecuación automática de más con “mejor”, o de crecimiento económico

con bienestar social en términos abstractos, con el fin de abrir espacio para imaginar otros ideales y principios en la organización de las relaciones económicas. El decrecimiento tiene sus raíces en un desafío más amplio al economicismo, es decir, al poder de la racionalidad económica que domina y asfixia otras racionalidades, objetivos y representaciones sociales. Esto implica un cuestionamiento radical de imperativos económicos, como la eficiencia y la maximización de los beneficios, y una (re)politización de la economía, cuestionando su supuesta realidad objetiva y poniendo en primer plano la elección democrática a la hora de darle forma (Fournier, 2008). El decrecimiento es, pues, un proyecto para recuperar la economía.

En segundo lugar, el decrecimiento no es una cuestión cuantitativa (“menos de lo mismo”), sino, más bien, una cuestión cualitativa (“diferente”). No se trata de una contracción dentro de una economía de crecimiento, sino que denota una reorientación de las relaciones económicas hacia una estructura diferente, con el fin de cumplir funciones diferentes (Kallis et al., 2014). Es una propuesta para avanzar hacia una sociedad en la que el metabolismo social —la forma en que las sociedades organizan su interacción con los flujos de materiales y energía— se organice según principios diferentes, como las necesidades y el aprovisionamiento, el cuidado, la solidaridad, la justicia y la democracia. Esto implica, fundamentalmente, un cambio estructural-institucional, ya que las instituciones económicas del capitalismo, como el trabajo, el bienestar, la propiedad, los mercados, el crédito y las finanzas públicas perpetúan un imperativo de crecimiento (Kallis, 2011). Estas instituciones dependen del crecimiento económico continuo para su funcionamiento y sostenibilidad (por ejemplo, la financiación de los servicios públicos vinculada al crecimiento a través de sistemas fiscales, la creación de empleo vinculada a la expansión económica), o impulsan el crecimiento económico (por ejemplo, el crédito con intereses, la competencia por una mayor cuota de mercado). También implica construir y reforzar formas de producción, intercambio, trabajo, finanzas y consumo que sean intencionalmente diferentes de la actividad económica dominante

(capitalista). Estas formas económicas alternativas son más propensas a dar prioridad a la producción para necesidades concretas y situadas, a poner en primer plano los valores sociales y ecológicos por encima de la acumulación, la maximización de los beneficios y el crecimiento, a localizar la producción y el consumo, y pueden cultivar valores como el compartir, la comunidad y la solidaridad.

Así planteado, el decrecimiento es ante todo un proyecto de reestructuración y reorientación de los sistemas económicos contemporáneos hacia otros que se centren en las necesidades y el aprovisionamiento equitativo en lugar de en la acumulación y el crecimiento económico. Esta reorientación puede tomar diferentes caminos: implica un alejamiento de las actividades extractivas, de producción de combustibles fósiles, militares y publicitarias, hacia aquellas que sostienen y regeneran el bienestar humano y no humano, como la sanidad, la educación, la agricultura ecológica-recuperadora y los sistemas alimentarios locales. Podría significar, por ejemplo, que las subvenciones y la financiación pública que se conceden a las primeras se eliminen y se desvíen hacia las segundas; que los sistemas fiscales se reestructuren de forma que castiguen la actividad económica perjudicial y recompensen las actividades que mantienen la vida; y que la destrucción ecosocial creada por las economías de crecimiento capitalista sea restringida mediante límites establecidos democráticamente a la extracción de recursos.

Esta reestructuración / reorientación también implica garantizar un sustento y un acceso equitativos a los bienes y servicios básicos para todos los seres humanos, teniendo en cuenta lo que implica el acceso en diferentes contextos o culturas. Entre las posibles vías para alcanzar este fin se encuentran la desmercantilización de servicios básicos como la sanidad, la educación y la vivienda, o medidas para garantizar un nivel mínimo de bienestar para todos los seres humanos, por ejemplo, mediante sistemas de renta básica universal [RBU] o servicios básicos universales [SBU]. Garantizar un cierto nivel de bienestar para todos los seres humanos a través de este tipo de medidas es, de hecho, una decisión de cambiar radicalmente la forma en

que se distribuyen los medios de subsistencia, es decir, pasar de estar indexados al empleo asalariado a basarse en las necesidades evaluadas colectivamente. Desvincular la satisfacción de las necesidades de la situación laboral no solo aliviaría la coacción para trabajar en empleos explotadores, alienantes y degradantes; también aliviaría el imperativo de mantener el crecimiento económico por su potencial de creación de empleo.

El decrecimiento en tres ejes

Existen tres ejes fundamentales en el proyecto de reestructuración / reorientación del decrecimiento que le confieren su potencial para desestabilizar las narrativas dominantes de la transición y aunar voces a favor de una transformación ecosocial radical. Los abordaré sucesivamente a continuación.

Ampliar la noción de “trabajo”

El primer eje es una concepción más amplia de lo que constituye el “trabajo”, más allá de “trabajo asalariado productor de mercancías”, que incluye los tipos de trabajo que son fundamentales para mantener la vida (humana y no humana). Las pensadoras feministas han formulado teorías durante mucho tiempo sobre este ámbito del trabajo que queda fuera de la producción de mercancías, a pesar de sustentarla: la reproducción social. La reproducción social es, en primer lugar, el trabajo de reproducir y mantener a los trabajadores y trabajadoras, pero también abarca la producción de bienes y servicios que mantienen la vida, y la regeneración de las condiciones sociales y ecológicas de la vida y la producción (de mercancías). La reproducción social incluye, por tanto, no solo las formas de trabajo que producen y sostienen directamente la capacidad humana de producir, sino también las que mantienen, median y transforman los procesos biofísicos que sustentan la vida (Barca, 2019).

Lo que hace que la reproducción social sea tan particular es que, por un lado, está visiblemente marcada por el género (y racializada) y, por otro, está altamente invisibilizada y devaluada, es decir, se considera “no-trabajo”. Esto no es accidental: la producción de mercancías bajo el capitalismo no solo oculta esta esfera de trabajo y producción, sino que depende fundamentalmente de su devaluación: la producción barata, si no totalmente gratuita, de mano de obra, su sustento y las condiciones ecológicas y sociales más amplias de la producción han sido fundamentales para el desarrollo y la reproducción del capitalismo (Mies, 1986). Los estudios feministas han señalado la escala global de los flujos de valor devaluados e invisibles, estableciendo paralelismos entre la colonización, la dominación de la Naturaleza y la subyugación de las mujeres (Mies, 1986; Federici, 2004). La reproducción social es, por lo tanto, global e incluye el trabajo de colonias, pueblos indígenas y productores de subsistencia, que reproducen la fuerza de trabajo global y protegen / regeneran los ciclos metabólicos naturales (Mies y Shiva, 1993; Salleh, 2017). A esto se añade la división global del trabajo social reproductivo, en el que el trabajo social reproductivo racializado (por ejemplo, de las cuidadoras migrantes) sirve para abaratar los costes de mantenimiento y reproducción de la acumulación de capital, especialmente en los países del Norte global.

Poner en primer plano una concepción más amplia del trabajo implica, en primer lugar, que esta esfera invisibilizada del trabajo y la producción sea reconocida, recompensada y apoyada. Entre las posibles medidas a tal fin se incluyen la implantación de una renta de cuidados, así como la ampliación de los derechos y prestaciones de las trabajadoras esenciales y la inversión pública en la reproducción social y ecológica. Estas políticas no solo proporcionarían apoyo material a las trabajadoras de la reproducción social, sino que también podrían ser decisivas para cambiar la percepción de lo que se reconoce y se considera valioso como trabajo.

Sin embargo, el reconocimiento y la validación no son suficientes para tal fin. El mero reconocimiento y validación de la reproducción

social, sin problematizar su organización, corre el riesgo de perpetuar y solidificar su distribución sexista (y racializada). Un metabolismo social más reducido y la reducción del uso de materiales y energía conllevan importantes cuestiones, como qué tipo de actividades dependerán más del trabajo humano y de quién será el trabajo que sustituya la reducción del uso de energía en, por ejemplo, la producción doméstica, la agricultura o el transporte. Como han señalado las feministas, dados los arraigados patrones de división del trabajo en función del género, estos cambios estructurales sin garantizar la justicia de género corren el riesgo de refeminizar la reproducción social (Saave y Muraca, 2021).

Fundamentalmente, el pensamiento y la política feministas no solo han sido decisivos para impulsar el reconocimiento y la recompensa del trabajo de reproducción social. También han problematizado cómo se organiza este trabajo reproductivo, es decir, quién lo realiza en qué medida, en qué condiciones y bajo el control de quién, si se remunera y cómo se remunera y cómo se decide su distribución. De hecho, para la política feminista, hacer visible la reproducción social y revelarla como trabajo no es un fin en sí mismo, sino más bien el medio para la lucha por alterar su distribución (de género y racializada) y las condiciones en las que se realiza. Se trata de una visión crítica, ya que amplía el enfoque de una concepción más amplia del trabajo a cuestiones sobre cómo organizar la reproducción social. Aunque no existe un modelo, los estudios y la práctica feministas proporcionan herramientas para abordar esta cuestión, apuntando a formas cooperativas e igualitarias de aprovisionamiento en las que el trabajo es colectivo y está organizado de acuerdo con la justicia de género (Federici, 2019).

Resumiendo, el hecho de que el decrecimiento ponga en primer plano una concepción más amplia del trabajo es tanto un reconocimiento y una recompensa de la labor de reproducción social que es fundamental para sostener la vida (humana y no humana), como una visión de su organización colectiva, igualitaria y democrática. Este enfoque ofrece una nueva perspectiva para reflexionar sobre la

justicia en la transición, ya que no solo impregna la noción de transición, sino también la de justicia, con el diverso e inmenso campo del trabajo y la producción que sustentan la producción de mercancías y la acumulación de capital. Es decir, la justicia de la transición exige justicia para las trabajadoras (humanas y no humanas) de la reproducción social.

Decrecimiento y justicia

El segundo eje fundamental es la justicia. El decrecimiento es un proyecto de justicia en dos sentidos interrelacionados. En primer lugar, la justicia exige establecer límites, ya que los costes sociales y ecológicos del crecimiento siempre se reparten de forma desigual dentro de las sociedades y las geografías, y entre ellas. En otras palabras, la reducción del uso de energía y de recursos es en sí misma un proyecto de justicia. Esto es especialmente pertinente para las relaciones entre el Norte global y el Sur global, ya que el crecimiento económico en el Norte ha provocado, y sigue provocando, graves impactos socioecológicos en el Sur. Por lo tanto, es responsabilidad del Norte decrecer, dejando más espacio para que otros puedan vivir (Paulson et al., 2020).

En segundo lugar, y lo que es más importante, el crecimiento está impulsado y posibilitado por las injusticias globales. La relación desigual entre el Norte global y el Sur, que se constituye históricamente y continúa reproduciéndose, se encuentra en la base del capitalismo global. Sitúa a los países del Norte y del Sur de manera que la prosperidad y el crecimiento de los primeros han dependido fundamentalmente de los flujos de mano de obra y Naturaleza baratas apropiadas por los segundos. Las dinámicas históricas del capitalismo global que hicieron rico al Norte global también han puesto a los países del Sur global en caminos que los han encerrado en un imperativo de crecimiento perpetuo, por ejemplo, a través de la dependencia estructural del extractivismo, el servicio de la deuda o el ajuste estructural.

Reparar las injusticias históricas y actuales es, por tanto, fundamental para el decrecimiento y le confiere una dimensión internacional crucial. Si bien el decrecimiento es predominantemente una propuesta desarrollada en y para los países industrializados del Norte global, con sus políticas y acciones asociadas a menudo concebidas como intervenciones dentro de estas economías, las implicaciones de la “responsabilidad de decrecer” no se limitan en absoluto a las fronteras geográficas del Norte global. Es decir, el decrecimiento como justicia es necesariamente un proyecto que aborda, por un lado, los impactos históricos y contemporáneos del crecimiento económico y, por otro, las estructuras de reproducción del crecimiento del sistema económico mundial.

Esta remodelación del vínculo entre decrecimiento y justicia es fundamental en el activismo y pensamiento recientes sobre decrecimiento, cristalizado especialmente en torno a las nociones de deuda ecológica, o sea, la apropiación histórica y contemporánea o el uso desproporcionado de los recursos ecológicos y sumideros, y el intercambio ecológicamente desigual, a saber, los flujos desiguales de Naturaleza incorporada en bienes comercializados en el comercio internacional (Schmelzer et al., 2022). Sin embargo, esto debe complementarse con la perspectiva global sobre reproducción social, que amplía esta noción de justicia para incluir los flujos desiguales de trabajo de los seres humanos y de la Naturaleza para mantener la vida entre el Norte global y el Sur global. Visto de este modo, no son solo flujos de Naturaleza (incorporada), ya sea a través del uso y la apropiación directos o del intercambio desigual en el comercio mundial, sino, de manera más amplia, flujos de trabajo reproductivo social que sostiene y reproduce el crecimiento capitalista. Las acciones dirigidas a reparar las injusticias globales deberían, por lo tanto, tener en cuenta una noción más amplia de “deuda reproductiva” que incluya el trabajo reproductivo social racializado y abaratado que fluye del Sur global hacia el Norte, así como las reparaciones coloniales y la devolución de la tierra a sus legítimos custodios indígenas.

Las acciones e intervenciones concretas que surgen de esta forma particular de entender el decrecimiento como / mediante justicia, pueden clasificarse a grandes rasgos bajo tres encabezamientos, que son ampliamente congruentes con las propuestas realizadas en el capítulo sobre deuda de este libro. El primero se refiere a la reparación de las injusticias históricas y contemporáneas, e incluye medidas como el pago de la deuda ecológica y, más ampliamente, de la deuda reproductiva, las reparaciones climáticas y coloniales, y las intervenciones en el sistema financiero y comercial mundial que inviertan / alivien las dinámicas de intercambio desigual entre los países del Norte global y del Sur. De esta manera, el decrecimiento no solo se une a los movimientos contemporáneos que reclaman reparaciones y soberanía indígena como el Land Back Movement,¹ sino también a los que reviven el potencial transformador de la Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda Ecológica (Southern Peoples Ecological Debt Creditors Alliance), que replanteó la llamada crisis de la deuda del Tercer Mundo en términos de la deuda contraída por el Norte global (Bravo y Yáñez, 2003).

El segundo conjunto de acciones / intervenciones se refiere a los efectos potencialmente debilitadores que la contracción de las actividades de producción y consumo en consonancia con el decrecimiento en los países industrializados tendría en el Sur global, especialmente en los países que dependen estructuralmente de la exportación o la inversión extranjera (Dengler y Seebacher, 2019). Dado que la relación asimétrica y los flujos desiguales y la Naturaleza y el trabajo entre el Norte global y el Sur también ha llevado, históricamente, a que muchas economías del Sur sean estructuralmente dependientes de los sectores exportadores, estos últimos podrían verse afectados en caso de una contracción en el Norte, lo que equivaldría a una desvinculación forzada. Aunque las medidas orientadas a la justicia mencionadas anteriormente supondrían

¹ <https://redpaper.yellowheadinstitute.org>

cierto alivio, también son necesarias medidas directas como la transferencia de recursos para la reestructuración económica.

El tercer y último conjunto de propuestas consiste en abrir y reforzar el espacio para que el Sur global pueda seguir vías distintas al crecimiento si así lo decide. Esto implica reconocer la validez de la variedad de movimientos, propuestas y visiones del mundo más allá del crecimiento que se originan en el Sur global (por ejemplo, el posextractivismo, Ubuntu, Buen Vivir), por un lado, y medidas para aliviar el imperativo construido de crecimiento en el Sur global mediante, por ejemplo, la financiación de sistemas cooperativos / públicos de aprovisionamiento desvinculados del crecimiento o el apoyo a un alejamiento de la dependencia de las relaciones de intercambio desiguales, por otro.

Decrecimiento como autonomía / democracia

El tercer y último eje es la autonomía y la democracia. Está relacionado con el llamamiento del decrecimiento a salir de un imaginario social dominado por el imperativo de crecimiento y a poner en primer plano la toma de decisiones democrática en la configuración de los procesos económicos. Una contrapartida a este llamamiento es el énfasis que pone el decrecimiento en la autonomía. El decrecimiento se inspira en gran medida en las concepciones de autonomía (y, de manera relacionada, de democracia) desarrolladas por pensadores como Ivan Illich, André Gorz y Cornelius Castoriadis. A pesar de sus diferencias, la base común que comparten estos pensadores es la comprensión de cómo el aumento de la escala de la actividad económica socava la capacidad de autogobierno, ya sea a través de la centralización y la burocratización de la toma de decisiones económicas o de la erosión de la capacidad de autodefinir las necesidades con el auge de la economía de mercado. Es decir, el crecimiento económico sin fin no es deseable, aunque fuera biofísicamente posible, ya que pone en peligro la capacidad de autogobierno colectivo.

Democratizar la toma de decisiones económicas hacia la expansión del autogobierno, es decir, permitir que todas las personas participen en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, es, por tanto, inherente al decrecimiento. Esto se anima, en primer lugar, mediante la insistencia del decrecimiento en la determinación colectiva y democrática de las necesidades y límites situados, es decir, qué actividades abolir, cuáles limitar y qué actividades apoyar y ampliar en un futuro de decrecimiento. Pero también resuena con el énfasis del decrecimiento en “*diferente, no solo menos*”, es decir, su llamamiento a construir un tipo diferente de economía que sirva a funciones distintas de la basada en la explotación, la acumulación y el crecimiento, hacia una que se centre en las necesidades, el aprovisionamiento, la equidad y la solidaridad. Frenar el poder corporativo, establecer un control democrático sobre el dinero y las finanzas, presupuestos públicos participativos, gobernanza democrática de las capacidades productivas, así como construir y fortalecer formas alternativas (no capitalistas) de producción, distribución / intercambio y consumo son, por tanto, facetas fundamentales del decrecimiento.

La democratización de la toma de decisiones económicas a diversas escalas a través de este tipo de intervenciones y prácticas tiene el potencial de destacar las necesidades concretas, los valores de uso y la riqueza no monetaria por encima de la acumulación, la maximización de los beneficios y el crecimiento, y dar prioridad a principios como garantizar medios de vida sostenibles y equitativos o la regeneración, renovación y protección de la calidad medioambiental (Johanisova y Fraňková, 2017). Abrir los procesos de toma de decisiones económicas a la participación democrática de una base más amplia de actores permitiría la implicación de un abanico más amplio de demandas y valores a la hora de informar las decisiones relativas, por ejemplo, sobre qué, cuánto y para quién producir bajo qué condiciones, cómo fijar los precios o los salarios y dónde invertir el excedente. Esto abriría un espacio para repensar imperativos económicos como el crecimiento o la eficiencia, permitiría la operacionalización

de objetivos alternativos y (re)politicaría la economía al someter la racionalidad económica a la deliberación y control de la sociedad.

La democracia y la autonomía en el ámbito económico no son solo principios que merecen la pena en sí mismos, sino que también funcionarían como una fuerza para frenar y transformar la dinámica ecológica y socialmente destructiva de las economías de crecimiento capitalista. El énfasis del decrecimiento en la democracia y en la autonomía económicas es especialmente crítico en medio de los debates dominantes sobre transición ecosocial. Las propuestas de este frente se centran principalmente en una reorientación estructural de las actividades económicas, como el abandono de los sectores basados en los combustibles fósiles, a menudo acompañada del uso de tecnologías ecoeficientes. Reducen la cuestión de la transformación a la de “acertar” con las inversiones, es decir, alejarse de las actividades ecológicamente destructivas y corregir la mala asignación de las capacidades productivas. Sin embargo, en estos debates falta una visión de cómo deben gobernarse los procesos económicos y qué tipo de instituciones económicas se necesitan. Aquí es donde el énfasis del decrecimiento en la autonomía / democracia resulta crucial, ya que dota a los debates sobre transición de una problematización de los procesos de toma de decisiones económicas, además de sus resultados.

Conclusión

El decrecimiento es predominantemente una propuesta desarrollada en / y para los principales países industrializados del Norte global. No es un proyecto ni una visión que deba imponerse al resto del mundo, sino más bien una entre muchas otras visiones de vivir bien y equitativamente más allá del crecimiento capitalista, que a menudo han precedido al decrecimiento. El decrecimiento tampoco es homogéneo, estático ni carece de contradicciones, al igual que otros movimientos sociales. Por ejemplo, no se puede negar el predominio

de la autolimitación, el dimensionamiento correcto y un enfoque exclusivo en el consumismo, especialmente en las primeras corrientes de la práctica y del pensamiento sobre decrecimiento. También se aprecia una tendencia a rehuir las implicaciones y responsabilidades del decrecimiento en materia de justicia global.

Sin embargo, en el pensamiento del decrecimiento se ha ido produciendo un compromiso más directo con el capitalismo, en particular con su régimen ecológico global, el colonialismo y el patriarcado, por un lado, y con las formas anticapitalistas de organizar la economía, por otro, entre otras cosas debido a su mayor asimilación por parte de los movimientos sociales y a su apertura para situarse junto a múltiples visiones que desafían la hegemonía del crecimiento y el capitalismo. Este giro ha imbuido al decrecimiento de los fundamentos esenciales para que desestabilice y desafíe las concepciones dominantes sobre transición, y apunta a la necesidad de que el decrecimiento siga evolucionando como un proyecto político vivo de los muchos mundos que caben en un mundo.

Bibliografía

Barca, Stefania. (2019). The Labor(s) of Degrowth. *Capitalism Nature Socialism*, 30 (2), 214.

Bosquet, Michel (André Gorz). (19 de junio de 1972). Actas de un debate público organizado en París por el *Club du Nouvel Observateur*. *Nouvel Observateur*. Paris, 397, p. IV.

Brand, Ulrich; Muraca et al. (2021). From Planetary to Societal Boundaries: An Argument for Collectively Defined Self-limitation. *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 17 (1), 264-291.

Bravo, Elizabeth y Yáñez, Ivonne (eds.). (2003). *No more looting or destruction! We the Peoples of the South are the Ecological Creditors*. Quito: SPEDCA. https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1398&context=abya_yala

Demaria, Federico; Schneider, François; Sekulova, Filka y Martínez-Alier, Joan. (2013). What is Degrowth? From an Activist Slogan to a Social Movement. *Environmental Values*, 22 (2), 209.

Dengler, Corinna y Seebacher, Lisa Marie. (2019). What About the Global South? Towards a Feminist Decolonial Degrowth Approach. *Ecological Economics* 157, 248-249.

Federici, Silvia. (2004). *Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*. Nueva York: Autonomedia.

Federici, Silvia. (2019). *Re-enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons*. Oakland: PM Press.

Fournier, Valérie. (2008). Escaping from the Economy: The Politics of Degrowth. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 28 (11/12), 535-537.

Hickel, Jason y Kallis, Giorgos. (2020). Is Green Growth Possible? *New Political Economy* 25 (4), 469-486.

Johanisova, Nadia y Fraňková, Eva. (2017). Ecosocial Entreprises. En Clive Spash (ed.), *Routledge Handbook of Ecological Economics: Nature and Society* (pp. 513-515). New York: Routledge.

Kallis, Giorgos. (2011). In Defence of Degrowth. *Ecological Economics*, 70 (5), 875.

Kallis, Giorgos. (2017). Radical Dematerialization and Degrowth. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, physical and engineering sciences*, 37 (2095), Artículo 20160383.

Kallis, Giorgos; Demaria, Federico y D'Alisa, Giacomo. (2014). Introduction: Degrowth. En Giorgos Kallis, Federico Demaria y Giacomo D'Alisa (eds.), *Degrowth: A Vocabulary for a New Era* (p. 4). London: Routledge.

Latouche, Serge. (2005). *L'Invention de l'Économie*. París: Albin Michel.

Mies, Maria. (1986). *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour*. London: Zed Books.

Mies, Maria y Shiva, Vandana. (1993). *Ecofeminism*. London: Zed Books.

Paulson, Susan; D'Alisa, Giacomo; Demaria, Federico y Kallis, Giorgos. (2020). *The Case for Degrowth*. Cambridge: Polity Press.

Saave, Anna y Muraca, Barbara. (2021). Rethinking Labour / Work in a Degrowth Society. En Nora Räthzel, Dimitris Stevis y David Uzzell (eds.), *The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies* (pp. 743-767). Cham: Palgrave Macmillan.

Salleh, Ariel. (2017). *Ecofeminism as Politics: Nature, Marx and the Postmodern*. London: Zed Books.

Schmelzer, Matthias; Vetter, Andrea y Vansintjan, Aaron. (2022). *The Future is Degrowth: A Guide to a World beyond Capitalism*. Nueva York: Verso Books.

Decrecimiento, emergencia climática y transformación del trabajo

Luis González Reyes

Introducción: dos retos y un condicionante de las transiciones ecosociales

Cualquier transición ecosocial se enfrenta a dos desafíos fundamentales. El primero es el grado de profundidad y la amplitud de los cambios necesarios. El segundo es la alta velocidad a la que tienen que suceder esas transformaciones.

En lo que concierne a la profundidad y amplitud de los cambios necesarios se pueden destacar tres aspectos fundamentales que requieren un cambio. El primero es nuestra matriz energética, que tiene que pasar de basarse en combustibles fósiles a hacerlo en energías renovables. Solo así se pueden esquivar los peores escenarios de la emergencia climática o de la extinción masiva de especies. Este no es un cambio nimio, pues las energías renovables tienen características diferentes a las fósiles. En concreto, son fuentes poco concentradas, que funcionan como flujos irregulares y que permiten disponer de una cantidad notablemente menor de energía (González Reyes, 2022). Pensar en un mundo movido por energías renovables

es pensar en otra economía y otra sociedad (Malm, 2021; Fernández Durán y González Reyes, 2018).

El segundo factor es que no solo se están agotando las fuentes energéticas fósiles (Turriel, 2021), sino también muchos elementos. Desde el fósforo, indispensable en la agricultura industrial, hasta muchos elementos centrales en las renovables de altas prestaciones (Valero y Valero, 2021). Es decir, que la transición energética, además, tiene que ser a unas renovables tecnológica y materialmente sencillas. El cambio de las bases materiales de nuestra economía implica una transición de economías de extracción (mineras), a economías de producción, que no son otras que las agrícolas. De economías basadas en minerales, a otras articuladas por la biomasa.

Además, se hace imprescindible un cambio del modelo económico, pues el capitalismo requiere de un crecimiento constante para no entrar en crisis (es decir, para poder funcionar) y este es imposible de mantener. Entre otros factores, esto se debe a que existe una correlación lineal a nivel global entre el PIB y el consumo material y energético (Tverberg, 2016; Bellver, 2018). Es decir, que los datos empíricos muestran cómo no hay aumento del PIB sin aumento del consumo material y energético (Parrique et al., 2019). No existe la desmaterialización de la economía.

Entramos con el segundo desafío: la velocidad de la transición. Uno de los elementos que obligan a una transición acelerada es la emergencia climática. El cambio climático no es un proceso lineal. Pasado un umbral determinado (que probablemente esté en un incremento de temperatura de 1,5 °C, del que ya estamos muy cerca), el propio planeta se convertirá en emisor neto de gases de efecto invernadero. Y esto no cesará hasta alcanzar otro nuevo equilibrio 4-6 °C superior al preindustrial, que haría la gran mayoría de la Tierra inhabitable para el ser humano (McKay et al., 2022). Algo similar le ocurre a la disfunción ecosistémica (IPBES, 2019).

Por ello, atendiendo a la emergencia climática, necesitamos determinar cuál debería ser la reducción de emisiones para no sobrepasar 1,5 °C. Naciones Unidas plantea que estas tienen que ser del 7,6 % al

año a nivel global (UNEP, 2019). Esto implica una reducción del 58 % en 2030 respecto a las emisiones en 2019. Pero, en un mundo atravesado por la desigualdad, las responsabilidades de unos territorios y otros son muy distintas. Para los principales emisores históricos y per cápita del mundo, las reducciones tendrían que ser mayores, por lo menos del 10 % al año. Esto significa una bajada del 65 % en 2030. Para hacernos una idea de lo que esto supone, las reducciones que se produjeron en la antigua URSS cuando colapsó fueron del orden del 4 % en los años en los que fueron más importantes. Estamos hablando de una tasa anual de casi el doble a nivel planetario y sostenida en el tiempo.

Esto tiene un corolario y es que no podemos realizar programas en dos tiempos del tipo “primero se hace lo más fácil para ganar tiempo y después lo difícil”. El cambio tiene que ser en un único paso. Realizarse de una vez.

Abordar estos desafíos conlleva una transformación radical en el mundo del trabajo y, más en concreto, del empleo. Sugiero en este capítulo que necesitamos llevar a cabo cuatro transformaciones en los trabajos (Ruault et al., 2022):

- i. Incentivar los de restauración, sabiendo que son ocupaciones que, si se hacen bien, irán desapareciendo.
- ii. Incentivar las ocupaciones que cuidan y se integran en el entorno y, al hacerlo, generan más trabajos de ese tipo. Esto produce un bucle de realimentación positiva. La agricultura agroecológica es un ejemplo. Este es el espacio de actuación determinante.
- iii. Reconvertir las actividades que producen servicios para la economía que son nocivos para la vida y cuya demanda aumenta a medida que la biodiversidad se agota. Un ejemplo es la producción de abonos químicos. Son muy peligrosas, pues producen la ilusión de que no somos ecodependientes.

- iv. Reconvertir las actividades que dependen del buen estado ecológico, pero se basan en su explotación. Un ejemplo es la pesca intensiva, pero también los servicios bancarios que la sostienen. Estas ocupaciones se autorregulan, pues desaparecen sin un entorno sano, pero es fundamental actuar antes.

De este modo, los cambios que deben llevarse a cabo son profundos y deben darse con mucha velocidad, pero, a la vez, son inevitables. No nos engañemos pensando que podemos evitar realizarlos: un decrecimiento, localización y primarización de la economía se va a producir como consecuencia de los límites ambientales. Por ejemplo, sin petróleo en abundancia no es posible mantener el sistema de producción y consumo globalizado, ni una población altamente urbanizada (Fernández Durán y González Reyes, 2018).

Lo que está en juego es cómo de justa sea la transición y cuánta degradación se produzca antes de que suceda, no la transición ecológica en sí misma. Con todo esto, ¿cuáles son las grandes líneas de transformación necesarias?

Reducción del consumo material y energético hasta los marcos ecológicamente viables

Si queremos evitar las peores consecuencias del choque con los límites ecológicos es imprescindible desarrollar una contracción robusta de la esfera de la producción: un decrecimiento del metabolismo social (para una profundización sobre la propuesta del Decrecimiento, ver también el capítulo de Bengi Akbulut en este libro). Esta contracción debe producirse desde ya. En la década de los setenta y ochenta pudo ser factible un periodo de crecimiento impulsado por las energías renovables de alta tecnología que diese paso después a un inevitable decrecimiento del metabolismo para meterlo dentro de los marcos de lo física y ecológicamente sostenible. Pero en la década de 2020 ya no hay tiempo para eso si queremos tener alguna posibilidad

de que el cambio climático no se dispare, no se sobrepasen los 1,5 °C de incremento de temperatura (Nieto et al., 2019). Además, como apuntábamos, probablemente no haya recursos energéticos ni materiales para este desarrollo industrial.

Para el caso de España, hemos modelado los cambios en la economía que habría que llevar a cabo para meternos dentro de los márgenes de seguridad ecológica en la década 2020-2030. Para ello, tomamos el conjunto de la economía española (productiva y reproductiva) desglosada por actividades, traducimos esas actividades a horas de trabajo y emisiones. Sobre esos datos de 2019, aplicamos una serie de políticas que hacían que unas actividades crecieran y otras disminuyeran en actividad y en emisiones entre 2020 y 2030. Finalmente, traducimos las horas de trabajo resultantes en 2030 en puestos de trabajo (en el caso de las horas asalariadas) y comparamos las emisiones con lo que está planteando la ONU como necesario para no superar 1,5 °C de incremento de temperatura (reducción mundial media de las emisiones de CO₂ del 7,6 %) (UNEP, 2019), contemplando además la deuda ecológica española (reducción anual para España del 10 %) (González Reyes et al., 2019).

En las políticas, definimos un *escenario Green New Deal* basado en el despliegue masivo de renovables de alta tecnología y las TIC, pero también en la contracción de la movilidad, el descenso de la climatización de espacios y el desarrollo de la agricultura ecológica. Este escenario conseguiría reducir de forma considerable las emisiones en la década de estudio (-45 %), pero se queda lejos de hacerlo de manera suficiente (-65 %), incluso sin considerar la deuda ecológica (-58 %). Va a una velocidad insuficiente. Y la velocidad es fundamental en el escenario de emergencia climática pues, cuanto más tiempo tardemos en conseguir que la concentración de CO₂ se sitúe por debajo de las 350 ppm (actualmente supera ampliamente las 410 ppm), más posibilidades habrá de que se sobrepase el umbral de los 1,5 °C.

También modelamos un *escenario Decrecimiento*, que se diferencia del escenario Green New Deal. Este conseguiría la reducción robusta de emisiones necesaria en la década (-68 %). Para visualizar el

nivel de actividad económica, en 2030 esta sería algo inferior a la que existió en abril de 2020 en España, durante la parte más dura del confinamiento por la COVID-19.

Esta economía decrecentista implicaría el aumento de la actividad en algunos sectores, como la gestión de residuos o la alimentación, lo que generaría empleos (Cámara y Santero-Sánchez, 2019). Sobre estos tractores de empleo verde se ha estado haciendo mucho énfasis desde sectores ecologistas y sindicales, lanzando el mensaje de que las transiciones ecológicas suponían una oportunidad en el plano laboral. Sin embargo, necesitamos apreciar el cuadro completo, fijarnos también en aquellos sectores cuyo tamaño está sobredimensionado o son causa de destrucción ecológica. Cuando se analiza el conjunto del mercado laboral, una transición verde arroja una reducción neta importante de horas de trabajo productivo, al menos a corto plazo (Antal, 2014; Bowen y Kuralbayeva, 2015; González Reyes et al., 2019; Nieto et al., 2020; Oteros et al., 2023). Este es un desafío que hace la transición ecosocial mucho más complicada y que exige medidas que van más allá de las ambientales, sobre las que entraremos más adelante.

¿Qué sectores serían los que tendrían que decrecer y cuáles tendrían que aumentar en una transición decrecentista? Si analizamos los distintos sectores productivos, las horas de trabajo dedicadas a construcción, transporte, finanzas, turismo, industria y TIC tendrían que descender ostensiblemente. En contraposición, el sector de la energía y, sobre todo, de la silvicultura y la alimentación experimentarían fuertes subidas. Además, se reconfigurarían de manera apreciable, como veremos un poco más adelante (González Reyes et al., 2019; Oteros et al., 2023). Probablemente, estos resultados para el caso español sean cualitativamente equivalentes para el resto de las economías de los países centrales del sistema.

Las emisiones de la climatización de los espacios públicos y privados se tendrían que reducir ostensiblemente. Esto implicaría, más allá de medidas de aumento de la eficiencia, cambiar aires acondicionados por ventiladores, o pasar de calentar las casas a calentar

determinadas estancias (el baño o la sala de estar) o a las personas (braseros debajo de mesas camilla). También haría falta una fortísima reducción de la movilidad en avión y en automóvil.

Relocalización y diversificación de la economía

El actual modelo mundializado acumula impactos ecológicos y sociales incompatibles con la sostenibilidad. Además, para acabar con la desigualdad y el extractivismo que articulan hoy la Globalización es necesario relocalizar las economías para hacer que el sustento de la vida en un territorio se articule en base a recursos cercanos. Pero el imperativo va más allá, pues no existe ningún sustituto del petróleo que permita mantener el actual modelo de transporte de grandes volúmenes y masas, a largas distancias y a altas velocidades, de personas, mercancías e información (De Blas et al., 2020). En realidad, la localización es algo que sucederá conforme el petróleo vaya siendo cada vez más escaso. Esta relocalización implica necesariamente una diversificación de las actividades económicas a fin de que los territorios sean capaces de cubrir la mayor parte de las necesidades sociales.

Una forma de expresar la localización de la economía es que en el modelo que desarrollamos para España planteamos un recorte en 2030 respecto a 2020 de un 80 % del tráfico marítimo (la principal fuente de entrada de mercancías en la mayoría de las economías centrales) (González Reyes et al., 2019).

La diversificación se tendría que realizar especialmente en el sector industrial, que además es de los que tienen que experimentar cambios más profundos. Las transformaciones en este sector tienen que englobar una triple dimensión: i) Una diversidad mucho mayor del tejido productivo para poder hacer frente a una economía menos globalizada que siga satisfaciendo las necesidades de las personas. Esto adoptará distintos formatos en función de las especializaciones productivas de cada territorio, pero es probable que sea bastante

común una revitalización del procesado de alimentos, la fabricación de muebles o el textil. ii) Una reducción de las industrias con un fuerte impacto ambiental: pesticidas, automóviles y un, desgraciadamente, largo etcétera. iii) Una transformación hacia el bajo impacto ambiental. Esto implica una profunda transformación del conjunto del sector, empezando por las tecnologías que use, que no podrían estar basadas en combustibles fósiles ni en minerales, sino en energías realmente renovables, y en biomasa y materiales abundantes, fácilmente extraíbles y reutilizables.

Integración del metabolismo social dentro del metabolismo ecosistémico

Los ecosistemas son mucho más poderosos y resilientes que el capitalismo industrial. Por ello, si los ecosistemas centran su esfuerzo no en el crecimiento, sino en el cierre de ciclos (por ejemplo, reciclan el carbono, nitrógeno o fósforo en tasas del 99,5-99,8 %), usando energía solar, maximizando la diversidad y con altos grados de cooperación (De Castro, 2019), las economías humanas deben tratar de hacer lo mismo. Lo anterior significa que las sociedades dediquen el grueso de su esfuerzo productivo al sector primario bajo el paradigma agroecológico, pues economías centradas en el sector secundario o terciario no son capaces de satisfacer este imprescindible cierre de ciclos (Circle Economy, 2022).

Una forma de ver esto más en concreto es el modelo energético. La energía evolucionaría desde un *mix* basado en los combustibles fósiles de importación, hacia otro renovable. Pero no tal y como se concibe habitualmente: con renovables de alta tecnología construidas con materiales y energías no renovables y utilizadas fundamentalmente para producir electricidad (que da cuenta de aproximadamente el 20 % del consumo energético global). La transición sería hacia energías realmente renovables y de carácter emancipador (ver el capítulo de Tatiana Roa y Pablo Bertinat en este libro). Estas tienen otras

características: i) Están construidas con materiales y energías renovables. ii) Se integran y aprovechan el funcionamiento de los ecosistemas (como podría ser la calefacción bioclimática de una casa o el uso de las corrientes de aire estables en los océanos para el transporte). iii) No acaparan todo el flujo energético para los seres humanos, sino que dejan para el resto de seres vivos, lo que conlleva una menor acumulación de energía y utilizarla de manera intermitente. iv) Realizan trabajo directo (moler, batir, bombear, etc.) y producen calor, no solo electricidad. v) Están controladas por la comunidad (González Reyes, 2022).

Pero probablemente donde más se aprecie la integración del metabolismo humano y del ecosistémico es en el sector de la alimentación, donde se debería desarrollar con fuerza la agroecología: abonos verdes, control de plagas en base a los equilibrios ecosistémicos, circuitos cortos de comercialización, adaptación de los cultivos a las condiciones climáticas y edáficas, diversidad productiva, control de las semillas... soberanía alimentaria.

Integración de la producción y la reproducción en una sola unidad económica

No deberíamos desligar el trabajo reproductivo del productivo, ya que ambos se encuentran indisolublemente unidos, para empezar porque el trabajo de reproducción es la condición de posibilidad de todo trabajo de producción (para profundizar este debate, ver el capítulo de Bengi Akbulut en este libro). Además, una de las raíces del patriarcado es la escisión de reproducción y producción, y la especialización por género, algo que todavía se mantiene tanto en regiones centrales como periféricas: las mujeres dedican más horas a las tareas reproductivas que los hombres y, en términos totales, más horas de trabajo (ONU, 2016). De este modo, una primera idea fuerza es la necesaria integración de la producción y la reproducción en una misma unidad económica, como podría ser el ejemplo de una familia

campesina, pero con un reparto equitativo entre géneros de todas las tareas, en lo que una familia campesina tipo ya no nos serviría de referencia.

Un segundo factor que arroja contemplar el conjunto de los trabajos, tanto reproductivos como productivos, es que dedicamos más horas del día a los primeros en España (González Reyes et al., 2019) y es muy probable que esta situación se repita en el resto del mundo (ONU, 2016). De este modo, pensar las transiciones en el mundo del trabajo obliga a centrar la mirada en lo que sucede en los hogares y es básico para la reproducción social, algo que normalmente queda como una caja negra.

A estos dos elementos se añade que debemos revolucionar la valoración social actual de los trabajos. Hoy son los productivos, y en concreto aquellos que se sitúan en los puentes de mando que permiten la reproducción del capital, los que reciben mayor valoración social (y económica). Desde un punto de vista que asuma nuestra interdependencia y ecoddependencia, los trabajos de cuidados deben ser los que se consideren como esenciales y, por tanto, más valiosos (Pérez Orozco, 2014). La propuesta es que esos trabajos de cuidados crezcan no solo en valoración (social, no monetaria) (Dengler y Lang, 2021), sino en dedicación, asumiendo parte de los trabajos desmercantilizados de forma comunitaria, sobre lo que entraremos un poco más adelante.

Forzar una redistribución fuerte de la riqueza inter e intra-territorios con criterios de justicia global

Como se apuntó, una economía que se meta dentro de los límites de los ecosistemas implica una economía más pequeña con menos empleos. Esto es un drama en sociedades atravesadas por fuertes desigualdades, en las que existen importantes bolsas de personas empobrecidas y en las que la dependencia del salario para satisfacer las necesidades es muy alta. Por ello, la transición ecológica tiene

que venir acompañada de una transición social de amplio calado articulada alrededor del reparto de la riqueza.

Esto implicaría medidas como expropiaciones a los grandes patrimonios, implantación de rentas básicas, políticas impositivas fuertemente redistributivas, etc. En el plano internacional hablaríamos de restitución de las deudas ecológicas y coloniales, tal como discuten Alberto Acosta, Miriam Lang y Esperanza Martínez en su capítulo del presente libro. Dentro del marco laboral es central el reparto del empleo. En los modelos que hemos realizado para España, tanto para abordar el cambio climático (González Reyes et al., 2019), como la pérdida de biodiversidad (Oteros et al., 2023), con el actual marco laboral hay destrucción neta de empleo, pero con jornadas de treinta o de treinta y dos horas semanales hay una creación neta. Estos resultados serían extrapolables cualitativamente a nivel global. De este modo, la reducción de la jornada laboral, la prohibición de las horas extra o el adelanto de la edad de jubilación aparecen como políticas centrales de una transición justa.

La sociedad organizada puede ser un agente activo de esta redistribución sin mediación estatal, por ejemplo, okupando viviendas y terrenos, o forzando reducciones de la jornada laboral sin merma de sueldo. En todo caso, el estado también debería ser forzado a ser parte del proceso. Pero la idea es que estas luchas, que son muy costosas, no tengan que prolongarse en el tiempo indefinidamente, sino que la población sea capaz de sostener sus vidas de manera autónoma, sin depender del mercado ni del estado. Sobre eso va la última idea fuerza.

Aumento de la autonomía económica de las personas

Uno de los pilares en los que se fundamentan las sociedades capitalistas es la falta de autonomía económica y material de las personas, que se destruye activamente mediante procesos de acumulación por desposesión (Harvey, 2007). Una vez que las tierras han sido

expropiadas, el territorio degradado y las comunidades disueltas, la autogestión colectiva de aspectos básicos de la supervivencia como la alimentación, el cobijo o el abrigo se hacen imposibles. Al carecer de esta autonomía, la población no tiene más remedio que conseguir gran parte de lo que necesita en el mercado, para lo que requiere dinero. Y para la mayoría eso supone trabajar a cambio de un salario. A partir de ahí, somos cómplices de manera voluntaria o involuntaria del sostenimiento del sistema, del que depende nuestra subsistencia.

Además, el buen funcionamiento de este sistema pasa por un crecimiento permanente que se convierte en una obligación irracional. El crecimiento se produce dentro del sistema y a costa de sus afueras. A nivel interno, el capitalismo produce para generar una plusvalía que tiene que volver a invertirse para seguir ampliando el capital, no para ofrecer bienes y servicios que atiendan a las necesidades sociales. Este crecimiento compulsivo es uno de los responsables de la devastación ecológica, como muestra la ya nombrada relación lineal entre el consumo energético, el consumo material y el PIB a nivel mundial. Esta correlación también se produce entre la concentración de CO₂ en la atmósfera y el PIB (Garret, 2018).

A lo anterior se suma el hecho de que el capitalismo necesita expandirse constantemente hacia sus afueras. Por un lado, capitalizar los trabajos humanos que estaban fuera de los mercados invadiendo más y más territorios (la acumulación por desposesión que nombramos antes). Un ejemplo histórico de cómo el sistema convierte en capital trabajos externos ha sido la esclavización de la población africana para generar plusvalías en las plantaciones de caña o algodón americanas. Otro afuera al que se expande es la conversión en capital de los “trabajos” no humanos (Moore, 2020). Un ejemplo es el petróleo. Al extraerlo y convertirlo en mercancía, se capitaliza el “trabajo” de millones de años de concentración, comprensión y calentamiento de ingentes cantidades de materia orgánica hasta convertirla en una fuente energética de alta densidad. Un último ámbito de expansión del sistema con el que consigue reproducirse el capital es introduciendo en las lógicas mercantiles nuevas facetas de

nuestras vidas que antes no estaban mercantilizadas, como podrían ser los cuidados a las personas mayores o nuestra sociabilidad, hoy en manos de las empresas digitales. Todo ello genera destrucción ecosocial.

De este modo, la propuesta consiste en transitar desde sociedades “de mercado” (en las que la satisfacción de las necesidades se consigue de forma importante mediante la compra de bienes y servicios), hacia sociedades “con mercados, algunos de ellos regulados” (en las que la autonomía económica de la población es alta). En esos órdenes económicos, los bienes y servicios básicos para la subsistencia que estuviesen mercantilizados tendrían regulado su precio de acceso para garantizar que es universal.

Esto implica fundamentalmente procesos profundos de *desalarización* y *desmercantilización*, y un avance decidido hacia formas cooperativas y autogestionadas de propiedad y producción. El objetivo de una economía decrecentista no es simplemente “dignificar” las condiciones del trabajo asalariado o sostener y ampliar los estados del bienestar. Para conseguir las transformaciones expuestas no bastará con reasignar “trabajos”, aunque sean “verdes”: será además necesario quebrar el mecanismo del trabajo asalariado como el eje fundamental de organización de las relaciones sociales.

Para ello es imprescindible avanzar en el control social de los medios de producción en un proceso de *desalarización* y sustraer del mercado cada vez más actividades *desmercantizando* nuestras vidas. Eso significa defender y reconstruir bienes comunes que permitan una nueva organización de la subsistencia que no solo se sustraiga de las dinámicas mercantiles, sino que se reapropie de toda la capacidad de decisión autónoma que le ha sido expropiada por el estado. Necesitamos hacer del territorio, pero también del derecho, de los cuidados o de la educación bienes comunes que vuelvan a estar en manos de la población y, así, puedan desligarse de las dinámicas destructivas del capitalismo y someterse a la toma de decisiones democrática.

A modo de cierre

Llevar a cabo este tipo de transición trasciende el ámbito sindical, incluso aunque el sindicalismo tomase en serio la tarea de construcción de autonomía obrera en base al cooperativismo. Implica aunar visiones y luchas con el ecologismo, el feminismo, el internacionalismo o el cooperativismo. Una mirada y actuación holística.

Además, es necesario resignificar el concepto social de trabajo en varios sentidos. Primero, en desligarlo del empleo, y ampliarlo al trabajo de cuidados y los trabajos productivos comunitarios. Segundo, en desvalorizar socialmente el empleo y luchar por destruirlo. Tercero, apostar solo por los trabajos al servicio de la reproducción social y de la trama de la vida, y no por aquellos cuya finalidad es la reproducción del capital y, si acaso de manera colateral, permiten la satisfacción de necesidades humanas. Y cuarto, romper con la mirada productivista del trabajo y resignificarlo como fuente de sentido personal y colectivo que no tenga que estar en lucha con el ocio. Por ejemplo, si se pusiesen en marcha las medidas planteadas en nuestro modelo (González Reyes et al., 2019), trabajaríamos menos horas en total, dedicaríamos más a los cuidados no remunerados, menos al empleo (tanto público como privado) y aparecería un campo de trabajo autogestionado no capitalista enmarcado en la economía feminista, ecológica y solidaria. Probablemente, una vida que se acerca más al buen vivir o al vivir sabroso.

Bibliografía

Antal, Miklós. (2014). Green goals and full employment: Are they compatible? *Ecological Economics*. 10.1016/j.ecolecon.2014.08.014.

Bellver, José. (2019). Costes y restricciones ecológicas al capitalismo digital. *Papeles*, (144).

Bowen, Alex y Kuralbayeva, Karlygash. (2015). *Looking for green jobs: the impact of green growth on employment*. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Global Green Growth Institute.

Cámara, Ángeles y Santero-Sánchez, Rosa. (2019). *Economic, social, and environmental impact of a sustainable fisheries model in Spain. Sustainability*. Sustainability. 10.3390/su11226311.

Circle Economy. (2022). *The circularity gap report 2022*.

De Blas, Ignacio; Mediavilla, Margarita; Capellán-Pérez, Iñigo y Duce, Carmen. (2020). The limits of transport decarbonization under the current growth paradigm. *Energy Strategy Reviews*. 10.1016/j.esr.2020.100543.

De Castro, Carlos. (2019). *Reencontrando a Gaia*. Málaga: Ediciones del Genal.

Dengler, Corinna; Lang, Miriam. (2021). Commoning Care: Feminist Degrowth Visions for a Socio-Ecological Transformation. *Feminist Economics*. 10.1080/13545701.2021.1942511.

Fernández Durán, Ramón; González Reyes, Luis. (2018). *En la espiral de la energía*. Madrid: Libros en Acción / Baladre.

González Reyes, Luis; Almazán, Adrián; Lareo, Ángel; Actis, Walter; Bueno, Luis Miguel; Madorrán, Carmen; Santiago, Emilio y

De Benito, Cristina. (2019). *Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030*. Ecologistas en Acción.

González Reyes, Luis. (2022). Crisis energética. *Papeles*, (156).

Garret, Tim. (2018). *What is your carbon footprint?* <https://www.insc.utah.edu/~tgarrett/what-is-your-carbon-footprint.html>

Harvey, David. (2007). *El nuevo imperialismo*. Madrid: Akal.

IPBES. (2019). *El informe de la evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas*.

Malm, Andreas. (2021). *Capital fósil*. Madrid: Capitán Swing.

McKay, David I. Armstrong; Staal, Arie; Abrams, Jesse F.; Winkelmann, Ricarda; Sakschewski, Boris; Loriani, Sina; Fetzer, Ingo; Cornell, Sarah E.; Rockström, Johan y Lenton, Timothy M. (2022). Exceeding 1,5 °C global warming could trigger multiple climate tipping points. *Science*. 10.1126/science.abn7950.

Moore, Jason W. (2020). *El capitalismo en la trama de la vida. Ecología y acumulación de capital*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Nieto, Jaime; Carpintero, Óscar; Miguel, Luis J. y De Blas, Ignacio. (2019). Macroeconomic modelling under energy constraints: Global low carbon transition scenarios. *Energy Policy*, 10.1016/j.enpol.2019.111090.

Nieto, Jaime, Carpintero, Óscar, Miguel, Luis J. y De Blas, Ignacio. (2019). Macroeconomic modelling under energy constraints: Global low carbon transition scenarios. *Energy Policy*. 10.1016/j.enpol.2019.111090.

ONU. (2016). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016. Nueva York.

Oteros, Elisa, Monasterio, Camila, Gutiérrez, Alba, Hernández, Marta, Álvarez, Isabel, Albarracín, Daniel, González Reyes, Luis, Fernández Casadevante, José Luis, Amo, Guillermo, García, Marina, Hevia, Violeta, Iniesta, Irene y Quintas, Cristina. (2023). *Biodiversidad, economía y empleo en España. Análisis y perspectivas de futuro*. Madrid: Amigos de la Tierra / Ecologistas en Acción / SEO BirdLife / WWF.

Parrique, Timothée; Barth, Jonathan; Briens, François; Kerschner, Christian; Kraus-Polk, Alejo; Kuokkanen, Anna; Spangenberg, Joachim H. (2019). *Decoupling debunked: Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability*. European Environmental Bureau.

Pérez Orozco, Amaia. (2014). *Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Ruault, Jean-François; Dupré la Tour, Alice; Evette, André; Allain, Sandrine y Callois, Jean-Marc. (2022). A biodiversity-employment framework to protect biodiversity. *Ecological Economics*. 10.1016/j.ecolecon.2021.107238.

Turiel, Antonio. (2021). *Petrocalipsis. Crisis energética global y cómo (no) la vamos a solucionar*. Madrid: Alfabeto.

Tverberg, Gail (29 de agosto de 2022). The world's energy problem is far worse than we're being told. *Oilprice.com*. <https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/The-Worlds-Energy-Problem-Is-Far-Worse-Than-Were-Being-Told.html>

UNEP. (2019). *Emissions Gap Report 2019*.

Valero, Antonio y Valero, Alicia, entrevistados por Almazán, Adrián. (2021). *Thanatia. Los límites minerales del planeta*. Barcelona: Icaria.

Nayakrishi Andolon: alternativas al sistema agroalimentario moderno y corporativo de Bangladesh

Farida Akhter

Introducción

El pueblo de Bangladesh es “víctima” de los cimientos depredadores de la civilización colonial-industrial basada en los combustibles fósiles. El país, como emplazamiento de expansionismo extractivo industrial, es excepcionalmente vulnerable al cambio climático. Se enfrenta a condiciones meteorológicas extremas, con catástrofes naturales cada vez más frecuentes, como tormentas, ciclones, marejadas, sequías, erosión, corrimientos de tierra, inundaciones y salinización. Según las estimaciones, en 2050 una de cada siete personas en Bangladesh se verá desplazada por el cambio climático y hasta dieciocho millones de personas podrían tener que desplazarse únicamente por la subida del nivel del mar (Climate Reality Project, 2021). A esto hay que añadir los desplazamientos debidos a las políticas de desarrollo impuestas por instituciones multilaterales y bilaterales. El desplazamiento violento de la población de la economía agraria y los medios de subsistencia rurales es sistemático. El proceso inherente

a la transformación capitalista aleja a las personas de la tierra y las obliga incesantemente a emigrar a las ciudades para convertirse en mano de obra barata en el sector de la confección.

Como país frecuentemente afectado por catástrofes, la población de Bangladesh ha desarrollado una rica práctica de gestión de catástrofes. La participación activa de la gente en la recuperación tras una catástrofe genera una forma de colectivismo que aumenta la resistencia y el potencial de supervivencia de la comunidad afectada. La gente crea redes, activa viejas relaciones y acude en busca de ayuda mutua, lo que demuestra el poder de la autodeterminación y la localización del poder popular. Sin embargo, este potencial del pueblo nunca se ha aprovechado. En su lugar, un estado altamente coercitivo imbuido de poder centralizado ha copiado e impuesto leyes, estructuras y cultura administrativa de la época colonial. Los actores internacionales del desarrollo, que tienen una comprensión estrecha y técnica de la recuperación de catástrofes, han impuesto políticas de ayuda y desarrollo muy burocráticas y prediseñadas. Todo ello constituye un enorme desafío para la población.

La transición justa en Bangladesh implica, por tanto, dos estrategias interrelacionadas pero paralelas: (1) La crítica sistemática y la resistencia a la idea de “desarrollo” arraigada en las estructuras coloniales y en el modelo capitalista de civilización industrial. El requisito primordial es rediseñar adecuadamente la transformación económica, social, cultural y tecnológica mediante principios ecológicos; (2) Diseñar estrategias adecuadas para una transición ecosocial justa en los sectores industrial y agrario.

La comprensión sistemática de las opciones disponibles para la producción de alimentos, la utilización de la mano de obra y el desarrollo de los conocimientos, las competencias y la productividad deben tener características locales y no modelos impuestos desde el exterior. Una transición justa, equitativa y sostenible no puede producirse dejando que el sistema injusto siga funcionando como siempre. El sistema extractivo enormemente destructivo se hizo más visible tras el cambio climático y la pandemia de COVID-19. Para

salir del sistema extractivo, la transición justa tiene que garantizar la justicia tanto para los seres humanos como para el medioambiente. Nayakrishi Andolon, el movimiento ecológico de agricultorxs basado en la biodiversidad, es una nueva vía para alcanzar este objetivo.

Basado en décadas de reflexión colectiva y praxis con la ONG bangladeshí UBINIG, este capítulo ofrece una crítica del sistema agroalimentario moderno y corporativo de Bangladesh, y pone en primer plano una solución alternativa y un movimiento desde abajo, el Nayakrishi Andolon. Se trazan los orígenes del Nayakrishi y la praxis de la agricultura basada en la biodiversidad como sistema agrícola viable y mejor para las personas y el planeta.

A través de su praxis de redes de semillas y prácticas de conocimiento dirigidas por mujeres, Nayakrishi demuestra las posibilidades y el poder de los pueblos indígenas, las mujeres y lxs agricultorxs como portadores de conocimientos que están en primera línea del sistema agroalimentario de Bangladesh. Al ofrecer este caso concreto, el capítulo subraya la importancia de criticar el desarrollo agrícola dominante y de fomentar y alimentar alternativas y movimientos por alternativas como dos caras de la misma moneda.

Modernización: la destrucción de la base biológica de la agricultura

Bangladesh, rico en biodiversidad y recursos naturales, ha luchado por salir de la pobreza y el subdesarrollo desde su independencia en 1971. Tiene una población de más de ciento setenta millones de habitantes que viven en una pequeña superficie de 147 570 km. Pero dentro de esta pequeña superficie, existe una enorme diversidad, descrita por el estudio de Zonas Agroecológicas [AEZ por sus siglas en inglés], que ilustra tal diversidad en fisiografía, suelos, niveles de tierra por encima de las inundaciones y agroclimatología. Reconoce treinta regiones agroecológicas y ochenta y ocho subregiones,

subdivididas a su vez en quinientas treinta y cinco unidades agroecológicas (FAO y PNUD, 1988).

En la agricultura predominan las explotaciones pequeñas (menos de una hectárea), que constituyen el 84 % del total de hogares agrícolas; solo más del 14 % son explotaciones medianas y grandes (más de tres mil hectáreas) (Bangladesh Bureau of Statistics, 2015). Estxs agricultorxs producen diversos cultivos, sobre todo arroz. La FAO calcula que quinientos millones de pequeñas explotaciones familiares, que poseen menos de una hectárea de tierra, son la fuente de más del 80 % del suministro mundial de alimentos (FAO, 2014). Lxs agricultorxs de Bangladesh pertenecen a esas categorías de agricultores mundiales.

La agricultura proporciona sustento y empleo a la mayoría de la población y contribuye a la economía nacional proporcionando alimentos, fibras, medicinas y divisas. En 1983-84, la participación de la agricultura en el producto interior bruto [PIB] era del 49 %, frente a solo el 10 % del sector industrial y el 18 % del comercio y el transporte. Desde la década de 1990, la contribución del sector agrícola al PIB se ha reducido gradualmente del 38 % a solo el 12,9 % del PIB en 2020 (Banco Mundial, s. f.). El descenso de la participación de la agricultura en el PIB se considera un signo de “modernización” basado en la noción de que la agricultura significa bajo crecimiento, atraso y falta de industrialización. Solo la “industrialización” aporta alto crecimiento y civilización. En 2020, la parte de la industria en el PIB había subido al 30 %, y el sector de servicios contribuía en torno al 53,4 %. Fue un resultado previsto de las políticas que destruyen la agricultura como forma de vida y sustento y convierten las tierras en medios para actividades comerciales, industrias y producción industrial de alimentos.

El hecho de que la contribución de la agricultura al PIB haya disminuido, pero siga empleando a más del 40 % de la población, no significa gran cosa, ya que no capta las complejas relaciones entre las personas, la agricultura y los medios de subsistencia, especialmente en las zonas agroecológicas. El paso de la agricultura al llamado

desarrollo e industrialización está provocando diferentes catástrofes en la vida de las personas a través de la destrucción de la biodiversidad, el medioambiente y la salud, así como la violación de los derechos de lxs agricultorxs y las mujeres rurales.

Desde la década de 1970, Bangladesh tuvo que seguir las políticas de modernización de la agricultura impulsadas por los donantes y denominadas Revolución Verde, que consisten esencialmente en la industrialización de la producción de alimentos mediante el uso de productos químicos (fertilizantes y pesticidas), la extracción de aguas subterráneas para el riego y la mecanización de las tecnologías posteriores a la cosecha. La producción industrial de alimentos se ha promocionado como una Revolución Verde que destruyó la biodiversidad y promovió el monocultivo de arroz de variedades de alto rendimiento [HYV por sus siglas en inglés], cambiando gradualmente la tecnología de las semillas para que el sistema de semillas de lxs agricultorxs pudiera ser destruido y sustituido por semillas corporativas y organismos modificados genéticamente [OMG]. Millones de toneladas de fertilizantes químicos, pesticidas y la contaminación y extracción de millones de litros de aguas subterráneas crearon un sistema injusto en el acceso a las semillas, a los insumos agrícolas y al agua.

Apostar por las transiciones justas a través de Nayakrishi

En la década de 1990, ante el aumento de los costes de los insumos y el menor rendimiento de las prácticas agrícolas convencionales, lxs agricultorxs buscaron una alternativa. Se les planteó la cuestión de si querían volver a la agricultura tradicional o formular una práctica diferente que pudiera resolver los problemas, así como sustituir los métodos agrícolas modernos y abordar las nuevas cuestiones emergentes multidimensionales de la pérdida de biodiversidad, las cuestiones ecológicas, los derechos de lxs agricultorxs y de las mujeres, y la soberanía alimentaria. No se trataba de volver a los viejos tiempos.

Se trataba más bien de futuras transiciones. Nayakrishi Andolon nació en medio de estos retos. Al principio, no se concibió como una transición técnica de la agricultura basada en productos químicos a la agricultura ecológica. Comprendía todos los problemas sociales, medioambientales, culturales y políticos a los que se enfrentaban las comunidades agrícolas.

La denominación de Nayakrishi Andolon a principios de la década de los noventa supuso en sí misma un reto. Los movimientos ecologistas y medioambientales mundiales estaban activos antes y después de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1992. El término “biodiversidad” no era familiar para muchos activistas medioambientales antes del Convenio sobre la Diversidad Biológica [CDB]. Nayakrishi (Naya significa *nueva*, Krishi significa *agricultura*) evolucionó a través de discusiones, debates y análisis entre lxs agricultorxs. Era un concepto totalmente nuevo de agricultura basada en la biodiversidad. Con él, se añadió el término Andolon (movimiento), ya que lxs agricultorxs como individuos no pueden cambiar la situación dominada por los intereses corporativos y los actores globales. Lxs agricultorxs deben luchar colectiva y continuamente contra la transformación de la agricultura en agricultura industrial y contra tecnologías perjudiciales como las semillas modificadas genéticamente.

Lxs agricultorxs Nayakrishi siguen diez reglas sencillas, como reflejo de los diez dedos de sus manos. El objetivo primordial es mantener y regenerar un suelo vivo y fértil, mantener y regenerar diversas formas de vida y la variabilidad ecosistémica y desarrollar la capacidad del sistema de conocimiento indígena para comprometerse y apropiarse de los últimos avances de las ciencias biológicas que puedan contribuir a regenerar el planeta y el sistema terrestre. Estas reglas se revisan periódicamente en función de la nueva información, las experiencias prácticas y el aprendizaje. Las cinco primeras reglas son obligatorias, como “no utilizar absolutamente ningún pesticida” o “ningún producto químico y aprender el arte de producir suelo mediante procesos biológicos naturales”. Estas son

las principales obligaciones de ser miembro del movimiento. Las reglas seis a diez apelan a lxs agricultorxs interesados en desarrollar sistemas ecológicos más integrados y complejos, no solo para maximizar el rendimiento, sino para contribuir a innovar interesantes diseños ecológicos que demuestren el inmenso potencial económico de la agricultura ecológica basada en la biodiversidad y refuercen las formas prácticas de resistencia contra la globalización (Mazhar et al., 2021).

La resistencia a nivel de producción contra los productos químicos y la industrialización de la producción de alimentos se conoce generalmente como agricultura “orgánica”. Sin embargo, Nayakrishi Andolon insiste en que la producción de alimentos debe basarse en la preservación de la biodiversidad, pasando de la producción “orgánica” de alimentos a la agricultura basada en la biodiversidad. La producción “orgánica” de alimentos que se ha desarrollado en el sistema industrial de producción de alimentos dentro de un mercado capitalista, dictado por la demanda del mercado, sigue encerrada en el paradigma “industrial”, “capitalista” y de “producción”.

La agricultura está íntimamente relacionada con muchas otras ocupaciones de subsistencia, como alfareros/as, herreros/as, tejedores/as, pescadores/as, ganaderos/as, etcétera. El hogar es la unidad de producción en la que participa toda la familia y en la que cada miembro desempeña un papel respectivo e interrelacionado. En los hogares Nayakrishi, las mujeres se convierten en los miembros más importantes que contribuyen a las familias y son importantes responsables de la toma de decisiones en sus actividades agrícolas, como la conservación de las semillas y el procesamiento posterior a la cosecha. Las mujeres agricultoras Nayakrishi ejercen su agencia en la unidad de producción y tienen mando sobre la biodiversidad y la conservación de los recursos genéticos. Nayakrishi también implica a lxs niñxs, pero no a costa de privarles de educación u otras actividades sociales.

Reconstituir la red comunitaria de semillas y las prácticas de conocimiento para derrotar al negocio mundial de semillas corporativas

La estrategia más eficaz de lxs agricultorxs Nayakrishi, sobre todo de las mujeres, es la insistencia en la conservación, recolección y regeneración de la variedad local de semillas. Adoptaron un enfoque comunitario mediante la formación de la Red de Semillas Nayakrishi [NSN por sus siglas en inglés] con la responsabilidad específica de garantizar la conservación *in situ* y *ex situ* de la biodiversidad y los recursos genéticos. Lxs agricultorxs mantienen la diversidad en el campo, pero, al mismo tiempo, conservan las semillas en sus casas para volver a plantarlas en las siguientes temporadas. La NSN tiene tres niveles:

En primer lugar, los refugios de semillas Nayakrishi (Nayakrishi Seed Huts [NSH]) se crean por iniciativa independiente de uno o dos hogares de agricultorxs Nayakrishi de la aldea, dispuestos a asumir la responsabilidad de garantizar que todas las especies y variedades comunes vuelvan a ser plantadas, regeneradas y conservadas por lxs agricultorxs. Los NSH garantizan que lxs agricultorxs tengan su propia colección de semillas en sus hogares. Las diversas variedades de semillas de los hogares de lxs agricultorxs están representadas en los NSH, que pueden compartir e intercambiar entre sí.

En segundo lugar, se crea la Red de Mujeres Especializadas en Semillas [SWSN por sus siglas en inglés], formada por mujeres con conocimientos especializados en determinadas especies o variedades. Su tarea consiste en recopilar variedades locales de distintos pueblos. También vigilan y documentan la introducción de una variedad en un pueblo o localidad, mantienen información actualizada sobre la variabilidad de las especies que les han sido asignadas y monitorean si se promueven semillas perjudiciales en los pueblos, a las que pueden oponerse.

En tercer lugar, el Centro Comunitario de Riqueza de Semillas [CSWC por sus siglas en inglés] es el centro vértice de la Red de Semillas Nayakrishi que conecta el NSH y los hogares de lxs agricultorxs. Se trata de una estructura institucional que articula la relación entre lxs agricultorxs dentro de un pueblo y entre pueblos, en otros distritos y con instituciones nacionales para compartir e intercambiar semillas. La construcción del CSWC se basa en dos principios: (a) deben construirse con materiales de construcción disponibles localmente, y (b) el mantenimiento debe reflejar las prácticas domésticas de conservación de semillas. Están situados en uno de los *Biddaghors* (centros de aprendizaje) de la UBINIG para la recogida, almacenamiento, conservación, distribución, intercambio y regeneración de semillas. Las tareas del CSWC incluyen la documentación y el mantenimiento de información general sobre la zona.

Cualquier/a agricultor/a miembro del Nayakrishi Andolon puede recoger semillas del CSWC con la promesa de que, tras la cosecha, depositará el doble de la cantidad recibida. En 2021, el CSWC poseía una colección de más de dos mil setecientas variedades de arroz y quinientas treinta y ocho variedades de hortalizas, aceite, lentejas y especias. El CSWC también mantiene un desarrollado vivero con especies autóctonas de fruta, madera y plantas medicinales.

En el CSWC, las mujeres agricultoras de cada aldea o comunidad interactúan intensamente y comparten conocimientos e intercambian semillas, lo que facilita a lxs agricultorxs un avance significativo en la conservación y reproducción de los materiales de siembra locales. Lxs agricultorxs ganaron mucha confianza para seguir produciendo alimentos gracias al cambio a las variedades locales. El sistema de semillas que usan contribuye a la soberanía alimentaria y de semillas en sus respectivas comunidades. Para Nayakrishi, la soberanía alimentaria no puede lograrse sin hacer realidad la soberanía de las semillas. Tienen el derecho soberano de decidir qué cultivos alimentarios cultivar, teniéndolas bajo su control y no siguiendo los caprichos del mercado.

Lxs agricultorxs de la Red de Semillas Nayakrishi integran estas prácticas de conservación de semillas en sus relaciones cotidianas y crean un entorno y un marco agroecológico particulares para garantizar su existencia biológica. El carácter llamativo de los CSWC y los NSH es su capacidad para aumentar la relación dinámica y cíclica entre la conservación *in situ* y *ex situ* de los materiales de siembra que hacen posible, sostenible y provechosa la agricultura. Es provechoso para lxs agricultorxs aumentar su capacidad de regenerar la base biológica de la agricultura y generar casi todos los insumos necesarios para la agricultura. En los CSWC, los representantes de lxs agricultorxs participan activamente en los procesos de toma de decisiones.

Como movimiento, las principales acciones de Nayakrishi Andolon consisten en movilizar a lxs agricultorxs contra las semillas invasoras, como los híbridos, los OMG y cualquier otra agresión tecnológica contra su sistema de semillas. Deben proteger las semillas, y el lema “Hermanas mantengan las semillas en su mano” es fundamental para el movimiento. Lxs agricultorxs Nayakrishi se han resistido a la promoción de cultivos modificados genéticamente, como la Bt brinjal (berenjena) y el arroz dorado, y han logrado suscitar preocupación por motivos de bioseguridad. También se resisten a estas tecnologías porque están patentadas por empresas multinacionales como Monsanto (ahora Bayer) y Syngenta.¹

Alimentos no cultivados: reimaginar la Naturaleza para resistir a las prácticas depredadoras

Las prácticas agrícolas Nayakrishi fomentan el crecimiento de alimentos no cultivados, como verduras de hoja verde, tubérculos y peces pequeños, que constituyen casi el 40 % de la dieta de los

¹ Estas luchas están documentadas por UBINIG (Investigación Política para el Desarrollo Alternativo). Para más información, ver www.ubinig.org.

habitantes de las comunidades. Esto es posible cuando se ha conservado la biodiversidad local. Estos alimentos no cultivados se recolectan en campos agrícolas, masas de agua y zonas boscosas. Estas fuentes de alimentos también son importantes con fines medicinales, tanto para las personas como para los animales. Desde el punto de vista funcional, Nayakrishi define la agricultura como la gestión de los espacios cultivados y no cultivados para garantizar el máximo rendimiento por acre de tierra, estimulando diversas funciones ecológicas de los elementos de la Naturaleza viva (Mazhar, 2019).

Entre los muy pobres, los miembros sin tierra de las comunidades rurales (que representan alrededor del 15 % de la población rural) dependen en casi un 100 % de las fuentes no cultivadas de alimentos y forraje. A lo largo del año, su supervivencia diaria y su bienestar se garantizan mediante la recolección de alimentos no cultivados directamente y a través de sistemas de intercambio con los cultivadores de arroz, y la venta de cabras y pollos en el mercado local para poder comprar aceite y otros alimentos que necesitan pero que no pueden forrajear directamente (UBINIG, 2005). Al fomentar el cultivo de alimentos no cultivados, Nayakrishi garantiza la conservación de la biodiversidad que proporciona alimentos y nutrición a la comunidad.

El papel estratégico de los alimentos no cultivados y el forraje en las zonas rurales tiene importantes implicaciones para las políticas agrarias. Los alimentos no cultivados crecen abundantemente en tierras y espacios comunes de las comunidades rurales. Las consecuencias negativas de la privatización de las zonas comunes las sufren sobre todo las mujeres, que dependen de su entorno para alimentarse y acceder a espacios y materias primas que mejoran su vida. A las mujeres les preocupa la privatización de las tierras comunes y la transformación de espacios públicos como los bordes de los caminos y los estanques, ya que repercuten directamente en las opciones de subsistencia de las personas que dependen de los espacios públicos para apacentar animales o recoger artículos para la alimentación o la venta. Los espacios comunes y los derechos consuetudinarios

en estas zonas han sido completamente ignorados en el contexto político.

Garantizar el mantenimiento de las fuentes de alimentos no cultivados en el entorno inmediato y la accesibilidad de los recursos comunes es necesario para hacer realidad la seguridad alimentaria dentro de la comunidad. El grado de control sobre las fuentes locales de alimentos es la medida con la que los programas gubernamentales pueden garantizar la capacidad de las comunidades pobres para participar en el mercado. En lugar de suministrar alimentos a través de sistemas de distribución estatales y subvenciones empresariales, los gobiernos deberían proteger y mejorar la biodiversidad local cultivada y no cultivada, incluidas las fuentes de alimentos no cultivados (UBINIG, 2005).

Resistir a la agricultura empresarial

Lxs agricultorxs se ven engañados por los “atractivos” anuncios de las empresas y la propaganda corporativa que abusa de la ciencia para obtener beneficios. Hay “expertos” contratados que afirman que, debido al cambio climático, la agricultura no puede basarse en la Naturaleza y en las prácticas de conocimiento de las comunidades agrícolas. Entienden la Naturaleza como algo fijo y muerto, como si no fuera un ser vivo en constante cambio y evolución. Las empresas hacen esto para ser los únicos proveedores de semillas tolerantes al estrés. Ofrecen las llamadas semillas resistentes a las inundaciones, la sequía y la salinidad, producidas en sus laboratorios. Estas semillas están patentadas y lxs agricultorxs se ven obligados a comprarlas a un precio elevado. Estas semillas ignoran descaradamente la experiencia y los conocimientos de lxs agricultorxs para hacer frente a la variabilidad climática y a las catástrofes naturales. Lxs agricultorxs de Bangladesh tienen muchas variedades autóctonas: resistentes a las inundaciones, a la sequía y a la salinidad. También tienen una vasta experiencia en adaptarse a las cambiantes condiciones

climáticas desde hace cientos de años. Lxs agricultorxs Nayakrishi están recuperando esas semillas y cultivando también los conocimientos de la comunidad para hacer frente al cambio climático.

En la actualidad, un objetivo muy importante del Nayakrishi Andolon es la protección del planeta Tierra frente a las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la temperatura, y proteger así la existencia y la integridad biológica de todas las formas de vida que constituyen nuestro planeta. Lxs agricultorxs Nayakrishi perseveran para mantener las cadenas alimentarias y la red de la vida libres de productos químicos industriales peligrosos como pesticidas, herbicidas, toxinas, biocidas y otros productos nocivos, como el arsénico, que han ido entrando en nuestras cadenas alimentarias a través de la producción industrial moderna de alimentos, que es una de las principales causas de las emisiones de gases de efecto invernadero. La agricultura y los sistemas alimentarios son la base biológica de la civilización. Lxs agricultorxs Nayakrishi creen que la agricultura es una forma de vida. Puede salvar a las comunidades preservando la biodiversidad y promoviendo actividades que afirman la vida.

Para Nayakrishi, los nuevos términos corporativos como “soluciones basadas en la naturaleza”, que engloban expresiones como “adaptación basada en los ecosistemas”, “reducción del riesgo de eco-desastres”, e “infraestructuras verdes”, solo sirven para maquillar de verde (ver también el capítulo de Manahan en este libro). A Nayakrishi no le gustaría que se le identificara como una “solución basada en la naturaleza” frente al creciente problema del cambio climático que está provocado por el hombre y creado por la dominación del control corporativo sobre los recursos naturales, en particular las semillas y los materiales genéticos. Nayakrishi cuestiona la idea misma de industrialización y destrucción de la Naturaleza como “progreso”. A través de su praxis agrícola basada en la biodiversidad, Nayakrishi trabaja por un sistema justo en la comunidad en el que los pobres, las mujeres y los indígenas sean protagonistas clave y actores políticos en la transformación del sistema agroalimentario de Bangladesh.

Como movimiento amplio, Nayakrishi representa la resistencia de los pueblos contra la destrucción de lo “local” al privilegiar lo “global” y contra la eliminación de lo “real” mediante la instalación de lo “virtual”. Nayakrishi es una forma ecopolítica de volver al sentido común y liberar a las comunidades agrícolas de la tiranía de la jerarquía, el poder y la tecnología. El movimiento explora constantemente relaciones alternativas de afirmación de la vida y prácticas de construcción de comunidades mediante la crítica del egocentrismo, las jerarquías sociales opresivas y la noción industrial de estilos de vida de alta tecnología y consumismo como “desarrollo”.

Conclusión

Aparte de las actividades comunitarias prácticas, Nayakrishi se dedica a criticar sistemáticamente y resistirse a la idea de “desarrollo” según el modelo de la civilización industrial capitalista. En este contexto, Nayakrishi supone un cambio de paradigma respecto a la idea convencional de desarrollo, progreso e industrialización. Nayakrishi Andolon, como movimiento, imagina y nutre comunidades ecológicas para la prosperidad comunitaria y la vida alegre. La transición justa no es una mera respuesta a la subsistencia y a los desastres medioambientales, sino que es una respuesta a la crisis y a los problemas de nuestra comprensión de la Naturaleza y de nuestras relaciones y funciones como seres humanos respecto a ella. La agricultura es un lugar ideal para reimaginar el futuro de la humanidad en el que la actual separación y contradicción entre industria y agricultura se aborden y resuelvan de lleno.

Nayakrishi se compromete a hacer avanzar el sistema de conocimiento local e indígena y a crear capacidades para integrar de forma crítica los éxitos, fracasos y percepciones de las prácticas de conocimiento formal, como la “ciencia moderna”. No existe una separación mecánica entre los sistemas de conocimiento formal e informal. Aunque Nayakrishi Andolon no idealiza el conocimiento

indígena, tampoco acepta la autoridad acrítica de la ciencia moderna en la producción de conocimiento. Lxs agricultorxs son auténticos productores de conocimientos, expresados oralmente o de otro modo. Las mujeres agricultoras han demostrado sus conocimientos mediante la práctica de la conservación y preservación de semillas, y con ello contribuyen a nutrir la biodiversidad y todas las formas de vida.

Alcanzar la soberanía alimentaria no es solo un eslogan. Únicamente puede hacerse realidad si nos preocupamos por lxs agricultorxs y atendemos a la evolución de sus prácticas de conocimiento. El lema de las mujeres agricultoras Nayakrishi, “Hermanas mantengan las semillas en sus manos”, no solo llama a la resistencia contra el control corporativo de nuestro sistema alimentario, sino que, en última instancia, exige poner en primer plano las relaciones de afirmación de la vida entre las personas y la Naturaleza.

Bibliografía

Banco Mundial (s. f.). Agriculture, Forestry and Fishing Value Added. Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. <https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS>

Bangladesh Bureau of Statistics. (2015). Statistical Yearbook of Bangladesh.

Climate Reality Project. (9 de diciembre de 2021). *How the Climate Crisis Is Impacting Bangladesh*. <https://www.climateRealityProject.org/blog/how-climate-crisis-impacting-bangladesh>

FAO. (2014). The State of Food and Agriculture. (2014): Innovation in Family Farming. <http://www.fao.org/3/a-i4040e.pdf>

FAO y PNUD. (1988). Land Resources Appraisal of Bangladesh for Agricultural Development. Report 2: Agroecological Regions of Bangladesh.

Mazhar, Farhad. (2019). Nayakrishi Andolon. En Arturo Escobar, Federico Demaria, Ariel Salleh, Ashish Kothari, Alberto Acosta Espinosa (eds.), *Pluriverse: A Post-Development Dictionary*. New Delhi: Tulika Books.

Mazhar, Farhad; Akhter, Farida y Das, Upamanyu. (2021). Nayakrishi Andolon: Geolocalization Bangladesh. En *Resilience in the face of COVID-19. Vol. 1. Global Tapestry of Alternatives*.

UBINIG. (2005). Uncultivated food: summaries of preliminary data compiled from field reports in SANFEC, *Uncultivated food that money can't buy*. <https://grain.org/en/article/450-uncultivated-food-food-that-money-can-t-buy>

Diseñando transiciones regionales sistémicas

Una experiencia de investigación-acción en Colombia

María Campo y Arturo Escobar

*Estamos retomando nuestros sentidos más profundos,
retornamos a imaginarnos un valle de ríos y lagunas.*

Vicenta Hurtado, directora,
Casa Cultural del Chontaduro,
Cali, 13 de diciembre del 2019

Introducción: las transiciones sociológicas como transiciones civilizatorias

En el Valle Geográfico del Río Cauca [VGRC], en Colombia, al igual que en muchas otras partes del mundo, las transiciones ecosociales, dignas y justas ya están en marcha, con mayor o menor claridad y contundencia. La crisis climática y el aumento exponencial de las desigualdades vinculadas al modelo extractivista están actuando como un potente detonador de pensamientos y prácticas orientadas a tejer biorregiones pluriversales para el cuidado de la vida, proponiendo transiciones basadas en economías justas en armonía con la

tierra, y construyendo una visión menos individualista, que garanticen la permanencia y el vivir a la población infantil y juvenil en sus territorios.

Este capítulo se basa en un trayecto / proyecto de transición ecosocial regional en marcha en el VGRC en el suroccidente colombiano. Nuestro trayecto / proyecto surge tanto de la práctica de colectivos en la región como de tres conceptos teórico-políticos: transiciones socioecológicas pluriversales, los conflictos ambientales como conflictos entre mundos y la paz territorial pluriversal. Este se concibe dentro de una perspectiva antirracista, antipatriarcal, anticlasista, poscapitalista y de autonomías territoriales, entendidas de manera integrada. Intentamos avanzar en el camino de transiciones justas pluriversales y por tanto contrahegemónicas.

El trayecto / proyecto es implementado por tres grupos:

- *El Tejido de Transicionantes del valle geográfico del río Cauca*, creado en el 2018, un colectivo de veinticinco personas, entre activistas-intelectuales afrocolombianxs, feministas, ambientalistas, y académicxs, con experiencia en el análisis interseccional, la ecología política, discapacidad, el diseño de transiciones y de medios, la planificación urbana-rural y los derechos humanos.
- *La Asociación Casa Cultural El Chontaduro*, organización de base fundada en 1986 en el Oriente de Cali, uno de los sectores con mayores condiciones de vulnerabilidad social de la ciudad, enfocada en la construcción de sociedades justas, sexualmente equitativas y étnico-racialmente plurales. Sus líneas de actuación —centradas en el trabajo con juventudes, mujeres, niñez, desde perspectivas educativas, investigación y construcción de paz—, responden a los desafíos estructurales como una apuesta impulsada con el protagonismo afro-femenino.¹

¹ Ver www.casaculturalchontaduro.com

- *La Asociación de Consejos Comunitarios de Suarez, ASOCOMS*, organización de comunidades negras que agrupa a tres consejos comunitarios de esta localidad; trabaja por los derechos del pueblo negro y de la Naturaleza a través de acciones estratégicas como la defensa de los ríos Cauca y Ovejas contra proyectos minero energéticos, el derecho a la consulta previa del Plan de Manejo Ambiental de la Central Hidroeléctrica La Salvajina, y la reconocida movilización de las mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales del 2014.

La primera parte del capítulo presenta el contexto regional que hace de la transición ecosocial una posibilidad histórica real. En la segunda, nos detenemos brevemente en las corrientes de pensamiento que la inspiran desde la academia crítica, pasando a una presentación de los elementos más relevantes del trayecto / proyecto en la tercera parte. En la última sección, presentamos algunas anotaciones sobre las transiciones y dinámicas socioterritoriales derivadas de nuestra acción-investigación.

La región del valle geográfico del río Cauca y la necesidad de una transición ecosocial

La región del VGRC ha sido durante siglos un escenario de disputas por el control territorial para el desarrollo de economías de acumulación global (agroindustria, hidroeléctricas y proyectos minero-energéticos), el narcotráfico y el conflicto armado, que afectan la soberanía alimentaria y restringen la autodeterminación; generan y agudizan las violencias sobre las mujeres y niñas etnizadas y racializadas, convirtiéndolas en botines de guerra; e incrementan los juvenicidios en la población negra. La respuesta del gobierno ha sido la securitización de los territorios, traducida en militarización de los cuerpos y de la vida de las mujeres, niñas y jóvenes, afectando las

espacialidades históricamente construidas por los pueblos étnicos en nombre del “desarrollo”.

Este entramado ecológico de montañas, bosques, dehesas, ríos, lagunas y humedales ha sido el hogar de cientos de especies de plantas y animales, además de diversas comunidades y pueblos. Este legado ha sido sistemáticamente socavado por las operaciones agroindustriales y extractivistas. Pregonado como un milagro del “desarrollo”, los efectos profundamente desfuturizantes de este modelo saltan a la vista: el agotamiento, sedimentación y contaminación de ríos y acuíferos; la desecación de humedales; la pérdida de biodiversidad; la deforestación y erosión de suelos y laderas; los problemas respiratorios de los corteros de caña y de las poblaciones cercanas a causa de la quema de la caña; el despojo de tierras; el desplazamiento forzado; las violencias múltiples; feminicidios y juvenicidios; en general, la creación de una región marcadamente desigual, antinegra, antindígena y anticampesina. Este modelo, articulado nacional y globalmente, está acelerando los impactos del cambio climático, con notable efecto sobre todos los ecosistemas.

Cien años de expansión agroindustrial continua han evidenciado que el modelo de desarrollo está llegando a su fin. La región puede ser fácilmente reimaginada como un bastión de producción agroecológica de frutas, verduras, granos, y plantas, organizada como una región pluriversal de productores agrícolas, con soberanía alimentaria, territorios restaurados y suelos y fuentes de agua recuperadas, y una red funcional de pueblos y ciudades intermedias en coexistencia sinérgica con el campo; en resumen, una región agropolitana y acuapolitana. Definimos la orientación agropolitana como una perspectiva que integre sinérgicamente campo y ciudad y que reconozca a pueblos indígenas y negros-afrodescendientes y comunidades campesinas como sujetos de derechos territoriales con visiones propias de mundo y competencias para aportar a la habitabilidad y el buen vivir de toda la población. Buscamos explorar los objetivos simultáneos de la urbanización autogestionada del campo y la ruralización selectiva de la ciudad, prestando atención a la

Naturaleza históricamente anfibia de la región. Futuros de este tipo son todavía impensables para las élites y para las clases medias, cuya forma urbano-espacial de vida, intensamente consumista, está inextricablemente ligada a la economía capitalista globalizada.

El VGRC es un escenario de transiciones en marcha. Actividades que pueden ser consideradas de transición están encarnadas en múltiples organizaciones y proyectos, la mayoría pequeñas, pero, en número creciente, sobre todo en lo que tiene que ver con las aguas (pedagogía y restauración de ríos, cuencas y humedales); la alimentación (mercados campesinos, huertas y azoteas urbanas, recuperación de tierras, producción agroecológica y economías locales); el cambio climático (restauración y conservación de bosques a nivel comunal, reforestación de laderas y cuencas), y la paz territorial (las organizaciones indígenas, afrodescendientes y de derechos humanos de la región mantienen acciones de gran relevancia para la resolución de conflictos desde el ejercicio de gobierno propio). La lógica económica dominante, sin embargo, va a contracorriente de estas actividades y se orienta a la creación de una región metropolitana competitiva globalmente, desconectada de su ruralidad.

Las transiciones en marcha aportan a dos de los grandes retos que tiene hoy Colombia y la región: la implementación efectiva del Acuerdo Final de Paz firmado en el 2016 entre el estado y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y avanzar en la firma de acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional [ELN] y otros grupos armados en la área rural y urbana.

Transiciones civilizatorias, cosmovisiones / ontologías relacionales y paz territorial pluriversal

El trayecto / proyecto se nutre de tres campos teórico-políticos interrelacionados: los estudios de las transiciones; la ontología política (con énfasis en las ontologías relacionales); y los estudios de paz territorial. En Latinoamérica, las transiciones civilizatorias están siendo

enfanzadas por una amplia gama de movimientos indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, feministas, y campesinos, entre otros (Escobar, 2016). El punto de partida es la afirmación de que la crisis actual es una crisis de un modo particular de existencia (occidental, heteropatriarcal, capitalista, racista, colonial). Muchos movimientos transicionantes se basan en el resurgimiento de las cosmovisiones u ontologías relacionales que reposicionan *la interdependencia radical de todo lo existente* como el verdadero fundamento de la vida.

El diseño para las transiciones es un marco de acción-investigación para reorientar las localidades y las regiones hacia formas de vida socialmente justas y ambientalmente sustentables (por ejemplo, Irwin, 2018; Escobar, 2016). En América Latina, el diseño autónomo para las transiciones viene de la mano con las luchas comunitarias por la reexistencia con énfasis en la pluriversalidad, entendido como un mundo donde quepan muchos mundos (Kothari et al., 2019). Igualmente, nuestro trayecto / proyecto se inspira en los estudios críticos del diseño, la ontología política (Blaser, 2013; De la Cadena, 2015; De la Cadena y Blaser, 2018) y las economías alternativas (Gibson-Graham et al., 2013; Quiroga, 2019). Prestamos particular atención a las cosmovisiones relacionales, aquellas que problematizan los dualismos constitutivos de la modernidad, especialmente la separación entre lo humano y lo no-humano y que aún se encuentran presentes, en mayor o menor grado, en las prácticas de muchos pueblos territorializados. El principio del Ubuntu (soy porque somos) encarna las ontologías relacionales.

Colombia ha sido líder en los estudios de conflicto y paz. Nuevas concepciones de paz territorial han surgido en la última década (por ejemplo, Ulloa y Coronado, 2016), así como una concepción de paz territorial feminista (Gómez, 2021). Entendemos la paz territorial como el entramado socioeconómico, político, ecológico y cultural por el cual se busca reestablecer un balance integral relativamente estable entre los múltiples actores, humanos y no humanos, que habitan un territorio o sociedad determinada. La paz territorial tiene que ver, en última instancia, con la relación entre mundos, o pluriversalidad;

esto es crucial para los pueblos étnicos y las mujeres. Nuestro enfoque es interseccional (Viveros Vigoya, 2016); visibiliza el entramado de interrelaciones entre posición económica, etnicidad y raza, género y sexualidad, edad y dis/capacidades, pero también territorialidad (campo y ciudad) y visión de mundo (cosmovisión u ontología). De este modo, buscamos enriquecer la interseccionalidad con esta dimensión ontológica.

El Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, cuyo lema es “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, constituye un momento histórico para el país, pues propone una política de gobierno cuya prioridad es salvaguardar la vida en todas sus manifestaciones, mediante tres apuestas: Paz Total, Justicia ambiental y Justicia social. Los feminismos negros siempre han perseguido estas apuestas, desde la mediación de conflictos apelando al derecho propio, hasta la exigibilidad de la garantía de los derechos étnico-territoriales y el derecho a la ciudad; pero, sobre todo, buscando hacer justicia racial en Colombia, un país que gravita entre jerarquías sociales atávicas, basadas en la racialización, el sexismo y la estratificación social.

Nuestra concepción de transición ecosocial radical se centra en el fortalecimiento de la capacidad de los mundos locales y regionales para enfrentar los traumas socioambientales asociados con los conflictos sociales y el cambio climático desde una perspectiva de la interdependencia, la interseccionalidad y la paz. Más que hablar de adaptación y resiliencia, utilizamos las nociones de reexistencia y cimarronaje, las cuales incorporan una dimensión ecológica-ontológica, apuntando al cuidado y la reconstitución del tejido de la vida. El cimarronaje convoca formas de resistencia y reexistencia de los pueblos negros de la diáspora, representados de forma prominente en nuestro trayecto / proyecto (Casa Cultural el Chontaduro, 2013; Campo, 2018; Palacios, 2019; Palacios et al., 2019).

La Transicionada: objetivos, estrategias y acciones

Más que un “proyecto”, concebimos nuestro actuar como un trayecto, que denominamos La Transicionada. En dicho trayecto, hemos destacado la necesidad de imaginarnos otras categorías para nuestro *sentipensaractuar*; estas implican un acercamiento desde otras palabras y formas de comunicación, cercanas al *lenguajear* y *el emocionar* del que hablan Maturana y Verden-Zöller (1993). El jugar, el sentir, el corrazonar han permitido crear un universo de comunicación en nuestro trayecto para construir mundos pluriversales, más allá de las hegemonías existentes, racistas, patriarcales, sexistas, capitalistas y capacitistas.

Nuestro objetivo principal es contribuir a una *transición socio-ecológica regional* hacia una sociedad socialmente justa, ambientalmente sustentable, culturalmente diversa y pluriversal, con paz territorial, capaz de fomentar la soberanía alimentaria. Una tarea esencial para este objetivo es generar una nueva comprensión e imaginario de la región que aglutine iniciativas transformadoras actualmente dispersas, convocando a la acción bajo el lema de *otro valle geográfico del río Cauca es posible*. Se trata de generar con-versaciones capaces de fomentar una movilización hacia nuevas formas de habitar la región y la Tierra.² Hacemos eco a las palabras del padre Francisco De Roux en la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad, quien recuerda que, para superar el conflicto, debemos conversar para allanar el camino hacia la construcción de contranarrativas antihegemónicas reconstituir y sanar el tejido de la vida:

Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas de esta nación. [...] Llamamos a liberar nuestro mundo simbólico y cultural de

² Hay una frase muy utilizada por las mayores del Pacífico: “En el Pacífico no se habla, en el Pacífico se canta”, y cuando hablamos del con-versar nos referimos a esa posibilidad de que las palabras tengan ritmo como el tambor que reproduce los latidos del corazón y actúen para sanarnos, que hablemos con todo nuestro cuerpo y atraviese nuestra emocionalidad para co-razonar.

las trampas del temor, las iras, las estigmatizaciones y las desconfianzas. [...] No teníamos por qué haber aceptado la barbarie como natural e inevitable, continuar los negocios, la actividad académica, el culto religioso, las ferias y el fútbol como si nada estuviera pasando. (Comisión de la Verdad de Colombia, 2022)

De esta forma, los objetivos de nuestro proyecto / trayecto son:

- 1) Fomentar convergencias entre las alternativas transformadoras en marcha en los territorios, particularmente entre aquellas enfocadas en los hilos de agua, soberanía alimentaria, cambio climático, justicia y paz, y ordenamiento territorial, tendientes al fortalecimiento de su capacidad de acción y de estrategias coordinadas entre ellas.
- 2) Co-diseñar estrategias narrativas y mediáticas para activar la re-imaginación de la región hacia otros futuros posibles a través de medios, arte, video, audiolibros, diseño gráfico, teatro, y autorías colectivas.
- 3) Impulsar estrategias concretas de diseño para las transiciones desde una perspectiva agropolitana, inicialmente en dos localidades, centradas en las problemáticas del sustento, la soberanía alimentaria, el cambio climático, y la paz territorial.

Los objetivos se han identificado con base a los principios de transformación productiva, restauración eco-ontológica (de ecosistemas y de mundos), y reparación histórica, dentro de un contexto étnico-cultural pluriversal y agropolitano. Estos objetivos deben contribuir a la recomunalización de la vida social; la relocalización de actividades económicas (tales como la alimentación); el fortalecimiento de las autonomías territoriales; la simultánea despatriarcalización y desracialización de las relaciones sociales; y la reintegración con la Tierra (ver Escobar, 2021 para una elaboración de estos ejes).

Entre las acciones que estamos adelantando se encuentran las siguientes: para el primer objetivo, a) la realización de un mapa de

las alternativas transformadoras en la región, usando cartografía social y digital; b) un diagnóstico de paz territorial pluriversal, centrado en obstáculos para la paz en los territorios y acciones en curso conducentes a superarlos; c) la construcción de redes entre alternativas transformadoras. El propósito es la consolidación de un tejido de transicionantes capaz de constituirse en contrapoder a las narrativas dominantes e iniciar prácticas de codiseño hacia otro VGRC posible.

Para el segundo objetivo, contemplamos las siguientes acciones: a) Estrategias de visionar y “diseñar” en colectivo hacia otra auto-comprensión de la región, utilizando herramientas de codiseño para la construcción de escenarios de transiciones para la biorregión; b) producción multimedia y plataforma web interactiva que motive conversaciones con públicos amplios en los territorios sobre otros valles del río Cauca posibles; c) propuesta de escenarios de transición hacia otros futuros posibles y los caminos para llegar a estos. Estas producciones mediáticas son un espacio para contar, imaginar, documentar, registrar y diseñar de otras maneras.

El tercer objetivo se está implementando en dos espacios de comunidades afrodescendientes: el municipio de Suárez, en el Norte del Cauca; y la zona urbana del Oriente de Cali (conocida como el Distrito de Aguablanca), de población mayoritariamente afrodescendiente, destino y refugio de cientos de miles de personas desterradas del Pacífico y del Norte del Cauca. Las acciones son: a) elaboración de un Atlas digital de actores, acciones, capacidades, conflictos y saberes para cada localidad, con equipos de jóvenes y mujeres de las comunidades; b) talleres con comunidades y organizaciones centrados en registros de memoria y lugares-hito asociados con narrativas testimoniales referenciadas espacial y temporalmente; y c) un diseño de estrategias para la sostenibilidad ambiental frente al cambio climático. Todas estas acciones están encaminadas a la creación y puesta en funcionamiento de un co-laboratorio de diseño territorial, a través de mecanismos para el fortalecimiento de las organizaciones y encuentros de diseño para las transiciones.

Transiciones y dinámicas socioterritoriales

A lo largo de sus treinta y tres años de proceso comunitario, la Asociación Casa Cultural El Chontaduro ha orientado su agencia política y cultural hacia la ciudadanía territorial de los habitantes del oriente de Cali, siendo la mayoría personas negras, procedentes del Pacífico Colombiano quienes, en busca de protección y mejores condiciones de vida, sufren una segunda victimización dentro de una guerra urbana invisible que limita su ejercicio de las libertades civiles. Su experiencia muestra que son las *mujeresnegras* (triplemente vulneradas en su condición de raza, clase y género / sexo) quienes han generado estrategias políticas y tecnologías sociales innovadoras para construir territorios de paz y oportunidades en el oriente de Cali.

Los procesos de El Chontaduro son una expresión de cimarronaje en presente, pensada desde su experiencia situada y con su capacidad de agencia desde la reexistencia, habitando un espacio que ha sido negado al pueblo negro en la ciudad. Su praxis se centra en la construcción y reconstitución del espacio urbano desde una relación campo-poblado, como un territorio diverso, alegre, emocional, pleno, en una palabra, relacional, sin desconocer que, aun con estas reexistencias la ciudad sigue siendo un territorio en disputa.

El arte es una de las principales formas de expresión política de El Chontaduro. Mediante él, se camina por la sanación de los traumas intergeneracionales, tratando de romper las cadenas esclavizadoras de siglos pasados; busca sanar territorios manchados con sangre de renacientes atrapados por los círculos de violencias derivados del racismo y las inequidades del país, en donde el narcotráfico y el tráfico de armas han encontrado un nicho para permanecer; sana a las *mujeresnegras* que han sido sobrevivientes de violencias entroncadas en el patriarcado, y sana a niñas y niños, cuya niñez es arrebatada por el confinamiento y por la imposición de la desesperanza a la que quieren someter al oriente de Cali.

ASOCOMS, surge como una respuesta a la invisibilización del pueblo negro en el municipio de Suárez dentro del proceso de consulta previa del Plan de Manejo Ambiental de la central hidroeléctrica La Salvajina, operado por la empresa Celsia, filial de la transnacional de origen colombiano Argos. Frente a la vulneración sistemática de los derechos consagrados en la Constitución política y en los convenios internacionales y del derecho propio que les asiste como pueblo, los consejos comunitarios de las localidades de La Toma, Pureto y La Meseta en Suárez han insistido en mantenerse unidos, pese a las acciones de la empresa y el gobierno para socavar la integridad de la comunidad, sembrando la discordia intraétnica. Desde 1986, cuando encharcaron el río Cauca, se realizó la primera acción hermanada entre el pueblo negro y los pueblos indígenas del Cauca; caminando más de cien kilómetros para denunciar el despojo y los abusos por parte del gobierno con el proyecto de la represa. Población infantil, juvenil y adulta caminantes del ochenta y seis se constituyeron en ASOCOMS, quienes desarrollan acciones de agroecología, fortalecimiento organizativo, evaluación de impactos de megaproyectos y equidad de género y defienden el derecho al ser, a vivir en su territorio ancestral y tradicional y a su opción propia de futuro.

Otro hecho emblemático que da cuenta de la resistencia permanente del pueblo negro en Suárez fue su postura frente al desvío del río Ovejas para alimentar la represa. La gente se opuso a que les arrebataran un segundo río, que significa la vida, pues ya habían represado las aguas del río Cauca. Todas estas expresiones de cimarronaje en el presente reclaman la libertad para las comunidades y la Naturaleza.

Breve conclusión

Como en otras regiones del Sur global, le apostamos a transiciones que integren los llamados a la descarbonización con una agenda amplia de soberanía alimentaria, economías posextractivistas y justicia

social y pluriversal. Toda transición tiene que orientarse hacia relaciones y formas de vida pospatriarcales, antirracistas, anticlasistas, agropolitanas y enraizadas en los territorios. Se trata de poner en marcha estrategias de movilización para una nueva forma de habitar la tierra, capaz de sanar el tejido de la vida, con la diversidad de pueblos, mundos y actores que habitan los territorios de la biorregión del VGRC. Pensamos que la mejor forma de abordar esta tarea es volviendo a mirar a los territorios desde la perspectiva de la gente que los ha habitado, construido, amado y sufrido, aprendiendo de sus tácticas de resistencia y reexistencia, de la experiencia de quienes realizan las tareas del cuidado, tejiendo territorio y comunidad, con todxs aquellxs dispuestos a contribuir a reconstituir y sanar el tejido de la vida.

Como en otras regiones del continente y del mundo, nuestro trayecto / proyecto constituye un llamado a *un pacto social, ecológico, económico y pluriversal*, capaz de transicionar hacia una sociedad más justa e igualitaria, basado en una desglobalización selectiva posextractivista, acoplada a la re-localización de esferas claves de la vida, tales como comer, sanar, aprender y habitar. Se trata de una apuesta de transición seria, de corto, mediano y largo plazo, capaz de enfrentar la crisis ambiental y el colapso climático y sanar la Madre Tierra, que contemple una salida ordenada y progresiva del modelo extractivista y cambios sustanciales en las lógicas del consumismo hacia la paz territorial pluriversal.

Bibliografía

Blaser, Mario. (2013). Ontological Conflicts and the Stories of Peoples in Spite of Europe: Towards a Conversation on Political Ontology. *Current Anthropology* 54 (5), 547-568.

Campo, María Mercedes, y *otras negras... y ¡feministas!* (2018). Los feminismos, si son tales, tienen la tarea de ir a las raíces de las opresiones. Presentado en la conferencia Corpus Africana: Danser et Penser L'Afrique et ses Diasporas. Toulouse, 25 de octubre-9 de noviembre de 2018.

Casa Cultural el Chontaduro. (2013). La lucha desde los territorios en la ciudad, desde los diferentes oficios. <http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n12/n12a13.pdf>

Comisión de la Verdad de Colombia. (2022). *Hay futuro si hay verdad: Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición*. Bogotá. [Primera edición].

De la Cadena, Marisol. (2015). *Earth Beings: Ecologies of Practice Across Andean Worlds*. Durham: Duke University Press.

De la Cadena, Marisol y Blaser, Mario (eds.). (2018). *A World of Many Worlds*. Durham: Duke University Press.

Escobar, Arturo. (2016). *Autonomía y diseño: la realización de lo comunal*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Escobar, Arturo. (2021). Reframing civilization(s): from critique to transitions. *Globalizations*. 10.1080/14747731.2021.2002673. [Versión en español: Santiago de Chile: ARQ, 112, Agosto de 2022. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962022000200024>]

Gibson-Graham, J. K., Cameron, Jenny y Healy, Stephen. (2013). *Take Back the Economy. An Ethical Guide for Transforming our Communities*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Gómez, Diana M. (2021). De la inclusión de género a la estructuración de la paz feminista: Aportes de los feminismos decoloniales al proceso transicional en Colombia. En *Comisiones de la verdad y género en el Sur Global: miradas decoloniales, retrospectivas y prospectivas de la justicia transicional*. Bogotá: CIDER.

Irwin, Terry. (2018). The Emerging Transition Design Approach. *Design Research Society Proceedings*. Vol. 1. <http://www.drs2018li-merick.org/participation/proceedings>

Kothari, Ashish; Salleh, Ariel; Demaria, Federico; Escobar, Arturo y Acosta, Alberto. (2019). *Pluriverse: A Postdevelopment Dictionary*. Delhi: Tulika and AuthorsUpFront Publishing.

Maturana, Humberto y Verden-Zöllner, Gerda. (1993). *Amor y Fuego: fundamentos olvidados de lo humano desde el patriarcado a la democracia*. Santiago de Chile: JC Sáez.

Palacios, Elba Mercedes. (2019). Sentipensar la paz en Colombia. Oyendo las re-existent voces pacíficas de mujeres negras afrodescendientes. *Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe colombiano* 38, 131-161.

Palacios, Elba Mercedes; Campo, María Mercedes; Rivas, Martha; Ocoró, Natalia y Lozano, Betty Ruth (eds.). (2019). *Feminicidios y Acumulación global. Memorias del Foro Internacional sobre Feminicidios*. Quito: Editorial Abya Yala.

Quiroga, Natalia. (2019). *Economía pospatriarcal*. Buenos Aires: Lavaca.

Ulloa, Astrid y Sergio Coronado (eds.). (2016). *Extractivismos y posconflicto en Colombia: retos para la paz territorial*. Bogotá: CINEP / Universidad Nacional.

Viveros Vigoya, Mara. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. *Debate Feminista*. https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/2077

Hacia un nuevo internacionalismo ecoterritorial

Breno Bringel y Sabrina Fernandes

Introducción

El llamamiento internacionalista ha resonado en todos los movimientos sociales y organizaciones de trabajadorxs desde que se hizo más evidente el nexo global de las crisis y la interconexión de las experiencias bajo la colonización y el capitalismo. El movimiento anticapitalista y obrero tiene una larga historia de organización internacionalista, quizás más conocida en el pasado por la formación, disolución y re-formación de varias Internacionales comunistas. Después y más allá de las Cuatro Internacionales, los internacionalismos (en plural) se han hecho mucho más complejos en las últimas décadas. La emergencia de redes y coaliciones transnacionales (muchas de ellas centrales en la agenda de defensa de derechos), la construcción de espacios globales de convergencia (como el Foro Social Mundial), la formación del movimiento por la justicia global (con múltiples expresiones de la lucha contra la globalización capitalista) o la internacionalización de movimientos territorializados, como los indígenas y campesinos (Vía Campesina es un caso bien conocido)

son solo algunos ejemplos de la diversidad de articulaciones internacionalistas recientes.

El agravamiento de la crisis ecológica global en el siglo XXI exige una articulación internacionalista que ponga a la Naturaleza en el centro y establezca que ningún movimiento popular y anticapitalista puede triunfar y sobrevivir en una sociedad alternativa sin asegurar las condiciones ecológicas para la vida, y en particular, una vida digna. Este internacionalismo necesita criticar las asimetrías globales y adoptar una postura antimperialista, desafiando los lazos entre la división internacional del trabajo, el colonialismo verde y el imperialismo ecológico en su sed de recursos y la continua generación de zonas de sacrificio. Mientras que el imperialismo ecológico saquea la Naturaleza en recursos que son continuamente alimentados desde territorios periféricos hacia los centros industriales del capitalismo, el colonialismo verde se asocia a las viejas prácticas de apropiación y desposesión adoptan ahora una fachada “verde” al hacerse con el control de elementos clave de la transición ecológica como los minerales para las baterías de los vehículos eléctricos o las hectáreas de bosque para los créditos de carbono. Estos procesos agravan la deuda ecológica y las asimetrías Norte-Sur relacionadas con ella, que deben abordarse sin descuidar la importancia de las alianzas entre el Sur global y el Norte. En lugar de centrarnos únicamente en el cambio desde arriba o en las campañas, necesitamos un enfoque ecoterritorial de los internacionalismos contemporáneos. Esto no niega la necesidad de luchar en los distintos niveles estatales, pero subraya la necesidad de articular mejor los conflictos territoriales entre las distintas regiones y continentes para evitar tanto los enfoques localistas como los únicamente macro de las múltiples crisis de nuestro tiempo.

En este capítulo se analiza la crisis ecológica contemporánea y se ofrece una breve panorámica de las importantes transformaciones de los internacionalismos y las luchas por la justicia global en las tres últimas décadas, llamando la atención sobre la creciente articulación entre los conflictos climáticos y territoriales. Como

resultado, se proponen tanto un diagnóstico como una brújula de navegación para las luchas ecosociales transformadoras en el mundo contemporáneo.

Policrisis, colonialismo verde y nuevos conflictos ecoterritoriales

Nuestro tiempo presenta múltiples crisis que impactan diversas partes del globo de manera diferente. Sin embargo, las capas de análisis y las causas profundas varían en función de los intereses directos en juego. Desde la perspectiva de la transición justa, el cambio climático no es una crisis más, sino una emergencia que se suma a la gravedad en grado y escala de los demás retos. Forma parte de la policrisis a la que nos enfrentamos, que no es simplemente la suma y combinación de múltiples crisis, sino la aparición de un fenómeno generalizado que resulta de las tensiones, ambigüedades y contradicciones de las crisis en su contribución a los riesgos sistémicos. Scott Janzwood y Thomas Homer-Dixon sostienen que, en una policrisis, una “alineación temporal de los riesgos sistémicos” puede producir un “fallo sincrónico de los sistemas interconectados” (Janzwood y Homer-Dixon, 2022).

Esto es de especial interés para quienes trabajan en transiciones socioecológicas debido a las desigualdades que rodean a los riesgos sistémicos una vez que consideramos la historia, los medios y los fines. Las relaciones coloniales del pasado y del presente han creado un escenario en el que se espera que las comunidades y las naciones gestionen los impactos del cambio climático y tomen las medidas necesarias para mitigarlo y adaptarse a él, pero existen conflictos sobre los recursos necesarios para la transición y hacia qué exactamente transitará la sociedad. Una sociedad libre de crisis ecológicas no tiene el mismo aspecto para todas las personas, ya que los proyectos políticos y sus objetivos finales reflejan las perspectivas dominantes sobre el modo de vida. Hay una gran diferencia entre un proyecto de

transición ecológica que exige alejarse del actual modelo extractivista y otro que predica una sociedad verde y sostenible en una parte del mundo a costa de zonas de sacrificio en otros lugares.

Dado que el cambio climático crea un riesgo sistémico que altera y amplifica otros riesgos sistémicos a varias escalas, es necesaria una transición, aunque signifique cosas diferentes para los distintos actores. Hoy en día, la idea de una transición justa, antes vinculada a la garantía del empleo y a la corrección de las asimetrías en términos de quién causó la crisis y quién sufre sus peores consecuencias, ha sido lentamente apropiada por las empresas, que la han diluido en esquemas de precios a medida que se hacen cada vez más presentes en los espacios oficiales de negociación sobre el clima. En lugar de abandonar la noción de transición justa, necesitamos definir los criterios de este marco, recuperar sus raíces en la organización laboral y la justicia medioambiental, y situarlo dentro de los múltiples estratos de toma de decisiones y acuerdos políticos, desde una pequeña comunidad hasta las fronteras nacionales y los acuerdos internacionales. La transición justa debe crear patrones sistémicos de resiliencia que aborden las preocupaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, reconociendo que los diferentes actores de la policrisis pueden colaborar, pero también competir por los recursos y la prioridad.

El reto que plantea la nueva fase de extractivismo asociada a las economías verdes de transición ayuda a ilustrarlo (ver el artículo de Kristina Dietz en este libro). El extractivismo verde es el nombre que reciben las nuevas empresas extractivas que perturban los ecosistemas y las comunidades con el fin de proporcionar recursos a las empresas y los países para las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Como vimos en el capítulo de Svampa en este libro, una de sus caras más visibles es la batalla por el litio y su valor en los proyectos de transición energética y la electrificación del transporte. La Agencia Internacional de la Energía ya predice una escasez de litio para 2025, dadas sus estimaciones sobre cuántos vehículos eléctricos deberían circular para sustituir a los convencionales

y reducir las emisiones del transporte por carretera a objetivos de cero neto (Agencia Internacional de la Energía, 2022; S&P Global, 2019). El problema es que la solución presentada a una crisis —la electrificación de los vehículos como respuesta a las emisiones del transporte— exacerba las pautas tradicionales del imperialismo ecológico y su intercambio ecológicamente desigual, aumenta la presión político-económica sobre las economías dependientes, y tiñe de verde la creación de nuevas zonas de sacrificio en áreas de gran interés extractivista para nuevas prácticas coloniales verdes. Las sociedades más prósperas y los intereses corporativos que las dominan prefieren normalizar más extractivismo en nombre de la sustitución tecnológica en lugar de reestructurar la demanda y la producción de forma que se asegure un horizonte de transiciones múltiples —a nivel energético, lejos del cambio climático y hacia una sociedad ecológica poscapitalista— con transformaciones ecosociales en casa *y también* en lugares más vulnerables y empobrecidos.

El extractivismo verde no aborda la causa de fondo porque aísla la necesidad de descarbonización —una exigencia primordial para la transición energética y climática— del metabolismo de la Naturaleza. Una simple sustitución del actual modo de vida hegemónico, intensivo en consumo, por una alternativa libre de carbono es materialmente imposible, dados los recursos finitos, pero también ecológica y socialmente indeseable, dados los impactos sobre los ecosistemas, las comunidades y los territorios. En otras palabras, el extractivismo verde normaliza este modo de vida imperial (Brand y Wissen, 2021), entendido como un proceso de hegemonía y subjetivación que promueve prácticas de producción y consumo incompatibles con el metabolismo de la Naturaleza para determinados grupos minoritarios y lugares a costa de otros. Es el tipo de respuesta a la crisis climática que deja al capitalismo sin cuestionar y contribuye a un problema de bucles de retroalimentación y propósitos cruzados (Tooze, 2022), donde una falsa solución exacerba los riesgos sistémicos que las soluciones supuestamente deben abordar.

El mantenimiento y la creación de nuevas zonas de sacrificio se suman al grueso de los conflictos territoriales que ya se están agravando debido a las tensiones geopolíticas y las guerras, los efectos a corto y largo plazo de los fenómenos meteorológicos extremos y la pérdida de hábitats y medios de subsistencia, que están vinculados a una crisis migratoria y de refugiados de mayor envergadura. Es difícil definir qué constituye un migrante / refugiado climático, especialmente en el contexto de la policrisis, ya que las decisiones de movilidad no pueden reducirse a un único factor (Baldwin et al., 2019). Las sequías, los huracanes, las inundaciones, las olas de calor y la subida del nivel del mar afectarán a las personas de forma diferente según su clase, raza, sexo, ubicación, etcétera. Un concepto de justicia migratoria que incluya tanto el derecho a marcharse como el derecho a quedarse, ayuda a poner de relieve los patrones cambiantes y los problemas de acceso a los recursos, las fronteras cerradas y la creciente securitización de la migración en el contexto del Antropoceno. Una vez más, los riesgos sistémicos se agravan cuando la movilidad está ligada al capital, que determina la dirección, la seguridad y los medios de subsistencia, ya que los territorios se ven gravemente afectados por el cambio climático. También significa que el internacionalismo sigue siendo necesario hoy en día para vincular las ganancias y las pérdidas a los territorios que se enfrentan a prácticas neocoloniales.

Además, las tendencias autoritarias señalan los riesgos asociados a la violencia y a las reivindicaciones territoriales basadas en diversas justificaciones. Mientras que las prácticas coloniales tradicionales de desposesión se han topado con una resistencia a largo plazo, incluidas las que se oponen al capital fósil y sus prácticas extractivistas industriales, también está surgiendo la amenaza del ecofascismo para dotar al autoritarismo de una “justificación verde”. El ecofascismo normaliza las desigualdades sociales y económicas y penaliza a pueblos empobrecidos y racializados para asegurar territorios y fronteras estatales a quienes se consideran los administradores adecuados de los ecosistemas. También encuentra apoyo en el extractivismo verde,

asegurando que las zonas de sacrificio permanezcan alejadas de los territorios reclamados por la extrema derecha, manteniendo el capitalismo como sistema económico, buscando una versión verde de un modo de vida imperial y reproduciendo las desigualdades y la segregación globales. La realidad de las múltiples amenazas y adiciones a los riesgos sistémicos exige, por tanto, una cuidadosa consideración del papel del internacionalismo de izquierdas a la hora de abordar las crisis desde múltiples polos y escalas.

Del “otro mundo es posible” al “otro fin del mundo es posible”

Tras la caída del Muro de Berlín, la praxis internacionalista se reestructuró profundamente debido a la reconfiguración de los actores sociales y a los cambios societales y geopolíticos que condujeron a una globalización sin precedentes de procesos, estructuras y flujos. En este nuevo escenario, el estado-nación se descentró como referencia hegemónica para las protestas y la articulación de los actores sociales, y las interacciones entre escalas se volvieron más dinámicas. Desde entonces, asistimos a una “progresiva desnacionalización del internacionalismo” (Bringel, 2015). Si a mediados del siglo XX, el internacionalismo se articulaba en torno a la solidaridad con proyectos revolucionarios en diferentes estados (Cuba en América Latina, Vietnam en Asia, o los diversos estados africanos durante la descolonización), a finales del siglo XX, comenzó a construirse en torno a experiencias territorializadas y movimientos sociales concretos, como en el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional [EZLN] en Chiapas o el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra [MST] en Brasil.

La praxis internacionalista también se hizo más fluida, incluyendo las organizaciones internacionales y sus miembros, así como las oleadas de levantamientos y la organización de calendarios de movilización y espacios de convergencia. Los momentos que conectan crisis en diferentes regiones del mundo tienden a desencadenar

estas oleadas, como pudo ser el caso de Mayo del 68 y el movimiento contra la guerra de aquella época. La trayectoria de estas olas en las dos primeras décadas del siglo XXI ayuda a identificar cambios temáticos en la forma en que las personas y los movimientos convergen internacionalmente, y a mostrar cómo la naturaleza transversal de la crisis ecológica añade amenazas e intensifica las preocupaciones, configurando así el enfoque de las naciones y los territorios y la cuestión de las alternativas. Hemos identificado tres momentos principales en este nuevo siglo que coinciden con coyunturas críticas en las que se han producido simultáneamente crisis globales y nuevos horizontes para la acción internacionalista.

Luchas por otros mundos posibles

El primer momento coincide con el comienzo del nuevo milenio y está marcado por dos acontecimientos críticos ocurridos en 2001. Por un lado, los atentados del 11-S en Estados Unidos y la posterior guerra de Afganistán provocaron un recrudecimiento de la securitización y militarización globales. Por otro lado, ese mismo año se celebró en Porto Alegre la primera edición del Foro Social Mundial [FSM] con el objetivo de crear un espacio de confluencia para discutir y profundizar propuestas, intercambiar experiencias y articular movimientos sociales y diferentes redes contra el neoliberalismo y el imperialismo.

El FSM fue la parte propositiva esencial del movimiento alterglobalización, que organizó protestas contra los principales símbolos de la globalización neoliberal desde principios de los años noventa. Para ello, creó mecanismos de coordinación internacionalista como la Acción Global de los Pueblos y consolidó marcos interpretativos globales, identificando enemigos comunes para las luchas en todos los continentes (empresas transnacionales, organizaciones internacionales, agencias multilaterales, etcétera). El movimiento alterglobalización ha llevado a cabo diferentes tipos de acciones: contracumbres contra las instituciones financieras internacionales,

cumbres paralelas a las oficiales (en algunos casos, desafiando las agendas oficiales; en otros, construyendo agendas propias), y espacios de convergencia para protestas y propuestas globales. Además, consolidó una cultura alter-activista (Juris y Pleyers, 2009), crítica con el poder capitalista y el crecimiento económico, con prácticas horizontales que recogen el legado de los movimientos posteriores a 1968 y se inspiran en los zapatistas. Los participantes fueron conscientes de la importancia de combinar la acción individual con la crítica sistémica y la acción local con la intervención global.

El movimiento socioambiental se integró activamente en el movimiento alterglobalización y contribuyó a su éxito. La justicia medioambiental se integró gradualmente en el movimiento por la justicia global. Las demandas de cancelación de la deuda externa, el reconocimiento de la deuda ecológica del Norte y la lucha contra el libre comercio fueron de la mano de las críticas al desarrollo, eurocentrismo, colonialismo y patriarcado. Al mismo tiempo, el protagonismo de los movimientos indígenas, campesinos y de base permitió nuevas formulaciones de alternativas basadas en conflictos territoriales, como la soberanía alimentaria y la justicia hídrica.

La temática y regionalización del FSM lo extendió a muchas regiones del mundo y le permitió adaptarse a ámbitos de actuación más específicos, como la educación, la migración y muchos otros. Al final, sin embargo, se hicieron visibles los principales signos del debilitamiento del movimiento. Su prueba de fuego fue la crisis económica y financiera de 2008, cuando, tras haber puesto de manifiesto la globalización capitalista y sus consecuencias sociales, económicas y medioambientales, el movimiento no supo articular una respuesta global cuando apareció una nueva coyuntura crítica.

Aunque la crisis de 2007/2008 se presentó inicialmente como una crisis de las hipotecas *subprime*, su alcance se amplió rápidamente a una crisis más amplia del sistema financiero mundial, articulada con varias otras crisis, especialmente las relacionadas con la alimentación y el medioambiente. A pesar del diagnóstico de una crisis multidimensional y sistémica, la mayoría de las luchas sociales dedicaron

sus energías a afrontar, de forma más reactiva, las consecuencias inmediatas, como las medidas de austeridad, en sus propios países. El declive de la acción unificada a escala internacional contra las estructuras globales y la reapropiación política y discursiva de muchas de las reivindicaciones del movimiento alterglobalización por parte de las fuerzas hegemónicas dieron lugar entonces a un nuevo ciclo de movilizaciones en todo el mundo a partir de 2010: las protestas de la indignación.

Protestas en las plazas de todo el mundo

Aunque este nuevo ciclo tuvo un alcance mundial, sus movilizaciones se produjeron a escala nacional, creando conexiones fluidas entre las luchas en una especie de “internacionalismo de resonancias” (Gerbaudo, 2013). La lucha por la democracia, la justicia social y la dignidad fueron puntos comunes que adquirieron significados diversos y reivindicaciones específicas en distintos casos, como la Primavera Árabe, el Movimiento de los Indignados u Occupy Wall Street (Glasius y Pleyers, 2013). Estos “movimientos de las plazas” se articularon internacionalmente, pero de forma diferente al movimiento alterglobalización. Gracias a las nuevas posibilidades tecnológicas de Facebook, Twitter y otros medios sociales digitales, sus repertorios, mensajes, visiones del mundo y reivindicaciones viajaron de forma mucho más rápida y viral por todo el mundo, redefiniéndose y adaptándose con una facilidad asombrosa. Sin embargo, no se construyeron espacios transnacionales permanentes que permitieran una comprensión más profunda de las luchas, subjetividades y realidades de otros lugares. Se convocaron jornadas de acción globales, pero su difusión internacional se produjo mediante la movilización de nodos locales sin una sólida articulación internacional.

El rechazo a los sistemas políticos hegemónicos, a los partidos políticos tradicionales y a las formas convencionales de organización política fue transversal a todas las expresiones de este ciclo global de indignación. Más que una crítica al capitalismo per se, el punto de

consenso fue el hartazgo de la política tradicional. Sin embargo, la ventana de oportunidad abierta por estas protestas no condujo necesariamente a la democratización de las sociedades y los sistemas políticos. Por el contrario, el capitalismo se hizo más autoritario y las fuerzas de extrema derecha proliferaron, incluso construyendo sus articulaciones internacionales, en lo que Juan José Tamayo denomina una “internacional del odio” (Tamayo, 2020). Las desigualdades aumentaron, al igual que la división Norte-Sur. Muchas fuerzas sociales y políticas se convirtieron en rehenes de políticas miopes que les impedían mirar más allá de sus ombligos y de polarizaciones políticas que reducían la complejidad del mundo.

Mientras tanto, en la segunda mitad de la década de 2010 aumentaron las huelgas climáticas. El activismo juvenil empezó a llamar la atención de los medios de comunicación sobre la emergencia climática, especialmente en el Norte global. Al mismo tiempo, los defensores de la tierra en el Sur global ganaron protagonismo al combinar la resistencia inmediata con el cuidado cotidiano de nuestra “casa común”.

La pandemia y la emergencia de un nuevo momento mundial para las luchas internacionalistas

A pesar de las numerosas advertencias sobre los riesgos sistémicos, pocos imaginaban que un virus paralizaría el mundo en 2020. La pandemia de COVID-19 llegó en un momento histórico de agotamiento de los recursos naturales y de emergencia climática y medioambiental, cuando el capitalismo estaba en su momento más depredador. Fue una época de retrocesos para la democracia y los derechos humanos, de desconfianza y rechazo hacia los políticos. Los servicios públicos habían sido desmantelados por décadas de neoliberalismo que había penetrado mucho más allá de la economía en las subjetividades individuales y colectivas. Mientras tanto, la digitalización de la sociedad había permitido un mayor flujo de información sobre la pandemia. Sin embargo, esto fue acompañado, antes y después de

la pandemia, por un proceso de creciente individualización, la difusión de noticias falsas y el aumento de la vigilancia y el control social basado en los datos compartidos y la propiedad corporativa de las herramientas digitales. Así pues, la pandemia del coronavirus abre una tercera coyuntura crítica que nos sitúa en un escenario de luchas futuras aún en evolución (Bringel y Pleyers, 2021).

Tres proyectos diferentes compiten actualmente por el rumbo del mundo pospandémico. El primero es el del *business as usual*, centrado en el crecimiento del PIB, el desarrollismo depredador y la búsqueda de nuevos nichos de mercado para sacar a las economías de la crisis, incluyendo políticas de ajuste que, una vez más, exigen sacrificios de la mayoría para maximizar los beneficios de unos pocos. En segundo lugar, el capitalismo verde suele asociarse a estrategias hegemónicas de modernización ecológica (lideradas por las empresas y la mayoría de los estados), principalmente relacionadas con lo que se entiende como la transición energética (el cambio a las energías renovables y a las infraestructuras necesarias), con el sector privado como motor. Y, por último, los cambios de paradigma hacia una nueva matriz ambiental y socioeconómica, propuestos por diversos actores, desde comunidades científicas y movimientos religiosos progresistas hasta actores de base y muchos sectores anticapitalistas que ven en el decrecimiento, el buen vivir, el ecosocialismo y medidas más disruptivas la única alternativa posible al capitalismo neoliberal. Estos proyectos parecen abrir tres escenarios posibles, que no se dan de un modo “puro” y pueden entrelazarse de múltiples maneras, aunque todos tienen su propia lógica: la recuperación de la cara más agresiva del crecimiento económico; la adaptación del capitalismo a un modelo más “limpio” para algunas partes del mundo, aunque socialmente desigual y todavía basado en relaciones depredadoras con la Naturaleza, especialmente en el Sur geopolítico; o una transformación ecosocial hacia un nuevo modelo, que implica múltiples transiciones para construir cambios radicales en la matriz ecológica, social y económica, así como en las relaciones internacionales (Bringel, 2020).

Por tanto, una nueva ola de internacionalismo para nuestro momento histórico debe ser un internacionalismo que articule y promueva globalmente transiciones justas como elemento agregador que permita la denuncia del capitalismo verde y la construcción de horizontes radicales de transformación. Debemos partir de las lecciones de anteriores intentos de cambio social, sin dejar de reconocer la diversidad de iniciativas territorializadas existentes que ya están sembrando en su vida cotidiana las semillas de un mundo mejor. “Otros mundos posibles” que, hoy por hoy, ya no comparten el optimismo característico del movimiento alterglobalización, sino que están marcados por una clara conciencia de finitud. Por ello, pasamos de “otro mundo es posible” a “otro fin del mundo es posible”, lo que significa vivir más cerca de la tierra y abordar territorialmente las diferentes caras y temporalidades del colapso. Al mismo tiempo, necesitamos construir horizontes globales de transformación común, basados en la justicia ecológica y en la necesidad concreta de las personas. Esto es lo que llamamos *internacionalismo ecoterritorial*.

Hacia un internacionalismo ecoterritorial

El internacionalismo ecoterritorial es una práctica social y una forma de articulación transnacional entre experiencias vinculadas por el impacto de los conflictos socioambientales y por la construcción de alternativas territoriales concretas de transiciones justas en diferentes ámbitos, como la energía (energías comunitarias, descentralizadas y democráticas), la alimentación (agroecología y soberanía alimentaria), la producción (control obrero de los centros de producción) y el consumo (deslocalización y economía solidaria), el cuidado de la vida o las infraestructuras y la movilidad colectiva (vivienda digna y eficiente, y formas sostenibles de moverse, vivir y socializar en la ciudad). Son experiencias localizadas, pero no estrictamente locales porque han adquirido lo que Doreen Massey ha denominado un “sentido global del lugar” (Massey, 1991). Como ha argumentado

Martín Arboleda, por ejemplo, las luchas territoriales contra la extracción contribuyen a mostrar que, si bien la experiencia bajo el capital es fragmentada, los efectos de determinadas prácticas productivas dan lugar a experiencias de clase simultáneas que revelan la interconexión de lo que se produce, cómo, para qué, dónde y para quién (Arboleda, 2020).

Se trata de un nuevo tipo de internacionalismo emergente que articula la transversalidad de la cuestión ambiental con lo que Svampa denominó el giro ecoterritorial de las luchas sociales (Svampa, 2019). Debe recuperar varios legados de las experiencias internacionalistas antes mencionadas y articular otros horizontes de transformación ecosocial. Por ejemplo, el movimiento alterglobalización nos ha enseñado cómo organizar acciones globales fuertes y coordinadas, pero con autonomía territorial. Denunciar a los principales actores capitalistas y la estructura global (y no solo los impactos de sus acciones) es algo a salvar. Por otro lado, el movimiento de las plazas, a pesar de sus muchas contradicciones, nos ha mostrado la importancia de ampliar el espacio de lucha a sectores de la población que no suelen movilizarse. También nos ha enseñado lecciones positivas sobre la digitalización (con múltiples posibilidades de formación y difusión), aunque al final se apoyó demasiado en las redes digitales corporativas en lugar de crear sus propias redes de comunicación, algo que ha caracterizado la dinámica de contrainformación de los movimientos sociales por la justicia global desde los zapatistas.

En términos de espacialidades, el internacionalismo ecoterritorial presupone una crítica a una concepción antropocéntrica de la escala que, aunque dinámica, suele limitarse a escalas formales entendidas como niveles de acción (local, regional, nacional e internacional). Como alternativa, ha surgido una política relacional y biocéntrica de la escala, que considera el cuerpo como la primera escala política en sus múltiples relaciones con los territorios (Ulloa, 2021). La Naturaleza aparece como un elemento fundamental de esta nueva política de escalas, ya que la articulación entre luchas y experiencias de transiciones justas puede desplazarse de lo “local” o lo “nacional”

para situarse, por ejemplo, a nivel de una biorregión o una cuenca hidrográfica específica. En esta perspectiva, los ríos, los bosques y los biomas son esenciales para la construcción de resistencias y alternativas más amplias (Escobar, 2008).

El internacionalismo ecoterritorial puede construirse de diferentes maneras. En algunos casos, puede surgir de redes formales o informales ya existentes que reúnen a comunidades y organizaciones de la primera línea de la resistencia que luchan actualmente por construir transiciones verdaderamente justas en sus comunidades. Es el caso, por ejemplo, de la Alianza por la Justicia Climática-Comunidades Unidas por una Transición Justa, que reúne a más de ochenta organizaciones de distintas regiones de Estados Unidos. Aunque se trata de una plataforma nacional, reconoce que las transiciones justas no pueden construirse solo en un lugar o país. Existe, por tanto, una predisposición a participar en iniciativas internacionalistas más amplias basadas en luchas territorializadas. En otros casos, ya se han constituido o se están constituyendo colectivos y plataformas regionales e internacionalistas. En América Latina, por ejemplo, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur es una iniciativa reciente que busca dar visibilidad a experiencias de transformación socioecológica en la región, y construir propuestas, nuevos imaginarios políticos y puentes con experiencias del Norte y de otras partes del Sur global. Una iniciativa que integre luchas y proyectos de transición en América Latina es importante porque, en términos de economía política, la región es blanco de actividades extractivistas que crean zonas de sacrificio para extraer materiales y producir bienes para mantener el modo de vida imperial en otros lugares. Una perspectiva regional internacionalista se refuerza contra las nuevas perspectivas coloniales verdes que se están importando a la región, por ejemplo sobre quién tiene derecho a explotar y exportar la mayor cantidad de litio almacenado en Chile, Argentina, Bolivia (y más recientemente Perú), necesario para la transición energética global, denunciando cómo, en realidad, la carrera por el litio no sigue actualmente los marcos de justicia global en torno a la democracia energética, sino que

alimenta la transición energética del Norte global y sus demandas intensivas de energía (Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, 2023). Cambiando de escala, el Tejido Global de Alternativas, como red global de redes, pretende tender puentes entre alternativas de todo el mundo y promover nuevos espacios de colaboración, intercambio y confluencia. Lo distintivo de estos espacios es que apuestan por construir alternativas al desarrollo y transformaciones sistémicas radicales —o transformaciones ecosociales— como horizonte. A corto plazo, sin embargo, el paradigma de las Transiciones Justas emerge como un marco agregador de políticas urgentemente necesarias que afrontan las contradicciones del cambio de rumbo al tiempo que articulan iniciativas concretas que ya prefiguran el mundo que nos gustaría tener.

La importancia de articular internacionalmente las experiencias de transiciones justas en diferentes partes del mundo es construir una plataforma común de luchas, señalando acciones comunes (como caravanas, marchas, ocupaciones, interrupciones de infraestructuras y acciones globales) y diferentes horizontes de transformación ecosocial. Sin embargo, también es crucial identificar enemigos comunes y compartir retos y buenas prácticas respetando la diversidad y las especificidades contextuales. Proteger el marco de una transición justa del capitalismo verde es también un reto urgente. Los cambios y las oportunidades también incluyen compartir lo que ha funcionado y lo que no; identificar nuevas formas y sinergias para construir comunidades resilientes que resistan al capitalismo y empiecen a avanzar hacia horizontes poscapitalistas; trabajar en formas comunes de presión y defensa de los derechos; crear conceptos y banderas políticas comunes, y planificar la producción más allá de las fronteras. Este último punto contrarresta los actuales modelos globales de producción dictados por la balanza comercial, la ventaja comparativa, las empresas multinacionales y los acuerdos de libre comercio, y en su lugar trabaja por una asignación planificada de los recursos en función de las necesidades más importantes para una buena vida.

Si el anticolonialismo y el antimperialismo fueron un vector histórico del internacionalismo, esto sigue siendo válido, aunque cargado de nuevos significados. La lucha contra el imperialismo ecológico y el colonialismo verde, expresado materialmente en el extractivismo verde, es ahora una cuestión clave. Debe ir acompañada de la descolonización y despatriarcalización de las relaciones y subjetividades cotidianas. Las posturas antimperialistas derivadas de viejas nociones de soberanía nacional, como en el caso de los países del Sur global que defienden su derecho a explotar su propio petróleo y gas, se basan en una comprensión de la soberanía ya obsoleta (Fernandes, 2023). El antimperialismo en la policrisis requiere la soberanía ecológica como principio, que exige autonomía, cooperación, solidaridad y acción política más allá de las fronteras.

Por lo tanto, un nuevo internacionalismo ecoterritorial es esencial para construir un terreno común y una nueva síntesis hacia un horizonte de transformación ecosocial, agregando y articulando luchas contra el capitalismo verde y en torno a transiciones justas, por muy plurales que sean. En la práctica, los movimientos aquí y allá ya se están articulando entre sí en llamamientos a la cooperación y a la solidaridad, pero el internacionalismo ecoterritorial aún necesita estructurarse y ampliarse para fortalecer un movimiento de movimientos global, interseccional y descentralizado que podría reunir a actores y movimientos que trabajan en transformaciones en torno a la vivienda, la alimentación, las relaciones sociedad-Naturaleza, la energía, la cultura, lo étnico-racial y los movimientos de clase de una manera inédita.

Bibliografía

Agencia Internacional de la Energía (Marzo de 2022). The role of critical minerals in clean energy transitions. World Energy Outlook Special Report. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/ffd2a83b-8c30-4e9d-980a-52b6d9a86fdc/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf>

Arboleda, Martín. (2020). *Planetary Mine: Territories of Extraction under Late Capitalism*. London: Verso Books.

Baldwin, Andrew; Fröhlich, Christiane y Rothe, Delf. (2019). From climate migration to Anthropocene mobilities: shifting the debate. *Mobilities*, 14 (3), 293.

Brand, Ulrich y Wissen, Markus. (2021). *The imperial mode of living: Everyday life and the ecological crisis of capitalism*. London: Verso Books.

Bringel, Breno. (2015). Social movements and contemporary modernity: internationalism and patterns of global contestation. En Breno Bringel y José Mauricio Domingues (eds.), *Global Modernity and Social Contestation* (pp. 122-138). London: Sage.

Bringel, Breno. (2020). COVID-19 and the new global chaos. *Interface: A Journal for and about social movements*, 12 (1), 392-399.

Bringel, Breno y Pleyers, Geoffrey (eds.). (2021). *Social Movements and Politics during Covid-19*. Bristol: Bristol University Press.

Escobar, Arturo. (2008). *Territories of difference: place, movements, life, redes*. Durham: Duke University Press.

Fernandes, Sabrina. (2023). Sovereignty and the Polycrisis. En *The War in Ukraine and the Question of Internationalism*. London: Alameda Institute. <https://alameda.institute/2023/04/30/xi-sovereignty-and-the-polycrisis/>

Gerbaudo, Paolo. (2013). Protest Diffusion and Cultural Resonance in the 2011 Protest Wave. *The International Spectator*, 48 (4), 86-111.

Glasius, Marlies y Pleyers, Geoffrey. (2013). The global moment of 2011: democracy, social justice and dignity. *Development and Change*, 44 (3), 547-567.

Janzwood, Scott y Homer-Dixon, Thomas (16 de septiembre de 2022). What Is a Global Polycrisis? *Cascade Institute*, 5. <https://cascadeinstitute.org/technical-paper/what-is-a-global-polycrisis/>

Juris, Jeffrey y Pleyers, Geoffrey. (2009). Alter-activism: emerging cultures of participation among young global justice activists. *Journal of Youth Studies*, 12, 57-75.

Massey, Doreen. (1991). A Global Sense of Place. *Marxism Today*, 24-29.

Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. (2023). Manifiesto por una Transición Energética Justa y Popular de los Pueblos del Sur. <https://pactoecosocialdelsur.com/manifiesto-de-los-pueblos-del-sur-por-una-transicion-energetica-justa-y-popular-2/>

S&P Global (24 de octubre de 2019). Lithium supply is set to triple by 2025. Will it be enough? <https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/lithium-supply-is-set-to-triple-by-2025-will-it-be-enough>

Svampa, Maristella. (2019). *Neo-extractivism in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tamayo, Juan José. (2020). *La internacional del odio*. Barcelona: Icaria.

Tooze, Adam (29 de octubre de 2022). Chartbook #165: Polycrisis - Thinking on the Tightrope. *Chartbook*. <https://adamtooze.substack.com/p/chartbook-165-polycrisis-thinking>

Ulloa, Astrid. (2021). Repolitizar la vida, defender los cuerpos-territorios y colectivizar las acciones desde los feminismos indígenas. *Ecología Política*, 61, 38-48.

Sobre los autores y autoras

Alberto Acosta es un economista ecuatoriano y compañero de muchos movimientos y luchas sociales. Es profesor emérito e investigador de FLACSO-Ecuador (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Fue ministro de Energía y Minas de Ecuador (2007) y presidente de la Asamblea Constituyente encargada de elaborar la ahora famosa Constitución de Montecristi, que entró en vigor en 2008 y estableció la protección de los derechos de la Naturaleza. También es autor de varios libros sobre posextractivismo, buen vivir y alternativas al desarrollo.

Bengi Akbulut es una investigadora turca radicada en Canadá, donde es profesora asociada en la Universidad Concordia de Montreal. Sus investigaciones se centran en las economías política, ecológica y feminista. Ha escrito ampliamente sobre la economía política del desarrollo, con especial atención a Turquía. Su trabajo más reciente se centra en las alternativas económicas, incluidas las economías comunitarias, la democracia económica y el decrecimiento.

Farida Akther es una de las fundadoras de UBINIG, una ONG de Bangladesh que ha creado uno de los mayores bancos comunitarios de semillas del mundo. Ha realizado numerosas investigaciones

sobre agricultura, pesca marina y críticas al desarrollo. Está muy implicada en el movimiento campesino Nayakrishi Andolon (“un nuevo movimiento agrícola”), que promueve sistemas agrícolas basados en la biodiversidad en los que participan más de trescientas mil familias campesinas del país. Es autora de varios libros y columnista habitual en diarios nacionales.

Nnimmo Bassey es un arquitecto, activista medioambiental, escritor y poeta nigeriano. Presidió Amigos de la Tierra Internacional de 2008 a 2012 y recibió en 2010 el prestigioso premio Right Livelihood Award (conocido como el Premio Nobel Alternativo). Bassey se ha levantado contra las prácticas de las multinacionales en su país, principalmente las petroleras, y la devastación medioambiental que dejan. Actualmente, es director ejecutivo de la Health of Mother Earth Foundation, una organización ecologista con sede en Nigeria que aboga por la justicia climática y la soberanía alimentaria. También forma parte del Comité Directivo de OilWatch International. Entre sus libros figuran *To Cook a Continent: Destructive Extraction and the Climate Crisis in Africa* (2012).

Pablo Bertinat es un ingeniero eléctrico argentino, profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional y miembro del Taller Ecologista de Rosario. Trabaja en temas relacionados con la transición energética en el marco de procesos de transformación social y ecológica. Es colaborador de varias redes y movimientos sociales y actualmente es cocoordinador del Grupo de Trabajo Energía y Equidad.

Ulrich Brand es profesor e investigador en la Universidad de Viena, Austria. Su trabajo se centra en la política internacional y la economía política internacional, la transformación del Estado y su internacionalización, el modo de vida imperial, la transformación socioecológica, la política internacional medioambiental y de recursos, con

especial énfasis en América Latina. De 2011 a 2013 fue miembro de la Comisión de Expertos Crecimiento, bienestar, calidad de vida del Parlamento alemán. En 2018 fue cofundador de Diskurs. The Science Network en Austria, que pretende dar a conocer la investigación basada en la evidencia a un público más amplio. Es miembro del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo en América Latina. Su libro más reciente es *Modo imperial de vida: vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo* (2021).

Breno Bringel es un activista, editor y académico brasileño. Profesor de Universidad del Estado de Río de Janeiro e investigador sénior en la Universidad Complutense de Madrid (Programa Talento Investigador), donde coordina el recién creado Observatorio de Geopolítica y Transiciones Ecosociales. Es editor de *Global Dialogue* y directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Miembro del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo y del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Autor de una centena de artículos y una decena de libros, incluyendo con CLACSO los siguientes títulos: *Protesta e Indignación Global* (2017), *Antología del Pensamiento Crítico Brasileño Contemporáneo* (2018) y *Alerta Global: políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de pandemia* (2020).

Maria Campo es una feminista negra colombiana. Es miembro de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro y del Tejido de Transicionantes por / con / desde la región del Valle Geográfico del río Cauca. Participa en la defensa de los derechos étnico-territoriales y de las mujeres negras. Estudió Filosofía en Univalle y una maestría en Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial en la Universidad Autónoma de Manizales.

Christian Dorninger trabaja como investigador interdisciplinar en el Instituto de Ecología Social de la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida [BOKU] de Viena. Sus intereses de

investigación incluyen la aplicación de métodos de interacción entre los seres humanos y la Naturaleza, la transformación de la sostenibilidad, una perspectiva biofísica de las relaciones comerciales, las teleconexiones y el intercambio ecológicamente desigual. Sus artículos sobre estos temas han aparecido en revistas como *Sustainability Science*, *Ecological Economics*, *Global Environmental Change*, *Journal of Political Ecology*, entre otros.

Kristina Dietz es profesora de Relaciones Internacionales especializada en América Latina en la Universidad de Kassel, Alemania. Sus principales campos de estudio son la ecología política, la economía política, los estudios agrarios críticos, los estudios sobre movimientos sociales y los estudios sobre la democracia. Su libro más reciente es *Handbook of Critical Agrarian Studies* (junto con A. Haroon Akram-Lodhi, Betina Engels y Ben McKay, 2021).

Arturo Escobar es un activista-investigador colombiano y profesor emérito de antropología en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Es un reconocido intelectual, con trabajos pioneros en el campo del posdesarrollo y la ecología política. Durante los últimos treinta años ha trabajado estrechamente con organizaciones afrodescendientes, ecologistas y feministas de Colombia. Es miembro del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y del Global Tapestry of Alternatives. Es uno de los editores de *Pluriverso: un diccionario del posdesarrollo*, que cuenta ya con varias ediciones. Su libro más reciente es *Pluriversal Politics: The Real and the Possible* (2020).

John Feffer es director de Foreign Policy in Focus en el Institute for Policy Studies de Washington, un think tank independiente de izquierdas norteamericano fundado en 1963. Es autor de varios libros, entre ellos *Aftershock: A Journey into Eastern Europe's Broken Dreams* (2017) y *The Pandemic Pivot* (2020). Publica regularmente en la prensa y varios de sus artículos han sido publicados en *The New York Times*, *Washington Post*, *USA Today*, entre otros.

Sabrina Fernandes es una socióloga, escritora y activista ecosocialista brasileña. En la actualidad, es consejera sénior de investigación del Instituto Alameda, un nuevo instituto internacional de investigación colectiva. Su investigación actual se basa en la ecología marxista para discutir las transiciones justas y sus contradicciones. Anteriormente fue editora de Jacobin, becaria de posdoctorado del International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies [IRGAC] de la Rosa Luxemburg Stiftung y fellow del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales [CALAS] de Guadalajara, en México.

Luis González Reyes es un activista español especializado en ecologismo y pedagogía. Doctor en Ciencias Químicas, investiga y acompaña procesos de transición ecosocial, con énfasis en la energía y en el mundo del empleo. Como activista, es miembro de Ecologistas en Acción, donde fue durante nueve años coordinador confederal, y participa activamente en varias experiencias justas y resilientes, como Entrepacios (vivienda), El Arenero (crianza) y Las Carolinas (alimentación). Forma parte de la cooperativa Garúa y es responsable de educación ecosocial en FUHEM. Es autor de varios libros, entre los que se destacan *La espiral de la energía* (2.^a edición, 2018) y, más recientemente, *Decrecimiento: del qué al cómo* (con Adrián Almazán, 2023).

Hamza Hamouchène es un investigador-activista argelino residente en Londres y miembro fundador de la Red Norteafricana para la Soberanía Alimentaria [NAFSN por sus siglas en inglés]. Es un prolífico escritor con numerosas publicaciones sobre extractivismo energético, democracia, luchas anticoloniales y justicia climática en África del Norte. Actualmente es coordinador del programa para África del Norte del Transnational Institute [TNI]. Acaba de coeditar con Katie Sandwell el libro *Dismantling Green Colonialism: energy and climate justice in the Arab Region*.

Rachmi Hertanti es una abogada y activista indonesia. Tiene formación en derecho mercantil internacional por la Universidad de Indonesia. Ha participado en varias campañas de defensa de una política comercial justa, centrándose en los derechos de propiedad intelectual sobre semillas y medicamentos, los tratados de inversión y las demandas corporativas, y el comercio digital, incluidos los impactos relacionados con el comercio de energía y materias primas. Fue directora ejecutiva de Indonesia for Global Justice y actualmente trabaja como investigadora en el Transnational Institute [TNI].

Edgardo Lander es un sociólogo venezolano, considerado como un destacado pensador y escritor de la izquierda en Venezuela. Es profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad Indígena de Venezuela y de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito; miembro del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo y del Grupo de Trabajo Global Más Allá del Desarrollo. Edgardo es autor de numerosos libros y artículos de investigación sobre los límites medioambientales de la industrialización y el crecimiento económico, la izquierda en el gobierno en América Latina, el capitalismo posdemocrático y los desafíos a las epistemologías eurocéntricas.

Miriam Lang es una académica y activista que trabaja como profesora de Ambiente y Sustentabilidad en la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Allí coordina la Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo desde el año 2020. Es Doctora en Sociología y posee una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Colabora con el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo y con movimientos sociales internacionalistas, feministas, ecologistas y antirracistas. Desde 2016, coordina el Grupo de Trabajo Global Más Allá del Desarrollo. Su investigación actual se centra en la crítica del desarrollo, las alternativas sistémicas y la implementación territorial del Buen Vivir. Combina perspectivas decoloniales y feministas con la economía

política y la ecología política. Forma parte del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.

Mary Ann Manahan es una investigadora activista feminista filipina y, en la actualidad, participa en el Grupo de Investigación de Conflictos del Departamento de Estudios sobre Conflictos y Desarrollo de la Universidad de Gante (Bélgica). Su investigación actual se centra en las intersecciones entre las luchas de los pueblos indígenas por la autodeterminación, la conservación de los bosques y las alternativas al desarrollo. Durante las dos últimas décadas, ha trabajado con movimientos rurales y de mujeres en Filipinas. Desde el año 2020 coordina el Grupo de Trabajo Global Más Allá del Desarrollo.

Esperanza Martínez es una ecologista, abogada y bióloga ecuatoriana comprometida con la defensa de la Tierra y los derechos de la Naturaleza. Fue cofundadora de la reconocida ONG ecologista Acción Ecológica en 1986 y asesora de la Presidencia de la Asamblea Constituyente de Ecuador en 2007-2008. También fue coordinadora de la Red Internacional Oilwatch entre América Latina, África y Asia. Es una de las promotoras de dejar el petróleo bajo el suelo del Parque Nacional ecuatoriano Yasuní. Es miembro del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.

Camila Moreno es una investigadora medioambiental, activista y escritora brasileña. Su principal tema de investigación es la interconexión entre el régimen de gobernanza medioambiental mundial y el enverdecimiento del capitalismo, con una crítica de las métricas del carbono y la descarbonización. Asiste a las negociaciones sobre cambio climático de la CMNUCC desde 2008 y es una de las fundadoras del Grupo Carta de Belém, una red de la sociedad civil brasileña contra la financiarización de la Naturaleza. Su trabajo se ha centrado en los impactos territoriales de las políticas de desarrollo,

las relaciones entre Brasil y China y la convergencia de la política climática y la digitalización.

Zo Randriamaro es una activista ecofeminista e investigadora de Madagascar. Socióloga y antropóloga de formación, ha dirigido varios programas internacionales de investigación y de defensa de los derechos y ha publicado ampliamente sobre las dimensiones de género de las políticas macroeconómicas, comerciales, de inversión y de desarrollo, así como sobre cuestiones ecológicas y de gobernanza mundial. Ha trabajado como experta para organizaciones internacionales, incluidas las principales agencias de las Naciones Unidas. Es fundadora y coordinadora del Centro de Investigación y Apoyo a Alternativas de Desarrollo, Océano Índico, una organización panafricana con sede en Madagascar. Desde hace unos años, se centra en contribuir a una transición justa hacia alternativas ecofeministas al desarrollo en África, en solidaridad con otras hermanas y aliadxs.

Tatiana Roa Avendaño es una ecologista colombiana, activista y una de las fundadoras de Censat Agua Viva. Participa en varias organizaciones y redes que abogan por la justicia medioambiental, incluidas Oilwatch y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Tatiana es ingeniera, posee una maestría en Estudios Latinoamericanos y es doctoranda en el CEDLA, Universidad de Ámsterdam. Ha escrito varios artículos y libros sobre extractivismo, justicia del agua y soberanía energética. Además, colabora con grupos de investigación como el Grupo de Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo y Ecología Política Abya-Yala de CLACSO. Forma parte del consejo internacional de la revista *Ecología Política* desde hace más de diez años.

Maristella Svampa es una socióloga, investigadora y escritora argentina. Ha recibido varios premios y reconocimientos, entre ellos la Beca Guggenheim (2007), el Premio Konex de Platino en Sociología (2016) y el Premio Nacional de Ensayo Sociológico por su libro

Debates Latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo (2018). Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los movimientos sociales, la acción colectiva y problemáticas vinculadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana. Ha publicado una veintena de libros, incluidos ensayos, investigaciones y novelas. También es miembro del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Entre sus libros más recientes se incluyen *El colapso ya llegó* (con Enrique Viale, 2020) y *La transición energética en la Argentina* (coeditado con Pablo Bertinat, 2022), ambos publicados por la colección Otros Futuros Posibles que Svampa coordina en Siglo XXI.

Ivonne Yáñez es activista y cofundadora en 1986 de Acción Ecológica, una de las organizaciones de justicia climática más conocidas y respetadas de América Latina. También cofundó OilWatch en 1996, una red internacional de resistencia a las actividades petroleras. Trabaja sobre energía, cambio climático y, más recientemente, servicios medioambientales desde una perspectiva crítica. Ha sido una activa promotora de la campaña “El petróleo, mejor bajo tierra” durante muchos años, con el Parque Nacional Yasuní de Ecuador como caso emblemático.



La Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) es una institución académica creada para afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de excelencia, se dedica a la investigación, la enseñanza y la prestación de servicios para la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos. Es un centro académico abierto a la cooperación internacional. Tiene como eje fundamental de trabajo la reflexión sobre América Andina, su historia, su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, su proceso de integración y el papel de la subregión en Sudamérica, América Latina y el mundo.

La UASB fue creada en 1985. Es una institución de la Comunidad Andina (CAN). Como tal, forma parte del Sistema Andino de Integración. Además de su carácter de centro académico autónomo, goza del estatus de organismo de derecho público internacional. Tiene sedes académicas en Sucre (Bolivia) y Quito (Ecuador).

La UASB se estableció en Ecuador en 1992. En ese año, suscribió con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno de Ecuador, un convenio que ratifica su carácter de organismo académico internacional. En 1997, el Congreso de la República del Ecuador la incorporó mediante ley al sistema de educación superior de Ecuador. Es la primera universidad en el país que logró, desde 2010, una acreditación internacional de calidad y excelencia.

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), realiza actividades de docencia, investigación y vinculación con la colectividad de alcance nacional e internacional, dirigidas a la Comunidad Andina, América Latina y otros espacios del mundo. Para ello, se organiza en las áreas académicas de Ambiente y Sustentabilidad, Comunicación, Derecho, Educación, Estudios Sociales y Globales, Gestión, Letras y Estudios Culturales, Historia y Salud. Tiene también programas, cátedras y centros especializados en relaciones internacionales, integración y comercio, estudios latinoamericanos, estudios sobre democracia, derechos humanos, migraciones, medicinas tradicionales, gestión pública, dirección de empresas, economía y finanzas, patrimonio cultural, estudios interculturales, indígenas y afroecuatorianos.

El capitalismo global y las clases dominantes han pasado a defender medidas para afrontar la crisis climática y ecosocial, pero bajo la etiqueta de transición ecológica, estas “soluciones climáticas” están conduciendo a nuevas injusticias socioambientales y al colonialismo verde. Los planes de crecimiento verde con energías “limpias” del Norte Global requieren la extracción a gran escala de minerales estratégicos del Sur Global. Teniendo en cuenta este contexto, el presente libro reúne a destacados y destacadas activistas e intelectuales de todos los continentes para examinar el colonialismo verde y proponer alternativas. Ofrece un diagnóstico sobre el extractivismo verde y las transiciones corporativas, analiza las interdependencias y los entrelazamientos globales, y presenta diferentes caminos hacia las alternativas al desarrollo y una transformación socioecológica con justicia global.

“Escrito por algunos de los/as activistas y teóricos/as más importantes de los movimientos ambientalistas, del decrecimiento y de la deuda, *Más allá del colonialismo verde* ofrece un análisis sumamente poderoso y exhaustivo de las fuerzas y proyectos que amenazan el futuro de nuestro planeta. [...] Se trata de una lectura imprescindible para quienes luchan por crear un mundo en el que ‘la vida esté en el centro.’ Deberían organizarse grupos de estudio para difundir sus propuestas y visiones de un futuro diferente, que afirme la vida”. **SILVIA FEDERICI**

“La gran pregunta que se plantea hoy en día el pensamiento socioambiental crítico es si la transición a un mundo post-carbono puede tener lugar sin una revisión radical del sistema de producción global. La respuesta que ofrece esta compilación de análisis impecablemente documentados y bien argumentados es un NO rotundo: un mundo post-carbono tiene que ser un mundo postcapitalista”. **WALDEN BELLO**



Institute for
Policy Studies



ISBN 978-987-813-604-2



9 789878 136042

